

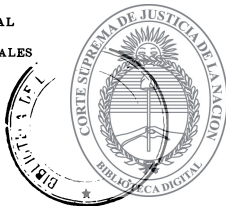




BIBLIOTECA DE LA CORTE SUP EMA	
Nº. DE ORDEN	3024
UBICACION	J 112
FICHA MATERIA	

المجلس الأعلى للدراسات الإسلامية

CURSO LIBRE SOBRE PROCEDIMIENTO ORAL  
DE LA  
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES  
DE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA



Proyecto de

# Código de Procedimiento Penal

para la

Capital de la República, Territorios Nacionales  
y Fuero Federal de las Provincias



LA PLATA

18 de Junio de 1936



# DEL MISMO AUTOR

## a) Obras

**HABEAS - CORPUS** (Caso del Gobernador Orfila), 1929.  
**LO QUE VENDRA**, 1929.  
**FUNDAMENTOS DEL GOBIERNO**, 1929.  
**EL JUICIO POR JURADOS**, 1930.  
**NUOVA ESCUELA DE CIVISMO**, 1930.  
**INTERVENCIONES FEDERALES** (Tesis doctoral), 1931.  
**DERECHOS DE AUTOR**, 1933.



## b) Conferencias

**BASES DEL FUTURO CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL**  
(15 de julio de 1933. - L. S. 10. - Radio América).  
**ORGANIZACION DEL JURADO POPULAR** (22 de julio de 1933. -  
L. S. 10. - Radio América).  
**EL JURADO POPULAR ANTE LA COSTUMBRE, EL DERECHO Y  
LA MORAL** (29 de julio de 1933. - L. S. 10. - Radio América).  
**REPLICA A LOS OPOSITORES AL JURADO POPULAR** (16 de julio  
de 1933. - L. R. 6. - Radio "La Nación").  
**EL JURADO POPULAR EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
(4 de septiembre de 1933. Círculo de Periodistas de La Plata).  
**EL JUICIO POR JURADOS** (17 de Octubre de 1933. Facultad de Derecho  
de Buenos Aires).  
**MITRE Y EL JUICIO POR JURADOS** (23 de diciembre de 1933, en Ra-  
dio Stentor).  
**FUNDAMENTO FILOSOFICO DEL JURADO POPULAR** (19 de abril  
de 1934. por L. R. 6 Radio La Nación).  
**LA MUJER Y EL NIÑO ANTE EL JUICIO ORAL** (26 de julio de 1934,  
en la Asociación Cristiana Femenina).  
**LA JUVENTUD ARGENTINA ANTE EL JUICIO ORAL** (7 de octubre  
de 1934, en la Asociación Cristiana de Jóvenes).  
**EL JUICIO POR JURADOS EN LA CONSTITUCION ARGENTINA**  
(22 de octubre de 1934. - En L. S. 3, Radio Mayo).  
**EL JUICIO ORAL EN LO CIVIL Y COMERCIAL** (30 de octubre de  
1934. - L. S. 3, Radio Mayo).  
**VENTAJAS DEL JUICIO ORAL** (13 de noviembre de 1934, por L. S. 3,  
Radio Mayo).  
**LA POSIBILIDAD DE IMPLANTAR EL JUICIO ORAL EN LA  
PROVINCIA DE BUENOS AIRES** (13 de Abril de 1935, en L. R. 6,  
Radio La Nación).  
**JUICIO ORAL Y NUEVA ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES  
DE JUSTICIA** (25 de junio de 1935. Facultad de Derecho de La  
Plata).  
**EL PUEBLO ARGENTINO ANTE EL JUICIO ORAL** (10 de octubre  
de 1935. Asociación Cultural Florencio Sánchez).  
**LA VIDA DE VIVEKANANDA** (25 de septiembre de 1933. Ateneo Ibero  
Americano).  
**LOS CUATRO CAMINOS** (Un ensayo sobre filosofía oriental. Ateneo  
Ibero-Americano, 17 de octubre de 1935).

En colaboración con su esposa **Marta Maldonado de García**

**MENSAJE DE AMOR**, 1929.

**NEGACION DE LA NUEVA VERDAD**, 1929.

1 400282



61060



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

---

### *Presidente*

Ing. Julio R. Castiñeiras

### *Vice-Presidente*

Doctor Agustín Pardo

### *Secretario General y del Consejo Superior*

Abogado Bernardo Rocha

### CONSEJO SUPERIOR

#### *Consejeros titulares*

Dr. José Peco  
Dr. Enrique V. Galli  
Dr. Antonio G. Pepe  
Dr. Juan E. Machado  
Ing. y Dr. Manuel F. Castello  
Ing. Justo Pascali  
Dr. Joaquín Frenguelli  
Sr. Juan Keidel  
Ing. César Ferri  
Ing. Anibal L. Guastavino  
Dr. Carlos J. B. Teobaldo  
Dr. Agustín Pardo  
Ing. Félix Aguilar  
Dr. Héctor Dasso  
Dr. Oreste Adorni  
Sr. José Rezzano  
Dr. Juan E. Cassani



*Consejeros suplentes*

Sr. Arturo Marasso  
Dr. Alejandro M. Oyuela  
Dr. Hércules Corti  
Ing. Evaristo Artaza  
Ing. Nicolás Besio Moreno  
Dr. Emilio D. Cortelezzi  
Dr. Moldo Montanari  
Dr. C. Natalio Logiudice  
Dr. Guido Pacella  
Sr. Antonio Alice  
Dr. Carlos Albizzati

*Representantes de los estudiantes*

Sr. Erasmo Carreño  
Sr. Ezequiel Ortega

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

---

*Decano*

Dr. José Peco

*Secretario*

Dr. Alfredo Herrera

CONSEJEROS ACADÉMICOS

*Titulares*

Dr. Juan E. Lozano

Dr. Manuel Pinto

Dr. Carlos M. Vico

Dr. Buenaventura Pessolano

*Suplentes*

Dr. César Díaz Cisneros

Dr. Arturo Barcia López

Dr. Luis Méndez Calzada

Dr. Francisco Orione

Dr. Ricardo de Labougle

*Delegados estudiantiles*

Sr. Carlos A. Ferro (h.)

Sr. Eusebio Zubasti





# SECCION PRIMERA

(Antecedentes)





Buenos Aires, Marzo 19 de 1936.

*Al Señor Decano de la  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  
de la Universidad Nacional de La Plata  
Doctor Don José Peco.*



*Tengo el agrado de elevarle el adjunto proyecto de Código de Procedimiento Penal para la Capital de la República, Territorios Nacionales y fuero federal de las Provincias, cuya redacción se sirviera encomendarme como fruto de la labor desarrollada en el curso libre sobre procedimiento oral que estuvo a mi cargo en ese establecimiento de cultura durante la segunda mitad del año 1935.*

*El proyecto va precedido de los antecedentes inmediatos que le dieron origen y de una exposición de motivos en la que he adelantado algunas de las razones que me determinaron a incluir instituciones inexistentes en otros Códigos o proyectos de la misma naturaleza redactados en nuestro país.*

*Creo haber hecho un trabajo que concuerda fielmente con los principios del sistema republicano de gobierno adoptados por la Constitución de 1853, a cuyo objeto he tomado de la legislación existente todo aquello que podía serme útil y he desechado todo lo que se hallaba en pugna con ese punto de vista.*

*A este trabajo siguen tres más: 1° proyecto de Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia; 2° proyecto de Ley*



*Orgánica del Jurado, y 3° Proyecto del Código de Procedimiento Civil y Comercial. En estos momentos estoy entregado a la redacción del primero, esperando terminarlo en breve para elevarlo a ese establecimiento como complemento del proyecto ahora adjunto. Lo mismo haré con los otros a medida que los vaya terminando. Después de cumplir esta tarea, me daré a la más interesante de explicar y comentar cada artículo.*

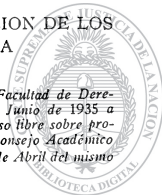
*Antes de terminar quiero expresar al Señor Decano mi profundo agradecimiento por haberme ofrecido la oportunidad de servir a mi patria con esta obra, que, si no es completa, por lo menos tiene el mérito de aspirar a satisfacer el anhelo de "afianzar la justicia", que estamparon en el preámbulo de la Carta Fundamental los hombres que organizaron a nuestro país.*

*Saludo al Señor Decano con toda consideración.*

EDUARDO AUGUSTO GARCIA.

# JUICIO ORAL Y NUEVA ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA

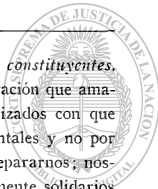
*Conferencia pronunciada en la Facultad de Derecho de La Plata, el martes 25 de Junio de 1935 a las 10.30 horas, inaugurando el curso libre sobre procedimiento oral autorizado por el Consejo Académico de dicha Facultad en sesión del 17 de Abril del mismo año.*



## I.— ENFOCANDO EL PROBLEMA DE LA JUSTICIA.

a) *Desacuerdo con la organización y el procedimiento escrito en vigor.*— Los hombres de la presente generación no estamos de acuerdo con la organización colonial de los tribunales de justicia del país, ni mucho menos con el procedimiento escrito en vigor. Son una cosa sin vida, que despiertan el recelo y la desconfianza de los ciudadanos y que desperdician u oscurecen, en páginas garabateadas, la energía y la inteligencia de jueces y abogados, sin que el pueblo, o siquiera las partes que intervienen en el pleito, hayan podido sacar el menor provecho de ese derroche de erudición, auténtica o plagiada, de que aquellos hacen gala en sus escritos o en sus sentencias.

b) *La justicia republicana se administra en presencia del pueblo.*— Administrar justicia a puertas cerradas, por medio de escritos y de resoluciones que van y que vienen, sin que nadie mas que aquellos que intervienen en el juicio se enteren de su contenido, es colocar a jueces y abogados en la penumbra de la vida social, como si sus funciones fuesen inmorales e indignas de realizarse en presencia del pueblo.



c) *Somos solidarios con el ideal de los constituyentes.*

— Nosotros, los hombres de la nueva generación que amamos a nuestra patria por los ideales irrealizados con que nos hacen soñar sus instituciones fundamentales y no por la posición social o económica que pueda depararnos; nosotros, que nos sentimos solidarios, absolutamente solidarios con la fe democrática y republicana de los constituyentes del 53 y del 60, no podemos estar de acuerdo con una organización judicial y un procedimiento que desvirtúen totalmente el régimen del gobierno adoptado por la Constitución.

d) *Ese mismo ideal impulsa nuestra campaña.* — Esta circunstancia nos impulsa en una forma incontenible para promover la agitación general que estamos realizando en todo el país alrededor del problema de la justicia. Esta misma circunstancia nos impulsa a estudiar a fondo ese problema para encontrar y auspiciar el medio de resolverlo de acuerdo a los principios constitucionales en vigor y a las necesidades del pueblo entero de la República.

e) *Aspectos fundamentales del problema de la justicia.* — Tres aspectos fundamentales asume este problema en nuestro país: el primero, se relaciona con la diversidad de leyes procesales, denominadas códigos de procedimientos, existentes en la República; el segundo, con el procedimiento escrito en vigor; y el tercero, con la organización anticuada de los tribunales de justicia. Estos tres aspectos encuentran su solución adecuada en las tres bases generales siguientes: unificación de las leyes procesales de la República, juicio oral y tribunales colegiados de juicio y sentencia, con instancia única para las cuestiones de hecho y recurso de casación para las de derecho. Estudiemos con la mayor atención posible los diferentes aspectos mencionados

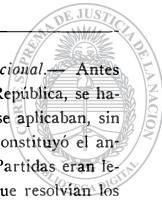
y veremos surgir clara y nítida la solución que andamos buscando.

## II.— UNIFICACION PROCESAL DE LA REPUBLICA

### a) *Origen aparente de los distintos códigos procesales.*

— Enfocado de esta manera el problema de la administración de justicia, surge el primer interrogante: ¿Por qué existe en cada provincia un código de procedimiento en lo civil y comercial, como también otro en lo criminal y correccional? La mayoría responderá: “porque no habiendo delegado expresamente en el Congreso nacional la facultad de sancionarlos, las provincias se han reservado implícitamente esa facultad para sus propias legislaturas”. (Artículo 104 de la Constitución nacional). Algún erudito podrá agregar: “porque al discutirse el inciso 11 del actual artículo 67 de la Constitución en la Convención del 53, el convencional Zavalía dijo que no estaba de acuerdo con que el Congreso sancionase los códigos civil, comercial, penal y de minería para toda la Nación, puesto que el gaje más importante de las provincias era la facultad de dictar leyes adecuadas a su organización, costumbres y peculiaridades; a lo que contestó Gorostiaga, entre otras cosas, que esas peculiaridades sólo tendrían lugar en un código de procedimientos, de que no se hablaba en el artículo, de donde se desprendería que la sanción de los códigos de procedimientos ha quedado reservada a las provincias”.

Ambas interpretaciones son erróneas; tanto desde el punto de vista histórico como desde el constitucional. Puede afirmar que existe una delegación expresa de las provincias para que el Congreso de la Nación sancione las leyes de procedimiento con carácter general para todo el país.



b) *Legislación colonial y preconstitucional.*— Antes de aprobarse la Carta Fundamental de la República, se hallaban en vigor las leyes de Partidas, que se aplicaban, sin excepción, en todo el territorio de lo que constituyó el antiguo Virreynato del Río de la Plata. Las Partidas eran leyes de fondo y de forma, es decir, leyes que resolvían los problemas jurídicos de la época e indicaban el procedimiento ante los tribunales de justicia para hacer efectivos los derechos. En todo el Virreynato no se aplicó mas que esa sola ley de fondo y de forma. Al separarse de la madre patria, las Provincias del Río de la Plata continuaron aplicando esas leyes en sus dos aspectos, de fondo y de forma, salvo modificaciones parciales que introdujeron algunas de ellas, especialmente en materia de imprenta. La unidad jurídica y la unidad procesal fueron un hecho evidente e indiscutible en todo el país durante la época colonial, hasta 1853.

c) *Época constitucional.* En dicho año se sanciona la constitución que nos rige, en la que se inscriben los siguientes principios: art. 24: “El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos y el establecimiento del juicio por jurados”. Art. 67, inciso 11, con las modificaciones del año 1860: “Corresponde al Congreso: Dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales (1), co-

---

(1) Las provincias se han reservado la facultad de nombrar sus propios funcionarios, sin intervención del gobierno federal (art. 105, C. N.) y de fijar a cada uno de ellos el límite jurisdiccional de sus atribuciones. En materia de justicia pueden dividir su territorio en los departamentos o circunscripciones judiciales que consideren pertinente y establecer en ellos el número de jueces o tribunales que estimen necesarios. Sobre este aspecto del problema judicial es que la Nación no puede inmiscuirse para dictar normas a las provincias, lo cual es una cosa completamente distinta al derecho del Congreso para sancionar el procedimiento a seguirse ante dichos tribunales.

respondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y ciudadanía, con sujeción al principio de la ciudadanía natural; así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados". Art. 102: "Todos los juicios criminales ordinarios que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados, se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiese cometido el delito".

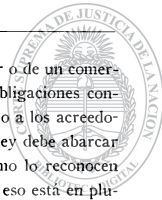
El artículo 24 no hace excepciones de ninguna clase: "La reforma de la actual legislación en todos sus ramos" a que el mismo se refiere comprendía, según el pensamiento de los constituyentes, la sustitución del régimen anacrónico de las Partidas, por otro más completo y menos anticuado, que resolviera las cuestiones de fondo y de forma, teniendo en cuenta las conveniencias, la idiosincracia y las particularidades del pueblo entero de la nueva república.

Pero la disposición constitucional que nos da la pauta para resolver el conflicto, es el inciso II del art. 67 leído anteriormente.

d) *La ley de bancarrotas es un procedimiento judicial obligatorio para todo el país.* En efecto: él dice que corresponde al Congreso dictar... leyes generales para toda la Nación sobre... bancarrotas... ¿Y qué es la ley de bancarrotas? Un texto articulado, un código que contiene las reglas de procedimiento necesarias para hacer la distribución

o la liquidación de los bienes de un particular o de un comerciante que no han podido cumplir con las obligaciones contraídas y que hacen entrega de su patrimonio a los acreedores para pagar sus deudas. El texto de esa ley debe abarcar a simples particulares y a comerciantes, como lo reconocen todos los constitucionalistas argentinos; por eso está en plural: "ley de bancarrotas", que comprende la bancarrota civil (concurso civil de acreedores) y la bancarrota comercial (quiebras). Debe ser, además, una ley general para todo el país, como lo dispone expresamente el inciso 11 leído. Es, entonces, una ley general de procedimientos, a cuyos principios están obligadas las provincias a conformarse, según el art. 31 de la Constitución, una vez que la sancione el Congreso (art. 108 idem). Sin embargo, es sabido que el Congreso sólo ha legislado con carácter general para todo el país, sobre quiebras, (bancarrota comercial) y al no hacerlo sobre concurso civil (bancarrota civil), ha obligado a las provincias a suplir esa omisión hasta que aquel cumpla el mandato constitucional.

e) *El juicio por jurados es otro procedimiento nacional obligatorio para las provincias cuando lo sancione el Congreso.* El mismo inciso 11 del art. 67 de la Constitución dice que corresponde al Congreso "dictar las leyes que requiera el establecimiento del juicio por jurados". ¿Y qué es el juicio por jurados? Un procedimiento establecido para sustanciar todos los pleitos o causas judiciales. En los países de origen, la institución del jurado ha funcionado siempre tanto para lo civil como para lo criminal y por eso el inciso 11 está en plural: "las leyes que requiera el establecimiento del juicio por jurados". Estas leyes, como la de bancarrotas, deben ser generales para todo el país, por disposición



expresa del texto constitucional, y como en ambos casos se trata de procedimientos judiciales cuyo mecanismo abarca toda clase de juicios —sean ellos civiles o criminales— no cabe la menor duda de que las provincias delegaron expresamente en el Congreso de la Nación la facultad de legislar sobre la materia. Como éste no lo ha hecho hasta el presente, las provincias han podido dictar sus propios códigos de procedimientos, haciendo uso de la atribución que les acuerda el art. 108 de la Constitución nacional, mientras aquel no los dicte, y en esos códigos han podido legislar también, sobre concurso civiles y sobre otros procedimientos, hasta que el Congreso sancione las leyes generales a que se refiere el inciso 11 tantas veces recordado.

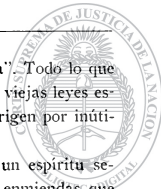
## II.— EL JUICIO ORAL

Aclarado este primer aspecto del problema de la justicia, veamos como debe legislar el Congreso.

a) *Los principios constitucionales y el procedimiento oral.* Un país organizado políticamente de acuerdo a los principios del sistema republicano de gobierno, no es consecuente con su propia organización si no establece el juicio oral para todos los pleitos y causas. Mas aún: desnaturaliza el sistema republicano, que es de puertas abiertas, si conserva el secreto de las actuaciones judiciales que es de la esencia del procedimiento escrito.

b) *Retardo en cumplir el anhelo de los constituyentes.* Han transcurrido ochenta y dos años desde que se sancionara la Carta Fundamental sin que nadie haya presentado al Congreso de la Nación los proyectos orgánicos de leyes procesales destinados a satisfacer aquel profundo anhelo





de los constituyentes de "afianzar la justicia". Todo lo que se ha hecho, en ese orden de ideas, es copiar viejas leyes españolas ya en desuso en el propio país de origen por inútiles e inservibles.

c) *La obra de Tomás Jofre*. Cuando un espíritu selecto como el de *Tomás Jofre* propuso las enmiendas que consideraba impostergables para armonizar el procedimiento judicial con las disposiciones constitucionales en vigor, los intereses creados alrededor de la justicia del país se alzaron como heridos por el rayo para protestar contra la iniciativa que les imponía una mayor dedicación a la magistratura y el permanente control del público sobre sus actividades. El doctor *Jofre*, ferviente partidario del jurado, porque lo había estudiado con amor y con cariño, sólo pudo salvar de la tormenta levantada por los intereses creados, ese remedo de justicia oral que funciona en esta provincia, con carácter optativo, en las causas graves, y ante un tribunal letrado de juicio y sentencia. Es la única concesión que le hicieron las oligarquías que gobernaban el país.

d) *La Asociación Pro Juicio Oral*. Pero su siembra no ha sido vana. Las ideas expuestas brillantemente en la cátedra y en el libro, han producido sus frutos. Hoy agita el ambiente un intenso anhelo de renovación de los vetustos regímenes procesales. En la capital federal funciona la Asociación Pro Juicio Oral, compuesta por numerosos abogados y simpatizantes de toda la República y cuyos fines son luchar por el establecimiento del juicio por jurados para lo criminal y del juicio oral con tribunal de abogados para lo correccional, civil y comercial. En tres años de existencia ha realizado una labor asombrosa: innumerables conferencias públicas, y por radiotelefonía; notas a los poderes públicos en-

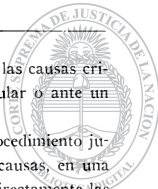
tre las que merecen destacarse la que publicó el diario de sesiones del Senado Nacional del 24 de Setiembre de 1932; constitución de filiales en el interior del país; publicación de la revista "Juicio Oral", y por último, redacción de los proyectos de ley destinados a cumplir los fines de su fundación, en cuya tarea se halla empeñada en estos momentos.

Resultado de esa campaña continuada y sistemática ha sido el establecimiento del juicio oral en la provincia de Mendoza, con el mismo carácter optativo y ante un tribunal letrado, en las causas graves, que existe en la de Buenos Aires, pero con juicio oral obligatorio en materia de injurias y calumnias. En San Juan acaba de presentarse un proyecto de ley a su Legislatura estableciendo el juicio oral optativo como existe en esta provincia. (1) La Legislatura de Entre Ríos, por iniciativa del senador *José R. Carulla*, destacado miembro de la Asociación Pro Juicio Oral, incluyó una disposición en la nueva ley orgánica de los tribunales de acuerdo a la cual las causas criminales se terminarán por jurados populares elegidos en cada departamento judicial. Actualmente se halla en plena labor la comisión designada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y compuesta por los doctores *Rodolfo Moreno (h)* y *Eusebio Gómez*, con el fin de redactar en el más breve espacio de tiempo todas las leyes que requiera el establecimiento del juicio oral, con tribunal de magistrados. (2)

e) *El juicio oral en marcha.* Según puede advertirse, la idea de establecer el juicio oral está en marcha. Nadie po-

1) Ahora es la ley N°. 692

(2) También han dado fin a su misión redactando un proyecto de Código que actualmente tiene a estudio la Legislatura.



drá detenerla. Actualmente solo se discute si las causas criminales deben ventilarse ante el jurado popular o ante un tribunal colegiado compuesto por abogados.

Y bien: ¿qué es el juicio oral? Es un procedimiento judicial que sirve para terminar los pleitos o causas, en una sola audiencia, si es posible, después de oír directamente las exposiciones de las partes, peritos, testigos y abogados. ¿Cómo se organiza el juicio oral?

f) *El juicio oral en lo civil y comercial.* Veamos primero, como debe serlo para los pleitos civiles y comerciales.

1° La demanda debe ser interpuesta por escrito o verbalmente por medio de acta ante el secretario del juez o tribunal. En ambos casos el actor expresa su nombre y domicilio, lo mismo que el nombre y domicilio del demandado, el objeto de la demanda, los hechos en que se funda para deducir la acción y el derecho aplicable (en cuanto sea posible), todo ello en párrafos numerados por orden sucesivo. En el mismo acto debe dar a conocer toda la prueba de que intente valerse en el juicio.

2° La demanda se notifica al demandado dentro de las cuarenta y ocho horas de su presentación (con el aumento de término necesario según las distancias), entregándose copia de la misma y de los documentos acompañados por el actor.

3° La demanda debe ser contestada en la forma que se expresa en el párrafo 1° dentro de los veinte días de la notificación.

Todas estas diligencias, se comprende que deben ser despachadas solamente por el secretario del juez o tribunal.

4° Fuera de las oportunidades mencionadas, no se admite mas prueba que la ofrecida, salvo cuando antes de la audien-

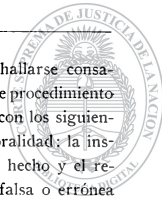
cia o durante su realización, llega a conocimiento de la parte que intenta valerse de ella, en cuyo caso el juez o tribunal manda practicarla siempre que de la misma dependa la resolución a dictarse.

5° El juez o tribunal tiene facultad para ordenar de oficio la realización de diligencias destinadas a esclarecer los hechos aducidos, pudiendo hacer uso de la fuerza pública y habilitar días y horas si lo cree necesario.

6° Cuando el juez o tribunal se halla en posesión de todos los documentos y otros elementos solicitados como prueba, lo que debe ocurrir dentro de los treinta días de contestada la demanda, señala día y hora para que se realice la audiencia pública en la que deben declarar los testigos, informar los peritos —si los hay— leerse las partes esenciales de los exhortos cuando se hubieran practicado diligencias fuera de la sede del tribunal o juzgado y hacer sus alegatos los abogados. El interrogatorio de peritos y testigos es hecho libremente por los abogados y los jueces.

7° No habiendo más pruebas a producirse, el juez o tribunal declara terminada la audiencia y dicta sentencia de inmediato de acuerdo al principio de las libres convicciones, aceptando o rechazando la demanda. Los fundamentos del pronunciamiento, deben ser puestos en conocimiento de las partes dentro de las cuarenta y ocho horas de terminada la audiencia.

8° Si mientras se realiza la audiencia surgen hechos o circunstancias nuevas que interesen fundamentalmente para resolver la causa y su averiguación no puede hacerse en el acto, el juez o tribunal puede, de oficio o a pedido de parte, suspender aquella por un término no mayor de diez días, y ordenar la realización de las diligencias pertinentes.



Estos principios fundamentales deben hallarse consagrados con toda claridad en un solo código de procedimiento civil y comercial para toda la Nación, junto con los siguientes, que son de la esencia del sistema de la oralidad: la instancia única para resolver las cuestiones de hecho y el recurso de casación para las de derecho por falsa o errónea aplicación de la ley o doctrina legal.

g) *Fundamento racional de la instancia única.* Antes de analizar las ventajas del juicio oral, quiero exponer algunas ideas acerca de la instancia única, para disipar las dudas de aquellos que se oponen a su implantación por no haber meditado suficientemente sobre su mecanismo y funciones. En esta materia pueden formularse las siguientes preguntas: ¿En qué consiste la instancia única? ¿Cómo juega en el procedimiento oral? ¿Qué consecuencias produce en la sustanciación de los juicios?

La instancia única, en cuanto a los hechos, consiste en la facultad exclusiva del tribunal para apreciar, sin apelación, todas las circunstancias que conducen a la culpabilidad o inocencia de un acusado, en juicio criminal, o a demostrar que el actor tiene o carece de razón para pleitear en juicio civil. Toma origen en la circunstancia siempre comprobada de que las declaraciones de los testigos o de las partes mismas obtenidas en una audiencia mediante hábiles preguntas de jueces y abogados, no pueden repetirse con el mismo éxito en una nueva audiencia ante el tribunal superior, sin que se corra el riesgo de que el testigo falso o interesado, o la parte que acciona maliciosamente, rectifiquen los errores cometidos en la audiencia anterior en donde se puso de manifiesto su falsedad, su interés o su malicia.

h) *El juicio oral en lo criminal.* Analizados los princi-

pios fundamentales que sirven de base a la institución del juicio oral en lo civil y comercial, corresponde hacer lo propio con los del juicio oral en materia penal. El código de procedimiento respectivo debe contener las siguientes reglas:

1° El proceso sumario debe ser público para las partes y sus abogados.

2° Concluido el sumario, debe pasar con todos los elementos de prueba, a un tribunal de tres magistrados, para que resuelva sobre la procedencia o improcedencia de la acusación. (1)

3° Declarándose procedente la acusación, el proceso plenario debe desarrollarse en juicio oral obligatorio y en audiencia pública, salvo los casos señalados por la ley en que la publicidad afecte a la moral o a las buenas costumbres.

i) *Ventajas del sistema de la oralidad.* Estudiados los detalles principales del procedimiento oral, me propongo analizar ahora, aun cuando más no sea sumariamente, las ventajas que ofrece frente al procedimiento escrito.

1° *Rapidez.* Ya se trate de juicios civiles, comerciales o criminales, dentro del procedimiento oral jamás se terminan después de los tres meses cuando se reglamentan con inteligencia y se aplican con lealtad sus disposiciones. Las actuaciones preparatorias nunca demoran más de un mes, salvo raras excepciones, y en el curso del siguiente debe realizarse la audiencia oral de juicio y sentencia. Calculando otro mes para sustanciar el recurso de casación, se comprende con facilidad que en no más de tres meses puede quedar terminado el común de los juicios o causas. En los

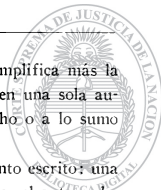
---

(1) Es el sistema que aconsejamos en nuestro proyecto y que proponer: Moreno y Gómez en el suyo.

asuntos correccionales y sobre faltas, se simplifica más la cuestión porque todo el proceso se realiza en una sola audiencia inmediatamente de cometido el hecho o a lo sumo dentro de las 24 horas.

Veamos lo que ocurre en el procedimiento escrito: una demanda ordinaria se inicia el 1º de Febrero; el auto ordenando el traslado se firma el 4; la notificación de la demanda se hace el 10, siempre que el interesado lleve hecha la cédula respectiva; el demandado tiene 15 días para contestar y lo hace el 25 de Febrero; el juez se declara competente y abre a prueba el juicio el 1º de Marzo; si las partes son muy diligentes, se notifican el 5 y tienen 40 días para producir la prueba; suponiendo que todas las declaraciones de testigos, peritajes y agregación de documentos se hiciera dentro del término antedicho, el 15 de abril quedaría cerrado el ciclo; el 20 de abril se ordena agregar la prueba producida, auto que se consiente el 26; 6 días para que cada parte alegue sobre el mérito de la prueba nos llevan al 8 de Mayo; la providencia de autos para sentencia se dicta el 12 de Mayo y se consiente el 18; el juez tiene 40 días de plazo para dictar sentencia y ya estamos a 2 de Julio, o sea, a más de cinco meses de la iniciación del juicio, sin contar las apelaciones, los incidentes, la semana santa, la semana de carnaval, la semana de Mayo, etcétera, y considerando que no ha habido en el tribunal más que un solo juicio que ha sido diligentemente atendido, cosa que jamás ocurre. En resumen, ningún juicio puede terminarse dentro del procedimiento escrito, antes del año de iniciado. La mayoría dura tres años.

El día que podamos obtener la solución de los pleitos y causas en 6 meses, podremos respirar tranquilos porque

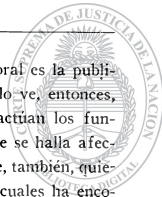


estaremos acercándonos al ideal de una buena administración de justicia. Esto sólo es posible mediante la aplicación del sistema oral.

2º *Economía*. Otra de las ventajas del juicio oral es la economía que la sustanciación del mismo importa para los litigantes. Economía de dinero y de tiempo, que también es dinero en las relaciones económicas. Sólo la demanda y la contestación se hacen en papel sellado. También los exhortos, oficios y testimonios o copias de documentos de los archivos, cuando no se pueden llevar los originales. Pero la prueba de testigos y peritos y los alegatos de los abogados —que en el procedimiento escrito insumen la mayor parte de los sellos de un juicio— se hacen oralmente en la audiencia, de modo que los litigantes no tienen que soportar esa continua sangría que significa el empleo de los sellos para obtener la sentencia que resuelve sus derechos. Se dirá que esa economía para el litigante es un perjuicio para el fisco, puesto que disminuyen sus entradas por aquel concepto. A esto debe contestarse: 1º que no es mucho lo que el fisco recauda en concepto de sellado de actuación y por lo tanto no se desequilibran las finanzas públicas por esa disminución; 2º que existe una enorme diferencia proporcional, en perjuicio del público litigante, entre lo que éste pierde con el régimen actual y lo que el fisco perdería con el sistema oral; y 3º que esa dificultad puede salvarse —y el recurso se ha ensayado con éxito en esta provincia— sancionando un impuesto de justicia proporcional al monto de todo asunto que exceda de mil pesos. El fisco saldrá ganando de todas maneras, porque este impuesto suplirá con creces la disminución del empleo de sellado de actuación que imponga el juicio oral.

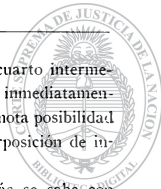


3º *Publicidad.* Otra ventaja del juicio oral es la publicidad de las actuaciones judiciales. El pueblo ve, entonces, con sus propios ojos quienes son y como actúan los funcionarios que resuelven las cuestiones en que se halla afectada su libertad, su honor o su patrimonio. Ve, también, quienes son y como actúan los abogados a los cuales ha encomendado la defensa de su honor, de su libertad o de su patrimonio. Juzga por sí mismo si el poder judicial cumple los altos fines para que ha sido instituido y satisface el anhelo de justicia que vibra en cada corazón humano. Y ese adiestramiento de su raciocinio, prepara el pueblo para tareas más nobles y para servir la causa de su patria con un concepto más elevado y más digno. Alberdi, en su Derecho Público Provincial, decía: "Otro medio de impedir que los delegatarios de la soberanía abusen de su ejercicio en daño del pueblo, a quien pertenece, es la publicidad de todos los actos que lo constituyen. La publicidad es la garantía de las garantías. El pueblo debe ser testigo del modo como los tribunales desempeñan su mandato de interpretación y aplicación de las leyes; debe constarle ocularmente si la justicia es una palabra o es una verdad de hecho. Para ello debe ser administrada públicamente y las sentencias deben expresar sus motivos". Es cierto que ese control permanente del pueblo obliga a jueces y abogados a prepararse convenientemente para resolver las causas con criterio jurídico y humano en el breve espacio de tiempo que les acuerda la ley; pero esa misma circunstancia está demostrando la necesidad de establecer el juicio oral, siquiera para que jueces y abogados estudien algo las leyes. Quizás este dilema entre estudiar y renunciar al cargo es lo que decide a muchos jueces a convertirse en enemigos acérrimos del sistema oral.



Dentro del procedimiento escrito, las partes no conocen al juez y muchas veces ni al secretario que interviene en el pleito. Y hasta sucede que ni los abogados los conocen. Los funcionarios viven en sus despachos entre altos de papeles y expedientes. Las audiencias son tomadas por auxiliares que, por rara coincidencia, parecieran ser estudiantes de los primeros grados de la escuela primaria: tan mal escriben, sea desde el punto de vista caligráfico o desde el ortográfico o sintáctico. En esas audiencias, realizadas casi en secreto, como si se estuviera tramando algún complot contra el Estado en el rincón más oscuro de la secretaría, los testigos mienten con toda serenidad, y los abogados decentes salen decepcionados de la justicia. No tienen medio alguno para destruir las afirmaciones evidentemente falsas de testigos aleccionados, porque por disposición de la ley, deben hacer las preguntas o repreguntas de tal modo que el testigo conteste por sí o por no, y ven con estupor que el mecanismo judicial se presta admirablemente para que en el silencio y el anonimato del procedimiento escrito se consumen las más graves injusticias e irregularidades.

4° *Certeza*. Pero en el juicio oral —y aquí analizo la cuarta ventaja de este procedimiento— el interrogatorio de los testigos es libre, sin formularios ni formulismos; se hace en presencia del público que está observando los menores gestos del interrogado para sorprender sus intenciones; las preguntas y respuestas se suceden rápidamente y la habilidad del más aleccionado testigo cae vencida sin remedio cuando no tiene tiempo de pensar en la coartada ni sabe adónde lo conduce el juez o abogado con sus preguntas imprevistas. De este diálogo surge la certeza del pueblo acerca del resultado del juicio y como la parte dispositiva de la sen-



tencia debe hacerse conocer tras un breve cuarto intermedio, tratándose de un tribunal de abogados, o inmediatamente, si se trata de un jurado, no existe ni la remota posibilidad de que se defraude a la justicia por la interposición de influencias personales ajenas al debate.

Dentro del procedimiento escrito, jamás se sabe con certeza cual será el resultado del pleito o causa. En el largo plazo que la ley acuerda a un juez que actúa unipersonal y secretamente para dictar sentencia, es imposible impedir que se acerquen a él sus amigos, sus parientes, sus acreedores o los políticos influyentes, para decidirlo en un sentido o en otro. Su rectitud es vencida muchas veces hasta por razones circunstanciales de credos o banderas.

#### IV — NUEVA ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES

Y bien, señores: el establecimiento del juicio oral importa la necesidad de dar una nueva organización a los tribunales de justicia.

a) *En lo civil y comercial*, los juicios deben ventilarse ante un solo juez letrado, cuando el monto discutido no exceda de mil pesos, y ante un tribunal de tres jueces letrados, cuando sobrepasa esa cantidad. Corolario de esta organización es, como ya he dicho, la instancia única para las cuestiones de hecho y el recurso de casación para las de derecho a cuyo efecto debe establecerse una Corte de Casación que anule las sentencias dictadas por los jueces o tribunales inferiores, con violación de las normas legales, y fije la interpretación auténtica y definitiva de la ley.

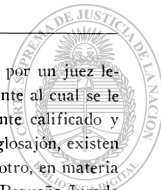
b) *En lo correccional*, debe actuar un solo juez letrado que resolverá en juicio oral, público y contradictorio, los de-

litos menores cuya pena no exceda de seis meses de prisión o arresto o de 500 pesos de multa, y también, todas las faltas o contravenciones a ordenanzas municipales o policiales. En las capitales debe existir un juez correccional en cada comisaría policial y en el interior de las provincias o territorios, uno en cada partido o departamento. También debe regir, en cada caso, la instancia única para las cuestiones de hecho y el recurso de casación para las de derecho.

c) *En lo criminal*, debe actuar, en primer término, un juez de instrucción, para que reúna los elementos de prueba necesarios para justificar o rechazar la acusación; luego un tribunal de tres magistrados para que examine las constancias del sumario instruido por el juez de instrucción y declare si hay lugar o no a la acusación, y en su caso, para que dicte el auto de sobreseimiento o de prisión preventiva; en este último caso, las actuaciones deberán pasar al tribunal que "verá" en audiencia pública la causa, sea el de magistrados, sea el jurado popular. El primero tiene ya cierta tradición en nuestro país por su funcionamiento en esta provincia y en la de Mendoza. El jurado, en cambio, no tiene tradición en la República: merece un estudio especial.

## V.— EL JURADO POPULAR.

a) *¿Qué es el jurado popular?* Para quien haya estudiado el jurado popular a través de las leyes de los países que lo han establecido y organizado desde hace siglos, resulta sumamente fácil contestar a la siguiente pregunta: ¿qué es el jurado popular? Un tribunal compuesto por 12 personas honorables —que no son abogados— elegidas por sorteo de una lista que se confecciona anual o bianualmente, y que



escucha en una audiencia pública, presidida por un juez letrado, la acusación llevada contra un habitante al cual se le imputa haber cometido un delito previamente calificado y reprimido por la ley. En el molde clásico anglosajón, existen dos jurados que funcionan, uno después de otro, en materia criminal: el Gran Jurado de Acusación y el Pequeño Jurado de Sentencia. El primero examina en secreto las pruebas acumuladas en el proceso sumario por el juez de instrucción o la policía contra el acusado, y en secreto, también, resuelve si hay lugar o no a la acusación. Es decir, que en este período de un proceso, tiene las facultades que nosotros hemos dejado en manos de los propios jueces instructores, de sobreseer o dictar la prisión preventiva. Si considera que no hay lugar a la acusación, ordena el archivo de las actuaciones del sumario, sin más trámite, y en caso de haberse detenido al acusado, manda ponerlo en libertad. Si considera que hay lugar a la acusación, suscribe el acta correspondiente y la pasa al tribunal de derecho de la localidad para que éste ordene la inmediata constitución del Pequeño Jurado de Sentencia, que debe examinar en juicio público el acta de referencia.

b) *Quienes pueden ser jurados.* Para que la institución del jurado responda a sus verdaderos fines es necesario organizarla convenientemente. Jurado no puede ni debe ser cualquier individuo del pueblo por el hecho de “votar” o de ser mayor de edad. Jurado sólo puede ser el habitante —hombre o mujer— mayor de treinta años y menor de setenta que sabe leer y escribir el idioma; que tiene su domicilio real y permanente no inferior a tres años, en el partido o circunscripción judicial respectiva; que vive de su trabajo o ejerce alguna profesión, arte o industria lícita conocida. No pueden ser jurados, los condenados en juicio criminal, los due-

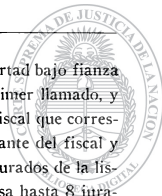
ños, los gerentes, las representantes, etc., de casas de lenocinio, juego, despacho de bebidas alcohólicas, los fallidos no rehabilitados, los ebrios y toxicómanos consuetudinarios, los mendigos, las mujeres u hombres sin profesión u oficio. Tampoco pueden serlo, por razón de sus funciones, el presidente de la República, los gobernadores, los ministros, los empleados administrativos, los legisladores, concejales, jueces, abogados, procuradores, militares, policías y sacerdotes.

c) *Confección de la lista de jurados.* Para confeccionar la lista de jurados, de modo que no haya inclusiones o exclusiones arbitrarias, se designa en casi todos los países donde la institución funciona, una comisión de vecinos responsables o determinados funcionarios que en el término de un mes deben hacer un censo de todas las personas en condiciones de ser jurados. Hecho el censo, se publica la lista correspondiente a cada circunscripción, durante otro mes, para que cada persona pueda impugnar a los integrantes por no reunir las condiciones exigidas por la ley o solicitar la inclusión de los que reuniendo esas condiciones no hubieran sido incluidos. Depurada, así, la lista —que puede tener en un partido 1000 personas, 2500 en otro, 600 en otro, etc.—, el presidente de dicha comisión o el funcionario indicado por la ley, la remite al tribunal del crimen del partido judicial, el cual, en audiencia pública, controlada por el fiscal, por los representantes de los colegios de abogados y por los periodistas, sortea de dicha lista 300 personas, a quienes notifica por cédula que deberán prestar el servicio de jurados durante el año siguiente en todos los procesos criminales por delitos cometidos dentro de ese partido o circunscripción judicial.

d) *Funcionamiento del jurado.* Y así, cometido un delito que debe ventilarse ante el jurado, instruido el sumario de

práctica, detenido el acusado o puesto en libertad bajo fianza y con cargo de presentarse al tribunal al primer llamado, y formulada la acusación por el tribunal o el fiscal que corresponda, aquel —juez o tribunal— sortea, delante del fiscal y de los abogados de las partes, si los hay, 26 jurados de la lista de 300. El acusado puede recusar sin causa hasta 8 jurados. El acusador 4. Quedan 14 —12 titulares y 2 suplentes— que son notificados para que se presenten el día y hora señalados para la audiencia pública a constituir el Pequeño Jurado de Sentencia. Reunidos los 12 jurados en la sala de audiencias que preside el juez del partido, les toma juramento en presencia del público, de que escucharán atentamente todo lo que oigan en la audiencia y de que al dar su veredicto, es decir, su fallo acerca de los hechos, no procederán ni por odio, ni por amistad, ni por temor al acusado. Después del juramento se lee el acta de acusación del fiscal, o sea lo que nosotros llamamos el dictamen fiscal; luego declaran los testigos, que pueden ser interrogados libremente por el juez o tribunal que preside la audiencia, por el fiscal y los abogados; si hay pericia médica, balística, de contabilidad, etc., los peritos deben estar presentes en la audiencia y exponer verbalmente todo lo que se les pregunte acerca de su profesión y que se relacione con el hecho criminal que se ventila; al final, hablan los abogados de las partes y el fiscal, cuidando de que siempre sea último en hacer uso de la palabra el abogado defensor del acusado.

Si en el curso del debate surge una cuestión de derecho que debe resolverse previamente, el juez o tribunal que preside la audiencia, debe resolverla de inmediato. Y así, si durante la vista del proceso, el abogado defensor alega que se ha calificado erróneamente el hecho incriminado y que por lo



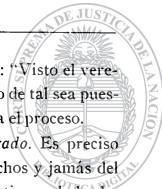
tanto, la acusación por defraudación debe serlo por hurto, el juez o tribunal de derecho que preside la audiencia debe resolver en el acto la cuestión propuesta y si lo hace en el sentido de que el acto incriminado estaría comprendido en la figura jurídica de la defraudación, la vista del proceso continúa con respecto a este delito y el veredicto del jurado será: culpable o no culpable de defraudación.

e) *El veredicto del jurado.* Finalizados los alegatos, el presidente del tribunal pregunta al acusado si tiene alguna cosa que agregar. Si éste dice que sí, se le escucha, y si pide alguna nueva diligencia de prueba cuya necesidad haya surgido del debate, se practica inmediatamente. Si dice que no, el presidente declara cerrado el debate e invita al jurado a deliberar en secreto. Los 12 jurados pasan, entonces, a una sala contigua a la de audiencias que no tiene más comunicación con el exterior que la puerta por donde han entrado. Empiezan por nombrar a uno de ellos como presidente para que dirija la discusión y recoja los votos. Recuerdan, luego, los pormenores de la audiencia, desde el comienzo hasta el final; lo que dijeron los testigos, los peritos y los abogados, y por simple mayoría de votos, en algunos países, o por unanimidad en otros, acuerdan el veredicto, o sea, deciden si el acusado es culpable o inocente del hecho criminal que se le imputa. Vuelven a la sala de audiencia y se produce el siguiente diálogo: Presidente del tribunal de derecho: — ¿El jurado ha acordado el veredicto? Presidente del jurado: — Sí. Presidente del tribunal de derecho: — ¿Cuál es el veredicto del jurado? Presidente del jurado: — El acusado es culpable, o el acusado es inocente. En el primer caso, el juez que preside la audiencia agrega: “Visto el veredicto del jurado, condeno al acusado fulano de tal, a sufrir tal pena que deberá cumplir en



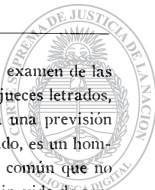
tal establecimiento". En el segundo caso dice: "Visto el veredicto del jurado, ordeno que el acusado fulano de tal sea puesto inmediatamente en libertad". Y así termina el proceso.

f) *Las cuestiones de hecho ante el jurado.* Es preciso recordar que el jurado es sólo juez de los hechos y jamás del derecho y que esta separación entre las cuestiones de hecho y de derecho es la que ha logrado hacer del jurado el instrumento insustituible de una buena administración de justicia. Esto es incomprensible para muchos juristas de nuestro país y especialmente para aquellos que quieren encontrar defectos en cada fase del jurado. Es que imbuidos de las doctrinas penales surgidas al calor de la reacción contra los principios de la democracia liberal para establecer la dictadura judicial de los especialistas en derecho que responden a las tendencias demolidoras de la libertad civil, no quieren abrir sus ojos a la evidencia y se encastillan en el error de creer que es imposible separar las cuestiones de hecho de las de derecho para encomendar la apreciación de las primeras a un tribunal popular, sin intereses creados, y las segundas a uno especializado. Su vanidad llega a veces al paroxismo de afirmar que los abogados son los depositarios exclusivos del razonamiento humano y de que sólo a ellos les está reservada la aptitud para comprender y apreciar los hechos que forman la sustancia de todo proceso. Los hombres puramente eruditos tienen una soberbia incontenible, pero son fríos de corazón. Remontan las alturas de la ciencia y de las especulaciones mentales, sin perder de vista los cargos honoríficos y rentados, las pensiones, las jubilaciones, es decir, la fama o fortuna que ese esfuerzo ha de procurarles. Son como los buitres que ganan las nubes sin perder de vista la carroña. Por eso muy pocos juristas comprenden la esencia del jurado. Les sobra inteligencia, pero



les falta corazón. Quieren dominar; quieren mantener su hegemonía dentro de la sociedad actual, para explotarla en fama o fortuna. Eso es todo. Olvidan que en el fondo de cada corazón se halla latente o manifiesta una parte de la Verdad, cuya primera y última expresión es Dios. Y bien. El análisis y la apreciación de las circunstancias de hecho debatidas en la audiencia pública, con la colaboración de toda clase de peritos, (calígrafos, médicos, ingenieros, contadores, balísticos, etc.), es patrimonio común de todas las personas de cultura mediana y no patrimonio exclusivo de los abogados. No hay cuestión de hecho, por difícil que aparentemente sea, cuya apreciación escape a la capacidad de 12 personas de 30 a 60 años de edad que la han observado. Si está probado o no que el acusado falsificó el documento o la firma analizada por los peritos calígrafos; si está probado o no que el acusado mató a la víctima con plena conciencia del hecho, según lo afirman los médicos forenses y psiquiatras; si está probado o no que el acusado fabricó e hizo explotar la bomba analizada por los peritos ingenieros balísticos; si está probado o no que el acusado cometió el desfalco que surge del dictamen de los peritos contadores; si está probado o no que el acusado entró por la ventana y robó las cosas secuestradas; si está probado o no que el acusado abusó de su autoridad, violó sus deberes de funcionario público, malversó caudales públicos o hizo negocios incompatibles con sus deberes de funcionario; si está probado o no que el acusado es un tratante de blancas; etc., etc., son circunstancias de hecho que jamás escapan a la apreciación de 12 personas honorables, de cultura mediana y con sentido común.

g) *Fundamento filosófico del jurado popular.* Cualquiera que medite un poco sobre el objeto de separar las cuestio-

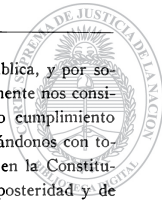


nes de hecho de las de derecho, entregando el examen de las primeras al jurado y el de las segundas a los jueces letrados, ha de advertir que obedece a una lógica y a una previsión irrefutables. El juez permanente, el juez letrado, es un hombre conocido, y entre nosotros es un hombre común que no sólo no hace vida exclusiva de gabinete, es decir, vida de consagración al estudio y a la función, sino que hace una vida tanto o más mundana que cualquier otro mortal. Salvo raras excepciones, el juez es socio de los clubs, el juez juega, el juez hace intensa vida social, participa en política, etc. Este hombre, con sus pasiones, con sus defectos, con sus deseos de fama o fortuna insatisfechos, se halla a merced de cualquier persona que directa o indirectamente pueda proporcionarle lo que él anhela. Fácil es, por consiguiente, ver al "hombre", en privado, procurándole lo que desee, para lograr el propósito que se persigue ante el "Juez", y como éste es el árbitro exclusivo en las cuestiones de hecho y de derecho en los juicios, su sentencia será, en muchos casos, el efecto natural de las influencias que hayan trabajado privadamente a su espíritu. Nada de esto ocurre con el jurado, convenientemente seleccionado, toda vez que sus componentes son designados por sorteo pocas horas antes de la audiencia en la que sólo han de apreciar las circunstancias de hecho que conducen a la culpabilidad o a la inocencia del acusado. Su forma de nombramiento, su actuación sin esperar un ascenso o el aumento del sueldo o una cátedra, etc., etc., y la responsabilidad personal que contraen al jurar en cada caso, ante el público, los coloca en una situación que vuelve imposible la presión anticipada de sus espíritus para decidirlos en favor o en contra del acusado.

h) *Dignificación de los jueces y abogados.* Con el esta-

blecimiento del jurado se produce un fenómeno de la más alta trascendencia para la vida judicial de un país, como se ha advertido en todas las naciones que lo han establecido; el afianzamiento de la justicia por la dignificación de jueces y abogados. En efecto: quitándole al juez permanente la pesada y comprometedora carga de apreciar las circunstancias de hecho que conducen a la culpabilidad o a la inocencia de un acusado, se lo libera de la perspectiva de que sus amigos personales o políticos, o sus familiares, traten de presionar su espíritu en favor o en contra de aquel y se lo eleva a la categoría que lógicamente le corresponde de intérprete auténtico y exclusivo de la ley. Como ya no es intérprete de los hechos, nadie trata de comprometer su fallo y con ello el juez se dignifica automáticamente. Lo mismo ocurre con los abogados. Existiendo el jurado, saben de sobra que no tienen necesidad de visitar privadamente al juez para interesarlo a favor de su caso, toda vez que este ya no es el árbitro insustituible del juicio, y con ello desaparece la oportunidad que hoy tienen los abogados de rebajar su condición de tales ante los magistrados para pedirles liberalidades a favor de sus clientes.

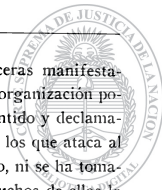
i) Los constituyentes argentinos tuvieron razón, entonces, al aspirar a que en nuestro país se estableciera el juicio por jurados, especialmente en materia criminal. La institución había dado resultados inmejorables en Inglaterra, Estados Unidos y los países de la Europa Continental, y conciendo el fervoroso anhelo democrático del pueblo de la Nación, quisieron que ella fuera incorporada a nuestro país como uno de los resortes esenciales del sistema republicano de gobierno que venia persiguiéndose desde 1810. No debe existir ningún temor en dar forma práctica al ideal de justi-



cia de los hombres que organizaron la República, y por sobre todas las cosas, es necesario que si realmente nos consideramos argentinos, lo demostremos dando cumplimiento al mandato de los constituyentes y solidarizándonos con todas las instituciones que ellos establecieron en la Constitución para hacer la felicidad propia, de su posteridad y de todos los hombres del mundo que quisieran habitar el suelo argentino. El temor sobre los resultados del jurado sólo anida en los corazones débiles y en las mentes de algunos letrados que piensan haber adquirido el monopolio del razonamiento humano. La declamación contra el jurado sólo surge de labios de aquellos que no lo conocen a fondo y de algunos jueces que no quieren perder el predominio que ejercen en la sociedad actual mediante el uso de sus facultades para ser árbitros indiscutibles e indiscutidos de la libertad, el honor o la fortuna de los habitantes. Pero no temamos nosotros y sigamos nuestra prédica continuada hasta que veamos plasmarse en realidad esta institución de la más pura cepa republicana. Habremos servido a nuestra patria sirviendo a la verdadera causa de la justicia.

j) *Los prohombres del país y el jurado.* Por otra parte, no estamos solos; los hombres más destacados de la República han prohiado y defendido la institución del jurado con un calor y un entusiasmo increíbles. De entre ellos, sólo citaré a los principales. Mitre, dijo en el debate sobre el jurado que se realizó en 1870 en el Senado Nacional: “La institución del jurado es un dogma para todo pueblo libre”. Y más adelante agregó: “el jurado es el complemento de las instituciones de un pueblo libre”. Quintana, dijo en el mismo debate: “La institución del jurado es una de las grandes conquistas de la civilización moderna y una de las garantías más

firmes sobre que reposan las libertades públicas y privadas". Avellaneda, decía en la memoria ministerial de 1873: "Creemos haber sido uno de los primeros en preconizar entre nosotros las conveniencias del jurado haciendo al mismo tiempo la crítica serena de nuestro sistema judicial; y debo agregar que no producen impresión sobre mi espíritu las sistemáticas objeciones que el jurado suscita. Las instituciones son hechos prácticos y se las conoce, como a los árboles, por sus frutos. Cítese un país que se distinga por su administración de la justicia criminal sin que tenga por base el jurado, y este ejemplo será a la verdad un gran argumento. Entre tanto sabemos todos que el jurado es el distribuidor de la justicia en los pueblos que se designan por la realización de la vida libre y por la mejor consecución de los fines sociales. "Sarmiento, decía en "El Mercurio" de Valparaíso en 1846: "el jurado es el paladín de las libertades públicas. Introducir el jurado es inocular un principio de vida y de existencia en el pueblo". Salvador del Carril, dijo en 1866, refutando la objeción de que el atraso del país no permitía establecer la institución: "Nosotros creemos que precisamente ese atraso del país, esa falta de costumbres democráticas, esa indiferencia por la cosa pública, es una razón más para que nos apresuremos a ponerla en práctica. El jurado, a la vez de ser una excelente institución judicial, es un poderoso elemento civilizador, como resulta comprobado por la influencia que ha ejercido sobre las costumbres del pueblo inglés y del pueblo norteamericano". Podría citar lo que dijeron Victorino de la Plaza, Florentino González, José Domínguez, Martín Ruiz Moreno, Del Valle Iberlucea, pero sería demasiado. Sin embargo, para ciertos jueces jubilados, que ejercen actualmente su profesión de abogados en el mismo tribunal donde des-



empeñaron sus funciones, todas estas sinceras manifestaciones de los hombres a quienes debemos la organización política del país, no son más que frases sin sentido y declamaciones huecas. La verdad es que ninguno de los que ataca al jurado, sabe a ciencia cierta qué es el jurado, ni se ha tomado el trabajo de analizar sus cualidades. Muchos de ellos lo atacan porque de ese modo se defienden del derrumbe de la hegemonía que actualmente ejercen en los tribunales.

k) *Palabras finales.* Pero a la opinión interesada de estos hombres, yo opongo la de los ilustres ciudadanos argentinos que nos dieron esta patria grande que todos adoramos. Ellos, como los barones ingleses que arrancaron la Carta Magna a Juan sin tierra, comprendieron los derechos de la humanidad y tuvieron valor para defenderlos. No titubearon un instante en sancionar por unanimidad los preceptos constitucionales que se refieren al jurado. Es que tenían muy cercano el recuerdo de la judicatura letrada de Rozas y no querían que sus hijos ni su posteridad soportaran las injusticias de esa organización colonial que tantos e irreparables males había ocasionado a la sociedad argentina. Por eso repitieron por tres veces en la Constitución su deseo de que el juicio por jurados se estableciera en la República.

Toca a nosotros, los hombres de la presente generación, realizar el ideal de los constituyentes, a pesar de los ataques de los ex magistrados; a nosotros, incontaminados por los afanes materiales de la hora y guardianes fieles de los principios que ellos nos legaron para formar los cimientos de esta gran nación; a nosotros, que no explotamos a la República, con pensiones o jubilaciones, mientras abominamos del sistema republicano y de sus más excelsos postulados. Tengamos la fuerza espiritual necesaria para resistir el em-

bate en que se juegan los principios que sirven de sólido pedestal a la Nación y mientras tanto sigamos trabajando con amor y con cariño para que el edificio constitucional del país conserve todos sus pilares, inclusive el juicio por jurados. A la vuelta de poco tiempo se aplacarán los ánimos y un amplio horizonte se abrirá para las mentes ofuscadas de los que pretenden mantener el vetusto régimen procesal que nos queda como un ingrato resabio de la colonia.

Jóvenes argentinos: vosotros, que soís la esperanza auténtica de la patria, que alentáis en vuestros corazones los más puros ideales, que añoráis una Argentina grande, floreciente y libre, trabajad sin descanso por la implantación del sistema de la oralidad en los juicios y especialmente por el establecimiento del juicio por jurados en lo criminal, que con ello no sólo abrireis un camino de verdadera realización para que se destaquen los hombres más capaces y más dignos, sino que contribuiréis a afianzar definitivamente la justicia en la República, tal como lo quisieron los constituyentes de 1853.

*Eduardo Augusto García*





## SECCION SEGUNDA

(Proyecto de Código)





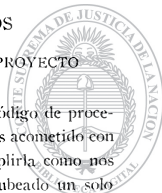
# EXPOSICION DE MOTIVOS

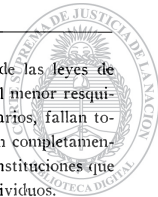
## IDEAS GENERALES Y METODO DEL PROYECTO

1 *Palabras preliminares.* Redactar un código de procedimiento penal no es tarea fácil, pero la hemos acometido con decisión, seguros de que habríamos de cumplirla como nos lo dictaba nuestra conciencia. No hemos titubeado un solo instante al hacerlo. Hemos trazado con mano firme los rasgos característicos de este proyecto y sentimos la íntima satisfacción de habernos puesto a tono con el ideal de los constituyentes.

Estamos convencidos de que la democracia liberal, aplicada al gobierno político de un país, es el sistema más adecuado para hacer la felicidad del pueblo. Pero no basta incorporar los principios que son de su esencia a los estatutos que regulan la vida constitucional de aquél si no van acompañados de las instituciones y de los organismos encargados de convertirlos en realidad cotidiana.

¿Qué importancia tiene afirmar la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos en un precepto constitucional, si no existen leyes que permitan asegurar en la práctica la intangibilidad de ese principio, ni tribunales capaces de reconocerlo y hacerlo respetar contra todo evento? ¿De qué sirve establecer que nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo si se autoriza el secreto del sumario y el interrogatorio de los testigos o imputados por funcionarios de la policía, sin control de ninguna especie?





Es un hecho comprobado que allí donde las leyes de procedimiento son poco previsoras y dejan el menor resquicio a la voluntad discrecional de los funcionarios, fallan todos los resortes del enjuiciamiento y resultan completamente inútiles los preceptos estampados en las constituciones que tienden a garantizar los derechos de los individuos.

Es lo que, por desgracia, ha ocurrido entre nosotros. Nos enorgullecemos de haber incorporado al estatuto político fundamental de la Nación los principios más liberales y democráticos del mundo, pero hemos descuidado rodearlos en la práctica de las garantías necesarias para que ellos se convirtieran en hechos de la vida diaria.

El nefasto sistema de enjuiciamiento criminal ideado por Manuel Obarrio y aprobado en 1888 con algunas modificaciones que lo convirtieron en el más atrasado y bárbaro de país civilizado alguno, es una demostración viviente de esa antinomia a que nos hemos referido, existente entre los principios constitucionales en vigor y las leyes sancionadas para reglamentarlos.

Como lo afirmara el Doctor Rodolfo Rivarola en su famosa obra "La Justicia en lo Criminal" en 1899 y la Asociación Pro Juicio Oral en su nota al Senado de la Nación publicada en el diario de sesiones de fecha 24 de Septiembre de 1932, el procedimiento escrito y secreto, sin garantía alguna para la parte que no es amiga del Juez o de los empleados de secretaría, será un medio adecuado para asegurar una dictadura judicial en que se condene a los inocentes y se absuelva a los culpables, pero jamás el que se necesita para encontrar la verdad y realizar la justicia.

Muchas provincias han reaccionado contra este anacronismo y cuando las leyes procesales lo han mantenido, se

ha implantado la publicidad del sumario en disposiciones expresas de sus respectivas constituciones. Tal ha ocurrido con la de Mendoza, (art. 146), Entre Ríos, (art. 28), Corrientes (art. 31), Córdoba (art. 9), La Rioja (art. 26), Santa Fe (art. 11) y últimamente Buenos Aires. Es que la práctica ha demostrado hasta la evidencia que es inútil y perjudicial todo sistema que permite el desenvolvimiento secreto de actividades relacionadas con la libertad y el honor de las personas, y que los vicios o las desviaciones se corrijan y se extirpan cuando ellas están contraloreadas por las partes o por la opinión pública.

¿Qué provincia ha derogado la publicidad del sumario, una vez incorporada a la legislación, por considerarla atentatoria de las necesidades de la investigación? Ninguna. En cambio, en todas ellas, se ha comprobado que con la publicidad desaparecen los "corredores de influencias" ante los jueces o funcionarios de la policía y las causas o procesos se desenvuelven normalmente con las debidas garantías para las partes.

Todos estos pensamientos han trabajado constantemente nuestro ánimo y nos han decidido a propiciar la reforma de las leyes actuales para conformarlas con el espíritu de la época y de nuestras instituciones fundamentales.

Debemos volver al cauce que nos marcaron los constituyentes. Los preceptos establecidos en la Constitución de 1853 deben ser aplicados lealmente. Para ello es indispensable poner en vigor las instituciones y los organismos capaces de darles expresión y contenido real. Es lo que hemos tratado de hacer en el presente proyecto.

2 *Método*. La mayoría de los Códigos existentes y de los proyectos elaborados, siguen la rutina de confundir las pres-

cripciones de carácter netamente procesal con las relativas a la organización y al funcionamiento de los tribunales de justicia. De ese modo nos encontramos con que a renglón seguido de los principios generales sobre la materia legislatada, aparecen disposiciones relacionadas con la jurisdicción y la competencia o con el modo de reemplazar a los jueces y demás funcionarios judiciales en caso de recusación o de excusación, disposiciones que luego se repiten o se contradicen en la Ley Orgánica; pero es evidente que estos dos aspectos de la judicatura deben ser analizados y resueltos en esta última y no en el código de procedimiento, que solo contempla el modo, oportunidad y forma de sustanciar el juicio o proceso y no el modo, oportunidad y forma de organizar y hacer funcionar el juzgado o tribunal. Por esta razón hemos proscripto del presente proyecto todo lo que se relaciona con la jurisdicción y la competencia, así como también lo que atañe a las recusaciones y excusaciones que se legislan en la Ley Orgánica.

El proyecto ha sido dividido en los seis libros siguientes: 1º Disposiciones generales e instrucción; 2º Del Juicio Oral; 3º De los procedimientos especiales; 4º De la ejecución de las sentencias; 5º De los recursos, y 6º Disposiciones complementarias.

El método seguido para la distribución de las materias que compone cada libro es el más lógico en un trabajo de esta naturaleza. También hemos reaccionado, en este caso, contra la rutina de mezclar materias diferentes en un mismo libro. La simple lectura del índice lo demuestra.

Nadie puede negar que en un Código, como en un estatuto político, se colocan en primer término los principios esenciales de la institución o sistema que trata de organizar-

se y establecerse. Por eso hemos iniciado el Libro primero con los principios generales que definen la tendencia y los propósitos fundamentales del Código y luego hemos resuelto todos los problemas de la instrucción siguiendo un orden lógico estricto. Para ello se ha tenido en cuenta los trabajos existentes sobre la materia, alterando algunas veces la ubicación de cada institución conforme al pensamiento central de ordenarlas lógicamente, y modificando o sustituyendo otras veces aquellas que a nuestro juicio eran contrarias al espíritu del régimen republicano de gobierno.

Para la confección del Libro segundo nos hemos servido casi íntegramente del proyecto de Código de Procedimiento Penal para la provincia de Buenos Aires preparado por los doctores Eusebio Gómez y Rodolfo Moreno (h). Solo hemos corregido aquellas disposiciones que según nuestro leal saber y entender se hallaban en pugna con el sistema republicano y con los fines del poder judicial.

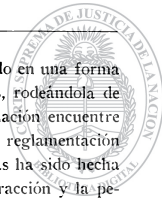
El Libro tercero podemos decir que ha sido redactado casi íntegramente por nosotros, salvo una que otra institución. Hemos hecho del recurso de habeas-corpus un procedimiento sencillo, expeditivo y eficaz, suficiente para garantizar la libertad individual que ahora no se respeta sino cuando el afectado sabe o tiene "con qué" defenderse. Se ha creado el antejuicio para determinar la responsabilidad de los funcionarios y empleados del poder judicial, sustituyendo así el vetusto e innocuo régimen de la superintendencia por un medio efectivo de aplicar las sanciones a los funcionarios y empleados remisos, ineptos o inmorales. Incorporamos un procedimiento especial que no tiene precedentes entre nosotros para los casos de procesamiento de un senador o diputado nacional. El ejercicio de las acciones emergentes de



los delitos contra el honor ha sido organizado en una forma completamente distinta a la que conocemos, rodeándola de las necesarias garantías, para que la difamación encuentre su correctivo inmediato. Y por último, la reglamentación del procedimiento correccional y sobre faltas ha sido hecha teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción y la perentoria necesidad de que la causa sea resuelta en un lapso reducido de tiempo. La Ley Orgánica proveerá los medios de realizar este propósito.

El Libro cuarto establece el procedimiento para ejecutar las sentencias dictadas en nuestro país y en el extranjero.

El Libro quinto contiene los recursos de que son susceptibles las resoluciones y sentencias judiciales. Hemos dado esta ubicación a los recursos porque entendemos que son la coronación de todo proceso penal, y de todo juicio, en general. En cada uno de los libros anteriores existen resoluciones o sentencias que pueden ser susceptibles de alguno de los recursos analizados en el presente, y entonces resulta lógico pensar que su ubicación debe hacerse después de los libros en que aquellas son autorizadas. Introducimos el recurso de casación y lo reglamentamos de tal manera que a simple vista se comprende la enorme utilidad que prestaría en la práctica. Además, sustituimos el actual recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, anticuado y muy mal aplicado, por el recurso federal, reglamentado en una forma sencilla y eficaz, a objeto de que la Corte sea realmente el Tribunal encargado de “guardar la Constitución y las leyes fundamentales de la Nación” y no un simple tribunal de apelación como sucede actualmente. Al comentar cada artículo del proyecto tendremos oportunidad de exponer ampliamente las razones que nos han decidido a intro-

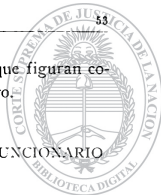


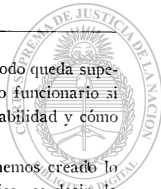
ducir este recurso y las demás instituciones que figuran como novedad en el presente proyecto de Código.

## RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADO O FUNCIONARIO JUDICIAL

3. *Principios generales.*— En la sustanciación de los procesos y, en general, en el desenvolvimiento de la actividad judicial, deben adoptarse todas las precauciones que la ciencia, la prudencia y la práctica aconsejan con el fin de encontrar la verdad que se anda buscando. Pero será inútil que el legislador adopte los medios más racionales y lógicos para lograr ese propósito, si paralelamente no crea los resortes necesarios para evitar las desviaciones de los encargados de poner en movimiento el complicado mecanismo del poder judicial. Sucede muy a menudo que diligencias de la mayor importancia son cumplidas en forma deficiente o en un plazo demasiado largo o en condiciones anormales, ocasionando perjuicios de orden moral o material irreparables. ¿Y qué sanción ha establecido la ley para reprimir el hecho? Ninguna. A lo sumo ha dicho que todo ello se cumplirá en tal o cual forma y plazo “bajo la responsabilidad del empleado o funcionario”. ¿A qué responsabilidad se refiere? ¿Cómo hacerla efectiva? ¿Qué tribunal tendrá las condiciones de independencia, de equilibrio y de imparcialidad necesarias para que aquella no se convierta en una amenaza pueril e ilusoria?

Nosotros pensamos que cuando una diligencia, un requisito, una condición, un deber o una obligación deben cumplirse en una forma o plazo determinado, a renglón seguido corresponde establecer la pena en que incurrirá el que





dejare de cumplirlos. Es inútil afirmar que todo queda supeditado a la “responsabilidad” del empleado o funcionario si no se especifica en qué consiste esa responsabilidad y cómo se hará efectiva.

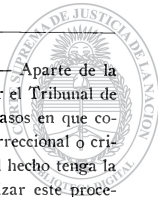
4. *La sanción automática.*— Por eso hemos creado lo que nosotros llamamos la sanción automática, es decir, la pena en que automáticamente incurre el que no ejecuta el acto señalado por la ley en las condiciones de modo, forma y plazo que la misma determina. De este modo la “responsabilidad” del empleado o funcionario tiene un medio eficaz de hacerse efectiva y, como consecuencia lógica, de servir para evitar la reproducción del hecho que perjudica a las personas afectadas y compromete la seriedad de la administración de justicia. Y así, no se decretará arbitrariamente la detención de una persona, bajo la ilusoria responsabilidad del que ordenare la medida, como sucede actualmente, sin antes haberse llenado los requisitos que la ley exige, porque entonces el funcionario incurrirá en una pena; ni dejarán de cumplirse los plazos para tomar las declaraciones, dictar las providencias o sentencias y notificarlas, conceder los beneficios de la libertad provisoria, realizar las audiencias, recabar y evacuar los informes para sustanciar un recurso de habeas corpus, etc., porque también la responsabilidad se hará efectiva mediante la aplicación de la pena automática que trae aparejada la omisión.

Está demostrado que si corresponde a los mismos jueces del poder judicial hacer efectiva esa responsabilidad, es imposible obtenerla, porque siempre encuentran el modo o la forma de justificar la negligencia u omisión de sus colegas, a la espera de que cuando les toque a ellos el turno de ser juzgados, sean tratados con la misma consideración, por

no decir liberalidad. Por ello hemos creído que es más prudente dejar en manos de una oficina independiente la comprobación de las infracciones y la aplicación automática de la pena pecuniaria, descontando de los sueldos que ella misma debe abonar a los funcionarios o empleados, el monto de las multas en que hubieran incurrido. Esa oficina es la de Habilitación y Control del Personal de los Tribunales, que reglamenta minuciosamente la Ley Orgánica.

5. *La sanción por el Tribunal de Responsabilidades.*

Existe una serie de hechos que no caen ni pueden caer bajo la sanción automática, como por ejemplo, las injurias a los litigantes y sus letrados o apoderados, las faltas al decoro y a la dignidad del cargo cometidos dentro o fuera de la oficina, la mala conducta personal, etc., (art. 508 del presente Código) por cuyo motivo el empleado o funcionario debe ser juzgado para establecer si es responsable o no de alguna o varias faltas que lo hagan merecedor de una corrección disciplinaria. Habiéndose demostrado la inutilidad de atribuir a sus superiores o a sus colegas, según el caso, la facultad de juzgar y reprimir esos hechos, hemos pensado en la necesidad de crear un tribunal independiente que llene aquella función con el máximo de rapidez y eficacia. Tal es el Tribunal de Responsabilidades, debidamente reglamentado en su funcionamiento por la Ley Orgánica. En los casos previstos por el Código, dicho Tribunal conoce en juicio público de la acusación y dicta su sentencia en la misma forma que un Tribunal ordinario. Pero como no tiene el caudal de trabajo de éstos y está compuesto de un modo diferente, no existe la posibilidad de que sus fallos se dilaten ni sean el producto de la mal entendida "liberalidad" con que se juzga actualmente las violaciones de los deberes de los funcionarios judiciales.



6. *La sanción por el juicio ordinario.* — Aparte de la sanción automática y de la que puede aplicar el Tribunal de Responsabilidades, queda expedita, en los casos en que corresponda, la vía ordinaria de la querella correccional o criminal ante los tribunales comunes, cuando el hecho tenga la gravedad establecida por la ley para autorizar este procedimiento. Es decir, que independientemente de las medidas disciplinarias que puedan aplicarse en forma automática o por el Tribunal de Responsabilidades, el perjudicado puede llevar su acusación a los tribunales ordinarios para que apliquen al empleado o funcionario la sanción que fija el Código Penal. Con esto no se vulnera el principio procesal de que nadie puede ser procesado y castigado más de una vez por el mismo delito, toda vez que cada tribunal procede dentro de la órbita de sus atribuciones para reprimirlo. Así, un funcionario que no dicta una providencia en el término señalado en la ley, incurre en una multa, que hace efectiva sobre su sueldo la Oficina de Habilitación y Control; la reiteración del hecho puede dar lugar, además, a que la conducta del funcionario sea juzgada por el Tribunal de Responsabilidades; sin perjuicio de esto último, si el hecho mismo constituye un delito común, aquél puede ser llevado a los tribunales comunes para su juzgamiento.

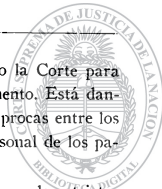
#### EL TRIBUNAL DE RESPONSABILIDADES

7. *Objeto.* — La Ley Orgánica contiene esta novedad. Ya hemos dado algunas razones para justificar su incorporación a la legislación argentina. Pero vamos a insistir en este punto para aclarar las dudas y salvar las objeciones que indudablemente le harán los interesados en mantener el fracasado, inservible y perjudicial sistema en vigor.

Se ha observado que el mejor juez del maestro es el discípulo, no por tener esta calidad, sinó por el conocimiento directo que obtiene de aquél con el trato diario. El discípulo sabe si el maestro está o no preparado, si conoce o no la materia, y no porque él a su vez la conozca, sino porque cuando el maestro sabe y la conoce, el discípulo comprende fácilmente y la enseñanza resulta provechosa. Si le dieran a elegir entre diez profesores de la misma materia, es seguro que se quedaría con el que sabe enseñarla mejor porque la domina más. Este es el secreto del éxito de los cursos paralelos que se dictan en las Universidades europeas por profesores libres que no pertenecen al rol de las mismas y esta es la razón por la cual los malos profesores que gobiernan las Universidades argentinas no quieren permitir la creación de los cursos libres con los derechos y obligaciones de los cursos oficiales.

Del mismo modo, todos los abogados y procuradores saben qué juez es inteligente, preparado, correcto, digno, y cual no lo es. Conocen, en la mayoría de los casos, hasta los detalles de la vida privada de cada empleado o funcionario. Saben si piden participación en los honorarios, a quien y en qué proporción. No ignoran cuáles concurren al hipódromo todos los Domingos y feriados, o se pasean por lugares públicos con prostitutas, ni cuáles tienen no menos de cuarenta parientes en los tribunales y a sus hijos en su propio juzgado.

A pesar de ello, ¿qué han hecho los tribunales que actualmente ejercen la superintendencia? Recientemente la Corte Suprema dictó una acordada prohibiendo las designaciones de parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad en el mismo juzgado. Sin embargo, existe un juzgado federal en la Capital donde continúa infringiendo-



se esa acordada ¿Y qué medida ha tomado la Corte para hacerse respetar? Ninguna, hasta este momento. Está dando tiempo a que por medio de permutas recíprocas entre los diferentes jueces se arregle la situación personal de los parientes afectados.

¿Podemos confiar en la imparcialidad y en la estrictez de esta clase de tribunales para asegurar el buen servicio de la administración de justicia? Por si esto fuera poco, ahí está para demostrar su inocuidad la forma en que fué juzgada la acusación llevada contra un juez de paz letrado durante el curso de 1935. El tribunal organizado conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de la ley 11.924, procedió con una parcialidad tan asombrosa que parecía poner de manifiesto que cada camarista se hallaba en la misma situación del acusado. Nadie dudó, luego, de cuál sería el resultado de la acusación. Empezó por declarar que los acusadores no eran parte, porque no eran los “interesados” a que se refería la ley, según su manera de interpretar el significado de dicha palabra. Después no tomó en cuenta las pruebas ofrecidas, para comprobar y demostrar la culpabilidad. El fiscal no acusó. La audiencia sólo fué de defensa. El juez fué absuelto sin que nadie sostuviera la acusación por haberlo prohibido el propio tribunal que lo juzgaba.

El Colegio de Abogados de Buenos Aires presentó a la Cámara de Paz una grave acusación contra un oficial de justicia que vendía los mandamientos judiciales de pago a sus propios acreedores e hizo entrega a la misma de unos diez mandamientos que le fueron pasados por uno de esos acreedores. No se sabe que la Cámara haya adoptado ninguna medida contra el aludido empleado, ni siquiera que haya dado intervención a la justicia penal.

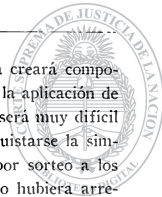
Es un sistema en fracaso. No podemos continuar aplicándolo sin que nos estremezcamos de pena y de vergüenza. Por eso hemos ideado el Tribunal de Responsabilidades.

8. *Organización.* — Adelantamos algunas de las ideas centrales sobre este aspecto del tribunal. Todos los abogados inscriptos en la matrícula respectiva, que tengan no menos de diez años de ejercicio de la profesión y que la ejerzan actualmente en el lugar donde deba constituirse el Tribunal, están en condiciones de ser miembros del mismo, excepto si estuvieran suspendidos en el ejercicio de aquella o hubieran sido objeto de otra medida disciplinaria grave. Dentro del plazo que la Ley Orgánica determina, el Presidente de turno del Tribunal realiza las diligencias mencionadas en los artículos 509 y siguientes del presente Código, y luego de constituido aquél, por sorteo efectuado en audiencia pública, continúan los procedimientos y obra en la forma de los tribunales ordinarios.

El objeto de entregar a los abogados de cierta categoría el juzgamiento de los funcionarios y empleados, en un antejuicio para determinar su responsabilidad, responde a la necesidad antes advertida y demostrada de evitar, en lo posible, que queden sin sanción innumerables hechos que en la actualidad contribuyen a desprestigiar a la justicia, toda vez que los tribunales establecidos para reprimirlos no cumplen o lo hacen deficientemente con las prescripciones legales en vigor.

El abogado que está en contacto permanente con los tribunales es el más indicado para juzgar de su eficacia según la forma en que los empleados o funcionarios desempeñan sus respectivas actividades. De ahí, entonces, la justificación de encomendarle la delicada misión de juzgar la conducta de aquellos.





Recojo la objeción de que este sistema creará componendas, entre jueces y letrados, para evitar la aplicación de las sanciones. Desde ya puedo afirmar que será muy difícil para un mal empleado o un mal juez, conquistarse la simpatía de todo el foro, ya que, eligiéndose por sorteo a los que deben integrar el Tribunal, aun cuando hubiera arreglado “sus asuntos” con diez o veinte abogados —cosa imposible— jamás sabría, hasta el sorteo, quienes serían sus jueces, y a partir de este momento la parte acusadora podría recusar aquellos que mantuvieran amistad personal con el juez o se hallaren en alguna de las demás situaciones que prevé la Ley Orgánica.

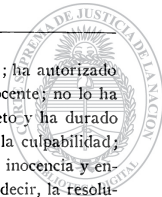
No habrá ningún peligro en establecer y organizar el Tribunal de Responsabilidades en la forma indicada. De ese modo se acabarán las componendas que actualmente minan el prestigio del poder judicial; las sanciones para las irregularidades podrán hacerse efectivas y los abogados habrán ganado la oportunidad de hacerse respetar y de servir a su patria en una forma digna y eficaz.

#### ABOLICION DEL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL Y DE LA SIMPLE ABSOLUCION DE LA INSTANCIA

9. *Opinión de Rivarola.* — El Dr. Rodolfo Rivarola, respetado juriconsulto y tratadista argentino, ha expuesto su pensamiento sobre el particular en la siguiente forma, luego de hacer una crítica minuciosa del proceso sumario y de las facultades de los jueces de instrucción: “Por último, después de toda esta serie de vejaciones incalificables, el juez tiene derecho de atenuar su propia responsabilidad, moral, ya que no será efectiva, dejando al inocente bajo el pe-

so de la difamación con un auto de sobreseimiento provisorio, autorizado por la misma ley que enfáticamente suprimió la absolución de la instancia como contraria al principio de que todo hombre libre debe reputarse inocente mientras no se le pruebe que es culpable. Tratando de la sentencia, el artículo 497 del Código de Procedimientos manda que la absolución se entienda libre en todos los casos y agrega: "queda absolutamente prohibida la simple absolución de la instancia". Pero lo que la ley prohíbe al juez de sentencia se lo permite al juez de instrucción; él es el único que puede poner en libertad a un procesado, declarando que los medios de justificación no han sido suficientes para demostrar la perpetración del delito, o para determinar a sus autores, cómplices o encubridores, dejando el juicio abierto hasta la aparición de nuevos datos (artículos 435 y 437 del Código de Procedimientos)".

10. *Abolición definitiva.* — Nosotros pensamos que carece de toda razón ese afrentoso sobreseimiento provisorio que autoriza el Código vigente, puesto que si en virtud del secreto del sumario no se deja al acusado en condiciones de saber de qué se le acusa y cuáles son las pruebas dirigidas contra él, tampoco alcanzamos el motivo que pueda haber inspirado al legislador para mantener indefinidamente a una persona bajo la imputación de un delito que la autoridad ha debido esclarecer totalmente en el largo espacio de tiempo en que puede sustanciarse el sumario. Si el poder público ata las manos y venda los ojos del imputado, que puede ser inocente, mientras practica en secreto las diligencias destinadas a comprobar su responsabilidad, parece lógico pensar que si al final de la investigación no surge con evidencia la culpabilidad, se impone la absolución definitiva e



irrevocable. La ley ha invertido los términos; ha autorizado el encierro de un hombre que puede ser inocente; no lo ha dejado defenderse; el sumario ha sido secreto y ha durado un año; al final no ha podido demostrarse la culpabilidad; pero el juez tiene una levisima duda sobre la inocencia y entonces dicta el sobreseimiento provisorio, es decir, la resolución infamante que deja a un hombre a quien no ha podido probarsele responsabilidad alguna en el hecho, bajo la sospecha eterna de ser el autor del mismo.

Nosotros abolimos esta repugnante institución en el art. 6, así como quitamos al juez instructor la facultad de pronunciarse sobre el mérito del sumario. La absolución debe ser siempre definitiva.

#### LA PRUEBA DE LA CULPABILIDAD O RESPONSABILIDAD INCUMBE A LA PARTE ACUSADORA

11. *Presunción de inocencia.* — Uno de los principios más sanos y equitativos de la ciencia procesal es el que establece que toda persona acusada de un hecho reprimido por la ley se presume que es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad. La mayoría de las naciones lo ha reconocido e incorporado a su sistema procesal como una conquista de la civilización contra el despotismo. Pero nosotros hemos dado un paso atrás. Varias leyes especiales han invertido la prueba y han creado arbitrariamente la presunción de culpabilidad en la persona imputada con la sola manifestación de un funcionario público, y le han obligado a que pruebe luego su inocencia para poder eximirse de la pena.

12. *Las leyes 11.570 y 11.683.* — Tal ha ocurrido, entre otras, con la ley 11.570 denominada de “aplicación de las leyes obreras” y las 11.683 y 12.151 sobre procedimiento

para la aplicación y percepción del impuesto a los réditos, a las transacciones, a las ventas, a las patentes, etc. En ellas se ha establecido que el acta labrada por el inspector hará fe mientras no se pruebe su falsedad, (art. 2 de la ley 11.570, y art. 27 de las leyes 11.683 y 12.151), con el agravante, en el caso de la ley 11.570, de que el inspector tiene una participación del 50 % en las multas que se aplican con su intervención, y de que en el departamento del Trabajo se pone toda clase de dificultades y de trabas al imputado que quiere defenderse, con el fin de evitar la demostración del error o falsedad del inspector y de que en tal caso no se disminuya el porcentaje de las entradas mensuales que cada uno de ellos ha calculado arbitrariamente valiéndose de las atribuciones dictatoriales que les concede la ley.

13. *Ajuste indispensable.* — Es necesario terminar con este sistema abominable, que fomenta la arbitrariedad y el despotismo por parte de la administración pública, cuando no ocurre que entrega al solo y exclusivo criterio de personas que no siempre son idóneas y dignas, los medios de cometer verdaderas extorsiones con los habitantes. Entendemos que en todos los casos la prueba de la culpabilidad o responsabilidad debe estar a cargo de la parte que acusa, que hace la imputación. Por eso abolimos toda disposición que pueda oponerse a este propósito, ya se halle en las leyes generales de procedimiento o en leyes especiales, como las que hemos citado anteriormente.



## LA PARTE QUERELLANTE

14. *Necesidad de su existencia.* — Mucho se ha discutido acerca de la conveniencia o inconveniencia de la intervención personal de una parte querellante, dentro del proceso penal. Se ha dicho que la justicia no debe darle intervención ni cabida porque aquella solo persigue la venganza y no la represión del hecho que ha conmovido o podido conmover a la sociedad. Aparte de ser ello inexacto, existe una serie de delitos en que la sociedad no se conmueve en lo más mínimo por el hecho y en que la circunstancia de alejar al damnificado del procedimiento penal, solo ha servido para que ni siquiera pudiese reclamar la indemnización civil, puesto que el abandono de la acción pública por un fiscal negligente o inepto ha conducido a una absolución injusta e indebida que le ha hecho perder todos sus derechos. Es innegable el derecho que le asiste para intervenir en el proceso penal en una forma directa y personal, puesto que conociendo los pormenores del hecho, se halla en condiciones inmejorables para orientar la investigación y secundar eficazmente a la justicia. La parte querellante puede ir enconada al juicio y en ello no debemos ver nada raro, puesto que es la que ha soportado la lesión a su persona o a sus derechos. Para corregir sus demasías están los poderes disciplinarios del Juez o Tribunal. Pero no cabe duda de que jamás podrá ser sustituida con ventaja por el fiscal, por muy diligente que este sea en el cumplimiento de sus deberes.

El Dr. Obarrio dice en su nota de presentación del proyecto de 1888: "No es posible, en mi concepto, desconocer en la persona damnificada el derecho de velar por el castigo del culpable, y tanto más cuanto que el resultado del jui-

cio criminal tiene una influencia decisiva respecto de las acciones civiles que nacen del delito”.

15. *Derechos que le corresponden.* — En esta inteligencia, nosotros le reconocemos el derecho de colocarse al lado del fiscal, en las causas de acción pública, para que lo secunde y le proporcione los medios de llegar al conocimiento de la verdad. Y así: puede ofrecer todas las medidas de prueba que considere necesarias para la mejor defensa de sus derechos (art. 34); el Juez debe ordenar que ellas se realicen (art. 95 y 96) y solo puede denegarlas en auto fundado cuando fueran manifiestamente inconducentes a la averiguación de los hechos, siendo dicho auto, apelable (art. 96).

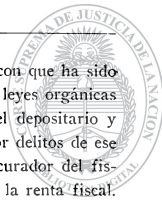
16. *El particular damnificado.* — Y cuando el damnificado no quiera asumir el rol de querellante o cuando otro de los que tienen derecho se hubiera presentado como tal, entonces podrá hacerse parte como promotor de la acción civil al solo objeto de reclamar la devolución de la cosa o la indemnización correspondiente. El objeto es que siempre tenga participación en el juicio penal el que tiene un derecho legítimo que defender, a fin de que pueda vigilar de cerca el desenvolvimiento de aquel y ofrecer los medios de prueba destinados a dejar a salvo sus intereses lesionados con el hecho.

#### EL FISCAL

17. *Carácter.* — Nosotros entendemos que el fiscal es un funcionario judicial que debe hallarse investido de los mismos privilegios que los jueces para que pueda actuar con independencia de criterio y responda a los fines de su designación. En nuestro país existe una verdadera confusión

sobre el particular, debido a la deficiencia con que ha sido tratado y resuelto el problema por nuestras leyes orgánicas y de procedimiento. El fiscal no solo es el depositario y agente de la acción pública en las causas por delitos de ese carácter, sino que también actúa como procurador del fisco para perseguir judicialmente el cobro de la renta fiscal. En el primer caso se dice que es un funcionario judicial y en el segundo un funcionario administrativo; pero como carece de inamovilidad y su empleo depende de la confianza o de la amistad que lo ligue al Presidente de la Nación, que lo nombra y remueve por su sola voluntad, es imposible que pueda actuar con la independencia y la eficacia que el cargo exige.

18. *Funciones.* — Nosotros tenemos un concepto diferente sobre este aspecto del problema de la justicia. Creemos que el fiscal es un funcionario exclusivamente judicial, rodeado de las garantías necesarias para que obre con la libertad compatible con su función; es el representante de la acción pública y no el representante del fisco; debe perseguir el esclarecimiento de los delitos para que se aplique la pena que corresponda al que resulte autor o responsable, sea el Presidente de la República o el más humilde ciudadano, pero nada tiene que hacer con el cobro de la renta fiscal, a menos que se trate del delito de defraudación de dicha renta. En resumidas cuentas: una cosa es el fiscal como agente o representante de la acción pública y como funcionario judicial inamovible, y otra cosa es el “procurador fiscal” como agente o representante del fisco para la percepción judicial de su renta y como funcionario administrativo removible por la sola voluntad de su poderdante. Esto es todo. Dentro del proceso penal, el fiscal obra como representante de la



sociedad para obtener la condena del que ha infringido las leyes que la gobiernan, mientras que el procurador del fisco nada tiene que hacer en ese carácter, y su intervención sólo se concibe cuando se aplica alguna multa a las partes o letrados, con el fin de perseguir su cobro.

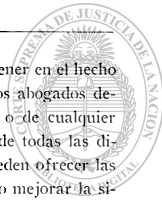
La Ley Orgánica que proyectamos hace la distinción en debida forma y termina definitivamente con esta grave confusión en que han incurrido las leyes que nos rigen actualmente.

19. *Obligaciones.* De este modo, en su carácter de representante de la acción pública, obra por decisión propia y es parte esencial en todo proceso por delitos que den lugar a aquella acción (art. 30), y cuando no se presente nadie como querellante o como promotor de la acción civil, está facultado para pedir al Juez o Tribunal que en la sentencia se establezca la obligación de reparar el daño moral y material ocasionado.

## LA DEFENSA

20. *Régimen actual.* Si existe algo denigrante para los abogados es la organización actual de la defensa. Condenados a ser menos espectadores de un proceso secreto, los defensores que no cuentan con amigos dentro del juzgado donde tramita la causa, no saben en qué forma deben encarar el ejercicio de su ministerio porque no saben cuáles son las pruebas que se buscan para envolver a su defendido o para demostrar su inocencia. Si les ha tocado la suerte de intervenir desde la indagatoria, más o menos podrán dirigirse o encauzarse; pero si les toca hacerse cargo de la defensa en una etapa posterior, ha de serles muy difícil sacar a flote a su cliente en los casos en que existe alguna duda so-





bre el grado de participación que ha podido tener en el hecho que se investiga. Pero ocurre que cuando los abogados defensores son amigos del Juez o Secretario o de cualquier empleado de Secretaría, se hallan al tanto de todas las diligencias que se realizan en el sumario y pueden ofrecer las pruebas de descargo necesarias para salvar o mejorar la situación del defendido.

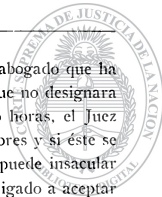
Esta situación es injusta y se presta a abusos incalificables. Hay estudios que sacan asuntos importantes de otros estudios bajo la promesa, que se cumple, de obtener una solución favorable en un período de tiempo relativamente breve. Hay corredores de esta clase de asuntos que van a los estudios a proponer arreglos, sin ocultar que su influencia es decisiva en tal o cual juzgado. Hay gente extraña a la función judicial que medra con el régimen en vigor a costa de los procesados que siempre tienen apuro para recobrar su libertad, máxime cuando son inocentes. Y esto no puede seguir tolerándose. Es necesario cortarlo de raíz. A la sombra del procedimiento escrito y secreto, prosperan infinidad de individuos de toda categoría, que negocian la libertad de los procesados contando con el sistema en vigor que permite el completo sigilo y disimulo de sus actividades.

21. *Carácter del defensor.* Para lograr este propósito hemos dado al defensor todas las facultades que la lógica y la prudencia aconsejan y lo hemos convertido de mero espectador en un agente activo que puede trabajar honesta y desenvueltamente en favor de su defendido. Tal es el sentido de las disposiciones que contienen los artículos 39 a 50 del presente proyecto. El no sólo puede presenciar la declaración indagatoria del procesado, sino también la de los testigos; puede ofrecer la prueba de descargo que crea con-

veniente y el juez debe mandarla practicar cuando tenga relación con la causa; puede interrogar a las partes y a los testigos de cargo y descargo delante del juez; puede impedir que se continúe un interrogatorio cuando notare signos de cansancio en el interrogado que ha estado sometido a un largo número de preguntas; y, por último, es obligación suya impedir que se amenace, fuerce o coaccione al imputado o testigo para que confiese o declare (art. 48).

Estamos completamente desilusionados del régimen en vigor y aspiramos a barrer de la administración de justicia las diversas manifestaciones de la clandestinidad y de la impudicia que se desenvuelven con desenfado dentro del hermetismo y el secreto de los procedimientos penales de la actualidad. ¡Luz, mucha luz, es lo que pedimos, para que desaparezcan esas aberraciones del sistema republicano de gobierno que existen en la administración de justicia! Nada de secretos que favorecen la intervención de agentes extraños en los procesos penales y que permiten obtener por medios ilegales y vedados lo que un defensor honesto y leal no puede conseguir pidiendo el cumplimiento de la ley en ejercicio de su función! ¡Publicidad, publicidad, publicidad! Debe ser la voz de la hora para que la ley se cumpla parejamente. La publicidad sólo debe omitirse cuando por la naturaleza del hecho ella sea perjudicial a las buenas costumbres o pueda comprometer el orden público. En los casos comunes la publicidad debe ser la regla.

22. *Nombramiento y remoción del defensor.* Hemos mejorado notablemente las condiciones en que un defensor puede hacerse cargo de su función, autorizando al imputado a que lo nombre desde el instante mismo de la detención y obligando a los funcionarios bajo cuya custodia se encuen-



tra a que permitan su comunicación con el abogado que ha de asumir aquel carácter. Para el caso de que no designara abogado alguno en el plazo de veinticuatro horas, el Juez puede designar de oficio al Defensor de Pobres y si éste se hallare impedido o fuera recusado, el Juez puede insacular a un abogado de la matrícula, que estará obligado a aceptar la defensa, salvo en los casos que la ley prevé (arts. 40 y 42).

El objeto es que el imputado se halle asistido de defensor desde el instante mismo de su detención, cuando ello fuera posible (Art. 40), para que la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos que contiene el artículo 18 de la Constitución no sea una afirmación teórica, como ocurre actualmente, sino una realidad práctica.

#### EL SECRETO PROFESIONAL

23. *Revelaciones del cliente.* Es una norma universal de procedimiento no obligar a que declare sobre un delito o lo denuncie a la autoridad aquel que ha tenido conocimiento del mismo por revelaciones que se le han hecho en el ejercicio de su profesión. Este principio lo hemos aclarado de manera que no se preste a dudas como ocurre actualmente con la disposición similar del Código en vigor. Las revelaciones del cliente hechas bajo la fe del secreto profesional o presumiéndose que quedan bajo el amparo de ese secreto, no deben hacerse conocer de las autoridades, aun cuando ellas constituyan un delito (art. 63). Es una de las consecuencias de la garantía constitucional de que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. En efecto: el que confía en el secreto profesional y hace una revelación que

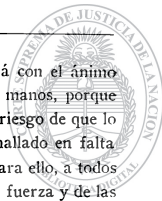
luego es denunciada a la autoridad, aparece engañado por la ley para declarar contra sí mismo, lo que se halla en contra del principio constitucional antes mencionado. Al comentar el art. 63 volveremos con más detalles sobre el particular.

24. *Revelaciones fuera del ejercicio de la profesión.*

Pero el conocimiento del delito que adquiriera un profesional fuera del ejercicio de su profesión, no está comprendido en la disposición y no debe ocultarlo. Su obligación es hacer la denuncia.

#### LAS AUTORIDADES POLICIALES EN LA INSTRUCCION

25. *Régimen en vigor.* El Código vigente asigna una intervención preponderante a la policía en la instrucción de los sumarios, y tan preponderante, que podríamos afirmar que le ha entregado exclusivamente a ella los medios de asegurar la reunión de los elementos de prueba que debe contener todo proceso. De esta manera, el Juez instructor es un mero espectador de las actividades que con su expresa o tácita aprobación realiza aquélla. Nosotros tenemos un concepto diferente de este problema. Entendemos que la policía debe ser, en el período de instrucción, un simple órgano ejecutor de lo que el Juez entienda que debe hacerse para llegar al éxito de la investigación, y que, en este orden de ideas, no puede ni debe asignarse a los funcionarios policiales la facultad de interrogar a los imputados o a los testigos. La razón es muy sencilla. La policía, por la naturaleza de sus funciones, está en lucha permanente con los delinquentes profesionales, que no sólo atacan los derechos y la persona misma de los particulares, sino que, desafiando su vida, hacen lo propio con los agentes de seguridad. Lógico



resulta pensar que un agente de policía está con el ánimo predispuesto contra todo el que cae en sus manos, porque teme que si no es enérgico y severo, corre el riesgo de que lo sean con él. Además, como todo individuo hallado en falta trata de eludir su responsabilidad, y apela, para ello, a todos los medios a su alcance, inclusive el uso de la fuerza y de las armas, el agente se acostumbra a proceder violentamente contra él y a castigarlo para que confiese por escrito lo que a ambos les consta que es exacto. De ahí el natural despotismo del agente de policía. De ahí el uso del látigo, la piñeta, la goma, el insomnio, para obtener la confesión escrita que evite más molestias en la investigación. Pero de ahí, también, la necesidad de separar a ese agente del resto de la instrucción, porque ocurre a menudo que el mismo sistema empleado con el delincuente profesional lo emplea con el ocasional y con el inocente. En virtud de la forma en que se ve obligado a desempeñar su función resulta un agente u órgano despótico de investigación que no debe seguir interviniendo en el proceso si se desea el respeto y cumplimiento efectivo de la garantía constitucional de que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Si organizamos una justicia de instrucción con funcionarios que consideramos competentes, no hay razón alguna para delegar en otros que no lo son, facultades que deben ser ejercidas por los primeros.

26. *Prohibiciones.* Por eso hemos establecido que las autoridades policiales no pueden recibir la declaración indagatoria del imputado ni exigir que declaren los testigos: sus funciones quedan limitadas a asegurar a los imputados y a tomar nota de los nombres, domicilios y demás circunstancias personales de los testigos, para ponerlas en conoci-

miento del Juez (art. 80), sin perjuicio de las amplias atribuciones que se les confiere en la prevención (art. 79).

Pero como estamos acostumbrados a que el desprecio por la ley parta precisamente de los encargados de cumplirla, a renglón seguido (art. 81) hemos establecido que será nula y de ningún valor toda declaración indagatoria o de testigos tomada por empleados o funcionarios de la policía, y estos castigados con suspensión de treinta días a la primera infracción y con destitución en caso de reincidencia, sin perjuicio de lo que sobre el particular establezca el Código Penal.

27. *Objeto de las limitaciones.* El propósito que se persigue es hacer del Juez de instrucción el órgano directo y efectivo de la investigación, suprimiendo de ésta el aspecto terrible y penoso de las palizas, justas o injustas, que los agentes de policía aplican a los imputados culpables o inocentes para asegurar el éxito de aquélla sin trabajo y sin inteligencia. Quitando a la policía el derecho que tiene actualmente de interrogar a imputados y testigos y de lograr confesiones mediante el empleo de tormentos morales y materiales, se verá obligada a seleccionar su personal para que no fracase en cada investigación. Esa selección será provechosa para ella y para la sociedad. Quizás con el andar del tiempo se borre el horror que el habitante tiene por el agente de seguridad, cuando vea que éste es un hombre honesto, pacífico, servicial, atento y respetuoso, que pertenece a una repartición donde se investiga con inteligencia y se procede con imparcialidad en la prevención y represión de los delitos.



## PUBLICIDAD DEL SUMARIO

28. *Régimen actual. Crítica.* El Dr. Rodolfo Rivarola expuso con mano maestra en su obra "La Justicia en lo Criminal", las consecuencias del sistema del sumario secreto que se halla en vigor, y otro tanto hizo la Asociación Pro Juicio Oral en su famoso memorial al Senado de la Nación, publicado en el diario de sesiones del 24 de Setiembre de 1932.. No queremos insistir en el anatema con que ha sido condenado el régimen actual. Sólo diremos que todo el bochorno que experimentamos los argentinos cuando se habla de la administración de justicia, toma origen en el procedimiento secreto de la actualidad, sin garantías para la defensa ni la acusación y supeditado a la buena o mala voluntad de un funcionario con facultades dictatoriales al que por error se le ha llamado Juez de Instrucción.

29. *Transformación del régimen en vigor.* Pensamos que no debe perdurar un día más ese sistema nefasto. Al secreto mentido del sumario, de cuyo contenido se entera el periodismo y los amigos del Juez o Secretario, pero no las partes que carecen de padrinos, debe sustituirlo la publicidad del mismo para las partes y sus abogados. A las facultades omnímodas del juez instructor para aceptar o rechazar sin apelación las pruebas de cargo o de descargo ofrecidas por las partes, deben seguir las facultades moderadas en virtud de las cuales está obligado a realizar las diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos, siendo apelable el auto que no haga lugar a una medida de prueba.

30. *Precedentes extranjeros y nacionales.* Todos los países que siguen el sistema procesal denominado "acusatorio" han proscripto el secreto del sumario. No han en-

contrado razón alguna para mantenerlo como no fuera la expuesta por los funcionarios incompetentes o ineptos de la policía y de la justicia. La práctica ha demostrado la absoluta falta de lógica y de fundamento de las prevenciones de dichos funcionarios contra la publicidad del proceso. Cuando Francia dictó su famosa ley del 8 de Diciembre de 1897, se alzaron airadas voces en la prefectura de policía y en la administración de justicia, augurando una era nefasta para la república. Los hechos desvirtuaron el anuncio de los agoreros. Nada de lo que ellos afirmaron ocurrió. Pero en cambio, las garantías individuales encontraron un sólido apoyo contra los abusos de autoridad de los funcionarios públicos. Quedó probado que estos sólo querían mantener el sistema secreto para proceder libremente cuando desearan amordazar a los ciudadanos. Ese era el quid de la cuestión. Pero los franceses, defensores celosos de su libertad y de su integridad personal, desconfiaron enseguida de las afirmaciones policiales y aprobaron la ley por gran mayoría. Sólo nosotros permanecemos estancados y entregados de pies y manos a la buena o mala voluntad de individuos que en muy pocos casos reúnen las condiciones necesarias para ser depositarios imparciales de tan amplios poderes sobre las personas.

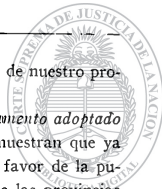
Pero la reacción ha comenzado, esta vez en las provincias. En el número 1 de esta exposición hemos visto cuáles son las que han incorporado el principio de la publicidad de todas las actuaciones judiciales en las respectivas constituciones.

El Doctor Adolfo A. Vicchi, joven y talentoso diputado por la provincia de Mendoza, presentó en las sesiones de 1934, un proyecto de ley sobre publicidad del sumario



que coincidía en sus términos con el art. 97 de nuestro proyecto.

31. *La Nación debe aceptar el temperamento adoptado por las provincias.* Estos antecedentes demuestran que ya se ha formado una conciencia colectiva en favor de la publicidad del sumario y que si la mayoría de las provincias lo ha establecido en sus estatutos políticos, no comprendemos por qué la Nación ha de conservar el sistema inquisitivo colonial cuando debe aplicarlo en gran número de procesos que se sustancian precisamente en las provincias que lo han abolido en el procedimiento ordinario. El contrasentido salta a la vista. En la provincia de Mendoza, pongamos por ejemplo, todos los procesos ordinarios ante la justicia local son públicos, mientras que los del fuero federal son secretos. Otro tanto ocurre en Santa Fé, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, con la sola diferencia, en esta última provincia, de que el juez puede decretar el secreto del sumario en las causas graves (art. 444 Código de Procedimiento Penal), disposición abolida por la nueva constitución que consagra la publicidad. No vemos por qué ha de existir esta dualidad de criterio para apreciar un mismo problema, sobre todo cuando se ha demostrado que gana infinitamente en celeridad, eficacia y dignidad una justicia administrada a puertas abiertas y no la que se desarrolla en el hermético secreto que autoriza el vetusto código de 1889.

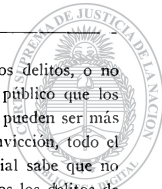


## DECLARACION INDAGATORIA

32. *Sistema actual. Crítica.* La institución de la indagatoria es una de las peor organizadas dentro del Código actual. Es aquí donde se prueba que el legislador no quiso hacer del procedimiento penal un medio de averiguar la verdad para poner a salvo a los acusados inocentes, sino que entendió que todo aquel que podía caer bajo la sospecha de culpabilidad, a juicio de la policía o de los jueces, debía ser tratado como culpable, mientras no demostrara o se demostrara su inocencia. En efecto: sin más que la mera sospecha de un funcionario policial o del juez instructor, un ciudadano puede ser sometido a proceso e indagado como autor o responsable de un delito, sin que tenga tiempo de avisar a su abogado o a sus familiares de lo que se trama contra él, y aun en el caso de que por casualidad su abogado haya tenido tiempo de concurrir a la audiencia, nada puede hacer para evitar la presión moral o material que se haga sobre el imputado con el fin de obligarlo a que declare.

33. *Importancia de la indagatoria.* No dejamos de comprender la importancia que tiene la indagatoria para llegar al conocimiento de la verdad y la necesidad de recurrir a preguntas de todo calibre para obtener la confesión del hecho cuando se tiene la absoluta certeza de que el indagado es el autor o cómplice en el mismo. Pero lo que nos parece una verdadera monstruosidad, es aplicar sistemáticamente el procedimiento inquisitorial, aun cuando se trate de personas inocentes, a fin de ver si saben algo del asunto. De aquí las tan frecuentes retractaciones hechas ante los jueces, de las declaraciones prestadas ante la policía. El público sabe que cuando una persona es detenida por aquella,





saldrá confesándose autora de uno o varios delitos, o no saldrá de la repartición. También sabe el público que los medios usados para obtener la confesión no pueden ser más dolorosos e irritantes. Entonces, en esa convicción, todo el que cae en ojeriza de un funcionario policial sabe que no debe oponerse a firmar la confesión de todos los delitos de que se lo considera y declara autor en el acta que le ponen por delante para que suscriba, si desea librarse de las torturas físicas o morales a que es sometido aquel que osa afirmar su inocencia.

34. *La indagatoria sólo debe tomarla el Juez.* Todo esto ocurre porque se permite y tolera la recepción de la indagatoria por funcionarios que no están capacitados intelectual o moralmente para recibirla y que obran en todos los casos con un criterio simétrico para culpables e inocentes. Nosotros hemos abolido la intervención policial en la recepción de cualquier clase de declaración, sea ella indagatoria o testimonial, porque entendemos que es la parte más delicada e importante de la instrucción y que, en tal caso, debe ser siempre el Juez el que la reciba. El obra en virtud de un mandato de la ley, con la capacidad que se presume en todo hombre que ha rendido pruebas de suficiencia en una Universidad y con el espíritu de justicia que debe existir en un funcionario inamovible al cual la sociedad le ha encomendado la tarea de reunir las pruebas para la condena de los culpables y la absolución de los inocentes. No tiene, entonces, motivo para ser parcial ni perverso ni déspota. Así lo entendemos. Los casos aislados que se presenten en donde se pongan de manifiesto esas tendencias espirituales del Juez, serán reprimidos por el Tribunal de Responsabilidades y las cosas volverán a su quicio normal. Si la policía,

por la índole de sus funciones, por la clase de personas que la desempeñan y por el contacto diario que tiene con delinquentes de toda calaña, procede en muchos casos arbitraria y despóticamente, no ocurre pensar lo propio del Juez instructor, que es un abogado, con un concepto diferente del sentido de la prevención y represión de los delitos y que ha sido designado no para que haga o encuentre culpables en todos los acusados, sino para que busque imparcialmente las pruebas de la culpabilidad o de la inocencia. Por eso le exigimos e imponemos una intervención directa, personal y exclusiva en la indagatoria.

### LA INCOMUNICACION

35. El aislamiento de una persona imputada de un delito grave, jamás de un delito menor, no debe ir más allá de lo estrictamente necesario para que la autoridad tenga tiempo de reunir los elementos de juicio que se precisan para comprobar el grado de participación o responsabilidad que le incumbe en el hecho que se investiga. Nosotros reaccionamos contra la mala práctica de la incomunicación prolongada por simple comodidad de los funcionarios instructores y establecemos que ella no debe exceder de cinco días, ni podrá decretarse contra persona alguna a quien se impute la comisión de un delito cuya pena máxima no exceda de cuatro años de prisión o reclusión (art. 158). Además, siguiendo el ejemplo de la legislación inglesa y de la ley francesa del 8 de Diciembre de 1897, hemos resuelto que la incomunicación jamás regirá para el abogado defensor (art. 49).



## LOS PERITOS

36. *Régimen actual. Crítica.* La designación de peritos y la forma de desempeñar sus funciones, adolece de graves deficiencias en la actualidad. Urge corregirlas para evitar los abusos que se cometen a diario al amparo de una legislación inadecuada y del hermetismo en que se desenvuelven las actividades judiciales. Existe una categoría de peritos “oficiales” que gana sueldo y que no tiene empacho de ir a los estudios a ofrecer su dictamen por un precio determinado. Hay que terminar con esta causa de inmoralidad.

37. *Registro de peritos. Sanciones.* Ningún perito debe ganar sueldo, salvo el médico o los médicos de los Tribunales. Los calígrafos, los contadores, los ingenieros, los constructores, los peritos balísticos, etc., deben inscribirse en un Registro especial, para que su intervención como tales en los juicios se produzca por insaculación hecha delante de las partes. De ese modo se evitarán las designaciones maliciosas de gente sin competencia pero con grandes apetitos que se dedican a “rematar” entre las partes las conclusiones de sus informes. La forma del nombramiento no impediría que los inscriptos en el Registro fueran a ofrecer sus dictámenes al mejor postor, pero creemos haber encontrado el medio de evitarlo con las disposiciones que tiene el artículo 312 del Código que dicen así: “Los que actúen como peritos en virtud de una orden judicial, tendrán derecho a cobrar honorarios al final de su trabajo, si no tuviesen sueldo o retribución del Estado o de las Municipalidades, pero en ningún caso, podrán convenir o fijar su monto o solicitar su pago previo a alguna de las partes para expe-

dirse, bajo pena de perder el empleo o de ser eliminados del Registro si estuvieran inscriptos, y de una multa de quinientos pesos y pérdida del honorario que hubiera podido corresponderles, estuvieren o no inscriptos. El honorario de los peritos será regulado al final de su labor y estará a cargo de la parte vencida. Si ésta resultare insolvente, el Fisco les indemnizará con una suma no mayor de doscientos pesos que fijará el Juez o Tribunal que los designó”.

#### LA LIBERTAD PROVISORIA

38. *Régimen actual. Crítica.* El artículo 376 del Código actual dispone que cuando el hecho que motiva la prisión del procesado sólo tenga pena pecuniaria o corporal cuyo máximo no exceda de dos años de prisión, podrá decretarse su libertad provisoria. Siguiendo el ejemplo de legislaciones más liberales, la ley 11.177 amplió los términos del art. 376 y estableció que ese beneficio podría acordarse cuando la pena máxima no excediera de cuatro años de prisión o reclusión. Pero ocurre que una persona que defrauda treinta centavos — caso muy común entre los contadores o cajeros de las casas de comercio — no puede gozar de los beneficios de la libertad provisoria mientras no se sustancia el proceso. Este dura generalmente uno o dos años y a pesar de que por los antecedentes del hecho y los personales del imputado es seguro que le correspondería la condena condicional a un mes de prisión — el mínimo de la pena — debe permanecer varios meses privado de su libertad porque el Código no permite su salida provisoria en virtud de que el máximo de la pena excede de cuatro años.

39. *Sistema que aconsejamos.* Entendemos que hay en ello una evidente injusticia que no debe seguir consumán-

dose. Por eso, y siguiendo el temperamento aconsejado por Moreno y Gómez en su proyecto para la provincia de Buenos Aires, hemos ampliado el término para gozar de la franquicia de la libertad provisoria y hemos establecido que ella se concederá, "bajo caución juratoria", al imputado de un delito reprimido con pena de prisión que en su máximo no exceda de cuatro años (art. 338) y "bajo fianza", cuando la pena no exceda de cuatro años de reclusión o seis de prisión (art. 344).

#### DURACION DEL SUMARIO

40. *Régimen actual. Crítica.* El artículo 442 del Código vigente dice que el sumario no deberá durar más de treinta días en la capital y sesenta en las demás secciones, y el artículo 206 establece que cuando al mes de iniciado un sumario no se hubiera terminado, el Juez que lo instruya deberá informar al tribunal superior respectivo de las causas que hayan impedido su conclusión, informe que reproducirá cada ocho días después de vencido aquel término.

En la práctica esta franquicia importa la eternización de los sumarios, aun de aquellos relacionados con asuntos de cuantía menor o con hechos sin importancia que pueden finiquitarse en una semana. Los jueces no se ocupan de su cargo y distraen sus obligaciones dedicándose a otras actividades que les restan el tiempo necesario para proceder con rapidez en la sustanciación de los procesos.

41. *Sistema que aconsejamos.* Nosotros ponemos término a este desbarajuste y a esta insuficiente atención del cargo. No permitimos que un juez desempeñe ninguna otra función o actividad (ver Ley Orgánica) y lo emplazamos

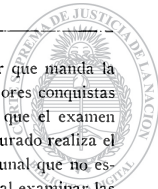
a que termine el sumario en treinta días (art. 250), facultando a la Cámara respectiva para acordar un plazo extraordinario y máximo de veinte días más (art. 252) cuando fuera solicitado expresamente por el Juez con no menos de cinco días de anticipación a la expiración del término de treinta días. Vencido este plazo, el sumario debe ser elevado a dicho Tribunal para que se pronuncie sobre su mérito.

#### EXAMEN DEL SUMARIO

42. *Instrucción suplementaria.* Elevado el expediente a la Cámara, con todas las piezas de convicción, esta acuerda un breve plazo a las partes para que propongan los actos de instrucción suplementaria que consideren oportunos (art. 382), cuando ellos no se hubieran realizado durante el sumario, los que deberán practicarse en un término que no exceda de ocho días. Practicados esos actos o vencido el plazo acordado sin proponerlos, la Cámara convoca a una audiencia a realizarse dentro de los diez días para que las partes informen oralmente acerca del mérito de la instrucción. Damos cabida así, al Tribunal a que nos referimos en el Capítulo II, letra h), punto 2° de la conferencia pronunciada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, el 25 de Junio de 1935, al cual le encomendamos la delicada e importante función de pronunciarse sobre el mérito del sumario, con el fin de sustraerla al Juez Instructor que actualmente la desempeña.

43. *Objeto del pronunciamiento de la Cámara.* No escapará al criterio del observador el propósito que perseguimos con la facultad acordada a la Cámara a expensas de la que hoy ejercen los jueces de instrucción. No habiéndose





organizado entre nosotros el jurado popular que manda la Constitución, pero deseando adoptar las mejores conquistas del procedimiento acusatorio, hemos creído que el examen previo de la acusación que en los países con jurado realiza el Gran Jurado debía estar a cargo de un tribunal que no estuviera predispuesto en contra del imputado al examinar las pruebas del sumario como ocurre en la actualidad con los jueces de instrucción. Por eso le hemos encomendado esta función —que calificamos como delicada e importante— a la Cámara compuesta de tres miembros y hemos dejado al Juez de Instrucción con las facultades y las obligaciones que la sana lógica aconseja, es decir, con las necesarias para reunir las pruebas destinadas a demostrar la culpabilidad o la inocencia del imputado “a juicio de la Cámara” y no “a juicio suyo”.

Nuestra finalidad ha sido concluir con la dictadura de ese pequeño tiranuelo que ha creado la legislación de 1889 al asignar al Juez instructor la facultad de reunir las pruebas contra los acusados y pronunciarse luego sobre su mérito, y ya que no tenemos el Gran Jurado para que lo haga, encomendamos esa tarea a tres jueces que prima-facie no tienen motivo alguno para estar prevenidos contra la persona que aparece acusada.

Con el sumario público restablecemos el equilibrio entre las partes; con el examen del sumario por la Cámara dignificamos la justicia evitando la entronización de un funcionario que tiene más poderes que un Czar. Así entendemos la República.

4. *Consecuencias del pronunciamiento de la Cámara.*  
La Cámara sólo puede resolver que hay causa para someter al imputado a acusación o que no hay. En el primer caso,

dicta el auto de prisión preventiva, y en el segundo declara definitivamente terminado el proceso para el imputado respecto del cual se pronuncia. No existiendo sobreesamiento provisional, ni simple absolución de la instancia, la resolución importa resolver en definitiva el proceso con respecto al acusado, el que no podrá ser procesado de nuevo por el mismo hecho (art. 6).

## LA OPCION ENTRE EL JURADO Y LA CAMARA

45. Si la Cámara hace lugar a la acusación, cualquiera de las partes puede optar, dentro de las veinticuatro horas, entre ella y el Jurado para que se pronuncie en juicio público sobre el fondo de aquélla, es decir, para que declare si el acusado es o no "culpable" del hecho que se le imputa. Esta opción la hemos establecido con el fin de ir preparando el advenimiento definitivo del jurado que preconiza la Constitución y para llevar a la práctica, por otra parte, una de las bases del enjuiciamiento criminal aprobadas en 1934 por la Comisión especial de Código de la Cámara de Diputados de la Nación que presidía el Dr. Vicente Solano Lima.

46. Este propósito quedaría sin realizarse si no elaborásemos la Ley Orgánica del Jurado. Confiamos en poder cumplirlo a plazo breve y en esa oportunidad demostraremos hasta la evidencia el error científico en que incurren los que se oponen a su implantación en el país. Algo de ese error ha quedado de manifiesto en la conferencia que se publica junto con los antecedentes de este Código, pero abrigamos la esperanza de que al abordar el problema en su conjunto, las dudas y los temores se desvanecerán.



## LOS DEBATES

47. *Publicidad. Interrogatorio libre.* — Entendemos que todo debate debe ser público, excepto cuando la publicidad pueda perjudicar a la moral y las buenas costumbres o afectar el orden público. El interrogatorio es y debe ser libre, en el sentido de que las partes no deben ser obstaculizadas en forma alguna para que formulen por sí mismas las preguntas y contribuyan al esclarecimiento de los hechos. Ellas están mucho más capacitadas que los jueces para interrogar, por el conocimiento personal y exclusivo que tienen de aquellos. En cambio, los funcionarios, atareados siempre por la multiplicidad de los casos que deben resolver, no tienen el tiempo ni el interés necesario para conocer a fondo cada proceso. De ahí que cuando se deja librado a su sola iniciativa el interrogatorio de partes y testigos, solo por excepción logran llegar al total esclarecimiento de los sucesos. La colaboración personal y directa de las partes y abogados resulta indispensable y por ello hemos tratado de asegurarla de modo que en ningún momento y por ninguna razón pueda ser entorpecida o dificultada.

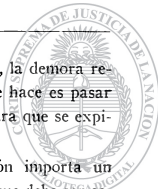
48. *Las libres convicciones.* — Realizados los debates con las debidas garantías de igualdad para las partes, toca a la Cámara o al Jurado, en su caso, pronunciarse sobre los hechos. Hemos incorporado el procedimiento del análisis de las pruebas de acuerdo al principio de las libres convicciones, tanto por la Cámara cuando actúa como juez de los hechos y del derecho, como por el Jurado en su papel exclusivo de juez de los hechos. Seguimos así, aplicando el aludido principio incorporado a las leyes de procedimiento de Buenos Ai-

res, Mendoza, San Luis y San Juan, y dejamos la puerta abierta para hacer lo propio cuando se organice el jurado.

49. *El veredicto y la sentencia.*— El proyecto de Moreno y Gómez es tan completo en esta parte, que no hemos tenido necesidad de hacer otra cosa que ligeros retoques en su redacción. El veredicto debe ser hecho conocer el mismo día de la audiencia final, al concluir las deliberaciones del Tribunal, y él consignará tan solo la declaración de culpabilidad o de inocencia del imputado. La sentencia definitiva, con sus fundamentos, debe ser hecha conocer a las partes dentro de los tres días de la lectura del veredicto.

#### HABEAS-CORPUS

50. *Régimen actual. Crítica.*— Otra de las instituciones más importantes del sistema republicano de gobierno y de todo país libre que ha sido organizada deficientemente es el recurso de habeas-corpus. En vez de ser una garantía de la libertad individual y de la integridad física, es una farsa legalizada. Cuando se recurre a los tribunales en demanda de amparo a la libertad, han de pasar varios días antes que aquellos se muevan y dicten las providencias que la lógica y el buen sentido aconsejan en tales casos. No habiendo una forma expeditiva para corregir disciplinariamente o castigar con severidad a los funcionarios negligentes, los recursos de habeas-corpus siguen el curso ordinario de los demás juicios. Ningún juez se toma la molestia de activar el procedimiento para la sustanciación y el pedido de informes o las demás diligencias que debieran practicarse con toda urgencia, se despachan junto con el montón de expedientes del día. Rara vez el magistrado se interesa por el asunto y



cuando este corresponde a la justicia federal, la demora resulta desesperante, porque lo primero que se hace es pasar el escrito a dictamen del procurador fiscal para que se expida sobre el fuero.

51. *Reforma necesaria.*— Esta situación importa un agravio a la República y a sus instituciones, que debe ser corregido de inmediato. Hemos terminado, en nuestro proyecto, con esa oficiosa y perjudicial intervención del Fiscal; hemos acortado todos los términos para el diligenciamiento del recurso y hemos establecido sanciones severas para los funcionarios que omitan cualquier medida o que dificulten la sustanciación o que se excedan de los plazos en que deben expedirse. La franquicia de que cualquier juez es competente para conocer del recurso evitará muchas dilaciones que perjudican a los ciudadanos, desnaturalizan la función judicial y desprestigian a la magistratura.

52. *Restricción individual y colectiva.*— Entendemos que tan restringida se halla la libertad de las personas, cuando éstas son privadas individualmente de ella como cuando lo son colectivamente. Es decir, en nuestro concepto, se halla restringida la libertad de las personas cuando a una de ellas se la priva de su libertad o de sus derechos arbitrariamente, o cuando a varias o a muchas se les prohíbe reunirse pacífica y públicamente. La restricción suele partir, muy a menudo, de las autoridades policiales o ejecutivas y excepcionalmente de los particulares o del Congreso, Legislaturas y Poder Judicial. Pero cada vez que se considere que la restricción es ilegal o arbitraria, hay derecho para interponer el recurso de habeas-corpus.

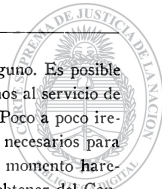
53. *Amparo al individuo y al partido político.*— El recurso ampara, en nuestro proyecto, tanto la libertad indivi-

dual como la libertad de reunión, por la analogía de las situaciones físicas. Tan restringida en su libertad puede hallarse una persona a la que se detiene o priva arbitrariamente de un derecho, como un grupo de ellas o un partido político al que se priva en la misma forma del derecho a reunirse pacífica y públicamente. Nosotros terminamos con la impunidad de las arbitrariedades y aseguramos el ejercicio de los derechos individuales y colectivos como corresponde a un país civilizado.

#### EL PROCEDIMIENTO CORRECCIONAL Y SOBRE FALTAS

54. *Régimen actual. Crítica.* — Pocos jueces —tres para atender dos millones y medio de habitantes—, procedimiento escrito, abarrotamiento de trabajo, etc., son las características del procedimiento correccional en vigor. Auxiliares o empleados inferiores de la policía y de la municipalidad, procedimiento escrito, abarrotamiento de expedientes en esta última repartición, ausencia de garantías para la defensa y resoluciones caprichosas, arbitrarias y contradictorias, son las características del procedimiento sobre faltas. Para el observador indiferente, este panorama ha de resultar exagerado. Sin embargo es copia de las conclusiones a que arriban los jueces correccionales y aquellas reparticiones en sus respectivas memorias periódicas. Es claro que nos referimos a la Capital Federal. En los territorios Nacionales, es mucho peor.

55. *Sistema a que aspiramos.* — Nosotros aspiramos a terminar con esta causa permanente de desprestigio del régimen republicano. Representamos a una generación que está dispuesta a realizar el ideal de los constituyentes y pa-



ra lograrlo no hemos de omitir esfuerzo alguno. Es posible que nuestra tarea no sea fácil, pero pondremos al servicio de ella nuestra pujanza y nuestra experiencia. Poco a poco iremos haciendo los proyectos de ley que sean necesarios para realizar aquel propósito y cuando llegue el momento haremos el movimiento de opinión destinado a obtener del Congreso su sanción. El pueblo necesita que haya justicia rápida, buena y barata. Ansía ver en los jueces a los funcionarios responsables, con suficiente capacidad e inteligencia para comprender su situación y sus anhelos. Esa ansiedad puede ser plenamente satisfecha si se organiza una justicia correccional y sobre faltas como la que proponemos en nuestro proyecto y cuyo funcionamiento integral reglamentamos debidamente en la Ley Orgánica de los Tribunales. Por ser la que está en contacto diario con la parte humilde y más numerosa de la sociedad, la justicia correccional y de faltas debe ser establecida y organizada de modo que las dilaciones sean casi imposibles y que los fallos se pronuncien de inmediato. Producido el hecho, especialmente en materia de faltas, la vista del proceso debe realizarse acto seguido o dentro de un plazo brevísimo. Una acusación por “ruidos molestos” o por “ebriedad” o por “escándalo en la vía pública”, etc., no debe “verse” ocho o diez días después, sino en el acto mismo. De lo contrario falla por su fase el objeto de la administración de la justicia correccional. Para ello es necesaria la existencia de jueces con turnos de día y de noche, de modo que un agente de seguridad pública que comprueba la infracción o un particular atormentado por los “ruidos molestos” pueda llevar su caso al juez de turno para que lo resuelve con la premura que exigen las circunstancias.

56. *Garantías para el infractor no reincidente.* — Tra-

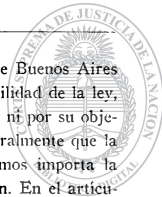
tándose de hechos que carecen de volumen delictual, no pueden serles aplicables a los delitos correccionales y faltas las instituciones de seguridad que condicionan la represión de los delitos de carácter criminal, y por ello se establece que la detención preventiva, el secreto de las actuaciones, la incomunicación del imputado, etc., no regirán jamás en la justicia correccional o de faltas, limitándose las facultades judiciales, con el fin de causar el menor perjuicio posible y solo permitiéndose que el acusado pueda ser detenido cuando no se hubiera presentado a una citación anterior o su captura estuviese recomendada por cualquier clase de falta o delito. La publicidad de los debates es de la esencia del procedimiento y ella sólo puede omitirse por alguna de las razones establecidas para las causas criminales. Los plazos se reducen al mínimo indispensable para que en casos excepcionales pueda prepararse y producirse la prueba.

En resumen: tratamos de que esta justicia de menor cuantía dé la impresión de que en nuestro país todos son iguales ante la ley y de que es exacto el principio democrático liberal de que "el derecho de cada uno termina donde comienza el de los demás".

#### RECURSO DE CASACION

57. *Objeto.* — Entre nosotros es casi desconocido este recurso. Los países más adelantados en materia de procedimiento lo han incorporado como una necesidad imperiosa derivada de las facultades concedidas a los tribunales de juicio y sentencia de resolver las cuestiones de hecho en instancia única. De ese modo han evitado la dictadura judicial y los errores irreparables en que estos últimos hubieran caí-



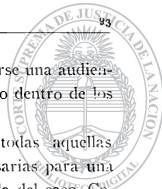


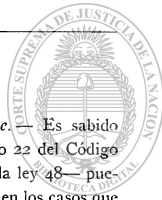
do a no mediar la casación. La provincia de Buenos Aires tiene un recurso parecido en el de inaplicabilidad de la ley, pero no es exactamente igual al de casación ni por su objeto ni por sus consecuencias o efectos. Naturalmente que la aceptación del temperamento que aconsejamos importa la creación simultánea de la Corte de Casación. En el artículo 641 hemos especificado los casos en que procede el recurso de acuerdo a los principios de la legislación vigente en los países que lo han reglamentado dentro de su territorio y sin ser casuistas extremados hemos comprendido en aquellos la totalidad de las situaciones que pueden ser objeto del recurso.

58. *Procedimiento para sustanciarlo.*— Habiéndose juzgado el caso en instancia única en cuanto a los hechos por el Juez Correccional o de faltas o la Cámara de Sección, el recurso se interpondrá por escrito ante el mismo Tribunal que conoció de la causa, y deberá fundarse, expresándose con toda claridad la ley, decreto, ordenanza o reglamento violado o falsa o erróneamente aplicado y las demás circunstancias que pueden autorizar la procedencia de aquel. El plazo para interponerlo es de diez días, por la naturaleza de las cuestiones que deben estudiarse al fundarlo, pero el que se proponga deducirlo debe manifestar su propósito en el acto de la notificación del auto o sentencia, o dentro de los tres días de producida. En su defecto el auto o la sentencia quedarán consentidos. (Art. 646). Examinado el recurso por el Juez o Cámara, y habiéndose cumplido los requisitos exigidos para que proceda, deberá ser elevado junto con todo lo actuado a la Corte de Casación dentro de las veinticuatro horas. Si fuera denegado, el recurrente puede ocurrir en queja a dicho Tribunal. A pedido del interesado y

para ampliar los fundamentos, puede realizarse una audiencia oral ante la Corte. Esta deberá resolverlo dentro de los diez días.

59. *Sanciones.* — Hemos introducido todas aquellas disposiciones que a nuestro juicio son necesarias para una sustanciación imparcial y una solución rápida del caso. Como siempre, no dejamos que el cumplimiento de los plazos quede supeditado a la “buena voluntad” o a la “indefinida responsabilidad” de los funcionarios. Inmediatamente de consignar el modo, forma y oportunidad de sustanciarlo y resolverlo, hemos establecido la pena en que incurrirá el Juez o Tribunal que no cumpliera con sus obligaciones sobre el particular. Y por si en alguno de los casos no lo hubiéramos hecho, la omisión ha quedado salvada al final, en una regla especial del Libro VI que trata de las disposiciones complementarias, al disponer que “toda infracción cometida por las partes, procuradores o abogados, o por los funcionarios o empleados judiciales en cuanto al modo, forma y oportunidad de realizar o cumplir alguna diligencia, o de dictar alguna providencia, auto o sentencia, que no tenga una pena especial impuesta por el presente Código o el Código Penal, será reprimida con multa de doscientos pesos ” (art. 697). De esta manera aseguramos el buen funcionamiento de la administración de justicia y nos acercamos al ideal de los constituyentes estampado en el preámbulo de la Carta Fundamental.





## RECURSO FEDERAL

60. *El recurso extraordinario vigente.* — Es sabido que por el recurso autorizado por el artículo 22 del Código en vigor —copia textual del artículo 14 de la ley 48— puede llegarse a la Corte Suprema de la Nación en los casos que el mismo determina. Pero dicho tribunal lo ha interpretado en forma tan restrictiva y ha exigido para su procedencia el cumplimiento de tal número de condiciones y requisitos que en la práctica no sirve absolutamente para nada. Lograr que la Corte conozca de un caso judicial en que se haya planteado una cuestión federal, es tarea ímproba y delicada, y solo satisfactoriamente vencida cuando aquel ha sido llevado desde primera instancia por un verdadero experto en la materia. El menor defecto de forma, la sola omisión circunstancial de no demostrarse la relación directa e inmediata que existe entre el derecho invocado y desconocido y la cláusula de la Constitución, tratado o ley fundamental del Congreso que lo ampara (art. 15 ley 48), ha permitido a la Corte desembarazarse de innúmeros casos en que la cuestión federal venía bien planteada desde el comienzo. Y no es esto lo que quiso el Congreso General Constituyente de 1853 ni los legisladores que sancionaron la ley 48 el 14 de Septiembre de 1863. Sin que la Constitución lo diga expresamente, la Corte Suprema es el intérprete máximo de sus cláusulas y por consiguiente no es posible permitir que por simples cuestiones de detalle queden sin amparo ni resguardo legal o jurídico derechos fundamentales de los habitantes.

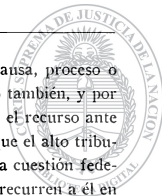
61. *El recurso federal.* — A ello tiende nuestro proyecto. Hemos simplificado y aclarado los preceptos del ar-

título 22 del Código vigente y del artículo 14 de la ley 48 (ver art. 671) y hemos establecido un verdadero recurso ante la Corte Federal, que sirva de sólido pedestal a los derechos de los habitantes. Le llamamos “recurso federal”, porque esta acepción es más propia que la de “recurso extraordinario”, si tenemos en cuenta su objeto, su naturaleza y sus efectos. Existiendo la Corte de Casación para resolver todas las apelaciones por cuestiones de derecho, a la Corte Suprema de la Nación solo llegarán las cuestiones federales, y originariamente no conocerá en otros asuntos que los especificados en el artículo 101 de la Constitución. Su labor se verá disminuída notablemente y de ese modo podrá dedicar todo su tiempo a revisar esa contradictoria jurisprudencia federal de los últimos años para llegar a ser ante la opinión del país y del mundo el alto tribunal de justicia que dedica no menos atención a una simple ordenanza violatoria de la Constitución que a una ley del Congreso, teniendo por meta cierta y exclusiva el respeto por los derechos fundamentales de los habitantes que consagró el estatuto político de 1853.

62. *El guardián de la Constitución.*— La Corte podrá revisar y someter al severo análisis constitucional toda sentencia, auto o resolución definitiva dictada en causa penal por un Juez o Tribunal o cualquiera otra autoridad nacional o provincial en los casos que el Código determina. Para que ella conozca del recurso federal bastará que el recurrente mencione la o las cláusulas de la Constitución nacional o de los tratados internacionales y demás leyes del Congreso que amparan su derecho y se dicen contrariadas, sin que le sea exigido demostrar su relación directa o inmediata con el caso propuesto (art. 675). La cuestión federal que puede dar lugar a la interposición del recurso podrá proponerse desde

que el interesado toma intervención en la causa, proceso o expediente y en cualquier estado de estos, o también, y por primera vez, en el escrito en que se deduzca el recurso ante la propia Corte (art. 676). El propósito es que el alto tribunal se pronuncie siempre sobre el fondo de la cuestión federal propuesta, para que a los habitantes que recurren a él en demanda de justicia no les quede la más mínima duda acerca del alcance de sus derechos. Ningún subterfugio de aquellos que puedan empañar el respeto y la consideración por el más alto tribunal de justicia del país autorizamos en el presente Código y es por eso que ponemos a los jueces frente a los ciudadanos para que resuelvan derechamente los conflictos de estos últimos, sin orilleos ni evasiones por la tangente. Así concebimos la justicia. Queremos fortalecer el prestigio de la Corte Suprema, muy menguado en estas días, para que ella sea el fiel y digno guardián de la Carta Fundamental de la República.

---



PROYECTO DE CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL PARA LA CAPITAL DE LA REPUBLICA, TERRITORIOS NACIONALES, ISLAS Y EL FUERO FEDERAL, DE LAS PROVINCIAS

---

LIBRO I

DISPOSICIONES GENERALES E INSTRUCCION

---





TÍTULO I  
DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES

---

CAPÍTULO I  
PRINCIPIOS GENERALES



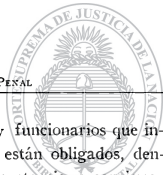
Art. 1 — En la Capital de la República, Territorios nacionales, Islas y fuero federal de las Provincias, no podrá iniciarse ningún juicio de carácter penal sino por actos u omisiones calificadas de delitos, faltas o contravenciones por una ley anterior u ordenanza fundada en ley anterior, ni ser perseguido o terminado de otra manera que la especificada en el presente Código.

---

**Artículo 1.** — A pesar de ser partidarios de la unificación procesal de la República a mérito de las razones expuestas en la conferencia de La Plata transcripta en los antecedentes, hemos creído que mientras no haya alguien en la primera magistratura del país capaz de comprender el problema y de interponer toda su influencia para resolverlo, debemos tratar de que se establezca en la Capital, Territorios y fuero federal de las Provincias, por lo menos un régimen de enjuiciamiento concordante con los principios fundamentales del sistema republicano que ha establecido la Constitución. Cuando llegue aquella oportunidad nos encontraremos con que la práctica de los principios que este Código sostiene y afirma —caso de aprobarse— habrá preparado el terreno para la solución integral del problema de la justicia en toda la Nación.

Este artículo concuerda en su forma y en su espíritu con el 18 de la Carta Fundamental. Para que haya lugar a proceso penal es indispensable que una "ley" anterior al hecho de la causa lo haya calificado de delito y le haya asignado una pena, o que una "ordenanza" municipal o de policía, fundada en "ley" anterior, haya hecho lo propio. La "ley" debe ser dictada exclusivamente por el Congreso. La "ordenanza" podrá serlo por la Municipalidad o la Policía dentro de las condiciones que establezca la ley orgánica de cada una de esas administraciones o la ley especial de faltas y





Art. 2 — Todas las autoridades y funcionarios que intervengan en el procedimiento penal están obligados, dentro de los límites de su respectiva competencia, a consignar y apreciar las circunstancias adversas y favorables al imputado, y a instruir a este de sus derechos y de los recursos que le acuerda la ley, mientras no se hallare asistido de defensor, bajo la pena establecida por el Código Penal para los que violaren los deberes del funcionario público.

Art. 3 — Toda persona privada de su libertad por representantes de la autoridad pública, tiene derecho a exigir de los mismos le hagan saber ipso-facto de qué se le acusa, por quien y qué cargos se le dirigen, estando aquellos obligados a satisfacerla, bajo pena de doscientos pesos de multa y sin perjuicio de lo dispuesto en el LIBRO III, Título I del presente Código.

—•—

contravenciones. Con esto definimos y resolvemos la incongruencia y la enormidad constitucional que significa delegar en reparticiones de carácter ejecutivo, facultades legislativas, como son las de determinar qué hechos deben calificarse como faltas o contravenciones y qué pena debe corresponderles. La "ley orgánica" o la "ley especial de faltas" son las únicas que pueden hacer esa calificación, dejando en manos de las respectivas reparticiones administrativas las facultades para reglamentar la forma de aplicar los preceptos legales. No hay más legislador que el Congreso y lo que haga la Municipalidad o la Policía en este sentido es contrario a lo dispuesto en los artículos 18 y 67 inciso 27 de la Constitución.

Agregamos "islas" para resolver la situación de los habitantes de Martín García e Isla de los Estados, sin olvidar la eventual solución que pueda darse al pleito de las Malvinas.

Art. 2. — El Juez o cualquier otro funcionario encargado de intervenir en un proceso penal, no ha sido designado para que pruebe que cada acusado o detenido es un culpable, sino para averiguar la verdad y establecer en cada caso si se ha cometido un hecho prohibido por la ley o se ha omitido el cumplimiento de una obligación legal. El artículo tiende a hacer efectiva la imparcialidad de Jueces y demás funcionarios o empleados que intervienen en los procesos.

Art. 3. — Actualmente basta que cualquier individuo con cierta influencia en la policía lleve una denuncia contra una persona, para que ésta sea detenida "en averiguación", pero sin hacérsele saber de qué se le acusa ni

Art. 4.— Toda persona que encuentre a otra en el preciso momento en que está cometiendo un delito, o que ha presenciado su comisión, tiene derecho a detenerla al solo objeto de presentarla en el acto al Juez competente o al representante de la autoridad pública más inmediato, jurando que la ha visto cometer el delito y proporcionando los demás datos que conozca relacionados con el hecho.

Art. 5.— Todo representante de la autoridad pública tiene la obligación de detener a las personas que sorprenda en el instante mismo en que están cometiendo un delito y de ponerlas inmediatamente a disposición del juez competente.

Art. 6.— Nadie puede ser procesado o castigado más de una vez por la misma infracción. Queda prohibido el sobreseimiento provisional y la simple absolución de la instancia.

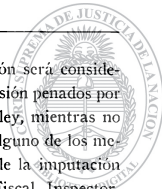
—•—•—  
quien es el acusador. En esta forma se cometen verdaderos abusos y frecuentemente personas que hacen una vida ordenada y sólo viven de su trabajo honrado, se ven obligadas a pagar sumas de dinero que les exigen empleados de policía para dejarles en paz o para ponerlas en libertad.

Con esta disposición y la de los artículos 80 y 81, tratamos de evitar la extorsión oficializada y el espectáculo tristísimo que con ello ofrecen a los ciudadanos honestos no pocos empleados de la repartición encargada de guardar el orden y de hacer respetar los derechos de los habitantes que la Constitución y las leyes les reconocen.

Art. 4.— Se funda en la necesidad de reprimir la delincuencia. En muchos casos la autoridad no se hace presente en el lugar del hecho sino después que han desaparecido hasta las huellas materiales del mismo, a pesar de que no han sido pocos los que lo han presenciado o podido evitar, o impedir que los autores se fugasen.

Art. 6.— Cuando el Juez Correccional o de Faltas o la Cámara respectiva dictan una sentencia absolutoria y ésta pasa en autoridad de cosa juzgada, la misma causa no puede renovarse contra el mismo imputado absuelto. Mucho menos puede serlo para el que ha sido condenado, cuando se persiga el propósito de aplicarle una nueva pena por el mismo hecho.

La absolución tiene carácter definitivo y para que sus consecuencias no tengan efectos perjudiciales con respecto a los damnificados por el hecho, les asignamos una participación directa en el proceso penal, a fin de



Art. 7 — Ningún habitante de la Nación será considerado culpable o responsable de un acto u omisión penados por la ley o por una ordenanza fundada en la ley, mientras no se pruebe o demuestre su culpabilidad por alguno de los medios que este Código autoriza. La prueba de la imputación incumbirá siempre al que acuse, sea como Fiscal, Inspector, Agente de seguridad o policía, etc., sea como querellante o como promotor de la acción civil.

Art. 8 — En materia penal no podrá aplicarse por analogía otra ley u ordenanza que aquella que rige especialmente el caso, ni interpretarse estas extensivamente en contra del imputado.

Art. 9 — En caso de duda acerca de la ley u ordenanza a aplicarse o del alcance de sus disposiciones, deberá estarse a lo que sea más favorable al imputado.

## CAPITULO II

### DE LAS ACCIONES QUE NACEN DE LOS DELITOS, FALTAS Y CONTRAVENCIONES

Art. 10 — De todo delito, falta o contravención nacen acciones penales y civiles. La acción penal es pública, cuando debe promoverla y ejercitarla el ministerio fiscal o los demás representantes o agentes de la autoridad pública, sin

que puedan defender sus derechos y aporiar los elementos de juicio necesarios al completo esclarecimiento de aquél.

En la exposición de motivos hemos dado las razones que teníamos para prohibir el sobresimiento provisorio y la simple absolución de la instancia (Véase N° 9 de dicha Exposición).

Art. 7. — Volvemos al principio constitucional del art. 18 de la Carta Fundamental. (Véase N° 11 de la Exposición).

Arts. 8 y 9. — El viejo principio tiene su afirmación categórica para evitar malentendidos...

perjuicio de lo que se dispone en el artículo siguiente, y privada, cuando sólo puede promoverla y ejercitarla la persona ofendida o damnificada o sus representantes legales o sus herederos.

Art. 11— La persona particularmente ofendida o damnificada por un hecho que dé lugar a la acción pública, o sus representantes legales, y a falta o por impedimento de ambos, los herederos de aquella hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tienen derecho de acusar o de intervenir como parte querellante en el juicio penal.

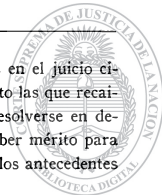
Art. 12— La acción civil destinada a reparar el daño moral y material ocasionado con el hecho, puede ser promovida y ejercitada por las personas mencionadas en el artículo anterior, en el orden expresado y en el mismo juicio penal, contra uno, varios o todos los imputados. Este derecho puede dejar de ejercitarse, o renunciarse antes de la vista del proceso, si ya se hubiera ejercitado, para hacer uso del mismo en la jurisdicción civil. En este caso no podrá dictarse sentencia en el juicio civil hasta que la del fuero criminal pase en autoridad de cosa juzgada.

Art. 13— La acción privada, sea penal o civil, se extingue por renuncia de la persona ofendida o por haberse producido el hecho previsto en el art. 132 del Código Penal. Dicha renuncia solo tiene efectos con respecto al renunciante y a sus herederos.

Art. 14— Si la acción penal dependiese de cuestiones prejudiciales, cuya decisión competa exclusivamente a otra jurisdicción, no podrá iniciarse el juicio criminal antes que haya sentencia ejecutoriada en la cuestión prejudicial.

---

**Arts. 11 y 12.**— En el N° 14 de la Exposición hemos tratado el punto-



Art. 15— Las sentencias ejecutoriadas en el juicio civil no hacen cosa juzgada en el penal, excepto las que recaigan en las cuestiones prejudiciales. Si al resolverse en definitiva sobre una acción civil, resultase haber mérito para intentar la acción penal pública, se pasarán los antecedentes al juez que corresponda.

## TÍTULO II

### DE LAS PARTES EN EL JUICIO PENAL

#### CAPÍTULO I

##### DEL IMPUTADO

Art. 16— Es imputado todo aquél contra el cual se ejerce la acción penal. La imposibilidad de identificar al imputado con su verdadero nombre y apellido y con sus demás condiciones personales, no retardará ni suspenderá la instrucción, el juicio y la ejecución, cuando sea cierta la identidad física de la persona.

Art. 17— Cuando haya motivos bastantes, que el Juez deberá apreciar en resolución fundada, para suponer que la persona presente en la instrucción o en el juicio no es la misma contra la cual se dirige la acción penal, se ordenarán todas las diligencias tendientes a establecer la identidad. En tal caso podrá interrumpirse el curso del procedimiento; pero, si hubiera otros imputados del mismo hecho, el procedimiento continuará respecto de ellos.

Art. 18— Cuando, en cualquier estado de la causa, resulte evidente que se procede contra un imputado, por error de persona, se hará la declaración del error y el proceso ter-

minará respecto de dicho imputado y si estuviere detenido será puesto en libertad inmediata. Esta decisión no podrá ser diferida en ningún caso, aunque, contemporáneamente, se estuviera procediendo contra otros imputados por el mismo hecho.

Art. 19— En todos los casos en que haya motivos para dudar de la salud mental del imputado, se ordenará su examen por dos o más peritos. Establecido que cometió el delito en condiciones de salud mental capaces de determinar la inimputabilidad, conforme a lo dispuesto en el Código Penal, el Juez, después de practicar las diligencias que juzgue necesarias, especialmente en el caso de que haya otros imputados, remitirá el proceso a la Cámara de Sección respectiva, a los efectos del pronunciamiento que corresponda. (Art. 396).

Art. 20— Si la enfermedad mental fuera sobreviniente, el Juez o Tribunal suspenderá el procedimiento y ordenará la internación del imputado en un establecimiento adecuado. Esta suspensión no obstará a todas las medidas impuestas por las necesidades de la investigación, excepto las declaraciones del imputado.

Art. 21— Cuando al imputado se le atribuya un delito reprimido con diez años o más de prisión o reclusión, se requerirá un informe médico sobre su estado mental. Este examen será ordenado por el Juez de Instrucción inmediatamente después de la declaración indagatoria o de que el imputado se niegue a prestarla. Serán sometidos, también, al exámen médico, los imputados mayores de setenta años y los sordomudos.

Art. 22— El imputado será declarado rebelde:

1º Cuando no concurriera a la citación o llamamiento

judicial no obstante haber sido notificado en forma legal;

2° Cuando se hubiere evadido del lugar donde se hallare detenido;

3° Cuando estando en libertad provisoria dejare de concurrir a cualquier llamamiento del Juez o Tribunal que conozca de la causa.

Art. 23— Si la citación se hubiera hecho por edictos, en virtud de ignorarse el domicilio o residencia del imputado, vencido el término de la publicación se hará la declaración de rebeldía.

Art. 24— Ni la citación del imputado ni su rebeldía, paralizarán la instrucción.

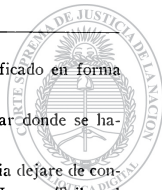
Terminada ésta, se guardarán los autos y las piezas de convicción que no fueren de un tercero irresponsable; y, aunque lo fuesen, cuando el Juez creyera que es indispensable su conservación, en cuyo caso el tercero podrá reclamar del fisco la indemnización correspondiente.

Si el imputado se presentase o fuere habido, la causa seguirá su curso.

Art. 25— Si la rebeldía fuese declarada después de la instrucción, el curso de la causa será suspendido hasta la presentación o aprehensión del imputado.

Art. 26— Si fuesen dos o más los imputados y no a todos se les hubiese declarado en rebeldía, se suspenderá el curso de la causa respecto a los rebeldes y se continuará respecto a los demás.

Art. 27— Cuando la causa se suspendiese en el período del juicio, por rebeldía de los imputados, se observará lo dispuesto en el artículo 25.



En uno y otro caso, cuando se hubieren de devolver los instrumentos del delito o las piezas de convicción a sus dueños, que fuesen terceros irresponsables, se dejará en los autos una descripción minuciosa de todo lo que hubiera de entregarse.

Art. 28— En cualquiera de los casos de suspensión de la causa por rebeldía, se mandarán devolver los efectos del delito a los terceros irresponsables que justifiquen ser sus dueños.

Art. 29— El imputado rebelde no puede ser oído ni intervenir en el proceso, hasta tanto se presente o fuere habido.

## CAPITULO II

### DEL FISCAL

Art. 30— El Fiscal, como representante de la acción pública, es parte esencial en el proceso cuando éste se promueve por delitos de los que dan lugar al ejercicio de aquella acción.

En el desempeño de su ministerio está sometido a las disposiciones de la Ley Orgánica de los tribunales de justicia y a los preceptos de este Código, que le conciernen.

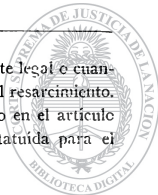
Art. 31— El Fiscal está facultado para pedir que, en la sentencia condenatoria, se establezca la obligación de resarcir el daño moral y material causado por el delito, cuando la persona en cuyo favor se ha de imponer esa obliga-

---

**Art. 30.** — En el N° 17 de la Exposición hemos tratado el punto.

**Art. 31.** — A pesar de ser una disposición más propia de la Ley Orgánica, por cuanto se refiere a las facultades del funcionario, hemos creído que convenía establecerla en este Código para evitar dudas.





ción sea un incapaz y carezca de representante legal o cuando éste no se haya presentado en demanda del resarcimiento.

Art. 32— El Fiscal, en el caso previsto en el artículo anterior, procederá en la misma forma estatuida para el particular damnificado.

### CAPITULO III

#### DEL QUERELLANTE

Art. 33— La persona a quien, conforme a las disposiciones de este Código, se acuerda el derecho de promover la acción penal, queda sujeta a la jurisdicción del juez que conociere de la causa, en todo lo relativo a la acción y a sus consecuencias legales.

Art. 34— El querellante puede ofrecer todas las medidas de prueba que considere necesarias para la mejor defensa de sus derechos, y puede desistir de la querella hasta el día antes de la vista del proceso, quedando, sin embargo, sujeto a las responsabilidades que pudieran resultarle por sus actos anteriores. El desistimiento de la querella debe ser expreso y no puede retractarse.

Art. 35— El que promoviera querella por un delito cualquiera, contrae responsabilidad personal cuando hubiere procedido calumniosamente.

---

Art. 33. — En el N° 14 de la Exposición hemos tratado el punto.

Art. 34. — Tiene por objeto asegurarle el ejercicio de sus derechos en iguales condiciones que el imputado.

Art. 35. — Es necesario que aquel que acusa a sabiendas de que su imputación es falsa, encuentre el correctivo ante los jueces a quienes trató de engañar.



## CAPITULO IV

## DEL DAMNIFICADO

Art. 36— El particular damnificado por un delito, falta o contravención que no quiera asumir el rol de querellante, puede interponer en el proceso penal demanda por resarcimiento del daño moral y material causado, y en este caso, ofrecer y pedir que se realicen todas las diligencias de prueba destinadas a demostrar el monto de aquel si no prefiriese dejarlo librado al criterio del Tribunal.

Art. 37— En los casos de delito contra la propiedad, el damnificado que no quiera entablar la acción penal tendrá intervención en el proceso al solo objeto de hacer constar la propiedad de la cosa que reclame.

Art. 38 — La demanda civil en el proceso penal no equivale a la querella.

## CAPITULO V

## DE LOS DEFENSORES

Art. 39 — Durante la instrucción cada imputado no podrá ser asistido por mas de un defensor. Esta disposición no rige durante el juicio oral.

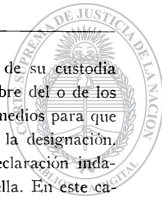
Art. 40 — El nombramiento de defensor puede hacerse por el imputado desde el preciso momento de su detención,

---

**Art. 36.** — En el N° 16 de la Exposición hemos tratado el punto.

**Art. 39.** — En los Núms. 20 a 22 de la Exposición hemos tratado el punto.

**Art. 40.** — Tratamos de asegurar la defensa y el ejercicio de ella, evitando las maniobras que se hacen actualmente para perjudicar a los nume-



a cuyo efecto los funcionarios encargados de su custodia están obligados a consignar en acta el nombre del o de los abogados propuestos y a facilitar todos los medios para que el detenido o imputado pueda comunicarles la designación. También puede hacerse en el acto de la declaración indagatoria a fin de que aquel pueda asistir a ella. En este caso el Juez le hará saber, antes de iniciarse el acto, el derecho que le asiste de nombrar defensor. Si manifestase su conformidad de declarar sin la presencia del defensor, de lo que se dejará constancia expresa bajo pena de nulidad, se le recibirá la indagatoria en esas condiciones. Si expresare su decisión de no declarar sino en presencia del defensor, se suspenderá el acto a efecto de que lo designe, haciéndosele saber que deberá designarlo dentro de las veinticuatro horas, de lo que también se dejará constancia expresa, bajo pena de nulidad. Si transcurridas dichas veinticuatro horas no lo hubiera designado, se le designará en el acto al Defensor de Pobres, y, con asistencia de este, se procederá a la indagatoria dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Art. 41 — En todos los casos en que, hasta tres días después de la declaración indagatoria, el imputado no hubiera nombrado defensor, el juez designará a tal efecto al Defensor de Pobres. Este cesará en su intervención en el preciso instante en que el imputado nombre defensor.

Art. 42 — Si el Defensor de Pobres fuera recusado le-

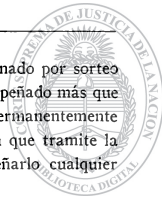
---

rosos inocentes que son procesados por querrela o prevención policial, especialmente cuando recrudecen las campañas políticas y los ciudadanos son hostilizados por los oficialismos.

Art. 42. — Es necesario que el imputado tenga un defensor que vigile el proceso y allegue las pruebas de descargo. De este modo aseguramos el ejercicio de la defensa, a costa, naturalmente, de la incomodidad de algunos profesionales, que serán nombrados en el caso excepcional que se contempla.

galmente o se excusara en la misma forma o fuera suspendido en su cargo, el Juez sorteará a un abogado de la matrícula local dentro de las veinticuatro horas de la recusación o separación antedichas, y le hará saber la designación en el acto para que se presente dentro de las veinticuatro horas siguientes a cumplir sus deberes de defensor. El abogado designado solo quedará exento de esta obligación cuando estuviere ausente o le comprendiera alguna de las causas de recusación o excusación establecidas para los jueces, o cuando alegara exceso de trabajo profesional o de otra naturaleza o el desempeño de una función pública, que le impidiera satisfacer las necesidades de la defensa. Oído breve y sumariamente por el Juez, de lo que se dejará constancia en un acta, ipso facto se dictará resolución inapelable, aceptando o rechazando lo alegado. En el primer caso, se procederá a reemplazarlo en el mismo acto y en la forma determinada precedentemente. En el segundo, se le intimará a cumplir con su deber, bajo pena de suspensión en el ejercicio de su profesión por treinta días la primera vez y por seis meses en caso de reincidencia. Esta resolución se dictará y notificará en el mismo acto, a cuyo objeto el abogado tiene obligación de esperar hasta treinta minutos desde que finalizó la audiencia en que fué oído.

Art. 43 — En el caso de que esté permitida la intervención de dos defensores, la presencia de uno solo no impedirá la celebración de cualquier acto que deba realizarse. Las notificaciones hechas a uno de los defensores, excepto la citación para los debates, surtirán efecto con relación al otro.



Art. 44 — El cargo de defensor designado por sorteo conforme al artículo 42, no puede ser desempeñado más que por abogados de la matrícula que ejerzan permanentemente su profesión en el territorio o provincia en que tramite la causa. En los demás casos podrá desempeñarlo cualquier abogado inscripto en la matrícula federal.

Art. 45 — La aceptación del cargo de defensor importa la obligación de desempeñarlo fielmente. Se entiende que el cargo no es desempeñado fielmente:

- a) Cuando el defensor abandona la defensa sin causa justificada;
- b) Cuando por omisiones o negligencia provoca demoras en el trámite del proceso;
- c) Cuando, no obstante instrucciones expresas del defendido, no ofrece las pruebas o no interpone los recursos a que tendría derecho.

Art. 46 — En los casos comprendidos en el artículo anterior, el Juez o Tribunal corregirán disciplinariamente a los defensores con llamado de atención, apercibimiento o suspensión en el ejercicio de la profesión, por no más de seis meses, según la gravedad del hecho. Si la corrección impuesta le impidiere el desempeño de su cargo, se procederá a reemplazarlo en el acto de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 40 y 42.

Art. 47 — El defensor no podrá retirarse de una au-

---

**Art. 44.** — En el proceso sólo debe actuar por sorteo un abogado del lugar en que aquel tramita, mientras que en un recurso de casación o federal puede actuar cualquiera, el que elija el interesado, en tanto el abogado acepte la designación. No podría imponerse a un abogado de Salta la obligación de actuar en un proceso realizado en Buenos Aires.

**Art. 46.** — Tiende a asegurar el desempeño de la defensa.

**Art. 47.** — Teniendo los derechos que le acuerdan los artículos 48, 96 y 97 de este Código sería una imprudencia abandonar la audiencia, cuando

diencia alegando que en ella se han violado los derechos de la defensa. La infracción a este precepto será juzgada como abandono, sin perjuicio de que el defensor pueda solicitar que se deje constancia de su protesta para las ulteriores de la causa.

Art. 48 — El defensor tiene derecho a presenciar la declaración indagatoria del imputado y la de los testigos, como también a formular las preguntas e indicaciones que estime convenientes para el desarrollo normal de los interrogatorios. Es obligación suya impedir que se amenace, fuerce o coaccione al imputado o testigo para que confiese o declare, y puede oponerse a que continúe el interrogatorio cuando hubiera transcurrido mas de dos horas desde su iniciación y notare que su defendido o el testigo se halla cansado, nervioso o indispuerto, debiendo continuarse el acto luego que se notare una mejoría en el estado de aquel.

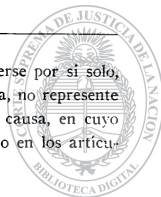
Art. 49 — La incomunicación del imputado no rige para su defensor.

---

es precisamente en esas circunstancias que su presencia se hace indispensable para evitar lo abusos comunes en la instrucción.

**Art. 48.**— De este modo tratamos de evitar que el artículo 18 de la Constitución sea violado en cada proceso difícil por los funcionarios instructores.

**Art. 49.**— Ningún país con sistema acusatorio hace extensiva al defensor la incomunicación del imputado. Sólo en los países con dictaduras políticas, se ha vuelto al régimen inquisitorial del aislamiento personal de aquél con el fin de reunir parcial y cómodamente pruebas en su contra. Si nosotros adoptamos el sistema acusatorio y no estamos bajo la influencia de una dictadura política, fatalmente debemos abolir todo precepto que coarte la defensa, empezando por la incomunicación. Pero como no debemos dejar a la sociedad en manos de los delincuentes, la incomunicación hecha en la forma y por el plazo que fija el Código, tiende a evitar que aquéllos puedan alterar la situación creada con el hecho delictuoso, valiéndose de elementos afines que vayan a visitarlos durante el aislamiento. Y para el caso de que el abogado defensor se prestara a esa maniobra, falseando los fines de su misión, quedaría supeditado a la sanción de sus pares, que podrían llegar a eliminarlo de la matrícula, según se establece en la Ley Orgánica (Véase N° 35 de la Exposición).



Art. 50 — El imputado puede defenderse por sí solo, siempre que ello, a juicio del Juez o Cámara, no represente un obstáculo a la buena tramitación de la causa, en cuyo caso se procederá de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 40 y 42.

### TÍTULO III

#### DE LA INSTRUCCION

##### CAPITULO I

##### DE LA DENUNCIA

Art. 51 — Toda persona capaz que presenciare la comisión de un delito de los que, sin necesidad de instancia privada, den lugar al ejercicio de la acción pública, puede hacer denuncia del mismo. Pueden denunciarlo también, las personas capaces que, por cualquier medio, tuvieren conocimiento de la perpetración.

Art. 52 — El damnificado por sí o por intermedio de su representante legal, si fuere incapaz, puede hacer denuncia del delito de que se considere víctima.

Art. 53 — La denuncia puede hacerse:

1° Al Juez de Instrucción a quien corresponda cono-

---

**Art. 50.** — Si el imputado es abogado, no parece lógico imponerle la obligación de que nombre defensor.

**Art. 51.** — Nosotros damos al término "capaz" la acepción de mayor de 22 años y en pleno goce de sus derechos civiles.

**Art. 53-9.** — Es necesario facilitar el medio de que la autoridad tenga conocimiento de un hecho reprimido por la ley, pero también debe asegurarse la fidelidad de la denuncia, individualizándose con precisión al denunciante y sometiéndolo a la responsabilidad del que procede de mala fe.

cer del hecho de acuerdo a las reglas establecidas en el capítulo respectivo.

2º A los Fiscales.

3º A las autoridades policiales.

Art. 54 — La denuncia puede hacerse verbalmente o por escrito, personalmente o por mandatario.

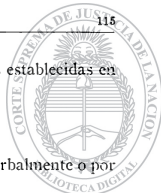
Art. 55 — Los escritos anónimos que contengan la denuncia de un delito no serán tenidos en cuenta, salvo que, por sí mismos, constituyan el cuerpo del delito o se refieran, con precisión de detalles, a hechos punibles de notoriedad pública que no hayan sido completamente esclarecidos, en cuyo caso los funcionarios que intervengan en la instrucción tomarán las medidas necesarias para esclarecerlos.

Art. 56 — La denuncia que se haga por escrito deberá estar firmada por el denunciante o por otra persona a su ruego, si él no supiere o no pudiere hacerlo.

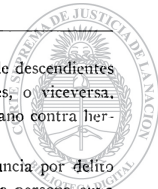
Art. 57 — El escrito de denuncia deberá contener una relación del hecho y de todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, que puedan ser útiles a la averiguación del mismo y de sus autores.

Art. 58 — Cuando la denuncia fuera verbal, el funcionario que la reciba extenderá un acta en la que se hará constar todas las referencias que el denunciante suministre y que sean útiles para la investigación del delito y de sus autores y copartícipes. El acta será firmada por el funcionario y por el denunciante, y si éste no supiere o no pudiere firmar, por un testigo.

Art. 59 — La persona que formule una denuncia deberá comprobar su identidad por medio de documentos y, en su defecto, por la declaración de dos testigos. A falta de uno u otro medio de prueba se le aceptará el juramento.







Art. 60 — No se admitirán denuncias de descendientes contra ascendientes, consanguíneos o afines, o viceversa, ni de un cónyuge contra el otro, ni de hermano contra hermano.

Esta prohibición no comprende la denuncia por delito ejecutado contra el denunciante o contra una persona cuyo parentesco con el denunciante sea más próximo que el que lo liga con el denunciado.

Art. 61 — Todo empleado o funcionario público que, en ejercicio de su empleo o función, adquiera el conocimiento de un delito por el cual deba procederse de oficio, está obligado a denunciarlo ante el Juez de Instrucción, ante el Fiscal o ante las autoridades policiales, bajo pena de destitución.

Art. 62 — Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que profesen cualquier ramo del arte de curar, tienen obligación de denunciar a alguna de las autoridades nombradas, todo hecho que, por sus características, pudiera constituir delito y del que se hubieran enterado al prestar los auxilios de su profesión. Si fueran varias las personas que hubieran tenido intervención profesional en el mismo hecho, la obligación de denunciar les incumbe a todas.

Art. 63 — Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo anterior, el caso en que las personas mencionadas, o los abogados, procuradores y escribanos, hubieran tenido conocimiento del delito por revelaciones que les fueron hechas bajo la fe del secreto profesional. Si las revelaciones les fue-

---

Art. 63. — Sobre secreto profesional véase lo que hemos dicho en la Exposición, N° 23.

ron hechas sin exigírseles secreto o sin presumir que debían quedar en secreto, están obligados a denunciarlas. (art. 268).

Art. 64 — Los Jueces que recibieran una denuncia con todos los requisitos exigidos, estarán obligados a iniciar las diligencias para la averiguación del hecho e individualización de sus autores, conforme a lo dispuesto en este Código.

Cuando la denuncia se hiciere ante los Fiscales, éstos la comunicarán de inmediato al Juez de Instrucción.

Cuando se hiciere a las autoridades policiales, deberán estas practicar sin demora, todas las diligencias de carácter urgente que la investigación criminal exija, dando cuenta del hecho al Juez a quien corresponda la instrucción, inmediatamente después de haber llegado a su conocimiento.

Art. 65 — Cuando el hecho comunicado o denunciado no constituya delito, el Juez desestimaré la denuncia sin más trámite.

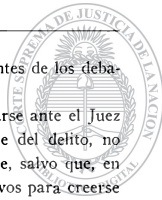
El denunciante podrá apelar en el acto de notificarse de la resolución o dentro de las veinticuatro horas, para ante la Cámara. La desestimación, en el caso, no constituye prejuzgamiento.

Art. 66 — El que formulare denuncia por un delito cualquiera, contrae responsabilidad personal cuando hubiere procedido calumniosamente.

## CAPITULO II

### DE LA QUERRELLA

Art. 67 — La persona particularmente ofendida por un delito que dé lugar al procedimiento de oficio, puede promover la acción penal respectiva, en carácter de querellante. Si la acción se hubiere iniciado ya, podrá tomar interven-



ción en el proceso en cualquier momento antes de los debates del juicio oral.

Art. 68 — La persona que al presentarse ante el Juez de Instrucción lo hiciere como denunciante del delito, no podrá, luego, asumir el papel de querellante, salvo que, en el momento de la denuncia, no tuviere motivos para creerse damnificado. La simple denuncia hecha ante otra autoridad no impide el ejercicio posterior del derecho de querellar.

Art. 69 — La querella se promoverá por escrito, ante el Juez o Cámara, según sea el período del procedimiento en que la causa se encuentre.

El escrito contendrá:

- 1° El nombre, apellido y domicilio del querellante.
- 2° El nombre, apellido y domicilio del querellado. En caso de ignorar estas circunstancias, deberá hacerse la designación del querellado por las señas que mejor pudieren darle a conocer.
- 3° La relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se ejecutó, si se supiere.
- 4° La expresión de las diligencias que deberán practicarse para la comprobación del hecho.
- 5° La firma del querellante o de otra persona a su ruego, si no supiere o no pudiese firmar. Esta persona suscribirá el escrito en presencia del Secretario.

Art. 70 — Si el Juez lo considerase conveniente, ordenará la ratificación del querellante, al que podrá requerir las aclaraciones que estime necesarias.

Art. 71 — La persona que promueva querella en re-

---

**Art. 71.** — La exigencia de un poder especial para querellar tiene su explicación en la circunstancia de que siendo el damnificado el dueño de la

presentación de otra, deberá presentar poder especial con indicaciones precisas del delito por el cual querella y de la persona o personas contra quienes se dirige la acción.

Si no fueran conocidos los nombres de esas personas, se hará mención de ello en la escritura de poder.

Art. 72 — Si la querella fuera por delito que no pueda ser perseguido sino por la acción privada, se entenderá haberla abandonado el que la interpuso, cuando dejare de instar el procedimiento dentro de los tres días siguientes al auto en que el Juez así lo hubiera acordado.

Al efecto, a los tres días de haberse practicado las últimas diligencias pedidas por el querellante, o de estar paralizada la causa por falta de instancia del mismo, el Juez ordenará, de oficio, que aquél pida lo que convenga a su derecho en el término que fija el apartado anterior.

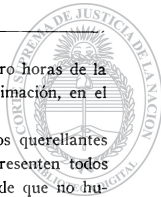
Al que hiciere abandono de la querella se le impondrán las costas.

Art. 73 — Se tendrá también por abandonada la querella cuando por haber fallecido o haberse incapacitado el querellante para continuar la acción, no comparecieren a sostenerla sus herederos o representantes legales dentro de los sesenta días siguientes a aquél en que la muerte o incapacidad se hubiere producido.

Art. 74 — El Juez desestimaré la querella cuando los hechos en que se fundase no constituyan delito o cuando no se considerase competente. Contra la desestimación podrá

---

acción, puede renunciar a ella, y además, en que entrañando responsabilidad criminal el hecho de querellar calumniosamente, no es posible hacerla recaer en el mandante cuando el mandatario no ha obrado en virtud de instrucciones expresas. Para evitar estas situaciones el artículo exige el poder especial; pero éste no debe ser tampoco un obstáculo para la defensa de los intereses lesionados cuando no se conoce el nombre del autor del hecho. De ahí el segundo párrafo del mismo artículo.



apelar el querellante dentro de las veinticuatro horas de la notificación para ante la Cámara. La desestimación, en el caso, no constituye prejuzgamiento.

Art. 75 — En el caso de concurrir varios querellantes particulares, los Jueces ordenarán que se presenten todos bajo una sola representación, salvo el caso de que no hubiere entre ellos identidad de intereses.

### CAPITULO III

#### DE LA PREVENCION

Art. 76 — Cuando la denuncia de un delito que dé lugar a la acción pública sea formulada ante las autoridades policiales, o cuando, de cualquier modo, adquieran éstas el conocimiento de la perpetración de tal delito, procederán de inmediato, a practicar las diligencias de prevención que sean necesarias, de conformidad a lo que en este capítulo se dispone.

Art. 77 — Las autoridades policiales comunicarán telegráficamente, o por el medio más rápido a su alcance, el hecho de que se trate, al Juez a quien corresponda la instrucción. Esta comunicación se hará dentro de las tres horas subsiguientes a la de la intervención tomada por las autoridades policiales, salvo que este Código establezca un plazo menor. La demora se reputará falta grave. La comunicación expresará, también, si existe alguna persona detenida, con—

---

Art. 77.— Establecemos los medios de que la persona afectada — a quien consideramos inocente mientras no se pruebe formalmente su culpabilidad — sufra los menores inconvenientes posibles durante este trámite, a fin de que no sean irreparables los perjuicios que haya experimentado cuando resulte exenta de responsabilidad.

siderándose, asimismo, falta grave, la omisión de esta circunstancia.

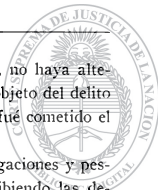
Art. 78 — Las comunicaciones relativas a suicidios y tentativas de suicidios, y las referentes a delitos contra la honestidad, se harán siempre con carácter reservado.

Art. 79 — Las autoridades policiales tendrán además, cuando se trate de delitos, faltas o contravenciones de acción pública, las siguientes obligaciones y facultades:

- 1º Averiguar los que se cometan en los lugares donde ejerzan su jurisdicción.
- 2º Recibir las denuncias que se les hicieren sobre los mismos delitos, faltas o contravenciones.
- 3º Verificar sin demora las diligencias necesarias para hacer constar las huellas o rastros aparentes del delito o falta, cuando haya peligro de que esas huellas desaparezcan. Si el retardo de aquellas diligencias no ofreciere peligro, se limitarán a tomar las medidas necesarias a fin de que las huellas del hecho no desaparezcan y que el estado de los lugares no sea modificado.
- 4º Proceder a la detención del presunto culpable en los casos en que la medida está autorizada por este Código.
- 5º Recoger las pruebas y demás antecedentes que puedan adquirir en el momento de la ejecución del hecho y practicar todas las diligencias urgentes que se consideren necesarias para establecer su existencia y determinar los culpables.
- 6º Disponer que antes de practicarse las averiguaciones

---

**Art. 79.** — Esta disposición se halla condicionada por los Arts. 80 y 81.



y exámenes a que se deba proceder, no haya alteración alguna en todo lo relativo al objeto del delito o falta y al estado del lugar en que fue cometido el uno o la otra.

- 7º Proceder a todos los exámenes, indagaciones y pesquisas que juzgaren necesarias, recibiendo las declaraciones de los ofendidos y las noticias e informes de todas las personas que puedan proporcionarlos y que puedan ser útiles al descubrimiento de la verdad.
- 8º Secuestrar los instrumentos del delito y cualesquiera otros que puedan servir para el objeto de la investigación.
- 9º Conservar incomunicado al presunto delincuente si la investigación lo exigiere y la medida estuviere autorizada por la ley. De la adopción de esta medida deberán dar cuenta inmediata al Juez, bajo pena de cien pesos de multa la primera vez y de quinientos en los sucesivos.
- 10º Disponer, si lo juzgan conveniente, que ninguna persona se aparte del lugar del delito o sus adyacencias antes de concluir las diligencias de la investigación. Esta medida se comunicará, también, al Juez, bajo la misma pena del inciso anterior.
- 11º Hacer uso de la fuerza cada vez que fuese indispensable para el desempeño de sus funciones.
- 12º Ordenar, siempre que lo creyesen necesario, que les acompañen uno o dos médicos, los primeros que fuesen habidos, para prestar, en su caso, los auxilios de su profesión. Los médicos requeridos que negaren su auxilio incurrirán en una multa de cincuenta a doscientos pesos.

Art. 80 — Las autoridades policiales no podrán recibir declaración indagatoria al o a los imputados, ni exigir que declaren los testigos; se limitarán a asegurar a los imputados y a tomar nota de los nombres, domicilios y demás circunstancias personales de los testigos para ponerlos en conocimiento del Juez, sin perjuicio de las facultades conferidas en el artículo anterior para asegurar el éxito de la investigación.

Art. 81 — Será nula y de ningún valor toda declaración indagatoria o de testigo tomada por empleados o funcionarios de la policía, y estos castigados con suspensión por treinta días la primera vez y con destitución en caso de reincidencia, sin perjuicio de su responsabilidad criminal por violación de sus deberes, cuando infringieran lo dispuesto anteriormente.

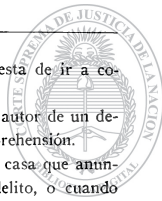
Art. 82 — Las autoridades policiales que, para el ejercicio de sus funciones, tuvieren necesidad de penetrar en un establecimiento público, deberán, previamente, solicitar permiso de la autoridad o empleado a cuyo cargo estuviere el establecimiento. Este permiso no podrá ser negado sin causa legítima.

Art. 83 — Cuando para los fines de la investigación fuere necesario penetrar en el domicilio de algún particular, las autoridades policiales deberán recabar del Juez competente la respectiva orden de allanamiento.

Art. 84 — No será necesario el requisito establecido en el artículo anterior en los siguientes casos:

- 1º Cuando se denuncie por uno o más testigos haber visto personas que han asaltado una casa, introdu-





ciéndose en ella en actitud manifiesta de ir a cometer algún delito.

- 2° Cuando se introdujere en la casa el autor de un delito a quien se persigue para su aprehensión.
- 3° Cuando se oigan voces dentro de la casa que anunciaran estarse cometiendo algún delito, o cuando se pide socorro.

En tales supuestos la entrada a la casa, sin el requisito del allanamiento, podrá llevarse a cabo por cualquier representante o agente de las autoridades policiales.

Art. 85 — Cuando en el momento de la comisión de un delito la persona a quien le fuera imputada ofreciere síntomas de ebriedad, las autoridades policiales dispondrán que sea examinada por un médico oficial y, a falta de éste, por el médico que encuentren, agregando el informe que éste produzca.

Art. 86 — Las autoridades policiales formarán proceso de todas las diligencias de prevención que practiquen.

El proceso de prevención deberá expresar el lugar, hora, día, mes y año en que se inició.

Art. 87 — La recepción de las pruebas por las autoridades policiales se hará con observancia de las mismas formalidades impuestas a los Jueces de Instrucción y con las limitaciones mencionadas anteriormente.

Art. 88 — Concluídas las diligencias urgentes de la prevención, las autoridades policiales elevarán las actuaciones al Juez de Instrucción dentro de las veinticuatro horas, o antes si éste lo dispusiere así.

Art. 89 — La prevención no podrá prolongarse en ningún caso por más de cinco días.

Art. 90 — El término fijado en el artículo anterior no obstará a que, si hubiere alguna persona detenida por imputársele el delito o participación en el mismo, sea remitida al Juzgado de Instrucción a fin de recibirse declaración indagatoria dentro del plazo legal. Si la detención se hubiera producido en la ciudad o pueblo en que el Juzgado tuviera su asiento, la remisión del detenido a presencia del Juez se hará dentro de los sesenta minutos de producirse aquella, bajo pena de doscientos pesos de multa al empleado o funcionario policial responsable de la demora. Cuando la detención se produjese fuera de aquel sitio, el plazo para la remisión del detenido se aumentará en una hora más por cada kilómetro de distancia. Esta disposición no regirá cuando el detenido se halle enfermo y su traslado signifique un grave riesgo para su salud, en cuyo caso se informará inmediatamente al Juez para que adopte las providencias que correspondan.

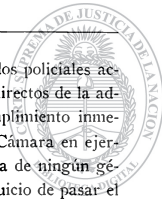
Art. 91 — Las autoridades policiales, aun después de terminada la prevención, practicarán todas las diligencias que les encomendara el Juez o Cámara y comunicarán a estos cualquier circunstancia relativa al delito de que hubieran tenido conocimiento con posterioridad a la prevención.

---

**Art. 89.** — Tiende a evitar la corrupción de las prevenciones interminables que se usan actualmente, con detrimento de las funciones de los jueces y muchas veces perjudicando el éxito de la investigación.

**Art. 90.** — Damos muchas facultades a los funcionarios de la policía para llegar al descubrimiento de la verdad, pero les imponemos obligaciones ineludibles para evitar los abusos de autoridad y las detenciones prolongadas injustamente.

**Art. 91-2.** — Son auxiliares de la justicia y deben estar atentos a sus mandatos y a las exigencias de la investigación en la que "previnieron".



Art. 92 — Los funcionarios y empleados policiales actuarán, en todos los casos, como auxiliares directos de la administración de justicia, debiendo dar cumplimiento inmediato a toda orden emanada de un Juez o Cámara en ejercicio de sus atribuciones, sin consulta previa de ningún género a sus superiores jerárquicos y sin perjuicio de pasar el aviso correspondiente, a los efectos del cómputo de sus horas de servicio.

Art. 93 — Las autoridades policiales no podrán en ningún caso, calificar los hechos que sirvan de base a un proceso penal, y al caratular los expedientes solo consignarán el nombre del o de los imputados. La calificación legal de esos hechos corresponde exclusivamente al Juez o Cámara que intervengan en la causa.

#### CAPITULO IV

##### DEL PROCEDIMIENTO DE OFICIO

Art. 94 — Cuando se proceda de oficio, formará la cabeza del proceso el auto que mande proceder a la averiguación del delito.

Este auto deberá contener en lo posible:

1º La determinación del hecho punible.

2º El tiempo en que ha llegado a noticia del Juez.

---

**Art. 93.** — Hemos establecido el medio de terminar con el abuso que significa la calificación del hecho imputado según el criterio del empleado policial que caratuló el expediente o que intervino en la prevención. Es sabido que esa calificación determina, durante muchos días, la libertad o el encierro de una persona que puede ser inocente, y no es posible dejarla en manos de personas que por su capacidad o por las influencias a que se hallan sometidas, no están en condiciones de hacerlo correcta e imparcialmente.

- 3º La designación del lugar en que ha sido ejecutado.
- 4º La orden de proceder a la averiguación y al descubrimiento de los autores y copartícipes.
- 5º La determinación de las primeras diligencias que se consideren necesarias o convenientes y que se manden practicar.
- 6º La citación del Fiscal a efecto de que tome en el sumario la intervención que legalmente le corresponde.

## TÍTULO IV

### DE LOS ACTOS DE INSTRUCCION

#### CAPÍTULO I

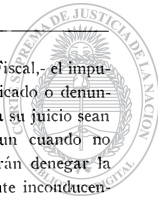
##### DISPOSICIONES GENERALES Y NATURALEZA DEL PROCESO SUMARIO DE INSTRUCCION

Art. 95. — Los Jueces a quienes corresponda la instrucción examinarán sin demora la denuncia y demás actuaciones que les sean remitidas por los fiscales o las autoridades policiales, y harán practicar en estos casos, así como en los que el procedimiento se iniciare de oficio o por denuncia o querella, todas las diligencias que reputen necesarias para la comprobación del delito y la individualización de las personas responsables de su ejecución. Ordenarán la detención de esas mismas personas en los casos autorizados por la ley, así como su incomunicación, cuando fuere indispensable, y por el término que la ley consiente.

Art. 96. — Los Jueces están obligados a practicar to-

---

**Art. 96.** — La prueba es la parte más sagrada e importante del juicio penal. Coartarla, es un crimen de lesa humanidad. Dejarla librada al criterio exclusivo del instructor, es otro crimen. Nosotros terminamos con este sistema abominable que tantos perjuicios ha ocasionado en nuestro país.



das las medidas de prueba propuestas por el Fiscal, el imputado o su defensor, y el querellante, damnificado o denunciante y sus abogados, como también las que a su juicio sean indispensables para esclarecer los hechos, aun cuando no las hubieren propuesto las partes. Sólo podrán denegar la ejecución de aquellas medidas manifiestamente inconducientes a la averiguación de los hechos, en cuyo caso deberán exponer en auto motivado las razones que tuvieren para ello. La resolución denegatoria será apelable dentro de los tres días de dictada, sin que por ello se paralice la causa.

Art. 97 — El proceso sumario de instrucción es público para las partes y sus abogados. En las causas por delito cuya pena máxima exceda de seis años de prisión o reclusión, el Juez Instructor podrá decretar el secreto del sumario y la incomunicación del o de los imputados, por un término que no exceda de cinco días, comunicándolo de inmediato a las autoridades policiales que hayan prevenido en la causa, a sus efectos.

Art. 98 — Los Jueces de Instrucción, antes de practicar las medidas de prueba solicitadas por el imputado o su defensor, el querellante, el damnificado o el Fiscal, y las demás medidas a que tiene derecho de asistir, mandarán que sean notificados con veinticuatro horas de anticipación, por los menos, bajo pena de nulidad de tales actos. Cuando la presencia del imputado no sea indispensable, bastará la citación del defensor, el cual será notificado en todos los casos en que deba producirse prueba. También lo será el Fiscal.

Art. 99 — Si a pesar de la notificación los citados no

---

Art. 97. — Véase el N° 28-31 de la Exposición.

Art. 98. — Tiende a asegurar la imparcialidad de la investigación.

concurrieren, el acto de que se trate se llevará a cabo sin su presencia.

Art. 100 — Para las pesquisas domiciliarias no será necesaria la notificación.

Art. 101 — Las diligencias de instrucción que hubieran de practicarse fuera del lugar en que el juzgado tenga su asiento, pero dentro de la provincia o territorio, serán encomendadas, directamente por los jueces de instrucción a los funcionarios policiales de la localidad donde aquéllas deban realizarse o verificarse, sin perjuicio de que cuando lo consideren necesario o indispensable, los propios jueces se trasladen al lugar que corresponda y tomen las medidas o impartan personalmente las órdenes del caso para llenar su cometido.

## CAPÍTULO II

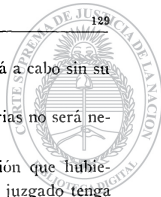
### DE LA COMPROBACION DEL DELITO

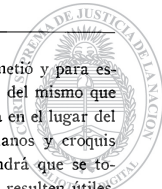
Art. 102 — El Juez de Instrucción, por sí o por intermedio de los auxiliares que se designen, procederá a recoger todas las pruebas materiales de la perpetración del delito, así como las armas, instrumentos, documentos y efectos de cualquier clase que hayan podido ser utilizados por los delincuentes, sea para consumir, sea para preparar el delito.

Se labrará un acta con la descripción minuciosa de los efectos, en la que se expresará dónde y en poder de quién se encontraban y en qué día y hora fueron recogidos.

Art. 103 — Se adoptarán todas las precauciones necesarias para la conservación de tales efectos y cuando ésto no fuera posible se dejará la constancia respectiva.

Art. 104 — Cuando fuere necesario, para mejor compe-





netrarse de la forma en que el delito se cometió y para establecer, con la mayor precisión, los rastros del mismo que hayan podido subsistir, el Juez se constituirá en el lugar del hecho, ordenará el levantamiento de los planos y croquis que pudieran servir de ilustración y dispondrá que se tomen las fotografías que, para el mismo fin, resulten útiles. De esta diligencia, a la que se dispondrá que concurren los peritos y auxiliares que reclame la especialidad del caso, el Juez de Instrucción dejará constancia detallada en acta que se agregará al proceso.

Art. 105 — Cuando no hubiesen quedado huellas del delito que motivare la instrucción, el Juez averiguará si han desaparecido natural o casualmente o por la acción de alguien, dejándose constancia del resultado de la averiguación.

Art. 106 — En todos los casos en que así lo exija la naturaleza del delito, si la persona, sobre quien recayó la acción material fuere habida, se hará una relación de su estado, requiriéndose el concurso del perito o peritos que fueren necesarios. En los casos de muerte por lesiones, se deberá consignar la naturaleza, número y situación de ellas, la posición en que fué encontrado el cadáver y la dirección de los rastros de sangre y demás que se advirtieren.

Art. 107 — Si fuere habida la cosa objeto del delito se procederá a establecer el estado de la misma.

También para esta diligencia, si hubiere necesidad, se requerirá el concurso de uno o más peritos.

Art. 108 — Cuando en el acto de describir la persona o cosa objeto del delito, y los lugares, armas, instrumentos o efectos relacionados con el mismo, estuvieran presentes o fueran conocidas personas que puedan declarar acerca del

modo y forma en que aquél hubiese sido cometido y de las causas de las alteraciones que se observen en dichos lugares, armas, instrumentos o efectos o acerca de su estado anterior, serán examinadas inmediatamente después de la descripción por el Juez de la causa.

Art. 109.—A los fines de lo dispuesto en el artículo anterior, el Juez podrá ordenar que no se ausenten, durante la diligencia de descripción, las personas que hubieren sido halladas en el lugar; y que comparezcan, inmediatamente, las que se hallaren en otro lugar.

Los que desobedecieran la orden incurrirán en la responsabilidad señalada para los testigos.

Art. 110.—Cuando se trate de establecer si un hecho se ha cometido de un modo determinado, el Juez de Instrucción podrá disponer que se haga la reproducción del mismo en las condiciones que se afirma o se considera haberse producido. Procurará, en cuanto las circunstancias lo permitan, que se excluya toda publicidad.

Quedan prohibidas las reproducciones que ofendan el sentimiento nacional o religioso, la piedad hacia los muertos y la moral pública, o las que pueden poner en peligro el orden público.

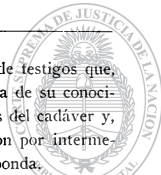
El imputado tiene el derecho de no concurrir a las reconstrucciones ordenadas.

Art. 111.—Si la instrucción tuviere lugar por causa de muerte violenta o sospechosa de criminalidad y la persona fuere desconocida, antes de proceder al entierro del cadáver o después de su exhumación, hecha la descripción

---

**Art. 109.**—La diligencia debe cumplirse o realizarse de inmediato para que las personas afectadas no se perjudiquen innecesariamente por simple comodidad del instructor.





correspondiente, se identificará por medio de testigos que, a la vista del mismo, den razón satisfactoria de su conocimiento. Se tomarán las impresiones digitales del cadáver y, en su caso, podrá ordenarse la identificación por intermedio de la oficina dactiloscópica que corresponda.

Art. 112 — No habiendo testigos que reconozcan el cadáver, si el estado del mismo lo permitiere, se expondrá al público, antes de practicarse la autopsia, durante veinticuatro horas, por lo menos. En las puertas del Juzgado o en las de la oficina de las autoridades policiales, según los casos, se fijará un cartel expresando el sitio, día y hora en que el cadáver fué hallado y el Juez que estuviere practicando la instrucción a fin de que, quien tuviere algún dato que pueda contribuir al conocimiento del cadáver o al esclarecimiento del delito y sus circunstancias, lo comunique al Juez o a las autoridades policiales. Los mismos datos se darán a la información periodística a sus efectos.

Art. 113 — Cuando la instrucción fuere motivada por causa de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, no apareciendo de una manera manifiesta e inequívoca la causa de la muerte, se ordenará la autopsia del cadáver. En la misma deberán encontrarse presentes, siempre que fuera posible, el Juez o un representante de las autoridades policiales. Únicamente el Juez podrá disponer que la autopsia no sea practicada.

Art. 114 — La autopsia se practicará lo más pronto que sea posible, por médicos oficiales o municipales, si los hubiere en el lugar. No habiéndolos, serán designados médicos residentes en ese lugar o en el más próximo.

Art. 115 — El médico que haya asistido al difunto en la enfermedad que inmediatamente precedió a la muerte,

no podrá ser nombrado para hacer la autopsia, pero podrá ser oído respecto de todos los datos referentes al curso de la enfermedad que se presume determinante de la muerte.

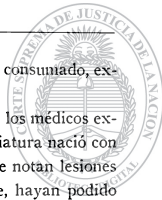
Art. 116 — La putrefacción del cadáver, por avanzada que sea, no será causa para omitir la autopsia cuando ella fuere dispuesta por el Juez.

Art. 117 — Los médicos encargados de la autopsia deberán asistir a la exhumación del cadáver para dirigir la extracción y apertura del féretro, así como para recoger eventuales elementos de importancia para el juicio, sobre el estado de conservación del cadáver, la posición en que fué hallado y la procedencia de sustancias contenidas en los líquidos cadavéricos.

Art. 118 — Cuando existan sospechas de envenenamiento se separarán y conservarán, para los análisis correspondientes, las partes del féretro que estuvieron en contacto directo con el cadáver. En todos los casos en que medien aquellas sospechas, el Juez ordenará el análisis químico de los órganos o sustancias que se presume contienen el veneno, previa verificación de estar intactas las etiquetas numeradas y rubricadas, que los envases deben tener, para prevenir toda sustitución o alteración.

Art. 119 — Los médicos encargados de la autopsia presentarán un informe en el que describirán exactamente la operación y dictaminarán sobre la naturaleza de las heridas o lesiones, y el instrumento con que fueron causadas, el origen del fallecimiento y sus circunstancias.

Art. 120 — En todos los casos, sea cual fuere el medio empleado para el reconocimiento de las lesiones, los peritos deben manifestar si, en su opinión, la muerte ha sobrevenido a consecuencia de aquellas o si ha sido el resultado de causas



preexistentes o posteriores, extrañas al hecho consumado, explicando las razones en que se fundan.

Art. 121 — En los casos de infanticidio, los médicos expresarán la época probable del parto, si la criatura nació con vida, cuánto tiempo vivió, si en el cadáver se notan lesiones y cuáles son las causas que, razonablemente, hayan podido producir la muerte.

Art. 122 — En los casos de aborto, los médicos harán constar la preexistencia de la gravidez, los signos demostrativos de la expulsión violenta del feto o embrión, las causas que hayan determinado el hecho y toda comprobación de la que pueda inferirse si el aborto fué provocado por la madre o por algún extraño, de acuerdo o contra la voluntad de aquélla.

Art. 123 — En los casos de lesiones, el Juez dispondrá que los peritos médicos informen acerca de la importancia de las mismas y el tiempo por el cual hayan inutilizado para el trabajo a la víctima. Informarán, además:

- 1° Si la lesión ha producido una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra, si ha puesto en peligro la vida del ofendido o si le ha causado una deformidad permanente del rostro.
- 2° Si la lesión ha producido una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad para engendrar o concebir.

Art. 124 — En los casos de abandono de persona, se establecerá la edad del menor abandonado y la incapacidad por enfermedad que afecte a la persona víctima del delito.

Art. 125 — En los casos de violación, se ordenará el examen médico de la víctima para establecer la efectividad del acceso carnal y la presencia de las circunstancias que definen y califican el delito.

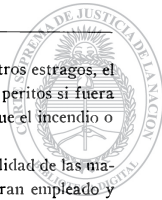
Art. 126 — En los robos, hurtos y estafas deberá comprobarse, ante todo, cuando menos por semiplena prueba, la existencia anterior y la desaparición de las cosas que se dicen robadas, hurtadas o estafadas. En defecto de esa comprobación, se admitirá la declaración jurada del dueño si fuera persona de notoria honradez, y que, además, haya podido estar en posesión de las cosas robadas, hurtadas o estafadas.

Art. 127 — En los casos de robo se harán constar las huellas y rastros del delito y se designarán peritos, cuando las circunstancias lo aconsejaren, para que expliquen de qué manera, con qué instrumentos o medios y en qué época consideran que él ha sido verosímilmente ejecutado. Las mismas medidas, en lo pertinente, se adoptarán en los casos de hurtos calificados por el empleo de llave falsa o ganzúa o por haberse cometido con escalamiento.

Art. 128 — En los casos de defraudación, los peritos establecerán la existencia o inexistencia de las circunstancias especificadas en los artículos 173, 174 incisos 4º y 5º, y 176 a 180 del Código Penal.

---

**Art. 128.** — Cuando existe alteración en la calidad o cantidad de las cosas o efectos que deben entregarse en virtud de un contrato, es indispensable que los peritos se expidan previamente y establezcan en qué forma y en qué grado se ha incurrido en la aludida situación prevista por el Código Penal.



Art. 129 — En los casos de incendio y otros estragos, el Juez procurará establecer, con el concurso de peritos si fuera necesario, el lugar, la manera y la época en que el incendio o los otros estragos se produjeron.

Los peritos informarán respecto de la calidad de las materias incendiarias o explosivas que se hubieran empleado y si con motivo del hecho se ha creado peligro para la vida de las personas o para los bienes, haciendo especial referencia al peligro que puedan haber corrido los establecimientos, dependencias o locales especialmente considerados por el Código Penal cuando establece las circunstancias calificativas de dichos delitos.

Art. 130 — En los casos de intimidación pública se dispondrá el exámen y análisis por los peritos de las bombas y explosivos empleados para la comisión del delito.

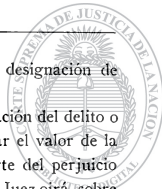
Art. 131 — Si en caso de accidente en las vías férreas se produjere la muerte o lesión de alguna persona, el conductor del tren hará detener a éste para recoger al muerto o herido, haciendo constar, ante todo, su situación y estado, y dará aviso a la autoridad más próxima para que ésta comunique el hecho al Juez competente.

Art. 132 — En los casos de falsificación de documentos públicos o privados, se observarán las siguientes reglas:

- 1° Presentado que sea el documento argüido de falso, se rubricarán todas sus fojas por el juez, el Fiscal o las autoridades policiales ante quienes se presente la denuncia o se formule querella.
- 2° Se hará constar en un acta el estado material del documento, indicándose las raspaduras, interlineaciones, adiciones y demás circunstancias que puedan indicar la falsificación o adulteración. Se expresa-

rá, además, el cumplimiento de la formalidad prescripta en la regla precedente o la imposibilidad de ese cumplimiento por no permitirlo el estado material del documento.

- 3º Se procurarán escrituras que puedan servir para el cotejo, requiriéndolas de los archivos u oficinas en que se encuentren o disponiendo que, en caso de que no puedan retirarse de tales oficinas o archivos, el cotejo se practique en ellos.
- 4º Se admitirán para el cotejo escrituras privadas, cuando las partes las reconocieren.
- 5º Los particulares que tuvieren en su poder documentos que hayan sido indicados para el cotejo, no serán compelidos inmediatamente para que los presenten; pero, si después de habérseles citado para la entrega o para que expongan los motivos de su negativa, fuesen estos desestimados e insistieran en la negativa, el Juez podrá compelerlos con apremio personal y ordenar el secuestro de aquellos.
- 6º El documento argüido de falso se le presentará al imputado en el acto de la declaración indagatoria para que declare si lo reconoce y será requerido para que lo rubrique en todas sus páginas. Si se negare a practicar el reconocimiento, se dejará constancia en el acta.
- 7º El imputado podrá ser requerido para que forme un cuerpo de escritura bajo el dictado del Juez. Si se negare a ello se dejará constancia.
- 8º Los reconocimientos periciales serán practicados por calígrafos u otras personas competentes, de acuerdo



con las disposiciones que rigen la designación de peritos.

Art. 133 — Siempre que para la calificación del delito o de sus circunstancias fuese necesario estimar el valor de la cosa que hubiera sido su objeto, o el importe del perjuicio causado o que hubiera podido causarse, el Juez oír<sup>a</sup> sobre ello al perjudicado y acordará, después, el reconocimiento y la justipreciación pericial.

El Juez facilitará a los peritos nombrados las cosas o elementos de apreciación sobre que hubiere de recaer su informe; si no estuvieren a su disposición, les suministrará los datos que se pudieran reunir.

Art. 134 — Sea cual fuere el delito que dé origen a la instrucción, el Juez procurará establecer todas aquellas circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que deben ser tenidas en cuenta a los fines de la aplicación de las penas, conforme a los preceptos del Código Penal, en cuanto puedan indicar la mayor o menor peligrosidad del delincuente.

### CAPITULO III

#### DE LA DECLARACION INDAGATORIA

Art. 135 — Cuando hubiere motivo bastante para sospechar que una persona es partícipe de un delito, el Juez de Instrucción procederá a recibirle declaración indagatoria.

Art. 136 — La declaración indagatoria, cuando el que hubiere de prestarla se encontrara detenido, será recibida, a más tardar, dentro de las veinticuatro horas desde la detención. Si ésta se hubiera efectuado en otro lugar que el del

---

Art. 135. — Véase N° 32 a 34 de la Exposición.

asiento del Juzgado, la declaración será recibida dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquella en que el imputado llegó al lugar donde funcionare el Juzgado, a cuyo efecto será enviado a este dentro del plazo fijado en el artículo 90, si el Juez no hubiera resuelto en el interin constituirse en el lugar en que se produjo la detención. El incumplimiento de los plazos fijados precedentemente constituirá falta grave del Juez y será corregida con mil pesos de multa por cada vez.

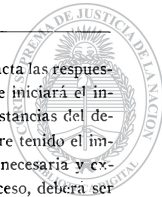
Art. 137 — La declaración indagatoria será tomada personalmente por el Juez, bajo pena de nulidad.

Art. 138 — A la declaración indagatoria será citado el defensor, bajo pena de nulidad, y cuando el imputado no lo hubiera designado, el acto podrá prorrogarse por no más de veinticuatro horas para que lo haga. Si transcurrido este plazo el imputado no hubiera hecho la designación, el acto se llevará a cabo con la presencia del Defensor de Pobres, bajo pena de nulidad. En su caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 42.

Art. 139 — Cada uno de los imputados en un mismo hecho prestará su declaración separadamente.

Art. 140 — El imputado no tiene obligación de declarar. De su negativa se dejará constancia. La declaración indagatoria se recibirá sin exigirle al imputado juramento o promesa de decir verdad. Se le preguntará, en primer término, por su nombre y apellido, sobrenombre o apodo, si los tuviera, edad, estado, profesión u oficio, nacionalidad y domicilio. En caso de ser extranjero, será requerido para que manifieste el tiempo de residencia que lleva en el país y en la Provincia, Territorio o Isla. Se le preguntará, también, si sabe leer y escribir.





Art. 141 — Consignadas que sean en el acta las respuestas que el imputado diere a las preguntas, se iniciará el interrogatorio tendiente a establecer las circunstancias del delito y la participación que en el mismo hubiere tenido el imputado. Este interrogatorio, que se fundará necesaria y exclusivamente en los datos acumulados al proceso, deberá ser claro y preciso, excluyéndose toda pregunta capciosa o sugestiva, así como toda coacción o amenaza. La infracción a estas prohibiciones se reputará falta grave y será reprimida con multa de quinientos pesos.

Art. 142 — El indagado podrá solicitar que se le explique toda pregunta que manifieste no haber entendido y el Juez lo hará, aunque no mediare semejante petición, si advirtiere que ello es necesario. Al iniciarse el interrogatorio se le hará al imputado la advertencia del derecho que este artículo le reconoce.

Art. 143 — El imputado no será urgido para responder. Podrá dictar su declaración y pedir, en el curso de la misma, que se practique cualquier diligencia. El Juez la decretará sin demora, si la estimara conducente.

Art. 144 — Ninguna manifestación que el imputado hiciera en su descargo podrá omitirse en el acta respectiva. Esta deberá traducir, con la mayor exactitud posible, todo cuanto el imputado expresare.

Art. 145 — La declaración indagatoria no podrá interrumpirse. Sin embargo si se prolongase por mucho tiempo o si el número de preguntas fuese tan considerable que el imputado hubiera perdido la serenidad del juicio necesaria, el Juez suspenderá el examen hasta que el imputado descanse

Art. 145. — Confirma el principio del art. 48.

y recupere la calma. La declaración será suspendida siempre que se advirtiesen, en el imputado, indicios de enajenación mental. En tal caso se ordenará el examen médico respectivo, sin que ello obste a la detención o incomunicación.

Art. 146 — Durante la declaración se preguntará al imputado si conoce el instrumento con que el delito se cometió o cualesquiera otros objetos que con él tengan relación, los cuales le serán mostrados.

Art. 147 — Al terminar el interrogatorio se le preguntará al imputado si antes fué objeto de algún otro procesamiento, por qué causa, ante qué Juez, si fué condenado y si cumplió la condena. Acto continuo se le hará saber el motivo del proceso actual y si le asiste el derecho de solicitar su libertad provisoria y en qué condiciones, todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 3 del presente código.

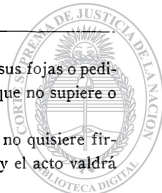
Art. 148 — El imputado podrá leer el acta en que haya sido consignada su declaración. Si no lo hiciere, la leerá el Secretario. De la lectura se hará mención expresa, bajo pena de nulidad. En este acto, manifestará el indagado si se ratifica en su contenido, o si tiene algo que añadir o enmendar.

Art. 149 — Si el declarante no se ratifica en sus respuestas y si tuviere algo que añadir o enmendar, así se hará; pero no se raspará lo escrito, sino que se agregarán las nuevas declaraciones, enmiendas o alteraciones al final del acta, con referencia a lo enmendado o alterado, cuando esto tuviere lugar.

Art. 150 — La declaración será firmada por todos los que hubieren intervenido en ella bajo pena de nulidad. Si el

---

**Art. 150.** — Para evitar la sustitución de las declaraciones.



declarante lo quisiere, rubricará cada una de sus fojas o pedirá que se rubriquen por el Juez, en caso de que no supiere o no pudiese hacerlo.

Si el imputado no supiere, no pudiese o no quisiere firmar la declaración, se hará mención de ello y el acto valdrá sin su firma.

Art. 151 — No se harán enmiendas, raspaduras o correcciones en el acta, debiendo salvarse al final de la misma, las faltas o errores que se hubieran cometido.

Art. 152 — Si el imputado no entendiera el idioma nacional o no supiera expresarse en el mismo, será interrogado por intermedio de un intérprete que prestará juramento de conducirse bien y fielmente en el desempeño de su cargo.

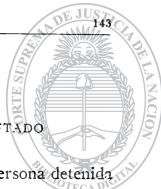
Art. 153 — Si el interrogado fuera sordomudo y supiere leer, las preguntas se le harán por escrito. Si supiere escribir contestará por escrito. Si no supiere ni lo uno ni lo otro, se nombrará un intérprete por intermedio del cual se le harán las preguntas y se le recibirán las respuestas. El intérprete prestará juramento de conducirse bien y fielmente en el desempeño de su cargo.

Art. 154 — El procesado podrá declarar cuantas veces quisiere ante el Juez de Instrucción, quien le recibirá inmediatamente la declaración, si tuviere relación con la causa.

Art. 155 — El Juez podrá disponer que el imputado comparezca a su presencia para ampliar su declaración, cuantas veces lo considere necesario. En estas ampliaciones se observarán las mismas formalidades que se establecen para la declaración indagatoria.

## CAPITULO IV

## DE LA INCOMUNICACION DEL IMPUTADO



Art. 156 — La incomunicación de una persona detenida podrá ser decretada, únicamente, por el Juez que conozca de la causa o por las autoridades policiales, siempre que para ello existiere causa bastante, que se expresará en la resolución respectiva.

Art. 157 — Cuando la incomunicación fuere decretada por las autoridades policiales, estas la harán saber al Juez de Instrucción dentro de los sesenta minutos de decretarla y por el medio más rápido de comunicación, bajo la pena establecida en el art. 79 inciso 9° al responsable de la medida. El Juez ordenará su inmediato levantamiento si considerase que no existe motivo para que continúe.

Art. 158 — En ningún caso la incomunicación podrá exceder de cinco días. No será decretada contra persona alguna a quien se impute la comisión de un delito cuya pena máxima no exceda de cuatro años de prisión o reclusión.

Art. 159 — Se permitirá al incomunicado el uso de libros y demás objetos que pidiere, teniendo especial cuidado de que ellos no puedan servir de medio para quebrantar la incomunicación o para consumir algún atentado contra su persona o contra otros.

Estos objetos no se entregarán sin previa autorización

---

**Art. 156.** — Tratándose de una medida tan grave para la defensa, debe ser el Juez quien la decreta; pero haciéndolo las autoridades policiales en los casos previstos (art. 158), deberán ponerlo en conocimiento de aquél para que la confirme o levante (art. 157).

**Art. 157.** — El plazo exiguo tiene por objeto evitar las demoras injustificadas que prolongan indebidamente una incomunicación improcedente.



del Juez de Instrucción o de las autoridades policiales que decretaron la incomunicación.

Se le permitirá, igualmente, la ejecución de aquellos actos civiles urgentes que no perjudiquen la responsabilidad civil ni los propósitos de la instrucción.

Si el Juez de Instrucción o las autoridades policiales negaren sin motivo el permiso a que se refiere el presente artículo, sufrirán una multa de doscientos pesos.

Art. 160—La incomunicación no será nunca un obstáculo para que se practiquen los reconocimientos médicos que ordenare el Juez de la causa o para que el prevenido reciba la asistencia facultativa que necesitare.

Art. 161 — El Alcaide, Director, Jefe o encargado del establecimiento donde se encontrare el incomunicado, cuidará, bajo su responsabilidad, de que éste no se comunique con otras personas que las que permitiera el juez, ni para otros fines que los que hubieren motivado la autorización. La infracción a lo dispuesto anteriormente constituye falta grave para aquellos y será reprimida con multa de doscientos pesos, la primera vez, y destitución la segunda, sin perjuicio de las sanciones que establece el Código Penal tanto para ellos como para los terceros que violaron la incomunicación.

## CAPITULO V

### DE LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DEL IMPUTADO Y DE SU IDENTIDAD

Art. 162 — El Juez de Instrucción procurará hacer constar en el proceso, todas las circunstancias personales del imputado que puedan ser de interés para la calificación del hecho y para graduar la penalidad que pudiera corresponderle. Cuidará especialmente de hacer constar, recabando pa-

ra ello los informes correspondientes, aquellas circunstancias que puedan autorizar la condena condicional y los beneficios de la libertad provisoria y de la eximición de prisión.

Art. 163 — A los efectos del artículo anterior el Juez de Instrucción recabará de la Policía y del Registro Nacional de Reincidencia, después de haberle recibido declaración indagatoria, los informes relativos a los procesos y condenas de que el imputado hubiere sido objeto anteriormente. Los informes deberán evacuarse dentro de las veinticuatro horas, bajo pena de doscientos pesos de multa al empleado o funcionario responsable de la demora.

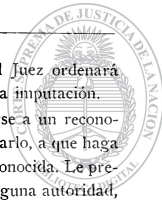
Art. 164 — Las autoridades policiales, cuando remitan al Juez las actuaciones de la prevención, le remitirán, también, los datos que hubieran podido obtener acerca de las circunstancias a que se refiere el precedente artículo, así como una sumaria información de vida y costumbres del imputado, que practicarán sin demora en el lugar donde aquel tenga su residencia o domicilio.

Art. 165 — Si el imputado, al recibirle su declaración, negare su nombre y apellido, se procurará identificarlo por los medios que parezcan oportunos. Las señas personales del procesado se harán constar con la minuciosidad posible a fin que puedan servir como prueba de su identidad.

## CAPITULO VI

### DEL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS Y COSAS

Art. 166 — En los casos en que se imputa la perpetración de un delito a persona cuyo nombre se ignora o fuera común a varios y en aquellos en que dicha persona niegue la posibilidad de haber sido vista en condiciones que autoricen



a presumir su participación en el hecho, el Juez ordenará que sea reconocida por los que le hicieren la imputación.

Art. 167 — Siempre que deba procederse a un reconocimiento, el Juez invitará al que deba practicarlo, a que haga la descripción de la persona que ha de ser reconocida. Le preguntará después, si fué llamado antes, por alguna autoridad, para verificar el mismo reconocimiento, o si, con posterioridad al hecho del proceso, vió a la persona en cuestión y si ésta le fué señalada por alguien, o si vió fotografías de la misma. De las declaraciones del interrogado se dejará constancia en el acta, bajo pena de nulidad.

Inmediatamente el Juez procurará la presencia de otros dos o más personas que tengan alguna semejanza con la que ha de ser objeto del reconocimiento. Esta se presentará, en cuanto sea posible, en las mismas condiciones en que pudo ser vista por el que va a hacer el reconocimiento.

Colocada en una fila la persona destinada para la confrontación y las otras dos o más, se introducirá al declarante, y después de tomarle juramento de decir verdad, se le preguntará si persiste en su declaración anterior, y si entre las que forman la fila se encuentra la que designó en su declaración o imputación. Si esta última pregunta fuera contestada afirmativamente, para lo que se le invitará a que examine con detención a los integrantes de la fila, se le prevendrá que designe al que fué objeto de su imputación y que manifieste las diferencias y semejanzas que observare en el estado actual de la persona señalada y el que tenía en la época a que su declaración o imputación se refiere.

Art. 168 — En el acta que se extienda se harán constar todas las circunstancias de la diligencia, así como los nombres de las personas que hubiesen formado la fila.

Art. 169 — Cuando fuesen varios los que hubieren de reconocer a una persona, la diligencia se practicará separadamente con cada uno de ellos sin que puedan comunicarse entre sí hasta que se haya efectuado el último reconocimiento.

Cuando fueran varios los que hayan de ser reconocidos por una misma persona podrá hacerse el reconocimiento de todos en un solo acto.

Art. 170 — El que tuviere o prendiere a un presunto culpable que no fuera conocido, tomará las precauciones necesarias para que el detenido no haga en su persona o vestido alteración alguna que pueda dificultar su reconocimiento.

Art. 171 — Cuando fuese necesario el reconocimiento de una cosa, el Juez invitará a la persona que deba practicarlo a hacer la descripción de aquella y a declarar si tal descripción se funda en su conocimiento anterior y directo de la cosa, o si, por otros motivos, ha tenido noticias, de la misma. De las manifestaciones que haga el declarante se dejará constancia, bajo pena de nulidad. Acto continuo se procederá al reconocimiento, observando, en cuanto sean aplicables, las reglas estatuidas para el reconocimiento de personas.

## CAPITULO VII

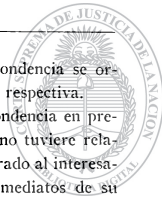
### DE LA INTERCEPTACION DE LA CORRESPONDENCIA

Art. 172 — El Juez podrá ordenar la interceptación de la correspondencia epistolar o telegráfica que el procesado remitiere o que le fuese dirigida, cuando considerase que ella le puede suministrar medios para la comprobación de los hechos o circunstancias de la causa.

---

**Art. 172.** — Es una facultad de que puede o no hacer uso el Juez, según lo estime conveniente.





La detención y remisión de la correspondencia se ordenará a la oficina de correos y telégrafos respectiva.

Art. 173 — El Juez abrirá la correspondencia en presencia del Secretario, la leerá para sí y si no tuviere relación con el proceso la devolverá en sobre cerrado al interesado, sus representantes o miembros más inmediatos de su familia. De todo ello se dejará constancia en acta.

Art. 174 — Si la correspondencia tuviere relación con el proceso, tomará las notas que considere necesarias y rubricadas las cartas y telegramas por el Juez, se agregarán al proceso o se conservarán por separado y bajo su responsabilidad, en la caja fuerte, para ser remitidas oportunamente a la Cámara.

Art. 175 — El Juez podrá ordenar, también, la interceptación de las comunicaciones telefónicas, para impedir las para tomar conocimiento de ellas, en los mismos casos en que puede interceptar la correspondencia epistolar y telegráfica.

## CAPITULO VIII

### DE LAS PESQUISAS

Art. 176 — Cuando el Juez tenga fundados motivos para sospechar que una persona lleva consigo cosas pertenecientes al delito o que puedan servir para la comprobación del mismo o la individualización de sus autores, ordenará la pesquisa personal.

Art. 177 — Cuando el Juez tenga fundados motivos para sospechar que esas cosas se encuentran en determinado lugar ordenará la pesquisa domiciliaria. La ordenará, también, cuando existan iguales motivos para sospechar que, en

un determinado lugar, se encuentra el imputado de un delito que tenga pena corporal y a los efectos de la detención que se hubiese decretado, o que en ese mismo lugar se encuentra alguna persona cuya detención sea necesaria a los fines de la instrucción.

Art. 178 — La pesquisa será practicada por el Juez o por los funcionarios policiales debidamente autorizados y con el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento del domicilio, si fuere necesario.

Art. 179 — Toda orden de pesquisa deberá especificar las personas u objetos de que se trate, describiendo particularmente el lugar que ha de ser registrado. No se expedirá mandato de esta clase sino por hecho punible apoyado en juramento o afirmación, sin cuyo requisito la orden o mandato no será exequible.

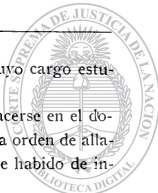
Art. 180 — Las pesquisas no podrán tener lugar antes de las siete horas del día ni después de las diez y nueve.

Esta limitación no rige cuando pueda haber peligro en la demora, cuando el interesado o su representante preste conformidad o cuando la diligencia debe efectuarse en un edificio o lugar público.

Art. 181 — Se reputan edificios públicos a los efectos de lo dispuesto en este capítulo:

- 1º Los que estuvieren destinados a cualquier servicio público.
- 2º Los que estuvieren destinados a cualquier establecimiento de reunión o recreo, fueren o no lícitos.
- 3º Cualquier otro edificio o lugar cerrado que no esté destinado a la habitación o residencia particular.

Art. 182 — Para practicar pesquisas en los lugares a que se refiere el inciso 1º del artículo anterior, el Juez debe-



rá dar aviso de atención a las personas a cuyo cargo estuvieren.

Art. 183 — Si la pesquisa hubiera de hacerse en el domicilio de un particular, se notificará a éste la orden de allanamiento o a su encargado, si aquél no fuere habido de inmediato.

Si el encargado tampoco fuera habido, se hará la notificación a cualquier otra persona, mayor de edad, que se hallare en el domicilio, prefiriendo, para esto, a los miembros de la familia del interesado.

Si no se hallare a nadie, se hará constar en la diligencia, ante dos testigos mayores de edad, y se procederá a realizar el acto.

Art. 184 — Desde el momento en que el Juez disponga la pesquisa en cualquier lugar, adoptará las medidas convenientes para evitar la fuga de la persona buscada o la sustracción de los instrumentos o efectos del delito, libros, papeles o cualquier otra cosa que hubiera de ser objeto del registro.

Art. 185 — La pesquisa se hará en presencia del interesado o de quien lo represente. A falta de ellos, en presencia de un miembro de la familia y, si ninguno hubiere, en presencia de dos testigos mayores de edad.

Art. 186 — El Juez puede ordenar, aún verbalmente, en el acto de la pesquisa domiciliaria, que sean requisadas las personas presentes, si se sospecha que ocultan cosas pertenecientes al delito o de interés para la investigación.

Art. 187 — En el caso de pesquisa personal, el Juez, antes de practicarla, puede pedir a la persona que entregue la cosa buscada. Si así lo hiciere, la pesquisa no se continuará, a menos que el Juez considerase conveniente disponer lo contrario.

La pesquisa sobre el cuerpo de una mujer será practicada por otra mujer, cuando sea posible y no importe una demora perjudicial.

En todo caso, las pesquisas personales se harán separadamente y de manera que, en los límites de lo posible, sea respetado el pudor de las personas.

Art. 188 — Practicada la pesquisa, el Juez hará extender un acta en la cual se consignará el resultado de la diligencia y toda circunstancia que pueda tener alguna importancia en la causa. Se hará el detalle de todos los objetos recogidos en el lugar y cuyo secuestro se hubiere ordenado.

El acta será firmada por todas las personas que hubieran intervenido en la pesquisa como ejecutores o testigos bajo pena de nulidad.

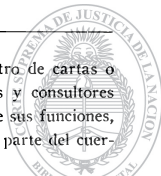
## CAPITULO IX

### DE LOS SECUESTROS

Art. 189 — El Juez ordenará el secuestro de los efectos e instrumentos del delito y de las demás cosas pertenecientes al mismo o que puedan ser útiles para la investigación.

El Juez podrá delegar la práctica de esta diligencia en el Secretario o en las autoridades policiales, disponiendo, en caso de necesidad, el allanamiento de los lugares y el empleo de la fuerza pública.

Art. 190 — El Juez adoptará todas las providencias que juzgue necesarias para la conservación de las cosas secuestradas en el mejor estado posible, tanto para que puedan ser utilizadas como elementos de comprobación, cuanto para ser devueltas, cuando corresponda, a los que tengan derecho a reclamarlas.



Art. 191 — No se ordenará el secuestro de cartas o documentos que los defensores, apoderados y consultores técnicos hayan recibido para el desempeño de sus funciones, salvo que tales cartas o documentos formen parte del cuerpo del delito.

Art. 192 — Las normas establecidas para las pesquisas serán observadas en los secuestros, bajo pena de nulidad.

## CAPITULO X

### DE LA DETENCION PREVENTIVA

Art. 193 — Fuera de los casos de pena impuesta por sentencia firme, la libertad de las personas no puede restringirse sino con el carácter de detención preventiva.

Art. 194 — La detención deberá decretarse cuando se tenga semiplena prueba o indicio vehemente de un hecho delictuoso y haya motivo bastante para determinar la persona o personas responsables, siempre que ese hecho esté reprimido con pena privativa de la libertad por más de dos años.

Art. 195 — Cualquiera que sea el tiempo de duración de la pena, se decretará la detención cuando, mediando las condiciones exigidas en el artículo anterior, el imputado no concurriera a la citación que se le haga, o cuando no tenga

---

**Art. 193.** — La detención preventiva puede decretarla el Juez en los casos previstos en el Código (art. 194 y 195); tiene por objeto asegurar a la persona incurso en un delito reprimido con más de dos años y sólo debe durar el tiempo estrictamente necesario para realizar las diligencias que ella impidió o que sirvan para aclarar su situación. Para que la detención preventiva se convierta en prisión preventiva, debe mediar resolución de la Cámara conforme a lo dispuesto en el Libro II, Título I, Capítulo V, art. 403 inciso 2°, no obstante que el imputado se halle gozando de los beneficios de la libertad provisoria en los casos en que proceda.

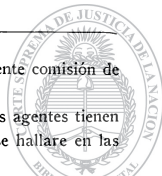
domicilio en la Provincia, Territorio o Distrito, o se encuentre prófugo, o fuere reincidente, o cuando haya motivos para suponer que tratará de burlar la acción de la justicia. Esta disposición no obstará a que al imputado se le conceda el beneficio de la libertad provisoria cuando corresponda otorgarlo.

Art. 196 — Los que no puedan obtener el beneficio de la libertad provisoria, serán siempre detenidos, tan pronto como existan, respecto de ellos, indicios bastantes de ser autores o partícipes de un delito.

Art. 197 — Nadie puede ser detenido sino por los agentes a quienes la ley confiere la facultad de hacerlo. Sin embargo, cualquier persona puede detener:

- 1º Al que intentare cometer un delito, en el momento de empezar a cometerlo.
- 2º Al delincuente en estado de criminalidad flagrante.
- 3º Al que se fugare del establecimiento o lugar en que se hallare extinguiendo una condena.
- 4º Al que se fugare del lugar en que estuviere esperando su traslación al establecimiento o lugar en que deba cumplir una condena; o al que se fugare en el acto de ser conducido a dicho establecimiento o lugar.
- 5º Al que se fugare estando preso por causa pendiente.
- 6º Al procesado que estuviere en rebeldía.

Art. 198 — Es flagrante el delito que se está cometiendo y se considera en estado de criminalidad flagrante al que fuere sorprendido en la ejecución del delito. Es considerado, también, en el mismo estado, el que, después del delito, fuere perseguido por la autoridad, por el damnificado o por cualquier otra persona; y el que fuere hallado con armas



u otros efectos que hagan presumir la reciente comisión de un delito.

Art. 199 — La autoridad policial o sus agentes tienen la obligación de detener a cualquiera que se hallare en las condiciones de los dos artículos anteriores.

Art. 200 — La autoridad o agente de policía que detuviere a una persona, deberá ponerla inmediatamente a disposición del Juez. Los particulares la entregarán, inmediatamente, también, al agente más próximo de la autoridad, y éste, a su vez, procederá en la forma establecida para el caso de ser él mismo quien hubiera ejecutado la detención.

Art. 201 — Detenida una persona bajo la imputación de un delito, el Juez, dentro del término fijado para ello, le recibirá declaración indagatoria y practicará las diligencias necesarias para decretar su libertad o mantener su detención.

## TÍTULO V

### DE LOS ACTOS PROCESALES

#### CAPÍTULO I

##### DE LAS NOTIFICACIONES, CITACIONES Y EMPLAZAMIENTOS

Art. 202 — Los autos y providencias judiciales deberán notificarse dentro de las veinticuatro horas después de dictados. Este término podrá ser reducido por el Juez o Tribunal en caso de urgencia.

Art. 203 — En los procesos pendientes ante las Cámaras, las notificaciones serán diligenciadas por los Ujieres.

---

**Art. 203.** — Es preciso que haya una oficina con el personal necesario para que las notificaciones se hagan en término, a fin de que los procesos

En los Juzgados de Instrucción las notificaciones serán diligenciadas por los Secretarios o por el empleado mayor de edad que en cada caso se designe.

Esta disposición solo se aplicará en las secciones donde no se organice la Oficina de Mandamientos y Notificaciones.

Art. 204 — Cuando las notificaciones fueren hechas en la Oficina, se dejará la debida constancia en el expediente. La persona a quien se notifique podrá sacar copia de la resolución. Siendo una de las partes o uno de sus abogados, podrá sacar copia de todo el expediente, una vez finalizado el período en que rige el secreto del sumario.

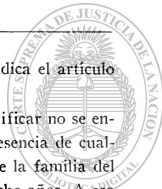
Art. 205 — La notificación será firmada por el funcionario que la practicare y por el interesado. Si éste no supiere o no pudiese firmar, lo hará un testigo. Si se negare, se dejará constancia, que suscribirán dos testigos. Los dependientes de las oficinas no podrán actuar como testigos.

Art. 206 — Si la notificación se hiciere en el domicilio de las partes, el Ujier, Secretario o empleado, llevará, por duplicado, una cédula en la que se habrá transcripto el auto de que se trate. Si la notificación fuere de una sentencia, solo se transcribirá la parte dispositiva. Requerida la presencia del interesado, le dará lectura de la cédula y le hará entrega de uno de los ejemplares. Al pie del otro ejemplar dejará constancia de la diligencia, con expresión del lugar, día y hora en que se llevó a cabo. Esta diligencia será suscripta por el interesado y si éste no supiere, no pudiese o no quisie-

---

no se dilaten inútilmente. La especialización de estos empleados en la realización de esta clase de diligencias y el conocimiento de los medios de comunicación para llegar cuanto antes a un sitio determinado, importan una considerable economía de tiempo y evita la necesidad de tener en cada juzgado empleados notificadores. Esto, mientras no se adopte el sistema de las notificaciones por medio del correo y del telégrafo.





re hacerlo, se procederá en la forma que indica el artículo anterior.

Art. 207 — Si aquél a quien se va a notificar no se encontrara en su domicilio, se requerirá la presencia de cualquier persona de la casa, preferentemente de la familia del requerido y que tenga no menos de diez y ocho años. A esa persona le será entregada la cédula, practicándose la diligencia en la forma que estatuye el precedente artículo.

Art. 208 — Si no se hallare persona alguna en el domicilio del que deba ser notificado, se dejará la cédula en poder del vecino más próximo con encargo de hacerla llegar a su destinatario. La diligencia se practicará con las formalidades establecidas para los demás casos.

Art. 209 — Si el vecino o vecinos solicitados a tal efecto se negaren a recibir la cédula o a dar sus nombres y firmar, aquella será fijada en la puerta de la casa que habite el notificado, en presencia de un testigo, que firmará la diligencia. Lo mismo se procederá cuando las personas de la casa del notificado opusieren idéntica negativa.

Art. 210 — Después de la instrucción no podrá hacerse notificación alguna en día domingo o de fiesta cívica o religiosa, ni antes de las siete horas o después de las diez y nueve, salvo los casos de habilitación de días u horas o si se tratare del juicio oral.

Art. 211 — Durante la instrucción, las notificaciones serán hechas en cualquier día y hora, si así lo exigieren las circunstancias.

Art. 212 — Las citaciones a los testigos y demás personas que no sean parte directa en el juicio y cuya comparecencia se considere necesaria o conveniente para la prosecución de la causa, se practicarán por los secretarios o em-

pleados que se designen, con las mismas formalidades establecidas para las notificaciones. Deberá expresarse, también, en la cédula, al apercibimiento de que en caso de no comparecer, incurrirán en multa de veinte a cien pesos moneda nacional y, a la segunda citación, de ser conducidos por la fuerza pública a los fines de la providencia decretada, sin perjuicio de ser procesados por el delito que su desobediencia pueda constituir.

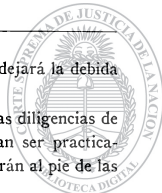
Art. 213 — La cédula del emplazamiento contendrá los requisitos establecidos para las notificaciones y el término en el cual ha de comparecer el citado.

Art. 214 — Si el que ha de ser notificado, citado o emplazado se hallare ausente del lugar donde se sustancia el proceso, pero dentro de la Provincia, Territorio o Distrito, la notificación o citación se hará por intermedio de las autoridades policiales del lugar en que se encuentre o por telegrama. Si se hallare fuera de la Provincia, Territorio o Distrito se verificará por medio de exhorto, que se librará el mismo día en que fuere ordenado.

Art. 215 — Si la notificación hubiere de hacerse a un detenido o condenado que se encuentre en algún establecimiento carcelario, podrá cometerse a la primera autoridad de ese establecimiento.

Art. 216 — Durante la instrucción, las citaciones y emplazamientos a las partes, peritos, testigos y abogados, se harán por escrito, expresando su objeto. Podrán encomendarse a las autoridades policiales, por medio de órdenes directas, en el caso del párrafo primero del artículo 214.

Art. 217 — Practicada la notificación, citación o emplazamiento, se unirá a los autos la cédula, el oficio o exhorto diligenciados. En el caso de que alguna de dichas di-



ligencias no se hubiera podido practicar, se dejará la debida constancia.

Art. 218 — En todos los casos en que las diligencias de notificación, citación o emplazamiento deban ser practicadas con intervención de testigos, estos firmarán al pie de las mismas y consignarán su domicilio.

Art. 219 — Las notificaciones, citaciones o emplazamientos que no se practiquen de conformidad a las normas establecidas, serán nulas. También lo serán todas las actuaciones practicadas con posterioridad y que se relacionen con la diligencia de que se trate.

Sin embargo, cuando la persona notificada, citada o emplazada, se hubiere dado por enterada, en el proceso, de la providencia que dió causa a la diligencia nula, ésta surtirá sus efectos, desde entonces, como si se hubiere hecho con arreglo a la ley si no se recurriera en término.

Art. 220 — La citación por edictos sólo se hará a los imputados cuyo domicilio se ignore y que no hayan podido ser notificados. Previamente, cuando de autos no resulte la inutilidad de la medida, se encomendará a las autoridades policiales la averiguación del paradero.

Si en el término de quince días las diligencias para descubrir el paradero no hubieren tenido éxito, se procederá a la publicación de edictos.

Art. 221 — Los edictos serán publicados durante el término de la citación en el Boletín Judicial de la Provincia, Territorio o Distrito y contendrán:

- 1º La designación del Juez que conociere de la causa.
- 2º El nombre y apellido del citado.
- 3º El delito que motiva el proceso.
- 4º El término dentro del cual deberá presentarse y el

apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, será declarado rebelde.

5° La fecha en que se expide.

6° La firma del Secretario.

Art. 222 — Un ejemplar del número del diario en que se hizo la primera publicación del edicto y otro del que contenga la última serán agregados al proceso.

Art. 223 — El término dentro del cual deberá presentarse el citado se contará desde el día de la última publicación.

Art. 224 — Sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden en que pudiera incurrir el encargado de una notificación, citación o emplazamiento practicado con violación de las formalidades estatuidas, será pasible de una multa de cincuenta a cien pesos, la primera vez. En caso de reincidencia perderá el empleo.

## CAPITULO II

### DE LOS EXHORTOS

Art. 225 — Dentro del territorio de la Nación serán válidos y deberán cumplirse sin dilación los exhortos dirigidos por un Juez a otro Juez sin necesidad de más requisito que la firma del exhortante puesta al pie del texto y el sello del Juzgado a su cargo.

Art. 226 — Ninguna formalidad especial será exigida para la redacción de los exhortos, bastando para darles cur-

---

**Art. 225.** — Terminamos de esta manera con las continuas cuestiones que llegan a la Corte Suprema por incumplimiento de exhortos en virtud de que éstos no suelen ir legalizados.



so que de su texto se desprenda claramente la diligencia a realizar.

### CAPITULO III

#### DE LOS EMBARGOS

Art. 227 — El embargo de bienes del imputado que ordene la Cámara al decretar la prisión preventiva, se practicará por el Oficial de Justicia o por el funcionario del mismo Tribunal a quien se le encomiende la diligencia. Cuando ella deba verificarse fuera del lugar del asiento de la Cámara, ésta la encomendará al Juez de Instrucción que corresponda para que la practique por sí o por el empleado que él designe.

Art. 228 — El imputado podrá sustituir el embargo por una caución personal o real que ofrezca suficiente garantía para cubrir su responsabilidad a juicio de la Cámara.

Art. 229 — El embargo se hará sobre bienes señalados por el imputado, o en su defecto, por su mujer, hijos u otras personas que se encuentren en el domicilio en el momento de la diligencia.

Si el imputado o las personas indicados no señalaren los bienes, se embargarán los que se reputen de propiedad del primero.

El embargo se hará en el orden y forma establecidos en el Código de Procedimiento Civil y Comercial respecto de las ejecuciones.

Art. 230 — Si los bienes embargados fueran muebles, el encargado de la diligencia nombrará un depositario, a quien le hará saber las responsabilidades que el cargo comporta y la obligación que tiene de conservar los bienes a disposición del Tribunal.

Art. 231 — Verificado el embargo, se requerirá al imputado para que manifieste, dentro de tercero día, si opta por que se enajenen los bienes embargados o por que se mantengan en depósito y administración.

Si optare por la venta o guardare silencio, se procederá a la enajenación en remate público hasta cubrir la cantidad señalada y el producido se depositará en el Banco de la Nación Argentina, a la orden del Tribunal y como perteneciente a la causa.

Si optare por el depósito y administración, cuando se trate de bienes muebles, el Tribunal nombrará un depositario administrador de reconocida solvencia, que recibirá los bienes bajo inventario.

Art. 232 — El administrador rendirá cuentas cuando se le exijan. Tendrá derecho a una remuneración que regulará el Tribunal teniendo en cuenta la importancia de los bienes y la de los trabajos practicados, y que nunca excederá del diez por ciento sobre el producto líquido de los bienes administrados.

Art. 233 — Los bienes embargados se enajenarán, aún contra la voluntad del imputado, cuando los gastos de administración y conservación excedan de su valor actual o de los productos que podrían dar, a menos que el pago de dichos gastos se asegure por el procesado u otra persona a su nombre.

Art. 234 — El embargo de bienes inmuebles no comprende el de sus frutos o rentas, salvo en el caso de que, expresamente, se disponga lo contrario.

Art. 235 — Cuando se trabe embargo sobre algún establecimiento comercial o industrial o sobre ganados, sementeras o plantaciones, la Cámara dispondrá la forma de

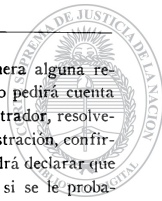
su administración, tratando de que en manera alguna resulte dispendiosa o perjudicial, a cuyo efecto pedirá cuenta semanal o mensual, según el caso, al administrador, resolverá sumariamente las quejas contra la administración, confirmará o separará del cargo a aquel y hasta podrá declarar que ha perdido el derecho a cobrar honorarios si se le probaren irregularidades, negligencia o mala administración, sin perjuicio de las sanciones establecidas por el Código Penal, para el caso de haber cometido algún delito en la administración.

Art. 236 — Si el embargo consistiere en pensiones o sueldos, se librará oficio a quien hubiere de satisfacerlos para que retenga y deposite en el Banco de la Nación Argentina, a la orden del Tribunal, la parte embargada de las pensiones o sueldos, conforme a lo dispuesto en la ley 9511.

Art. 237 — Todas las resoluciones que se adopten acerca de la venta ó administración de los bienes embargados, lo serán con citación del promotor de la acción civil, quien podrá formular, dentro de tercero día, las observaciones que juzgue pertinentes.

Art. 238 — Las actuaciones relativas a los embargos se practicarán en pieza separada del proceso.

Art. 239 — Las tercerías que se produzcan se sustanciarán en la forma que establece el Código de Procedimiento Civil y Comercial.



## CAPITULO IV

## DEL CARGO EN LOS ESCRITOS



Art. 240 — Los Secretarios de los juzgados de Instrucción y demás Tribunales, deberán poner cargo a todos los escritos, oficios o notas que se recibieren para ser agregados a los procesos y sus incidentes y expresarán, en ese cargo, la fecha y hora de la presentación o recibo de los escritos, oficios o notas.

Art. 241 — Si los escritos fueren presentados por persona que no sepa o no pueda firmar y otro lo hiciere a su ruego, exigirán que ello se verifique en su presencia.

Cuando no fuere posible la suscripción en su presencia y el escrito fuere presentado ya con una firma a ruego, practicarán las diligencias necesarias para establecer, si en efecto, el peticionante autorizó la firma.

Art. 242 — Los escritos que no pudieran presentarse en las horas hábiles a las oficinas respectivas, podrán llevar cargo de otro Secretario que el de la causa, a cuyo efecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispondrá lo necesario para que en cada sección judicial permanezca por lo menos un Secretario de turno hasta las 24 horas todos los días, el cual estará obligado a recibir personalmente los escritos y a distribuirlos en la primera hora hábil del día siguiente en las oficinas que corresponda, bajo pena de cien pesos de multa.

— • —  
**Art. 242.** — De este modo terminamos con el inconveniente de que después de las 17 es imposible encontrar un secretario para que ponga cargo a un escrito, a menos de conocerse el domicilio de alguno de ellos y obtener que lo haga "por favor".





## CAPITULO V

## DE LOS TERMINOS JUDICIALES

Art. 243 — Los actos procesales deberán practicarse dentro de los términos fijados en cada caso por la ley. Cuando no se fije término se practicarán dentro de los tres días.

Art. 244 — Los términos empezarán a correr desde la hora veinticuatro del día de su notificación. Si fueran comunes a varios interesados, correrán desde la hora veinticuatro del día de la última notificación que se practique.

Art. 245 — En los términos no se computarán los días feriados, ni los domingos.

Art. 246 — Los términos son improrrogables, salvo disposición legal en contrario.

Art. 247 — El vencimiento de los términos se opera por el solo transcurso del tiempo que abarcan, sin que sea necesario acusar rebeldía a la persona que omitió el ejercicio del derecho.

Art. 248 — Durante la instrucción y durante el juicio oral podrán realizarse todas las diligencias que sean necesarias, en cualquier día y en cualquier hora, sin que se requiera una expresa habilitación de días u horas.

Art. 249 — Los pedidos formulados por las partes, cuando sólo reclamen providencia de mero trámite, serán resueltos, a más tardar, en el transcurso del subsiguiente día hábil. De toda petición o escrito de que deba darse traslado, así como de los documentos con que se instruya, deberá el que los presente acompañar en papel simple y bajo su firma, tantas copias cuantas sean las personas con quienes litigue y a las cuales se les entregará, al notificarlas, la providencia que recaiga.

Art. 250 — La instrucción no podrá prolongarse más de treinta días, contados desde la fecha en que se practicó la primera diligencia, aunque ésta fuera de simple prevención, salvo lo dispuesto en el art. 252.

La sustanciación del juicio ante las Cámaras del Crimen no podrá prolongarse más de sesenta días, contados de la fecha en que se recibieron los autos del proceso.

La infracción a lo dispuesto en el presente artículo constituye falta grave y será reprimida con multa de quinientos pesos a cada uno de los funcionarios responsables de la demora.

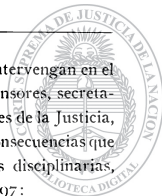
Art. 251 — En los términos del artículo anterior no se computará:

- 1º El tiempo empleado en diligencias de prueba que se practiquen fuera de la Provincia, Territorio o Distrito.
- 2º El tiempo que demore en resolverse algún incidente de los que suspendan la tramitación de la causa.

Art. 252 — Cinco días antes de vencer el término dentro del cual debe quedar finalizada la instrucción, si el Juez considera que él ha de resultar insuficiente para llevar a cabo diligencias no practicadas todavía, y que reputa indispensables, lo hará saber al Presidente de la Cámara. Éste, atento a las razones aducidas y al carácter de las diligencias de que se trate, podrá disponer una prórroga por no más de veinte días u ordenar que se eleven los autos al Tribunal, cerrando la instrucción previamente.

Art. 253 — La inobservancia de los términos acordados por la ley, por los Jueces o por las Cámaras, para sus

**Art. 250-2.** — Así no habrá esos procesos interminables por malicia de las partes o incuria de los instructores.



respectivas actuaciones, por parte de los que intervengan en el proceso, ya se trate de fiscales, asesores, defensores, secretarios, ujieres y demás empleados, o de auxiliares de la Justicia, dará lugar, según la gravedad del caso y las consecuencias que hayan provocado, a las siguientes sanciones disciplinarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 697:

- 1° Apercibimiento.
- 2° Multa, de diez a cien pesos moneda nacional.
- 3° Suspensión del empleo.
- 4° Separación del defensor.

Art. 254 — Las sanciones disciplinarias estatuidas en el artículo anterior, no obstarán a la imposición de las penas que puedan corresponder cuando el hecho para el cual la sanción se establece, pueda constituir una infracción al Código Penal.

Art. 255 — Cuando la persona a quien se hiciere objeto de alguna de las sanciones disciplinarias enumeradas no fuere un funcionario dependiente de Juez o Tribunal, podrá apelar dentro de las veinticuatro horas subsiguientes a la notificación y fundando brevemente el recurso, para ante la Cámara. Esta resolverá en el término de tres días. Respecto de las sanciones disciplinarias impuestas por la Cámara u otro Tribunal, sólo procede, en el mismo caso, el recurso de reposición, que será interpuesto dentro de las veinticuatro horas y resuelto en el término de tres días.

## CAPITULO VI

### DE LAS NULIDADES

Art. 256 — La inobservancia de las normas prescriptas para los actos procesales constituyen causa de nulidad únicamente en los casos en que ésta es conminada por la ley en términos expresos.

Art. 257 — Se entiende impuesto siempre, bajo pena de nulidad absoluta, la observancia de las disposiciones concernientes:

1º Al nombramiento de los Jueces o jurados y a las otras condiciones de capacidad de los mismos, establecidas por la Constitución y las leyes de organización de los Tribunales.

2º Al número de los Jueces o jurados necesarios, según esas mismas leyes, para constituir tribunales colegiados.

3º A la intervención, asistencia y representación del procesado, en los casos y formas que la ley establece.

4º A la intervención del Ministerio Público en todos los casos en que la ley la declara obligatoria.

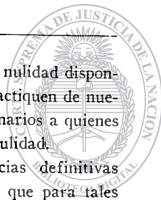
La nulidad proveniente de la inobservancia de las disposiciones mencionadas no es susceptible de subsanarse y puede ser opuesta en cualquier período del proceso.

Advertida por los Jueces, deben declararla, aún sin petición de parte.

Art. 258 — Las nulidades que no tengan por la ley el carácter de absolutas, quedan subsanadas si la parte a quien pudiera interesar la observancia de las formalidades o disposiciones legales omitidas, interviene en el proceso, sin formular, dentro de tercero día, la reclamación pertinente.

Art. 259 — Salvo el caso de nulidades absolutas, las partes no pueden oponer aquellas a que hayan dado causa o que se refieren a disposiciones en cuya observancia no tengan interés.

Art. 260 — La declaración de nulidad de un acto procesal comporta la de todos los que se vinculen a él directamente. El Juez o Tribunal, al pronunciar la nulidad, establecerá, de oficio, si ella se comunica a determinados actos anteriores o contemporáneos conexos con el anulado.



Art. 261 — El auto en que se declare la nulidad dispondrá, también si ello fuera posible, que se practiquen de nuevo los actos anulados, a costa de los funcionarios a quienes por dolo o por culpa les sea imputada la nulidad.

Art. 262 — La nulidad de las sentencias definitivas solo podrá oponerse mediante los recursos que para tales casos establece el presente Código.

## TÍTULO VI

### DE LOS TESTIGOS

#### CAPÍTULO I

##### REGLAS GENERALES

Art. 263 — Los Jueces de Instrucción recibirán declaración testimonial a todas las personas indicadas por los que intervinieren en el proceso o que creyeran que tienen o pueden tener conocimiento de los hechos que se investigan. Podrán admitirse, también, las declaraciones que espontáneamente se ofrecieran, en cuanto puedan ser de interés para la investigación.

Art. 264 — Todo habitante de la Nación que no esté impedido tiene la obligación de concurrir a declarar cuando fuere legalmente citado.

Art. 265 — No están obligados a concurrir, pero tienen el deber de declarar y lo harán por medio de informe dentro de las veinticuatro horas de recibir el requerimiento, bajo pena de mil pesos de multa:

1° El Presidente y Vicepresidente de la Nación, los Ministros Nacionales, los Gobernadores y Vicegobernadores de

provincia, sus Ministros y los Gobernadores de los Territorios Nacionales.

2° Los miembros del Congreso Nacional y de las Legislaturas Provinciales, así como los del Poder Judicial de la Nación y de las Provincias.

3° Los miembros de los Tribunales Militares y las dignidades del clero, desde Obispo inclusive.

4° Los Ministros Diplomáticos y Cónsules generales extranjeros.

5° Los Militares del Ejército de tierra y mar, desde el grado de Coronel inclusive, cuando estén en servicio activo.

6° Los Jefes, Directores o Gerentes de las reparticiones públicas.

Art. 266 — Cuando por razón de enfermedad o de su edad avanzada, un testigo se encontrare en la imposibilidad de concurrir a declarar, será examinado por el Juez en su domicilio.

Art. 267. — El número de testigos es ilimitado mientras sus declaraciones se consideren conducentes a la investigación.

Art. 268 — No podrán ser admitidos como testigos:

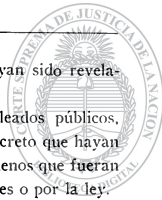
1° Los sacerdotes de la religión católica o de cualquier culto admitido en el país, sobre los hechos de que hayan tenido conocimiento por razón de su ministerio.

2° Los defensores del imputado, respecto de lo que, en tal carácter, se les haya confiado.

3° Los abogados y procuradores, respecto de los hechos de que hubieran tenido conocimiento por las declaraciones que sus clientes les hubieran hecho por razón del ejercicio de su respectivo ministerio.

4° Los médicos, farmacéuticos, parteras y toda otra





persona, respecto de los hechos que les hayan sido revelados por razón de su profesión.

5° Los militares, funcionarios o empleados públicos, cuando no pudieren deponer sin violar el secreto que hayan conocido por razón de su estado o cargo, a menos que fueran desligados de su obligación por sus superiores o por la ley.

6° Las personas que al tiempo de declarar no se encuentren, por razón de su estado físico, moral o mental, en estado de decir la verdad.

Art. 269 — El que se considere inhabilitado como testigo por cualquiera de las circunstancias expresadas en los cuatro primeros incisos del artículo anterior, no quedará eximido por ello, de concurrir a la citación que se le haga, ni podrá ampararse en el secreto sino después de habérsele formulado la pregunta o preguntas a las que entienda que no puede responder. Si la excusa no fuera admitida, se procederá, sin más trámite, el exámen testimonial.

Cuando se invoca la circunstancia consignada en el inciso 5° del mismo artículo, el Juez recabará los informes tendientes a establecer la procedencia de la excusa.

Art. 270 — No pueden ser llamados como testigos:

1° El cónyuge del imputado, aunque medie separación legal.

2° Los ascendientes y descendientes.

3° Sus hermanos.

4° Sus afines hasta el segundo grado.

5° Los tutores y pupilos recíprocamente.

Art. 271 — Las personas a que se refiere el artículo anterior podrán declarar, sin embargo, cuando en los casos en que la ley los autoriza para ello, actúen como denunciantes o querellantes.

Si el imputado, en el interés de la defensa, requiere el testimonio de alguna de esas personas, podrá ser llamada. Se admitirá, también, su testimonio, cuando fuere ofrecido espontáneamente. En uno u otro caso, al iniciarse la declaración, se advertirá al testigo que debe limitarse a dar las explicaciones y datos que considere convenientes en favor del imputado, a fin de practicar las investigaciones que corresponda.

Art. 272 — No pueden ser examinados como testigos, bajo pena de nulidad, los imputados por el mismo delito o por un delito conexo, aunque ya hubieren sido absueltos o condenados, salvo que la absolución se haya pronunciado por no haber cometido el hecho.

Art. 273 — Toda persona tiene capacidad para ser testigo, sin perjuicio de la apreciación del valor de su testimonio, que haga el Juez, y sin perjuicio, también, de lo establecido en el artículo anterior y en aquellos que se refieren a los que no pueden ser admitidos ni llamados como testigos.

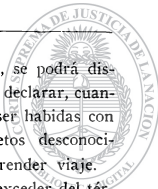
## CAPITULO II

### DE LA CITACION DE LOS TESTIGOS

Art. 274 — La citación de los testigos se hará en la forma establecida en el artículo 212. Cuando haya urgencia, puede citarse verbalmente a los testigos que se hallen en el lugar del proceso y obligarlos a comparecer en el momento, haciéndose constar en los autos el motivo de la urgencia.

Art. 273. — Los menores pueden ser testigos, puesto que la edad no es óbice para recordar un hecho acaecido en su presencia y para individualizar al autor o partícipe.





Art. 275 — Si mediaren causas graves, se podrá disponer la detención de las personas que deban declarar, cuando, fundadamente, se tema que no podrán ser habidas con el mismo objeto, ya por tratarse de sujetos desconocidos, ya por ser personas próximas a emprender viaje.

En todo caso, esta detención no podrá exceder del término que sea absolutamente indispensable para la diligencia que es su objeto y que se fija en el máximo de doce horas, bajo pena de quinientos pesos de multa al Juez o funcionario que la prolongare.

Art. 276 — El exhorto u oficio que se libre a las autoridades del lugar en que el testigo reside, tendrá por objeto citar a éste para que concurra a declarar o pedir a dichas autoridades que procedan a su examen.

Art. 277 — Para que el testigo sea llamado a declarar al lugar donde se ventile el proceso, será necesario que la distancia sea reducida o que la importancia de la causa lo haga indispensable.

Art. 278 — Las causas a que se refiere el artículo anterior serán apreciadas por el Juez o Tribunal, así como la indemnización que debe darse al testigo por el tiempo que hubiese perdido. En todos los casos se le proporcionarán al testigo los elementos necesarios para su traslación de ida y vuelta, con arreglo a su condición.

Art. 279 — Cuando un testigo, sin causa justificada, no compareciera a declarar en el día y hora señalados, se le impondrá una multa de veinte a cien pesos moneda nacional, sin perjuicio de hacerle comparecer por la fuerza pública.

Art. 280 — Cuando un testigo se negare a declarar y su testimonio se considerase importante, se le mantendrá

detenido, nunca por más de tres días, hasta que preste declaración.

Art. 281 — Las medidas que estatuyen los dos artículos precedentes no obstarán al juzgamiento de los testigos rebeldes por el delito que su actitud pudiera entrañar.

### CAPITULO III

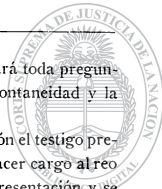
#### DEL EXAMEN DE LOS TESTIGOS

Art. 282 — El testigo prestará juramento o promesa de decir verdad respecto a todo lo que sepa con relación a los hechos sobre que será interrogado. El Juez o Tribunal le hará saber cuáles son las penas en que incurren los que afirman una falsedad o niegan o callan la verdad, en todo o en parte.

Art. 283 — Prestado el juramento o formulada la promesa de decir verdad, el testigo manifestará su nombre, apellido, edad, estado, profesión y domicilio; si conoce a las partes; si es pariente y en qué grado, de alguna de ellas; si es su amigo íntimo, socio o dependiente; o su enemigo; si tiene o ha tenido pleito con el imputado, debiendo indicar en qué época y con qué resultados; si de alguna de las partes ha recibido beneficios y de qué importancia, y si tiene interés en el resultado de la causa.

El Juez dejará constancia de toda manifestación del testigo que pueda indicar la existencia de causas susceptibles de inclinar su testimonio en un sentido contrario a la verdad. Durante la instrucción, los testigos no podrán ser tachados, pero las partes podrán hacer presente la existencia de cualquier causa que los inhabilitara para declarar.

Art. 284 — El testigo será luego interrogado acerca de los hechos de la causa sobre que se considere que está en con-



diciones de deponer. El Juez o Tribunal evitará toda pregunta sugestiva o que pueda perjudicar la espontaneidad y la sinceridad de las respuestas.

Art. 285 — Si con motivo de la declaración el testigo presentase algún objeto que pueda servir para hacer cargo al reo o para su defensa, se hará mención de su presentación y se agregará al proceso, o se guardará en Secretaría, cuando lo otro no fuera posible.

Art. 286 — Los testigos declararán de viva voz. No podrán leer respuestas que lleven escritas. Según la naturaleza de su declaración, podrán consultar notas o documentos que tuviesen consigo.

Art. 287 — Las declaraciones testimoniales que se reciban durante la instrucción se harán constar en acta que, después del Juez, firmará el testigo, en presencia del Secretario. Si el testigo fuere ciego o no supiere leer ni escribir, el Juez nombrará para que le acompañe, una persona mayor de edad que firmará la declaración después que aquél la hubiese ratificado, bajo pena de nulidad.

Art. 288 — Si el testigo no supiera expresarse en el idioma nacional, será examinado por intermedio de intérprete, que aceptará el cargo bajo juramento.

Art. 289 — Si el testigo fuere sordomudo, se observarán las normas estatuidas para la declaración indagatoria de los sordomudos.

Art. 290 — Los testigos serán examinados separadamente.

Art. 291 — El juez podrá citar a un testigo cuantas veces considere necesaria su declaración.



## CAPITULO IV

## DE LOS CAREOS

Art. 292 — Toda vez que durante la instrucción, el Juez estimare que por medio de careos entre testigos, o entre éstos y el imputado o entre imputados, puede llegar a obtener útiles elementos de juicio, podrá practicarlos.

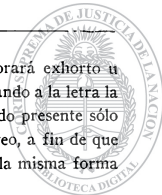
Art. 293 — El careo entre imputados se verificará, además, siempre que éstos lo solicitaren como medio de defensa. El imputado podrá pedir que se le caree con los testigos de cargo.

Art. 294 — En el mismo acto no podrán carearse más de dos personas. Los testigos prestarán juramento en la forma establecida.

Art. 295 — El careo se practicará leyendo, en lo pertinente, las declaraciones que se reputen contradictorias, llamando la atención de los careados sobre las contradicciones a fin de que se reconvenzan entre sí para obtener la aclaración de la verdad.

De la ratificación o rectificación que resulte se dejará constancia, así como de las reconvenções que se hagan los careados.

Art. 296 — Si se hallare ausente algún testigo que deba carearse con el imputado o con otro testigo que estuviere presente, se leerá a éste su declaración y las particularidades de la del ausente, en que discordasen. Las explicaciones que dé u observaciones que haga para confirmar, variar o modificar sus anteriores asertos, se consignarán en la diligencia.



Si la disconformidad subsistiere, se librará exhorto u oficio a la autoridad que corresponda, insertando a la letra la declaración del testigo ausente, la del careado presente sólo en la parte que sea necesario, y el medio careo, a fin de que se complete en diligencia con el ausente, en la misma forma establecida para el careado presente.

## T I T U L O   VII

### DE LOS PERITOS

#### CAPITULO I

#### DE LOS CASOS EN QUE PROCEDE Y DEL MODO DE DESIGNAR LOS PERITOS

Art. 297 — Cuando para dejar establecido cualquier hecho o circunstancia fuere necesaria o conveniente una opinión fundada en conocimientos especiales de alguna ciencia, arte o industria, el Juez o Tribunal ordenará el examen pericial, nombrando uno o más peritos, conforme a las necesidades e importancia de la causa. La designación se hará siempre por sorteo de los inscriptos en el Registro respectivo y en presencia de las partes o de sus representantes o abogados, todo ello bajo pena de nulidad.

Art. 298 — En los lugares donde haya sido imposible organizar el Registro de Peritos respectivo por falta de personas con título o capacidad suficiente, se podrá prescindir

---

**Art. 297.** — Véase N° 36-37 de la Exposición.

**Art. 298.** — La designación tendrá que hacerse, en este caso, de común acuerdo entre las partes, o en su defecto, eligiendo el Juez o Tribunal al perito, aquéllas podrán designar un consultor técnico para que controle al perito judicial.

del sorteo para la designación. En tal caso, el Juez o Tribunal podrán elegir, en primer término, entre los funcionarios públicos, militares o marinos, que, por razón de su título profesional o de su competencia, se encuentren habilitados para emitir dictamen acerca del hecho o circunstancia que se quiere establecer, y en segundo término, a falta de aquellos, entre las personas idoneas del lugar que se encuentren en las mismas condiciones.

Art. 299 — En casos especiales, el Juez o Tribunal podrán designar directamente, y bajo su responsabilidad, un perito de su confianza para que actúe conjuntamente con los designados de acuerdo a lo dispuesto en los artículos anteriores.

Art. 300 — El examen pericial puede ser ordenado de oficio o a petición de parte, y la designación de los peritos se notificará siempre a las partes, bajo pena de nulidad.

Art. 301 — No se decretarán pericias para establecer circunstancias relativas a la personalidad del imputado, excepto las que fueren requeridas para determinar el estado de su salud mental, en los casos previstos en este Código.

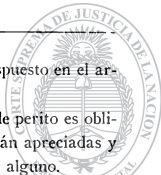
## CAPITULO II

### DE LOS QUE PUEDEN SER PERITOS Y DEL MODO DE PRESTAR SUS SERVICIOS

Art. 302 — Los peritos deberán tener título de tales en la ciencia, arte o industria de que se trate, y hallarse ins-

---

**Art. 299.** — Puede haber casos muy delicados — violación o defraudación — en que por la calidad de las partes se pongan en juego toda clase de influencias que lleven la duda al ánimo del Juez o miembros del Tribunal acerca de las conclusiones de los peritos, y hemos creído que en ese caso debían tener el derecho de salir de ella por medio de un perito de su confianza.



criptos en el Registro respectivo, salvo lo dispuesto en el artículo 298.

Art. 303 — La prestación del servicio de perito es obligatoria. Las excusaciones o recusaciones serán apreciadas y resueltas por el Juez o Tribunal, sin recurso alguno.

Art. 304 — El perito que, sin causa justificada, no acude a la citación del Juez o Tribunal o no presentare su informe en el término que corresponda, incurrirá en las responsabilidades señaladas para los testigos. Si fuere un perito inscripto o un funcionario público, podrá ser suspendido hasta por un mes la primera vez y eliminado del Registro o destituido de su cargo, respectivamente, en caso de reincidencia.

El perito negligente será sustituido para los fines del examen decretado.

Art. 305 — No pueden ser peritos:

- 1° Los menores de edad;
- 2° Los que estuvieren inhabilitados para el desempeño de funciones públicas.
- 3° Los que no pueden ser llamados ni admitidos como testigos.
- 4° Los que hubieren sido eliminados del Registro por cualquier causa.

Art. 306 — Los peritos pueden ser recusados por las mismas causas que los jueces. Si las causas o razones fueran fundadas y graves o si la causa de inhabilitación fuera efectiva, el Juez o Tribunal los reemplazará, pudiendo oír al interesado, y en caso de necesidad, practicar una averiguación sumaria. Contra la decisión del Juez o Tribunal no corresponde recurso alguno.

Los peritos prestarán juramento antes de entrar al lleno de su cometido. A tal fin se les citará en la forma establecida para los testigos. En caso de urgencia podrán ser citados verbalmente, o por teléfono o telégrafo.

Art. 307 — El Juez o Tribunal, al ordenar la pericia, planteará las cuestiones sobre que haya de versar. Las partes podrán proponer, para ser sometidas al dictamen pericial, las cuestiones que consideren oportunas y si fueran consideradas oportunas, se ordenará que los peritos se pronuncien a su respecto.

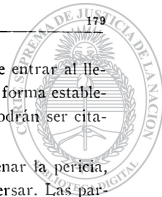
Art. 308 — Cuando por la naturaleza del asunto o por las dificultades que pueda ofrecer, los peritos no estuvieren en condiciones de expedir sus informes en el acto, el Juez o Tribunal les fijará un término prudencial.

Art. 309 — Los peritos practicarán unidos la diligencia. El Juez o el miembro del Tribunal que se designare y las partes podrán asistir a ella y formular las observaciones que crean justas. Las partes deberán retirarse cuando los peritos pasen a deliberar.

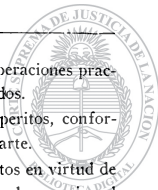
Art. 310 — Los peritos emitirán su opinión por medio de declaración que se consignará en acta, salvo cuando la naturaleza y gravedad del hecho requiriesen forma escrita. Cuando lo exijan las circunstancias o la naturaleza del asunto, podrán hacer demostraciones prácticas, tales como proyecciones luminosas, ampliaciones de escrituras, etc., ante el Juez o Tribunal, durante la instrucción o los debates.

Art. 311 — El informe pericial comprenderá, en cuanto fuere posible:

- 1º Una descripción de la persona o cosa que deba ser objeto del mismo, en el estado o del modo en que se halla.







2º Una relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y sus resultados.

3º Las conclusiones que formulen los peritos, conforme a los principios de su ciencia o arte.

Art. 312 — Los que actuaren como peritos en virtud de una orden judicial, tendrán derecho a cobrar honorarios al final de su trabajo, si no tuviesen retribución o sueldo del Estado o de las Municipalidades, pero en ningún caso podrán convenir o fijar su monto o solicitar su pago previo a alguna de las partes para expedirse, bajo pena de perder el empleo o de ser eliminados del Registro si estuvieran inscriptos, y de una multa de quinientos pesos y pérdida del honorario que hubiera podido corresponderles, estuvieren o no inscriptos. El honorario de los peritos será regulado al final de su labor y estará a cargo de la parte vencida. Si esta resultare insolvente, el Fisco les indemnizará con una suma no mayor de descientos pesos que fijará el Juez o Tribunal que los designó.

---

**Art. 312.** — Con esta disposición queremos poner a las partes a cubierto de la reconocida deshonestidad de los titulados peritos que actúan continuamente en los tribunales de justicia. La mayoría de ellos procede no como peritos sino como mercaderes: venden su dictamen al mejor postor. Conocemos casos asombrosos que pueden documentarse y probarse en cualquier momento. Un calígrafo afirma en carta privada a una de las partes que la firma de un documento discutido en juicio es absolutamente falsa. Dicha parte lo propone en aquel carácter durante la querella. Llega el momento de expedirse y exige a su proponente una crecida cantidad de dinero para hacer el dictamen a su favor. La parte que lo ha propuesto se niega, porque no tiene la suma reclamada. La contraparte es una persona adinerada. El dictamen favorece a esta, porque ha satisfecho la exigencia del perito. Si este hecho no es una verdadera extorsión, no sabemos como calificarlo. Por eso hemos redactado este artículo en tal forma que sea poco menos que imposible permitir la actuación de delinquentes en el gremio de los peritos, disposición que encuentra su correlativa reglamentación en la Ley Orgánica.

## CAPITULO III

## DE LOS CONSULTORES TECNICOS



Art. 313 — Las partes podrán designar, a su costa, un consultor técnico para que asista al examen pericial. El consultor técnico deberá tener las condiciones requeridas para ser perito.

El consultor técnico podrá formular las observaciones que crea justas y los peritos deberán dejar constancia de las mismas en su informe, bajo pena de cien pesos de multa.

Art. 314 — Los consultores técnicos no pueden asistir a las deliberaciones de los peritos, ni emitir dictamen. Sólo se les permite, en caso de que sus observaciones no hubieren sido consignadas en el informe, reiterarlas ante el Juez o Tribunal en el término de tres días contados desde que la presentación del informe fuera notificado a la parte que lo propuso.

Dicha presentación se notificará a todas las partes.

Art. 315 — El Juez o Tribunal dispondrá que las observaciones del consultor técnico sean agregadas al proceso, a fin de que se tengan en cuenta durante el juicio. Si lo estimaren conveniente podrán ordenar un nuevo examen pericial o la ampliación del ya producido, sea por los mismos peritos que antes actuaron, sea por otros.



## TÍTULO VIII

### DE LOS DOCUMENTOS Y DE SU RECONOCIMIENTO O EXAMEN

Art. 316 — Los documentos que se presenten durante la instrucción se agregarán al proceso, notificándose a las partes. En la misma forma se procederá durante el juicio y los debates. En este caso la notificación quedará cumplida con la presencia de las partes en la audiencia. Las cartas sustraídas a particulares no podrán presentarse sino en virtud de mandato judicial.

Art. 317 — El imputado no podrá ser obligado a reconocer documentos. Si se negare a hacerlo, después de preguntársele si está dispuesto a declarar sobre la autenticidad del documento que se le atribuya, el Juez ordenará el examen pericial de dicho documento.

## TÍTULO IX

### DE LOS INTERPRETES Y TRADUCTORES

Art. 318 — El Juez o Tribunal designará un intérprete para que, en los casos previstos en este Código, traduzca las declaraciones que presten las personas que no sepan expresarse en el idioma nacional o que sean sordomudos, o incapaces de darse a entender por escrito. La circunstancia de que los jueces conozcan el idioma extranjero que posea el declarante no será causa para omitir la designación del intérprete.

Art. 319 — Toda vez que sea necesaria la agregación de un documento escrito en idioma extranjero, el Juez o Tri-

bunal designará un traductor para que lo vierta al idioma nacional.

Art. 320 — El Juez o Tribunal podrán designar más de un intérprete o traductor en casos especiales de gran complicación o importancia, y las partes, uno a su costa, si lo estimara necesario o conveniente para fiscalizar a los primeros. Tanto para la designación como para el cumplimiento de su cometido y demás derechos y obligaciones de los intérpretes y traductores, se observarán las reglas establecidas para los peritos, en cuanto fueren de aplicación.

## TÍTULO X

### DE LOS ARTICULOS DE PREVIO Y ESPECIAL PRO- NUNCIAMIENTO

#### CAPITULO I

#### DE LA OPORTUNIDAD Y MODO DE Oponer LAS EXCEPCIONES

Art. 321 — En cualquier estado de la instrucción pueden oponerse, en forma de artículos de previo y especial pronunciamiento, las siguientes excepciones:

- 1º Falta de jurisdicción.
- 2º Falta de personalidad en el querellante o en el promotor de la acción civil o en sus representantes.
- 3º Falta de acción en los mismos.
- 4º Cosa juzgada sobre los mismos hechos que dan origen al procedimiento.
- 5º Amnistía o indulto.
- 6º Litis pendencia.
- 7º Perdón del ofendido en los delitos que no den lugar a la acción pública.



8° Prescripción de la acción o de la pena.

Art. 322 — Si concurrieren dos o más excepciones, deberán proponerse conjuntamente.

Las que no se hubieren opuesto como previas, sólo podrán alegarse en el juicio y ante la Cámara.

Art. 323 — Las excepciones enumeradas deberán oponerse por escrito o al prestar declaración indagatoria y con la presentación simultánea de los documentos justificativos de los hechos en que se fundan. Si el excepcionante no los tuviere a su disposición, indicará el lugar donde se encuentran, a fin de que el Juez pueda reclamarlos, requerir copia de ellos u ordenar que sean compulsados.

Art. 324 — De las excepciones opuestas se conferirá vista el querellante y al Fiscal, por el término de cuarenta y ocho horas sucesivas, dentro del cual deberán ser contestadas. Con la respuesta se acompañarán los documentos que justifiquen las alegaciones formuladas o se indicará el lugar donde se encuentran.

Art. 325 — Si el Juez considera procedente la agregación de los documentos indicados al oponer las excepciones o al contestarlas, librará los exhortos u oficios necesarios para que se le remitan tales documentos o sus copias, según los casos, o dispondrá que se practiquen las compulsas para establecer su existencia. Si el Juez no accediese a la agregación podrá apelarse de la respectiva resolución.

Art. 326 — Si los documentos hubieran sido presentados al oponerse y contestarse las excepciones, el Juez resolverá el artículo dentro de tercero día. Si fueren agregados después, en virtud del pedido que de ellos hubiere hecho, conferirá vista de los mismos al Fiscal y al querellante o imputado, según el caso, para que dentro de veinticuatro horas,

contadas desde la última notificación formulen las observaciones que creyeren oportunas. Vencido ese término, el Juez resolverá el artículo dentro de tercero día.

Art. 327 — Si las excepciones opuestas sólo dieren lugar a una cuestión de puro derecho, el Juez resolverá ésta en la forma establecida, después de oír a las partes.

## CAPITULO II

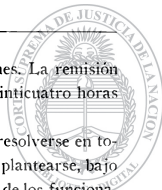
### DE LA PRUEBA DE LAS EXCEPCIONES

Art. 328 — Si las excepciones se fundaren en hechos no justificados en el proceso y si se invocare otra prueba que no sea la instrumental, se decretará un comparendo verbal, a realizarse dentro de los cinco días para que dicha prueba se produzca, a condición de que ella hubiere sido ofrecida al oponerse las excepciones. El Fiscal y el querellante, a su vez, al contestar las excepciones, propondrán, también, la prueba que tuvieren, la que se producirá en el comparendo establecido. En el mismo comparendo las partes intervinientes podrán informar verbalmente acerca del valor que atribuyan a la prueba. La audiencia no podrá ser interrumpida ni postergada por causa alguna y se celebrará con los que concurran. Dentro de los dos días después de su celebración, el Juez resolverá el artículo.

Art. 329 — Cuando una de las excepciones opuestas fuere la de declinatoria de jurisdicción, el Juez la resolverá en primer término.

Si se declarase competente, resolverá, al mismo tiempo, las demás excepciones.

Si se declarase incompetente, mandará remitir el proceso al Juez a cuya jurisdicción corresponda y se abstendrá de



pronunciarse respecto de las otras excepciones. La remisión del expediente se efectuará dentro de las veinticuatro horas de quedar consentida la resolución.

Las cuestiones de competencia deberán resolverse en todas las instancias dentro de los veinte días de plantearse, bajo pena de doscientos pesos de multa a cada uno de los funcionarios responsables de la demora.

### CAPITULO III

#### DE LOS EFECTOS DE LAS EXCEPCIONES

Art. 330 — Cuando se haga lugar a cualquiera de las excepciones enumeradas en el art. 321, el Juez o Tribunal declarará terminado el proceso respecto del imputado o imputados a quienes ampare la excepción admitida y ordenará la inmediata libertad de los mismos, si estuvieren presos por otras causas.

Art. 331 — El auto de primera instancia que resuelva las excepciones será apelable dentro de tercero día. El recurso no impedirá el cumplimiento de la orden de libertad decretada.

Art. 322 — El incidente a que dé lugar la oposición de excepciones, durante la instrucción, no paralizará las diligencias de la misma, y se sustanciará y fallará en expediente separado.

Art. 333 — Cuando las excepciones no estuvieren resueltas en el momento en que el Juez debe decretar el cierre de la instrucción, al elevar el proceso a la Cámara, elevará también, el expediente relativo a las mismas, en el estado en que se encuentre, a fin de que dicho Tribunal tome conocimiento del artículo y lo decida en el tiempo y modo establecido en el Libro II, Título I, Capítulo III de este Código.

La presente disposición no regirá en el caso de que la excepción opuesta, y no resuelta, sea la de falta de jurisdicción. El Juez deberá comunicar esta circunstancia a la Cámara.

## TITULO XI

### DE LAS COSTAS PROCESALES

Art. 334 — Toda resolución judicial que ponga término a un proceso o a cualquiera de sus incidentes, deberá resolver sobre el pago de las costas procesales. El pago de las costas corresponde a la parte vencida, la cual, sin embargo, cuando medie un motivo razonable, podrá ser eximida de esa obligación, en todo o en parte. La resolución deberá expresar cuáles son los motivos de la exención.

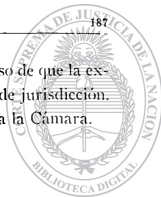
Art. 335 — Los Fiscales no podrán ser condenados al pago de las costas sino en caso de notorio desconocimiento de las leyes.

En el mismo caso serán condenados en costas los abogados y procuradores que intervengan en el proceso.

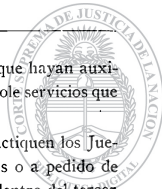
Art. 336 — Las costas consistirán:

- 1º En la reposición o reintegro del valor del papel sellado empleado en la causa;
- 2º En el pago de todos los gastos originados en el juicio a la parte vencedora.

Art. 337 — Para la estimación del honorario de un abogado, el Juez o Tribunal que deba hacerla tendrá en cuenta el valor e importancia del asunto, las cuestiones de derecho que se hayan planteado, la utilidad de la defensa y la asiduidad demostrada, todo ello con arreglo a lo dispuesto sobre regulación de honorarios en la Ley Orgánica. Con igual criterio serán apreciados los honorarios que puedan corresponder a







los procuradores, peritos y demás personas que hayan auxiliado a la administración de justicia, prestándole servicios que deban ser remunerados.

Las regulaciones de honorarios que practiquen los Jueces de Instrucción, sea en carácter de costas o a pedido de parte, serán apelables para ante la Cámara, dentro del tercer día de la notificación.

## TÍTULO XII

### DE LA LIBERTAD PROVISORIA Y DE LA EXIMICION DE PRISION

#### CAPÍTULO I

#### DE LA LIBERTAD PROVISORIA BAJO CAUCION JURATORIA

Art. 338 — Se concederá el beneficio de la libertad bajo caución juratoria al imputado de un delito reprimido con pena de prisión que, en su máximo, no exceda de cuatro años.

Art. 339 — Para conceder este beneficio deberán mediar las siguientes circunstancias:

- 1º Que el imputado no haya sido objeto de otra condena anterior, por delito, o que, en caso de haberlo sido, haya transcurrido, desde esa condena, tanto tiempo como sería necesario para que se prescriba la acción penal por el delito que la motivó.

Este beneficio no se acordará si el imputado hubiera sido objeto de dos o más condenas anteriores,

---

Art. 338. — Véase N° 38-39 de la Exposición.

por delito, aun cuando hubiera transcurrido el tiempo expresado en el párrafo anterior.

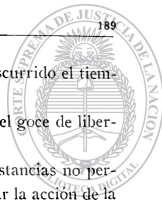
2° Que el imputado no se encuentre en el goce de libertad provisoria por otro delito.

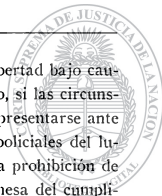
3° Que sus antecedentes u otras circunstancias no permitan sospechar que tratará de burlar la acción de la justicia o entorpecer sus investigaciones.

Art. 340 — La libertad bajo caución juratoria podrá ser solicitada por el imputado, por un miembro de su familia o por el defensor, en cualquier estado del proceso, después de haber prestado declaración indagatoria o negádose a prestarla.

Art. 341 — Del pedido de libertad provisoria bajo caución se conferirá en el acto vista por el término de veinticuatro horas comunes al querellante y al Fiscal, a cuyo efecto serán notificados personalmente o por cédula. Evacuadas las vistas conferidas o vencido el término sin hacerlo, el Juez o Tribunal que intervenga en la causa acordará o denegará de inmediato el beneficio solicitado o dentro de las veinticuatro horas siguientes a más tardar, bajo pena de cien pesos de multa a cada Juez. Cuando la resolución emanare del Juez, podrá ser apelada para ante la Cámara en el término de veinticuatro horas. El recurso se concederá al sólo efecto devolutivo. Cuando la resolución emanare de la Cámara no habrá más recursos que el de reposición y el de casación.

Art. 342 — Para obtener la libertad bajo caución juratoria, el imputado prometerá, bajo juramento, presentarse siempre que fuere llamado por el Juez o Tribunal y no cambiar el domicilio que fije en la Ciudad, Provincia o Territorio, ni ausentarse del mismo por más de tres días, sin conocimiento del Juez o Tribunal que estuviere interviniendo en





la causa. Al otorgársele el beneficio de la libertad bajo caución juratoria se podrá imponer al imputado, si las circunstancias así lo aconsejaren, la obligación de presentarse ante el Juez del proceso o ante las autoridades policiales del lugar de su residencia, en días señalados; y la prohibición de presentarse en determinados sitios. La promesa del cumplimiento de esas condiciones se hará, también, bajo la misma formalidad del juramento.

La caución juratoria se prestará en acta ante el Juez de Instrucción y si el beneficio se otorgare por la Cámara, ante el Presidente de la misma.

Art. 343 — Si el imputado no cumplierse las obligaciones contraídas al obtener su libertad o cometiere un nuevo delito al que corresponda pena privativa de la libertad, se le revocará el beneficio acordado y se ordenará su inmediata detención.

La persona a quien se hubiere revocado la libertad provisoria, sea bajo caución o bajo fianza, no podrá solicitarla de nuevo en el mismo proceso.

## CAPITULO II

### DE LA LIBERTAD PROVISORIA BAJO FIANZA

Art. 344 — Podrá acordarse al imputado la libertad provisoria, bajo fianza suficiente, cuando la pena estatuida para el delito no exceda, en su máximo, de cuatro años de reclusión o seis años de prisión.

Art. 345 — La fianza puede ser real o personal y garantiza:

- 1° La comparecencia del reo durante el proceso y, en su caso, el cumplimiento de la pena.

2º Las costas del juicio.

3º Las responsabilidades civiles emergentes del delito, en caso de que el imputado no compareciere.

Art. 346 — El monto de la fianza lo establecerá prudentemente el Juez o Presidente de la Cámara, según el caso, atendiendo a las circunstancias particulares del proceso.

Art. 347 — Al acordarse la libertad bajo fianza podrá imponerse al imputado las mismas obligaciones que se le imponen al que la obtiene bajo caución juratoria.

Si esas obligaciones no fueran cumplidas o si el imputado cometiere un nuevo delito reprimido con pena privativa de la libertad, se le cancelará la libertad provisoria y se procederá a la detención.

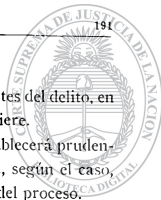
Art. 348 — No podrán obtener el beneficio de la libertad bajo fianza los que ya hubieren sido condenados, anteriormente, a una pena privativa de la libertad, salvo que, desde la condena anterior, hubiera transcurrido el tiempo a que se refiere el artículo 339 de este Código.

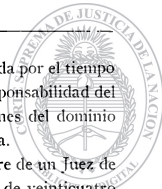
Si el imputado hubiere sido objeto de más de una condena, sea cual fuere el tiempo transcurrido, no podrá obtener el beneficio de la libertad bajo fianza.

Tampoco podrá obtener dicho beneficio el imputado que estuviere en el goce de la libertad provisoria por otro delito y el que pudiere ser sospechado de que tratará de burlar la acción de la justicia.

Art. 349 — La libertad bajo fianza podrá solicitarse por las mismas personas que pueden solicitar la libertad bajo caución juratoria, y, además, por el que ofrezca su fianza.

Art. 350 — El pedido de libertad bajo fianza será suscitado en la misma forma y con los mismos trámites ordenados para el pedido de libertad bajo caución juratoria.





La resolución del Juez podrá ser demorada por el tiempo estrictamente necesario para establecer la responsabilidad del fiador propuesto y, en su caso, las condiciones del dominio de los bienes que se ofrecieren como garantía.

La expresada resolución, cuando emanare de un Juez de Instrucción, podrá ser apelada en el término de veinticuatro horas, para ante la Cámara. El recurso se otorgará al sólo efecto devolutivo. Si la resolución fuere dictada por la Cámara, no habrá más recursos que el de reposición y el de casación.

Art. 351 — El pedido de libertad provisoria bajo fianza se sustanciará en incidente por separado. En el mismo incidente se asentarán, además, todas las actuaciones que se produzcan después del otorgamiento del beneficio, y las diligencias practicadas con motivo del incumplimiento de las obligaciones contraídas por el imputado y por el fiador.

Art. 352 — El acta de la constitución de la fianza se extenderá ante el Juez o ante el Presidente de la Cámara, cuando ésta hubiera concedido el beneficio. Si se constituyere una hipoteca, se otorgará la correspondiente escritura pública. Las fianzas otorgadas se comunicarán en el día al Registro respectivo, por el Secretario del Juez o Tribunal, bajo pena de cien pesos de multa en caso de omisión.

Art. 353 — Puede ser fiador toda persona que, teniendo capacidad legal para contratar, sea de responsabilidad suficiente, a juicio del Juez o Presidente de la Cámara, pudiendo éste, si no conociera al fiador propuesto, exigirle que justifique su responsabilidad. Para ser fiador personal se requiere, además, estar domiciliado en la Capital Federal, Provincia o Territorio donde tramite la causa y no tener pendiente más de una fianza de la misma naturaleza en la Provincia o Territorio donde se ventila el proceso.

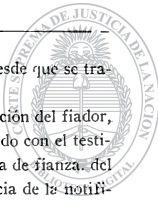
El Registro de Fianzas estará siempre al día, bajo pena de cien pesos de multa al Director o Jefe, y expedirá las certificaciones que se le pidan directamente por los Jueces o Tribunales, dentro de las seis horas de recibido el requerimiento bajo la misma pena.

Art. 354 — El imputado y el fiador deberán suscribir, conjuntamente, el acta de constitución de la fianza en la que se consignarán las obligaciones contraídas por uno y otro. Ambos constituirán un domicilio especial en el lugar donde tenga su asiento el Juzgado o Tribunal, el que se considerará subsistente para todos los efectos legales, mientras no sea modificado con conocimiento del Juez o Tribunal, y en el que se practicarán todas las notificaciones, citaciones o emplazamientos que correspondan. El imputado deberá, además, fijar residencia que no podrá cambiar sin permiso del Juez o Tribunal.

Art. 355 — Las notificaciones y citaciones que se le hagan al imputado o al defensor, se harán, también, al fiador, cuando se relacionen con las obligaciones de éste, bajo pena de nulidad.

Art. 356 — Si el imputado no compareciere al llamado del Juez o Tribunal, se decretará, inmediatamente, orden de detención contra él, fijando al fiador un término para que lo presente, bajo apercibimiento de hacerse efectiva la garantía. Si el fiador no lo presentare en el término que se le fije el apercibimiento se hará efectivo.

Art. 357 — Si el imputado compareciere, fuere presentado por el fiador o se le detuviere antes de hacerse efectiva la garantía, se revocará el auto que ordenó su efectividad. En este caso las costas serán a cargo del fiador. Se entenderá que la garantía se ha hecho efectiva desde que se realizó el



remate de los bienes muebles o inmuebles o desde que se trabó embargo sobre el dinero del fiador.

Art. 358 — Para hacer efectiva la obligación del fiador, el Juez ordenará formar incidente por separado con el testimonio del auto que decretó la libertad, del acta de fianza, del decreto de intimación al fiador, de la diligencia de la notificación del mismo y con un certificado del actuario referente a la incomparecencia del imputado. Este incidente será remitido al Procurador Fiscal a fin de que, cualquiera sea el monto de la fianza, promueva acción ejecutiva contra el fiador, de acuerdo a los preceptos que, para la ejecución de las sentencias, contiene el Código de Procedimiento Civil y Comercial.

En esta ejecución no se admitirán más excepciones que las de pago, prescripción y nulidad de la intimación o notificación al fiador.

La ejecución se promoverá ante el Juez o Tribunal que se encuentre interviniendo en el proceso.

Art. 359 — El importe que corresponda abonar al fiador en concepto de sus obligaciones o que éste satisfaga o se obtenga en virtud de la ejecución, será depositado en el Banco de la Nación Argentina, a la orden del Juez o Presidente de la Cámara, y a los efectos de las responsabilidades contraídas. Repuesto el sellado que corresponda y satisfechos los demás gastos con el producto de la fianza hecha efectiva, el remanente se devolverá al fiador dentro de los tres días, bajo pena de cien pesos de multa al Juez o Presidente de la Cámara.

Art. 360 — En cualquier momento del proceso puede sustituirse, a pedido del imputado o de su defensor, una fianza por otra.



### CAPITULO III

#### DE LA CANCELACION DE LA FIANZA

Art. 361 — Se cancelará automáticamente la fianza:

- 1° Si el fiador lo pidiere, presentando al imputado, o si éste hubiere sido detenido a su solicitud.
- 2° Si el imputado fuere detenido por haberse revocado el auto de libertad bajo fianza.
- 3° Si se declara que no existe mérito para que el imputado sea sometido a acusación.
- 4° Si dictada la sentencia condenatoria el reo se presentare para cumplirla.
- 5° Si el imputado o reo muere o enloquece.

La cancelación se comunicará en el día al Registro respectivo.

Art. 362 — Del pedido de cancelación de la fianza se dará traslado, por tres días sucesivos, al querellante, al promotor de la acción civil y al Fiscal.

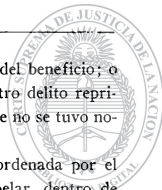
La resolución que recaiga, si emanare del Juez de Instrucción, será apelable, dentro de tercero día, para ante la Cámara, y si emanare de esta no habrá recurso alguno.

### CAPITULO IV

#### DISPOSICIONES COMUNES A LA LIBERTAD PROVISORIA

Art. 363 — Además de las causas establecidas de revocación del auto de libertad provisoria, ya sea bajo caución juratoria o bajo fianza, la revocación de la libertad se decretará cuando, durante el curso del proceso, haya elementos bastantes para juzgar, prima facie, que el delito imputado no





permite, por su penalidad, el otorgamiento del beneficio; o cuando se descubra la comisión de algún otro delito reprimido con pena privativa de la libertad, de que no se tuvo noticia al acordar la libertad provisoria.

Si la revocación, en este caso, fuera ordenada por el Juez de Instrucción, el imputado podrá apelar, dentro de veinticuatro horas, para ante la Cámara, y al sólo efecto devolutivo. Si fuera ordenada por la Cámara, no habrá recurso alguno.

Art. 364 — Si la fianza fuere personal y el fiador falleciere, se volviere incapaz o cayere en estado de falencia o concurso civil de acreedores, se decretará inmediatamente la detención del imputado hasta que presente otro fiador.

Lo mismo se procederá cuando, siendo personal la fianza, el fiador se ausentare definitivamente de la Provincia o Territorio.

## CAPITULO V

### DE LA EXIMICION DE PRISION

Art. 365 — En los casos en que proceda la libertad bajo caución juratoria, el imputado podrá pedir su eximición de prisión, con las formalidades establecidas para conceder aquel beneficio.

La eximición de prisión no importa dispensa de prestar, según los casos, la caución o la fianza requeridas para conceder la libertad provisoria.

Art. 366 — Los beneficios de la libertad provisoria y de la eximición de prisión no se otorgarán, en ningún caso, antes de que el imputado haya prestado declaración indagatoria, o negádose a prestarla.

No se otorgarán cuando haya concurso material de delitos.

No se otorgarán, tampoco, a pesar de la entidad de la pena que les pudiera corresponder, a los imputados de los delitos o tentativas de los delitos de corrupción, previsto en el artículo 125 inciso 3° del Código Penal y privación de la libertad, en el caso que prevé el artículo 142 del mismo Código.

## TITULO XIII

### DEL CIERRE DE LA INSTRUCCION

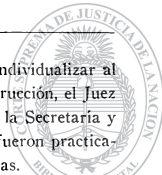
Art. 367 — Practicadas todas las diligencias que se hayan creído necesarias para la averiguación del delito y de sus autores o partícipes, el Juez dictará un auto declarando terminada la instrucción y ordenando el cierre de la misma y la elevación del proceso a la Cámara dentro de las seis horas de dictado aquel.

Dicho auto se iniciará con la referencia del nombre y apellido, sobrenombre o apodo del imputado o imputados y la de su edad, estado civil, nacionalidad, profesión y domicilio.

Inmediatamente después, expondrá, en forma sintética, los hechos de la causa, expresando el lugar y fecha de su comisión, de acuerdo a lo que a su respecto, se hubiera expresado en la denuncia o querella y a lo que la instrucción hubiere podido establecer.

Hará luego, un resumen de todas las actuaciones producidas, consignando el resultado de las mismas.

Las referencias del auto se harán con indicación del número de la foja o fojas del expediente en que se halle cada una de las actuaciones.



Art. 368 — Si no hubiere sido posible individualizar al autor o autores del hecho que motivó la instrucción, el Juez ordenará que el proceso quede reservado en la Secretaría y en el mismo auto dejará constancia de que fueron practicadas todas las diligencias tenidas por necesarias.

En cualquier momento en que, antes de operarse la prescripción de la acción, aparecieren nuevos datos o comprobantes, la instrucción será proseguida.

Art. 369 — El auto que ordene el cierre de la instrucción, será notificado a las partes, que no podrán interponer, a su respecto, recurso alguno.

Art. 370 — Hechas las notificaciones, el proceso será remitido a la Cámara dentro de la seis horas de efectuada la última, con todas las piezas de convicción que se hubieren reunido.

Se remitirán, igualmente, la demanda civil, y en su caso, el expediente relativo a los artículos de previo y especial pronunciamiento.

Si el imputado se encontrare detenido será puesto a disposición del Tribunal.

Art. 371 — La excepción de falta de jurisdicción no resuelta, impide el cierre del sumario; pero el Juez dará cuenta a la Cámara de esta circunstancia, haciendo relación detallada de las causas que motivan la demora de la resolución. Tan pronto como dicha resolución se produjere y estuviere consentida o ejecutoriada, el Juez elevará el proceso a la Cámara, en la forma establecida, a menos que se hubiese declarado incompetente, en cuyo caso procederá de conformidad a lo que dispone el artículo 329.

LIBRO II

DEL JUICIO ORAL





TITULO I  
DE LOS ACTOS PREVIOS  
CAPITULO I

DE LA INSTRUCCION SUPLEMENTARIA



Art. 372 — Recibido el proceso en la Cámara que corresponda, el Presidente dispondrá, inmediatamente, que sea puesto en Secretaría por el término de tres días, a fin de que las partes lo examinen y propongan los actos de instrucción suplementaria que consideren oportunos. A ese mismo fin, vencido el término indicado, se pasará el proceso en vista por tres días, al Fiscal.

El Presidente decidirá, sin más trámite y sin recurso alguno si los actos propuestos se han de realizar o no.

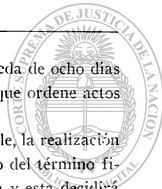
Art. 373 — El mismo Presidente ordenará, aún sin petición de parte, los actos de instrucción que estime indispensables y dispondrá, si ello fuere menester, la ampliación de alguno o de algunos de los actos realizados.

Art. 374 — Los actos de instrucción suplementaria que se decretaren en virtud de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, los realizará el Presidente, actuando como Juez de Instrucción y con observancia de las formalidades establecidas para la instrucción.

Art. 375 — Los actos de instrucción suplementaria de-

---

**Art. 372** — Véase N° 42 de la Exposición.



berán verificarse en un término que no exceda de ocho días contados desde la fecha del último decreto que ordene actos de esa índole.

Si por cualquiera circunstancia insalvable, la realización de tales actos no pudiera consumarse dentro del término fijado, el Presidente dará cuenta a la Cámara y esta decidirá si han de llevarse a cabo o no, según el grado de necesidad o impostergabilidad de los mismos. Podrá disponer, asimismo, que, si fuera posible, los referidos actos se lleven a cabo en la audiencia en que hayan de tener lugar los debates.

## CAPITULO II

### DE LA IMPUGNACION DE LOS ACTOS DE INSTRUCCION

Art. 376 — El Fiscal, el querellante y el imputado podrán, dentro del término de tres días que fija el artículo 372, alegar la nulidad de alguno o algunos de los actos de instrucción que no hubiere sido subsanada ya, de acuerdo a las disposiciones de los artículos 256 a 262 de este Código.

Art. 377 — La impugnación deberá ser hecha por escrito y de ella se dará traslado por tres días comunes, a las demás partes, para que, a su respecto, y también por escrito, formulen las manifestaciones que juzguen oportunas.

Art. 378 — Vencidos los tres días dentro de los cuales deben hacerse las manifestaciones autorizadas por el artículo anterior, y háyanse o no producido las mismas, el Presidente de la Cámara dictará la resolución que corresponda en el plazo de cuarenta y ocho horas. Esta resolución no será susceptible de recurso alguno.

Si para la decisión de la incidencia fuera absolutamente necesario producir alguna prueba, el Presidente la ordenará,

disponiendo que ella se practique dentro de cinco días, a cuyo vencimiento dictará la resolución ordenada en el párrafo que antecede y dentro del plazo allí establecido, bajo pena de cien pesos de multa.

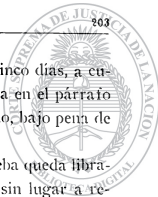
La apreciación de la necesidad de la prueba queda librada al arbitrio del Presidente de la Cámara, sin lugar a recurso alguno.

Art. 379 — Cuando la causal de nulidad que motiva la impugnación fuera evidente y resultare de las constancias procesales, el Presidente de la Cámara podrá decretarla con prescindencia de los trámites establecidos en este Capítulo.

Art. 380 — En todos los casos en que se declare la nulidad de alguno o de algunos de los actos de instrucción, el Presidente de la Cámara procederá a practicarlos de nuevo, actuando como Juez de Instrucción y con observancia de las formalidades establecidas para la instrucción.

Art. 381 — En cuanto a los efectos de la nulidad declarada, se observará lo dispuesto en los artículos 260 y 261 de este Código.

Art. 382 — El querellante que en la oportunidad indicada en el artículo 372 de este Código, no hubiera tomado, todavía, intervención en el proceso, no podrá formular la impugnación que el mismo artículo autoriza. Sin embargo, hasta tres días después de su presentación, podrá hacer notar, por escrito, las nulidades que, a su juicio, existieren y referirse a ellas durante los debates.







### CAPITULO III

#### DE LAS EXCEPCIONES NO PROPUESTAS O NO RESUELTAS DURANTE LA INSTRUCCION

Art. 383 — Las excepciones que no hubieren sido propuestas durante la instrucción y que no tengan el carácter de perentorias, sólo podrán oponerse hasta el momento de la celebración de la audiencia ordenada en el artículo 386.

Si se opusieren antes de la mencionada audiencia, el Presidente de la Cámara pasará a sustanciarlas de conformidad a las normas establecidas en los artículos 321 a 333 de este Código. La resolución corresponde a la Cámara, y ante la misma se realizará el comparendo que prescribe el artículo 328. En el caso de que sólo dieren lugar a una cuestión de puro derecho, la Cámara resolverá después de oír a las partes.

Si se opusieren al iniciarse dicha audiencia, el excepcionante lo hará en forma oral, ofreciendo la prueba que tuviere.

Las demás partes lo harán en la misma forma y la Cámara decidirá la postergación del acto, si las necesidades de la prueba, para la que fijará el término máximo de diez días, así lo exigieren.

Si, por no ser necesario, la audiencia no se postergare, la Cámara, después de las exposiciones orales, pasará a deliberar y, acto continuo, dictará la resolución, que será redactada por escrito y leída por el Secretario a las partes, en presencia de la Cámara y en la misma audiencia.

Si la audiencia se hubiere postergado, vencido que sea el término de prueba, se ordenará la reanudación de ella y se procederá como en el caso previsto en el párrafo anterior.

Art. 384 — Las excepciones perentorias, no propuestas en el periodo de la instrucción, podrán serlo en cualquier momento y aún durante los debates. Si lo fueran antes de la audiencia señalada para que tengan lugar los debates y antes, también, de la audiencia que prescribe el artículo 386, el Presidente de la Cámara procederá a sustanciarlas en la forma establecida en los artículos 321 a 333 de este Código. La resolución corresponderá a la Cámara y ante la misma se realizará el comparendo que prescribe el artículo 328. En el caso de que sólo dieran lugar a una cuestión de puro derecho, la decisión de la Cámara será pronunciada después de oír a las partes y dentro del término ya indicado.

Si las mismas excepciones se opusieren durante la audiencia que prescribe el artículo 386, se procederá en la forma estatuida para las excepciones dilatorias opuestas en idéntica oportunidad.

Si las excepciones perentorias se opusieren durante la audiencia señalada para los debates, se procederá de conformidad a las normas establecidas para dicha audiencia.

Art. 385 — Cuando la Cámara recibiere, conjuntamente con el proceso, algún incidente relativo a excepciones opuestas y no resueltas durante la instrucción, el Presidente continuará los trámites de conformidad a las normas establecidas en los artículos 321 a 333 de este Código. La resolución corresponderá a la Cámara y ante la misma se realizará, si ya no se hubiere realizado, el comparendo que prescribe el artículo 328.



## CAPITULO IV

## DEL EXAMEN PUBLICO DE LOS ACTOS DE INSTRUCCION

Art. 386 — Vencido que sea el término de tres días señalado en el artículo 372 sin haberse decretado ninguna medida de instrucción suplementaria, sin haberse impugnado los actos de la instrucción, sin que se hayan opuesto excepciones o sin que haya sido necesario practicar diligencias con motivo de excepciones no resueltas durante la instrucción, el Presidente convocará a una audiencia pública a realizarse dentro de los diez días para que las partes informen oralmente, ante la Cámara, acerca del mérito de la instrucción.

La convocatoria a la audiencia deberá hacerse dentro de la veinticuatro horas del vencimiento del término de tres días mencionado en el párrafo anterior o de haberse practicado las medidas a que dieron lugar las circunstancias que el mismo determina.

Art. 387 — Para la referida audiencia serán citados, con no menos de cuarenta y ocho horas de anticipación, el Fiscal, el querellante, el imputado y sus defensores y el promotor de la acción civil. A los citados se les hará la advertencia de que el acto se llevará a cabo con los que concurran.

Art. 388 — El imputado que se encuentre detenido, comparecerá libre a la audiencia, pero con la vigilancia necesaria para impedir su evasión.

Art. 389 — En el día y hora señalados se iniciará la audiencia estando presentes todos los miembros de la Cámara, o los que, en caso de sustitución legalmente autorizada, los reemplazaren.

---

Art. 386 — Véase N° 43 de la Exposición.

El Presidente preguntará a las partes si tienen alguna excepción que oponer, con la advertencia de que sólo pueden ser opuestas las que este Código autoriza.

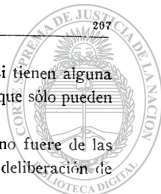
Si se opusiere alguna excepción y ella no fuere de las autorizadas, se desechará en el acto, previa deliberación de la Cámara.

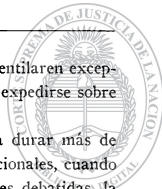
Si la excepción fuere admisible, se procederá en la forma establecida en el artículo 383 de este Código.

Si no se opusieren excepciones o si, opuestas, ellas fueren resueltas en el mismo acto, el Presidente hará saber a las partes que la audiencia tiene por objeto exclusivo dilucidar la cuestión relativa a saber si existe mérito para que el imputado sea sometido a acusación, en vista de las constancias del proceso. Acto continuo, el Secretario dará lectura del auto que ordenó el cierre de la instrucción.

Art. 390 — Las exposiciones serán formuladas por las partes, personalmente, si no estuvieren representadas por apoderado que tenga el carácter de letrado, en cuyo caso podrá hacerlo éste. En cualquier caso, el abogado patrocinante, sea de la parte o de quien la represente, hará la exposición. La que corresponde formular al imputado será hecha por intermedio de su defensor.

Art. 391 — Formulará su exposición, en primer término, el querellante y, a continuación, el promotor de la acción civil. Hablará, luego, el Fiscal. Éste lo hará en primer término cuando no hubiere querellante y tampoco se hubiere promovido acción civil o si estuvieren ausentes el querellante o el promotor de dicha acción. Después, hablarán el defensor del imputado y éste mismo, si quisiera ampliar la exposición del defensor o si el defensor no hubiere concurrido. En caso de haber más de un defensor del mismo imputado, solamente uno





podrá hablar en esta audiencia; pero, si se ventilaren excepciones, uno podrá referirse a ellas y el otro expedirse sobre el mérito del sumario.

Art. 392 — Cada exposición no podrá durar más de treinta minutos. La Cámara en casos excepcionales, cuando lo impongan la complejidad de las cuestiones debatidas, la cantidad de las mismas o el número considerable de las actuaciones producidas durante la instrucción, podrá permitir que las exposiciones de las partes se prolonguen más allá de aquel término.

Art. 393 — Fuera de los casos en que este Código lo autoriza, con motivo de excepciones opuestas en la audiencia, ésta no podrá ser suspendida ni prorrogada sino por causas muy poderosas, cuya apreciación queda librada a la Cámara.

Las normas estatuidas para la audiencia en que hayan de tener lugar los debates, en cuanto se refieren al acceso de las personas, mantenimiento de la disciplina y lugar de su celebración, rigen, también, para la audiencia a que aluden las disposiciones de este Capítulo y, en general, para todas las que, con carácter público, celebre la Cámara.

En lo pertinente, rigen, asimismo, las disposiciones relativas a la asistencia de las partes.

Art. 394 — La inasistencia de cualquiera de las partes no obstará a la celebración del acto. La asistencia solamente es obligatoria para el Fiscal.

La ausencia de este tampoco impedirá la celebración del acto, pero será reprimida con quinientos pesos de multa, la primera vez, y suspensión del cargo por un mes sin goce de sueldo, en caso de reincidencia, sin perjuicio de la sanción que pueda aplicarle el Tribunal de Responsabilidades.

Art. 395 — Si el Fiscal opinare que no existe mérito para que el imputado sea sometido a acusación, se dejará constancia escrita de ello, en el acta que se labrará. Del desarrollo de la audiencia y de las conclusiones que formulen las partes, se dejará constancia en el acta, bajo pena de nulidad y de multa de cien pesos al Secretario respectivo.

## CAPITULO V

### DEL PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL MERITO DE LA INSTRUCCION

Art. 396 — Terminadas las exposiciones, la Cámara pasará a deliberar fuera de la presencia del público y dictará resolución escrita.

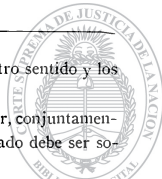
La mayoría de los votos de los miembros del Tribunal forma resolución. Reanudada la audiencia, el Presidente dispondrá que el Secretario dé lectura de la resolución. Terminada la lectura, el Secretario pondrá una nota al pie de la resolución dejando constancia de que esta formalidad ha sido cumplida.

Art. 397 — La resolución establecerá si la Cámara o la mayoría de los miembros, encuentra o no encuentra mérito para someter a acusación al imputado o imputados, o solamente a alguno de ellos. En miembro de la Cámara que disintiera con la opinión de la mayoría, lo hará constar al suscribir la resolución.

Art. 398 — La Cámara no desarrollará los fundamentos de su resolución, aunque deberá consignar las causas en

---

Art. 396 — Véase N° 44 de la Exposición.



virtud de las cuales se pronunció en uno u otro sentido y los textos legales que le sirven de base.

Art. 399 — Son causas que han de mediar, conjuntamente, para que la Cámara declare que el imputado debe ser sometido a acusación:

- 1º La existencia de un delito, justificada por pruebas que la Cámara apreciará libremente, sin sujeción a regla alguna, y considere bastantes para fundar su convicción sincera.
- 2º Que haya elementos suficientes de juicio, apreciados con igual criterio, para cimentar una convicción idéntica en el sentido de que el imputado es responsable del delito.

Art. 400 — La declaración de que no se encuentra mérito para someter al imputado a acusación sólo se hará:

- 1º Cuando resulte con evidencia que el delito no ha sido perpetrado.
- 2º Cuando el hecho probado no constituye delito.
- 3º Cuando, de un modo indudable, el imputado apareciere exento de responsabilidad criminal.
- 4º Cuando mediare alguna causa que pudo ser el fundamento de una excepción perentoria y ésta no se hubiera opuesto.

La apreciación de la prueba se hará con el criterio autorizado en el artículo anterior.

Art. 401 — En el caso de que se declare no haber mérito para someter a acusación al imputado o imputados, se declarará, también, que, respecto de aquél o de aquellos en cuyo favor se hace la declaración, el proceso ha terminado. Los mismos, si estuvieren detenidos, serán puestos en libertad, inmediatamente, salvo que se hallaren presos por otras

causas. Pasada en autoridad de cosa juzgada esta resolución, la Cámara ordenará que no quede ninguna constancia de la causa o proceso en el prontuario policial del imputado absuelto. Al evacuar informes, las autoridades que estuvieran a cargo de los prontuarios jamás mencionarán como mal antecedente de una persona la circunstancia de haber sido procesada si fué absuelta, bajo pena de quinientos pesos de multa al empleado o funcionario que produjere el informe.

Art. 402 — Contra la resolución que declare no existir mérito para que el imputado sea sometido a acusación, sólo procede el recurso de casación.

Art. 403 — La resolución por la cual se declare que hay mérito bastante para someter a acusación al imputado o imputados, contendrá:

- 1º La enunciación sucinta de los hechos que a aquél se le atribuyen.
- 2º La orden de convertir en prisión preventiva la detención que estuviere sufriendo, aun cuando se hubiere acogido a los beneficios de la libertad provisoria y sin perjuicio de seguir gozando de ellos.
- 3º La orden de trabar embargo en bienes del imputado en cantidad suficiente para asegurar el pago de la pena pecuniaria y el de las indemnizaciones y restituciones a que pudiese ser condenado.

Art. 404 — Contra la resolución que declare haber mérito para someter a acusación al imputado, no procede recurso alguno.





## CAPITULO VI

### DE LA OPCION ENTRE EL JURADO Y LA CAMARA

Art. 405 — Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación del pronunciamiento de la Cámara haciendo lugar a la acusación, las partes manifestarán si prefieren que la causa sea juzgada por la Cámara o por el Jurado, importando su silencio someterse al juzgamiento de la Cámara.

Art. 406 — Bastará que una de las partes o uno de los imputados opte por el Jurado para que la causa deba ser juzgada por éste, bajo pena de nulidad. La opción por el Jurado deberá ser siempre expresa.

Art. 407 — Si se guardare silencio o se optara expresamente por la Cámara, se procederá conforme a lo dispuesto en los Capítulos siguientes. Si se optara por el Jurado, se estará a lo dispuesto en el Título IV de la Ley Orgánica del Jurado.

## CAPITULO VII

### DE LA PREPARACION DE LOS DEBATES ANTE LA CAMARA

Art. 408 — Dentro de las veinticuatro horas de la opción expresa o implícita, el proceso será puesto en la Secretaría de la Cámara para que, en el término de cinco días, las partes ofrezcan las pruebas que tuvieren a fin de que sean recibidas en la oportunidad que corresponda.

Art. 409 — Si el Fiscal hubiere manifestado, en la debida oportunidad su opinión adversa a la declaración de ha-

---

Art. 405 — Véase N° 45 y 46 de la Exposición.

ber mérito para que el imputado sea sometido a acusación, será reemplazado en la forma establecida para los casos de excusación o recusación. El que lo reemplace queda obligado a formular acusación y a realizar todas las diligencias necesarias para demostrar la culpabilidad, bajo la pena fijada en el artículo 394.

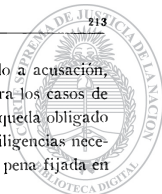
Art. 410 — La Cámara examinará las pruebas propuestas y en una sola resolución declarará cuáles son las pertinentes. Respecto de las que fueren desechadas, la denegación deberá fundarse. El peticionante que se considere agraviado por la denegación dejará constancia de su protesta fundada en las consecuencias que resultaren de la denegación. La protesta se hará dentro de las veinticuatro horas subsiguientes a la notificación.

Art. 411 — Si la prueba ofrecida fuere pericial, el Presidente designará uno o más peritos, conforme a las reglas que contienen los artículos 297 a 315 de este Código.

La parte que solicite la prueba pericial indicará los puntos sobre que haya de versar. Si, respecto de ellos, ya se hubiere producido idéntica prueba durante la instrucción, el pedido será desechado, excepto cuando la parte que la pida no hubiese intervenido en las diligencias respectivas.

Art. 412 — El Presidente de la Cámara podrá disponer, aun sin pedido de parte, que, durante la audiencia, se practiquen exámenes periciales, designando a los peritos que hayan de practicarlos. Al hacer la designación se ajustará a lo dispuesto en los artículos 297 y 298 de este Código e indicará los puntos sobre que hayan de versar los exámenes.

Art. 413 — Las partes pueden solicitar que los peritos que produjeran informes durante la instrucción, sean citados a la audiencia para ampliar o aclarar aquellos informes o pa-

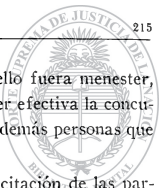


ra responder a nuevas cuestiones que se les propongan. El Presidente dispondrá de oficio la citación si no la pidieren las partes y la presencia de los peritos fuera necesaria o conveniente a los fines del proceso.

Art. 414 — En todos los casos en que se ordene prueba pericial a producirse en la audiencia o que se disponga que concurren a ella los peritos que intervinieron durante la instrucción, cada una de las partes podrá presentar en los debates, sin necesidad de citación ni de propuesta previa, un consultor técnico para que exponga sus observaciones sobre las conclusiones del perito o peritos.

Art. 415 — Establecidas cuáles son las pruebas que han de producir, el Presidente de la Cámara procederá en la siguiente forma:

- 1° Señalará día y hora para la audiencia en que hayan de tener lugar los debates. Esta audiencia, cuando el imputado se encuentre detenido, se fijará para la fecha más próxima que sea posible, con precedencia absoluta sobre cualquier otro juicio relativo a imputados no detenidos.
- 2° Ordenará la citación a las partes, que deberá practicarse con no menos de cuarenta y ocho horas de anticipación, bajo pena de cien pesos de multa al empleado responsable de la demora.
- 3° Ordenará la citación a los testigos, peritos y demás personas que deban concurrir a la audiencia. La citación a testigos y peritos se hará de acuerdo a las disposiciones generales de este Código y con la advertencia de las responsabilidades en que incurren los que dejan de comparecer.

- 
- 4° Dispondrá, en los casos en que ello fuera menester, las medidas necesarias para hacer efectiva la concurrencia de los testigos, peritos y demás personas que deban asistir a la audiencia.
- 5° Ordenará que se practique, con citación de las partes, las diligencias de prueba que, por su naturaleza, no pudieran practicarse en la audiencia. Si tales diligencias no se hubieren podido llevar a cabo antes del día designado para la audiencia, ésta se podrá postergar por no más de diez días.
- 6° Dispondrá que, antes de la audiencia, se reciba declaración a algún testigo que se encuentre en grave estado de salud o en trance de ausentarse del país.

Art. 416 — Las partes podrán presentar, en el acto de celebrarse la audiencia, cualquier prueba de que intentaren valerse en defensa de sus derechos, siempre que no hubieran tenido conocimiento de la misma en la oportunidad en que debieron ofrecerla conforme a lo dispuesto en el artículo 408.

Art. 417 — La nulidad de los actos previos al juicio quedará subsanada si no se alegase inmediatamente después de la apertura de la audiencia en que han de tener lugar los debates.



## TÍTULO II

### DE LOS DEBATES

#### CAPÍTULO I

##### DEL CARACTER Y NORMAS DISCIPLINARIAS DE LA AUDIENCIA

Art. 418 — La audiencia para los debates será pública, bajo pena de nulidad.

La Cámara podrá disponer, sin embargo, que los debates o alguno de ellos, tengan lugar a puerta cerrada, cuando la publicidad, por razón de la naturaleza de los hechos, pueda perturbar el orden público, afectar la moral o excitar reprochable curiosidad, o cuando se produzca por parte del público, manifestaciones capaces de turbar la serenidad de los debates.

La Cámara podrá disponer, también, que los debates se realicen a puerta cerrada y por razones de higiene pública, en tiempos de difusión de alguna enfermedad epidémica. También por razones de higiene podrá limitar el número de los asistentes, dando preferencia a los periodistas, abogados, procuradores, escribanos o funcionarios públicos y a los estudiantes universitarios.

Art. 419 — La decisión de realizar los debates a puerta cerrada, corresponderá la Cámara. Ella se dictará por escrito y con expresión de las causas que la motivan. Si estas causas desaparecieran durante el curso de la audiencia, la

---

Art. 418 — Véase N° 47 de la Exposición.

clausura será inmediatamente levantada, bajo pena de nulidad.

Art. 420 — Se destinará audiencias especiales para los debates cuando los imputados sean menores de diez y ocho años, aunque hubiera coimputados que tengan más edad.

Tales debates tendrán lugar a puerta cerrada pero la Cámara podrá autorizar la asistencia de los padres, tutores y guardadores, así como la de abogados, procuradores o funcionarios públicos y estudiantes de derecho o medicina.

Art. 421 — En los casos en que se resuelva que los debates se realicen a puerta cerrada, sólo podrán penetrar en la sala de audiencia las personas que tienen el deber o el derecho de asistir. Los testigos, intérpretes, traductores, peritos y consultores técnicos, serán admitidos según el orden en que sean llamados y por el tiempo que sea necesaria su presencia.

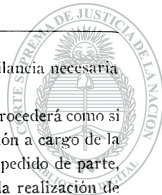
Art. 422 — En ningún caso serán admitidos a las audiencias públicas de la Cámara las personas que sean notoriamente deshonestas, o que ejerzan la vagancia o la mendicidad.

La misma prohibición rige respecto de los menores de diez y ocho años, excepto si se trata de estudiantes universitarios que justifiquen su calidad de tales.

Cuando alguna de estas personas deba intervenir en la audiencia como testigo, se le hará retirar tan pronto como su presencia deje de ser necesaria.

Art. 423 — El Presidente de la Cámara dispondrá que se retire de la audiencia cualquier persona que altere el orden, observe actitudes indecorosas o se halle comprendida en las disposiciones del artículo anterior.

Art. 424 — El imputado que se encuentre detenido com-



parecerá libre a la audiencia, pero con la vigilancia necesaria para impedir su evasión.

Si el detenido se negare a concurrir, se procederá como si estuviera presente, quedando su representación a cargo de la defensa, salvo que la Cámara, de oficio o a pedido de parte, ordene su presencia por ser necesaria para la realización de los debates.

Si el detenido no pudiere concurrir por causas insalvables que apreciará la Cámara y que deberán ser probadas, la audiencia se postergará, salvo que el imputado se manifieste conforme con que el debate se realice sin su presencia y la Cámara considere que ésta no es indispensable. Su representación, en este caso, quedará, también, a cargo de la defensa.

Si hubiere dos o más coimputados y no todos se encontraren en la imposibilidad de concurrir, el juicio se suspenderá respecto del impedido o impedidos y continuará respecto de los demás, a menos que la Cámara considere que es de evidente y absoluta necesidad suspenderlo respecto de todos.

Art. 425 — Si el imputado no se encontrare detenido, se abstuviera de concurrir a la audiencia o se ausentare de la misma después del interrogatorio, regirá lo dispuesto en el artículo anterior.

Si se ausentare antes del interrogatorio, será declarado rebelde, salvo que haya expresado su conformidad con que el debate se continúe sin su presencia.

En ambos casos, sin embargo, si la Cámara reconoce que hay para ello motivo bastante, podrá suspender los debates hasta que aquel sea traído al recinto.

Art. 426 — Siempre que la Cámara considere indispensable que los imputados, encuéntrense o no detenidos, comparezcan a la audiencia, podrá obligarlos compulsivamente, ha-

ciendo uso de la fuerza pública. Si la compulsion obedeciere a la necesidad de tomar conocimiento directo y de visu del imputado y éste se negare a asistir a la audiencia, en los casos en que la negativa fuere admitida, aquella formalidad se cumplirá fuera de la presencia del público y de las partes y en cualquier momento, antes del veredicto.

Art. 427 — La asistencia del Fiscal es obligatoria. Su inasistencia no justificada podrá estimarse como acto de obstrucción a la justicia, pasible de las sanciones establecidas en el artículo 394.

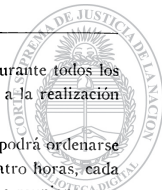
Es también obligatoria la asistencia del defensor y su inasistencia no justificada podrá apreciarse de la misma manera y será pasible de las sanciones disciplinarias correspondientes.

La Cámara tiene facultad para hacer comparecer a los Fiscales y Defensores, empleando la fuerza pública si fuere necesario.

Si a pesar de las diligencias realizadas no fuera posible obtener la comparecencia de los Fiscales y Defensores, la Cámara les aplicará una multa de quinientos pesos a cada uno y procederá a reemplazarlos en el mismo día de la audiencia. Los primeros lo serán en la forma que legalmente corresponda. Los segundos lo serán, si fueran Defensores particulares, por el de Pobres. Si este fuera el inasistente, será reemplazado por un abogado de la matrícula conforme a los dispuesto en el artículo 42 de este Código. El Defensor de Pobres quedará sometido a las responsabilidades fijadas en el artículo 394 para los Fiscales. Si el reemplazo no fuera posible en el acto, la audiencia se postergará para el día siguiente.

Art. 428 — La inasistencia injustificada del querellante y la del promotor de la acción civil, importan desistimiento de sus respectivas acciones.





Art. 429 — La audiencia continuará durante todos los días consecutivos que sea necesario dedicar a la realización de los actos que forman su objeto.

La suspensión de un día para otro sólo podrá ordenarse después de haber dedicado por lo menos cuatro horas, cada día, a la realización de dichos actos. Para las reuniones que se celebren como prosecución de la audiencia, no se harán nuevas citaciones, bastando la notificación verbal en voz alta que deberá hacer el Secretario acerca de la hora en que, al día siguiente, será reanudada la audiencia.

Art. 430 — Todos los que concurren a la audiencia están obligados a mantener la más estricta compostura. No podrán hacer manifestaciones de opinión o sentimiento. Los infractores serán expulsados inmediatamente, sin perjuicio de ser sometidos a las sanciones disciplinarias que correspondan.

La dirección de los debates y los poderes de policía y disciplina de la audiencia corresponden al Presidente de la Cámara.

La autoridad policial le prestará la cooperación que requiera sin hesitación alguna y con la rapidez o energía que requieran las circunstancias.

Art. 431 — Cuando la Cámara considere que así conviene, para mayor comodidad, economía de tiempo o de gastos, o por cualquiera otra circunstancia que pueda redundar en beneficio de la más rápida solución del proceso, podrá disponer que la audiencia se lleve a cabo en cualquier otro lugar de aquél en que tiene su sede, si fuere dentro del distrito de su jurisdicción.

## CAPITULO II

## DE LA INICIACION DE LA AUDIENCIA



Art. 432 — En el día y hora señalados, se iniciará la audiencia, estando presentes todos los miembros de la Cámara, o los que, en caso de sustitución legalmente autorizada, los reemplazaren.

Art. 433 — Inmediatamente después que el Presidente haya declarado abierta la audiencia, se podrán plantear las cuestiones que se refieren a la observancia de las formalidades establecidas en el artículo 257 de este Código.

Se podrán plantear, también, en ese momento, las cuestiones sobre admisibilidad, inhabilidad o inasistencia de testigos, peritos o intérpretes y asistencia y representación del imputado.

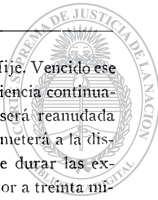
No planteadas dichas cuestiones en la oportunidad señalada, no podrán serlo después, salvo que el motivo que las funde sobrevenga en el curso del debate.

Art. 434 — Las cuestiones enunciadas serán consideradas en una sola discusión y resueltas en el mismo acto, previa deliberación de la Cámara. Esta deliberación tendrá lugar fuera de la presencia del público y de las partes. Leída la resolución por el Secretario, la audiencia se continuará.

Cuando la cuestión propuesta no fuera de las que se indican en el párrafo primero del artículo anterior, la Cámara podrá diferir su consideración para el momento del debate.

Art. 435 — En cualquier momento de la audiencia podrá oponerse excepciones perentorias.

En caso de absoluta necesidad, por razón de la prueba que se ofreciere, la audiencia podrá ser suspendida por el tér-



mino prudencial no mayor de diez días que se fije. Vencido ese término sin que la prueba se produzca, la audiencia continuará. Si la prueba se produjere, la audiencia será reanudada tan pronto como se termine. La Cámara la someterá a la discusión, estableciendo el tiempo que hayan de durar las exposiciones, siempre que cada una no sea inferior a treinta minutos. Terminada esta, la Cámara pasará a deliberar, fuera de la presencia del público y de las partes, y dictará resolución escrita, de la que el Secretario dará lectura.

### CAPITULO III

#### DEL INTERROGATORIO DEL IMPUTADO

Art. 436 — Resueltas que sean las cuestiones o excepciones propuestas al iniciarse la audiencia, en forma que el proceso deba continuar, dará comienzo el debate. El Presidente dispondrá que se dé lectura de la resolución por la cual se declaró existir mérito para someter a acusación al imputado. Esta lectura no podrá ser omitida, bajo pena de nulidad, aunque las partes lo pidieren.

Acto continuo el Presidente preguntará al imputado respecto de su nombre, apellido, edad, estado, domicilio y profesión. Le preguntará enseguida, bajo pena de nulidad, si reconoce o no los hechos que se le atribuyen y le advertirá que tiene el derecho de manifestar, en su descargo, lo que tenga por conveniente.

El imputado podrá pedir todas las aclaraciones que considere necesarias para sus respuestas, y el Presidente deberá dárselas.

Art. 437 — En cualquier momento del debate, los miem-

---

Art. 437 — Véase N° 47 de la Exposición.

bros de la Cámara, el Fiscal o los abogados de las partes, podrán formular directamente nuevas preguntas al imputado o imputados. El imputado no tiene la obligación de responder a las preguntas que se le dirijan. De la negativa se dejará constancia escrita.

Art. 438 — Si los imputados fueran varios, se interrogará por separado a cada uno de ellos. A tal fin el Presidente dispondrá que los demás se retiren de la audiencia hasta que cada interrogatorio haya terminado. Después de los interrogatorios separados, el Presidente podrá carear a los coimputados que hubieran incurrido en contradicciones, observándose la regla del artículo anterior.

Art. 439 — En el curso de los debates, el imputado puede hacer todas las manifestaciones que considere oportunas, siempre que se refieran a su defensa.

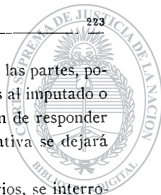
El imputado podrá conversar con su defensor, pero no tiene el derecho de consultarle durante el interrogatorio o antes de responder a una pregunta.

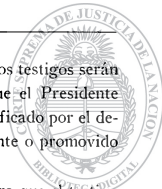
Art. 440 — Se prohíbe al defensor y a toda otra persona hacer sugerencias al imputado durante los interrogatorios. De esta infracción se dejará constancia escrita, sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias que correspondan.

## CAPITULO IV

### DE LA RECEPCION DE LAS PRUEBAS

Art. 441 — Terminado que sea el interrogatorio que prescribe el Capítulo anterior de este Código, se procederá a recibir la prueba, comenzando por la lectura de las actuaciones a que hubiere dado lugar la recepción de pruebas insusceptibles de producirse en la audiencia.





Seguirá, luego, la prueba testimonial. Los testigos serán examinados separadamente, en el orden que el Presidente disponga, dando precedencia a los del damnificado por el delito, aunque se haya constituido en querellante o promovido acción civil.

Se adoptarán las medidas necesarias para que el testigo no se comuniqué antes de su declaración, con alguna de las partes, sus representantes o Defensores.

Se evitará, también, que, antes de su declaración, el testigo asista al examen de los otros, vea, oiga o sea informado de lo que ocurre en la sala de audiencia. Sin embargo, toda persona que hubiere presenciado la comisión de un delito, aun cuando no haya declarado en el sumario y no haya sido ofrecido como testigo por alguna de las partes, puede presentarse voluntariamente a la audiencia pública en que se ventile el proceso y solicitar autorización de la Cámara para declarar. En ningún caso podrá negársele este derecho.

El examen de los testigos se hará con observancia de las normas establecidas en los artículos 282 a 296 de este Código.

Art. 442 — Si durante la instrucción se hubieren producido informes periciales, el Presidente, después de las declaraciones testimoniales, hará dar lectura de sus conclusiones. Las partes pueden pedir y la Cámara puede autorizar, la lectura íntegra de los informes o de algunos de sus pasajes, cuando ello fuere necesario para mayor claridad.

Los peritos de la instrucción, que concurren en virtud de citación ordenada, serán oídos después de la lectura. Deberán limitarse a dar las explicaciones que les sean requeridas y acto seguido, expondrán las conclusiones de su peritaje, fundándolas brevemente con expresión de las razones esenciales

en que las apoyan. En todo lo demás serán de aplicación las prescripciones del artículo 310 y 311 del presente Código.

Art. 443 — Los consultores técnicos podrán exponer sus conclusiones sujetándose a lo dispuesto en el artículo anterior y en los artículos 313 a 315.

Art. 444 — Los testigos, peritos, consultores técnicos, intérpretes y traductores que deban intervenir en la audiencia, prestarán juramento de decir verdad, y, en su caso, de responder conforme a los conocimientos científicos o idiomáticos inherentes a su calidad.

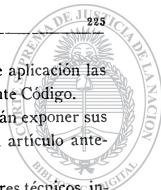
Art. 445 — Si en el curso de los debates se advirtiera la necesidad perentoria de una diligencia pericial, la Cámara la ordenará, aun sin petición de parte.

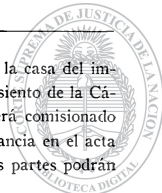
Si la pericia que en tal virtud se decretare, no pudiere llevarse a cabo en la misma audiencia, ésta se suspenderá por el tiempo que sea estrictamente necesario, notificándose en el mismo acto a las partes la fecha en que se continuará, que en ningún caso podrá exceder de diez días.

Art. 446 — Cuando un testigo, un perito, un intérprete o un traductor, cuya citación se hubiere ordenado, no comparezca, la Cámara, después de oír al Fiscal y demás partes, puede ordenar la suspensión de la audiencia hasta que sea traído el inasistente, siempre que juzgue absolutamente necesaria su presencia en los debates.

Si la inasistencia no estuviera justificada, la Cámara podrá disponer que el que incurrió en ella sea conducido a la audiencia por la fuerza pública. La inasistencia de un consultor técnico no impedirá la prosecución del acto.

Art. 447 — El testigo o perito que no asistiere por legítimo impedimento, será examinado en el lugar en que se encuentre, librándose en su caso, las órdenes o exhortos necesarios.





Si el examen hubiere de practicarse en la casa del im-pedido y éste se encontrare en el lugar del asiento de la Cá-mara, uno de los miembros de la misma será comisionado para la diligencia, de la que se dejará constancia en el acta que labrará el Secretario de la Cámara. Las partes podrán hacerse representar.

Art. 448 — Cualquiera de los miembros de la Cámara, el Fiscal o los abogados de las partes, podrán formular di-rectamente preguntas a los testigos, peritos y consultores técnicos, siempre que se relacionen con la causa o tiendan a probar el grado de veracidad o de aptitud del interrogado. El Fiscal y los abogados harán las preguntas luego de haber so-llicitado permiso al Presidente para interrogar.

Art. 449 — El Fiscal y los abogados pueden oponerse a que se contesten las preguntas que uno u otros formulen a testigos, peritos o consultores técnicos, cuando no tuvieren el objeto indicado en el artículo anterior. El Presidente re-solverá en el acto, y sin apelación, si debe o no prosperar la oposición.

Art. 450 — La Cámara, a pedido de parte o sin él, po-drá carear a los testigos entre sí o con el imputado y a los coimputados entre sí.

Podrá ordenar, también, que se practiquen reconoci-mientos de personas.

Art. 451 — La Cámara podrá disponer que ningún tes-tigo o perito se retire del lugar donde se verifica la audiencia, cuando así lo estime conveniente.

Art. 452 — Puede ser ordenada, aun de oficio, la lec-tura de cualquier documento atribuido al imputado. Este no

---

Art. 448 — Véase N° 47 de la Exposición.

está obligado a reconocer los documentos que se le atribuyan y le fueren exhibidos con tal objeto.

Art. 453 — Los documentos, los instrumentos del delito y cualquier cosa que pueda servir como elemento de convicción, en cualquier sentido, serán presentados a las partes o a los peritos o testigos, requiriéndoles, según los casos, el reconocimiento.

Art. 454 — La Cámara, si fuera necesario para establecer la verdad o para verificar comprobaciones que juzgue de importancia, podrá constituirse en el lugar del hecho que motiva el proceso, citando a las partes.

La Cámara podrá ordenar, aun de oficio, la realización de cualquier otra diligencia de prueba que pueda tener eficacia decisiva.

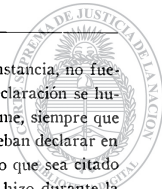
Art. 455 — Las diligencias que se ordenen durante la audiencia se practicarán con arreglo a las normas estatuidas para la instrucción, en cuanto fueran aplicables.

Art. 456 — Durante la audiencia podrán ser leídas las constancias de la instrucción referentes a reconocimientos, pesquisas, reconstrucción de hechos, secuestros y careos que se hubieren practicado.

Podrán ser leídas, también, las declaraciones testimoniales tomadas durante la instrucción, siempre que lo consientan el Fiscal y las demás partes y que, además, el testigo haya sido citado para la audiencia. La circunstancia de no haber comparecido el testigo no impedirá, en el caso, la lectura que se autoriza.

La lectura de las declaraciones mencionadas en el párrafo precedente podrá llevarse a cabo, además, cuando de ellas resulten contradicciones con lo expuesto en los debates o variaciones apreciables; cuando el testigo hubiere falleci-





do, se hallare ausente, o por cualquier circunstancia, no fuere posible hacerle comparecer; cuando la declaración se hubiere prestado por medio de exhorto o informe, siempre que el que la prestó figure en la lista de los que deban declarar en la audiencia y que la Cámara haya dispuesto que sea citado o que declare en la misma forma en que lo hizo durante la instrucción.

Ello no obstará a lo dispuesto en el penúltimo apartado del artículo 441, en cuanto al derecho de presentarse voluntariamente a declarar que corresponde a un testigo.

Art. 457 — Será permitida la lectura de cualquier acto o documento que, a juicio de la Cámara, pueda tener interés para la causa.

Art. 458 — No será permitida la lectura de informaciones sobre las voces corrientes en el público acerca de los hechos del proceso o sobre la moralidad de las partes o de los testigos, salvo que tengan carácter oficial.

## CAPITULO V

### DE LA DISCUSION FINAL

Art. 459 — Terminada que sea la recepción de las pruebas, el Presidente concederá la palabra al querellante, al promotor de la acción civil, al Fiscal y al Defensor o Defensores del imputado.

El orden establecido en el párrafo anterior no podrá ser alterado.

Las exposiciones serán orales, bajo pena de nulidad. Queda absolutamente prohibida la lectura, salvo las citas legales o de doctrina. También queda prohibida la presentación de memoriales, salvo por el que haya promovido la acción ci-

vil, quien podrá hacerlo, limitando el memorial a lo que está autorizado a expresar oralmente.

El memorial será devuelto si la limitación establecida no fuere observada.

Art. 460 — La exposición del querellante se concretará a la prueba producida, y a pedir la imposición de la pena que estime corresponder. Si su derecho a promover querella hubiere sido discutido, podrá fundar su derecho, cuando al respecto, no se hubiere dictado ninguna resolución. Si el querellante fuere, además, el promotor de la acción civil, expondrá lo que corresponda a su derecho a ser indemnizado del daño moral o material que fuere el objeto de su acción. Expondrá, también, los fundamentos de la estimación pecuniaria que haga del monto del daño sufrido.

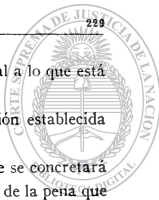
Art. 461 — El promotor de la acción civil, que no fuere querellante, limitará su exposición a los puntos que indica el último apartado del artículo anterior.

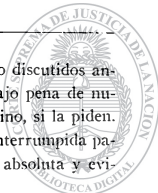
Art. 462 — La exposición del querellante y la del promotor de la acción civil sólo podrá hacerse por intermedio de representantes, cuando éstos sean letrados o cuando concurren bajo el patrocinio de letrados, en cuyo caso la exposición será a cargo de los patrocinantes.

Art. 463 — Inmediatamente después, o en primer término, cuando no hubiere querella o acción civil, el Fiscal formulará su requisitoria.

Art. 464 — Terminada la requisitoria, se concederá la palabra al Defensor. Si hubiere dos Defensores, podrán dividirse entre ellos la materia de la defensa.

Art. 465 — El Fiscal y el o los Defensores del o de los imputados podrán replicar por una sola vez. La replica deberá ceñirse a lo que sea estrictamente necesario para refutar





los argumentos contrarios que no hayan sido discutidos antes. El o los imputados y los Defensores, bajo pena de nulidad, deben tener la palabra en último término, si la piden.

Art. 466 — La discusión no podrá ser interrumpida para recibir nuevas pruebas, sino en casos de absoluta y evidente necesidad, que apreciará la Cámara.

Art. 467 — La nulidad de algún acto ordenado o verificado durante los debates, quedará subsanada si no se hace notar antes de que se lleve a cabo y cuando esto no fuere posible, inmediatamente después de practicado. De la impugnación y de su resultado se dejará constancia en el acta.

Art. 468 — Las reglas de este capítulo se observarán escurpulosamente, bajo pena de nulidad, y su infracción constituye falta grave para los magistrados que intervengan en la causa.

## CAPITULO VI

### DEL VEREDICTO

Art. 469 — Agotada la discusión, el Presidente declarará terminada la audiencia y la Cámara pasará a deliberar en secreto a fin de pronunciar el veredicto inmediatamente.

Art. 470 — La deliberación versará:

- 1° Sobre las cuestiones propuestas en la audiencia y cuya decisión hubiere sido diferida.
- 2° Sobre la existencia del cuerpo del delito.
- 3° Sobre la existencia de una causa extintiva de la acción penal.
- 4° Sobre la participación del imputado en el hecho de

---

Art. 469 — Véase N° 48 y 49 de la Exposición.

la causa, y si los imputados fueren varios, sobre la participación de cada uno de ellos.

- 5° Sobre la responsabilidad legal del imputado o imputados.
- 6° Sobre la existencia de alguna causa que excluya la imputabilidad.
- 7° Sobre la existencia de circunstancias calificativas del delito.
- 8° Sobre la absolución o condena del imputado y, en su caso, sobre el sometimiento del mismo a alguna medida de seguridad o a alguna pena o una y otra y cuales sean esa medida y esa pena.

Art. 471 — La solución de cada uno de los puntos sobre que ha de versar la deliberación será la que resulte del voto de la mayoría de los miembros de la Cámara.

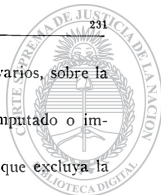
Para establecer el orden en que han de ser emitidos los votos se hará un sorteo en cada caso, en el momento inicial de la deliberación.

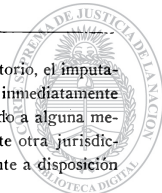
La deliberación será secreta.

Terminada la deliberación, se consignará por escrito únicamente la solución a que se haya llegado en el sentido de absolver o condenar al imputado, y, en su caso, de someterlo a alguna medida de seguridad.

Esta solución constitutiva del veredicto, será firmada por todos los miembros de la Cámara, sin dejar constancia de las disidencias que puedan haberse producido en la votación. La expresión de dichas disidencias podrá ser hecha, recién, en la sentencia.

Art. 472 — Inmediatamente después de firmado el veredicto, será leído por el Secretario en la sala de audiencias, estando presentes los miembros de la Cámara. La lectura del veredicto equivale a la notificación.





Art. 473 — Si el veredicto fuera absolutorio, el imputado que se encontrare detenido será puesto inmediatamente en libertad, salvo que hubiere de ser sometido a alguna medida de seguridad o estuviere procesado ante otra jurisdicción, en cuyo caso será puesto inmediatamente a disposición de las autoridades judiciales de la misma.

Art. 474 — Con la lectura del veredicto quedará terminada la audiencia y no se admitirá ninguna manifestación que las partes pretendan hacer.

## CAPITULO VII

### DE LA SENTENCIA

Art. 475 — Dentro de los tres días siguientes a la lectura del veredicto, o al leerse el mismo si se tratara de una causa sencilla, la Cámara dictará la sentencia que corresponda y hará conocer sus fundamentos a las partes.

Art. 476 — La sentencia será firmada por todos los miembros de la Cámara y contendrá:

- 1° La expresión del lugar y fecha en que se dicte.
- 2° La mención del nombre, apellido, estado, nacionalidad, profesión y domicilio del imputado o imputados.
- 3° La enunciación del hecho que motiva la imputación y de sus circunstancias.
- 4° La calificación legal de ese hecho y la participación que el imputado o imputados hayan tenido en él.
- 5° La exposición concisa de los motivos de hecho y de derecho en que la sentencia se funda.

---

Art. 475 — Véase N° 49 de la Exposición.

- 6º La indicación precisa de los preceptos legales aplicados.
- 7º La mención de las disidencias que se hubieren producido en el seno de la Cámara.
- 8º La parte dispositiva, absolviendo o condenando y, en su caso, la expresión de la pena impuesta y si el cumplimiento de la misma ha de quedar en suspenso. Cuando corresponda, ordenará la medida de seguridad a que el imputado deba ser sometido.

La parte dispositiva ordenará, también, cuando la sentencia sea condenatoria, la indemnización del daño material y moral causado por el delito y la restitución de la cosa obtenida con el mismo y, si no fuere posible, el pago de su precio, más el de su estimación, si lo tuviere. Decidirá respecto del pago de las costas y fijará el término para efectuar el pago de la indemnización o restitución que ordene.

Art. 477 — La Cámara no estará obligada a pronunciarse sobre la indemnización del daño material y moral causado por el delito y sobre la restitución de la cosa obtenida por el mismo, sino en el caso de que se hubiera promovido la acción civil o de que el Fiscal hubiere ejercido la facultad que le acuerda el artículo 31 de este Código.

Art. 478 — La apreciación de la prueba respecto de los hechos que forman el objeto de la acción penal, de la participación que, en los mismos, haya tenido el imputado o imputados y de su culpabilidad o inculpabilidad, se hará sin sujeción a regla alguna. Bastará que esa prueba funde una convicción sincera respecto de los hechos a que se refiere.

Las limitaciones que las leyes civiles establezcan relativamente a la prueba, no se observarán en el procedimien-



to penal, excepto las que se refieren al estado civil de las personas.

## CAPITULO VIII

### DEL ACTA DE LA AUDIENCIA

Art. 479 — El Secretario de la Cámara labrará un acta de la audiencia, en la que dejará expresa mención:

- 1° Del día y hora en que se inició la audiencia y del lugar en que ésta se llevó a cabo, así como de la composición de la Cámara.
- 2° Del nombre, apellido, edad, estado, nacionalidad y domicilio del imputado o imputados.
- 3° Del delito o delitos que motivan el proceso.
- 4° Del nombre y apellido del Fiscal y de las demás partes, de los representantes de las mismas y de los Defensores.
- 5° De todas aquellas circunstancias que, por disposición expresa de este Código, deban consignarse en el acta.
- 6° De las conclusiones del Fiscal.
- 7° De las conclusiones de las otras partes.
- 8° De todo lo que la Cámara, de oficio, o a requerimiento de las partes ordene que se deje constancia.

Art. 480 — El acta será redactada dentro de las veinticuatro horas de terminarse la audiencia y llevará la firma del Presidente y Secretario de la Cámara. La infracción a este artículo constituye falta grave para ambos.

LIBRO III  
DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES







## TÍTULO I

### DEL RECURSO DE HABEAS-CORPUS

#### CAPÍTULO I

#### DEL OBJETO DEL HABEAS-CORPUS Y DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN ENTABLARLO



Art. 481 — Contra toda orden o procedimiento que tienda a restringir sin derecho la libertad de una persona o la libertad de reunión, procede el recurso de habeas-corpus.

Art. 482 — Tratándose de la restricción de la libertad individual, el recurso podrá ser interpuesto por la persona detenida ilegalmente o restringida de cualquier modo en su libertad, por sí misma o por medio de otra, con o sin poder suyo.

Art. 483 — Tratándose de la restricción de la libertad de reunión, el recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de las personas que hubiera solicitado permiso a la autoridad para ejercer ese derecho, o por el presidente, apoderado, representante o simple afiliado, socio o miembro del partido político, asociación, comunidad, entidad, sociedad o persona jurídica que pretendiera ejercer el derecho de reunión.

---

**Art. 481** — Véase N° 50 a 53 de la Exposición.



## CAPITULO II

### DE LOS CASOS EN QUE PROCEDE

Art. 484 — El recurso de habeas-corpus procede en los siguientes casos:

- 1° Cuando una o varias personas fueren detenidas ilegal o arbitrariamente, sea por particulares o por quien invoque o tenga una representación pública.
- 2° Cuando una o varias personas fueren restringidas ilegal o arbitrariamente en el ejercicio de su libertad de acción o corporal, sea privándolas de sus derechos o impidiendo que los ejerciten.
- 3° Cuando una institución, un partido político, una asociación, una persona jurídica o cualquier entidad que agrupe a varias personas en su seno fueren impedidas o restringidas ilegal o arbitrariamente en el ejercicio de sus derechos, sea por particulares o por quien invoque o tenga una representación pública.
- 4° Cuando las mismas entidades a que se refiere el inciso anterior hubieren cumplido con los requisitos reglamentarios para ejercer el derecho de reunión, pacífica y públicamente, y fueren impedidas, turbadas, molestadas, restringidas o dispersadas ilegal o arbitrariamente, antes o en el momento de ejercerlo, sea por simples particulares o por quien invoque o tenga una representación pública.

Art. 485 — Entre otras, será considerada como ilegal o arbitraria:

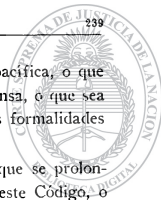
- 1° Toda orden de prisión, pesquisa, secuestro, embargo o detención que coarte la libertad de expresar

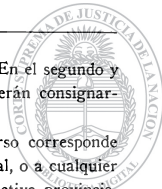
las ideas o pensamientos en forma pacífica, o que restrinja el uso de la libertad de prensa, o que sea realizada sin llenar cualquiera de las formalidades impuestas por el presente Código.

- 2º Toda orden de prisión o detención que se prolongue más allá del límite fijado por este Código, o que sea dictada por un Juez o Tribunal que no tenga jurisdicción en el asunto, o que se expida contra persona a quien se pretende procesar dos veces por un mismo delito, o contra quien esté amparado por una ley de amnistía o indulto, o en los casos en que prima-facie aparezca prescripta la acción o pena, o cuando la infracción cometida no esté reprimida con privación de la libertad, o cuando proceda la libertad provisoria o eximición de prisión o la libertad condicional y se hubiera negado estos beneficios al imputado o recurrente, o cuando estuviere gozando de ellos y fuere detenido sin haber cometido ningún hecho nuevo, que autorice la detención.

- 3º Toda orden de incomunicación que sobrepasara el término fijado por el artículo 158 de este Código.

Art. 486 — El recurso de habeas-corpus podrá interponerse personalmente, o por escrito, o telegráficamente. En el primer caso, el magistrado ante quien se interponga recabará del peticionante su nombre y domicilio y el nombre de la persona o personas o entidad o partido político a favor de quienes se pide; los datos que tenga acerca de la causa, motivo o pretexto de la detención o restricción; el nombre o los datos que sirvieran para individualizar al autor o autores de la detención o restricción; y los motivos en que se funda para sostener la ilegalidad o arbitrarie-





dad de la detención o restricción invocada. En el segundo y tercer caso, las mismas circunstancias deberán consignarse en el escrito o telegrama respectivo.

Art. 487 — El conocimiento del recurso corresponde a cualquier juez de instrucción o correccional, o a cualquier vocal de la Cámara o Cámaras de la respectiva provincia, distrito federal o territorio nacional, o a cualquier ministro de la Corte de Casación o de la Corte Suprema.

Art. 488 — El magistrado ante quien se interponga, dejará constancia en el acta, escrito, o telegrama, de la hora y fecha en que llegó a su conocimiento. La omisión de dicha formalidad, la negativa a recibir la denuncia, escrito o telegrama, y cualquier dificultad que opusiere a la inmediata sustanciación del recurso, constituirá falta grave y será reprimida con multa de mil pesos moneda nacional.

Art. 489 — El magistrado ante quien se interponga, procederá del siguiente modo en el término de sesenta minutos, a contarse desde la presentación, bajo pena de multa de mil pesos moneda nacional:

- 1º Requerirá informe de la persona o autoridad que corresponda o que se mencione en el recurso, cuando estuviere bien individualizada, acerca de las causas de la detención o restricción, de la fecha y hora exacta en que ha tomado la determinación o en que se ha producido el hecho y del nombre de la persona o autoridad responsable de la detención o restricción y de la encargada de cumplir la medida restrictiva o de quien la hubiera cumplido.
- 2º Emplazará a dicha persona o autoridad a que evacúe el aludido informe dentro de las dos horas bajo pena de mil pesos de multa en caso de no hacerlo

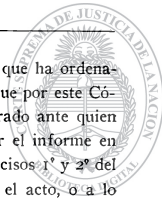
y sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Código penal para ese hecho.

- 3° Emplazará a la misma persona o autoridad para que en el término de dos horas y bajo la misma pena, traiga a su presencia a la persona o personas detenidas y a favor de las cuales se hubiera interpuesto el recurso, aumentándose dicho término en una hora más por cada cinco kilómetros del lugar en que tuviere su asiento el Juzgado o Tribunal a que pertenezca el magistrado, cuando la detención se hubiere producido fuera del mismo.

Art. 490 — El informe será requerido personalmente o por el medio de comunicación más rápido que se halle al alcance del magistrado que conozca del recurso. Sin perjuicio del telegrama u oficio en que lo solicite, puede reclamarlo telefónicamente, cuando tuviere este medio u otro más perfecto de comunicación.

Art. 491 — El auto de habeas-corpus debe ser obedecido inmediatamente y ninguna excusa será atendida a aquel que debe cumplirlo, cuando tenga por objeto desviar su responsabilidad o dilatar el cumplimiento del mismo.

Art. 492 — Si la persona o autoridad que ha ordenado la detención o restricción o aquella a cuyo cargo estuviera su cumplimiento se rehusa a recibir el auto de habeas-corpus, se le informará verbalmente de su contenido; si se oculta o ausenta para eludir su cumplimiento o si impide la entrada a la persona encargada de la notificación, el auto será fijado exteriormente en el lugar donde habita o donde se halle o donde fuere habido o donde hubiere consumado el hecho, procurándose, en cuanto fuere posible, acreditar la diligencia con el testimonio de dos personas, si las hubiere.



Art. 493 — Si la persona o autoridad que ha ordenado la detención o restricción es de aquellas que por este Código están autorizadas para ello, el magistrado ante quien se interponga el recurso se limitará a pedir el informe en el plazo y condiciones especificadas en los incisos 1° y 2° del artículo 489, y en su vista lo resolverá en el acto, o a lo sumo, dentro de las dos horas de recibirlo.

Art. 494 — La persona o autoridad que hubiera ordenado la detención o restricción o a quien se dirigiera el magistrado, devolverá diligenciado el auto de habeas-corpus en las siguientes condiciones:

- 1° Presentará la persona o personas reclamadas en el auto. Si por cualquier circunstancia hubiera hecho entrega de ellas a otra persona o autoridad, reclamará en el acto su devolución a fin de cumplir la orden del magistrado o pasará el auto de habeas-corpus a dicha persona o autoridad para su cumplimiento en el plazo y condiciones especificadas en los incisos 1° y 2° del artículo 489.
- 2° Explicará al dorso del auto o a continuación del mismo y en forma sucinta, los motivos de hecho y de derecho que a su juicio justifiquen la detención o restricción, o, en su caso, expresará la inexactitud de la afirmación hecha en el recurso, o el nombre y domicilio de quienes fueran a su juicio responsables y autores materiales de la detención o restricción.
- 3° Transcribirá a continuación del auto, la resolución dictada por autoridad competente en virtud de la cual haya procedido a la detención o restricción.

Art. 495 — Además de lo dispuesto en los incisos 1°

y 2º del artículo 489, la persona o autoridad a quien se haya dirigido un auto de habeas corpus, que se niegue, rehusé o descuide cumplirlo en la forma y condiciones mencionadas, será inmediatamente detenida y llevada a presencia del magistrado interviniente, el cual señalará una audiencia pública a realizarse dentro de las cuarenta y ocho horas de la detención, en la que amonestará personalmente a aquella por la falta cometida y le aplicará la sanción que corresponda. Sin perjuicio de ello el magistrado tomará todas las medidas que a su juicio sean necesarias para que se cumpla el auto.

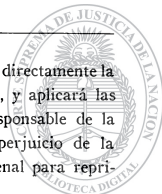
Art. 496 — Evacuado el informe, en el acto se procederá a examinar los hechos contenidos en él y la causa de la detención o restricción, para ver si son o no ilegales o arbitrarios, resolviéndose el recurso dentro de las dos horas de recibido aquél.

Art. 497 — Si en el informe se negaren los hechos afirmados en el recurso, se dará traslado por veinticuatro horas al recurrente. Si a su vez éste insistiera en sus afirmaciones o negare la veracidad del informe, el magistrado acordará un término que no excederá de tres días para que se produzca la prueba pertinente, a cuyo efecto se constituirá en sesión permanente, cualquiera sea el lugar en que se encuentre. Vencido el término acordado y teniendo en cuenta la prueba producida, dictará resolución fundada dentro de las dos horas. La resolución revestirá la forma de sentencia.

Art. 498 — Si el recurso prospera, se procederá del siguiente modo:

- 1º Cuando hubiera personas detenidas, serán puestas inmediatamente en libertad, a cuyo objeto el ma-





gistrado interviniente podrá impartir directamente la orden del caso a quien corresponda, y aplicará las costas al que resultare autor o responsable de la detención ilegal o arbitraria, sin perjuicio de la sanción establecida en el Código Penal para reprimir el hecho.

- 2° Si la restricción consistiera en haber privado de un derecho a una o varias personas o en impedir que los ejerzan mediante amenazas, intimaciones, prevenciones o de otro modo, serán reintegradas en el acto en el goce de los mismos o se hará cesar ipso facto el impedimento creado ilegal o arbitrariamente, y se aplicará las costas a quien resultare autor o responsable del mismo, sin perjuicio de la sanción establecida en el Código Penal para reprimir el hecho.
- 3° Si la restricción consistiera en impedir el ejercicio del derecho de reunión pacífica y pública, sea denegando la solicitud sin motivo, sea postergando o dilatando más de dos días el permiso, sea autorizando la realización del acto en un lugar inadecuado o inútil para el objeto perseguido o peligroso para la seguridad de quienes deban realizarlo, sea entorpeciéndolo, interrumpiéndolo, turbándolo, molestándolo o dispersándolo violentamente en el momento de efectuarse, se hará cesar en el acto el impedimento, turbación, molestia o interrupción, a cuyo efecto se hará presente en el sitio el propio magistrado interviniente si fuera necesario, y se aplicará las costas a quien resultare autor o responsable de cualquiera de esos hechos, sin per-

juicio de la sanción establecida en el Código Penal para reprimirlos.

- 4° Si el autor o responsable de la detención o restricción ilegal o arbitraria fuera un empleado o funcionario público, será, además, destituido ipso-facto de su cargo. Si lo fuese un particular, será detenido en el acto y puesto a disposición del juez competente para su juzgamiento.
- 5° Si a juicio del magistrado, la detención o restricción ilegal o arbitraria constituyera un delito previsto y castigado por Código Penal, ordenará que pasen los antecedentes al Fiscal y este estará obligado a deducir acusación contra el autor o responsable de aquella, dentro de las veinticuatro horas, bajo pena de mil pesos de multa y sin perjuicio de su responsabilidad penal por la omisión.
- 6° En los casos comprendidos en los incisos anteriores del presente artículo, si el interesado o su gestor lo pidiera, el autor o responsable de la detención o restricción ilegal o arbitraria será condenado en el mismo procedimiento a pagarle una indemnización no inferior a diez pesos moneda nacional por cada hora que estuvo privado de su libertad o restringido en sus derechos. Esta disposición se aplicará también cuando el amparo sea solicitado por un partido político o por entidades gremiales u otras que agrupen en su seno a más de una persona.

Art. 499 — Si el recurso no prospera, las costas serán a cargo del peticionante, salvo que el magistrado encuentre mérito para eximirlo de ellas.



## CAPITULO V

### DEL RECURSO CONTRA LA RESOLUCION DENEGATORIA DEL HABEAS-CORPUS

Art. 500 — De la resolución denegatoria del recurso de habeas-corpus podrá apelarse dentro de los tres días de la notificación para ante la Cámara respectiva cuando hubiera sido dictada por un Juez de Instrucción o Correccional o de Faltas o un Vocal de la misma, y para ante la Corte de Casación o la Corte Suprema cuando lo hubiere sido por uno de sus ministros. Interpuesto el recurso de apelación, se elevarán en el acto los antecedentes o el expediente al tribunal que corresponda.

Art. 501 — El recurso de apelación será fundado y si el apelante lo pidiera, el Tribunal que conociera del mismo señalará una audiencia pública, a realizarse dentro de los cinco días de recibir el expediente, en la que aquel podrá ampliar verbalmente los fundamentos de la apelación.

Art. 502 — La apelación será resuelta sin más trámite dentro de las cuarenta y ocho horas de haber llegado el expediente al tribunal o, en su caso, de haberse realizado la audiencia a que se refiere el artículo anterior, bajo pena de mil pesos de multa a cada miembro del mismo. La sentencia dictada será definitiva.

## CAPITULO VI

### DISPOSICIONES COMUNES A ESTE TITULO

Art. 503 — El procedimiento a que dé lugar el recurso de habeas-corpus será sumarísimo. Los magistrados le darán preferencia con respecto a cualquier otro asunto y tratarán de que quede resuelto en el menor lapso de tiempo posible.

Art. 504 — El Fiscal no es parte en este procedimiento. Contra la sentencia que haga lugar al habeas-corpus no procede recurso alguno.

Art. 504 bis — Cuando el recurso de habeas-corpus fuera interpuesto por telegrama, aunque el interesado no lo pida gozará de las franquicias de “urgente” y “recomendado” sin cargo por estos conceptos para aquel, que solo deberá abonar la tarifa correspondiente al telegrama común. Este será entregado al destinatario dentro de los sesenta minutos de ser recibido en la oficina originaria, cuando el domicilio de este se hallare dentro del ejido de la ciudad o pueblo en que funcionare la oficina que debe entregarlo, aumentándose dicho plazo en diez minutos más por cada kilómetro o fracción, cuando aquella funcionare en otro lugar, todo ello bajo pena de cincuenta pesos de multa al empleado o Jefe de Correos y Telégrafos responsable de la demora.

## TÍTULO II

### DEL ANTEJUICIO PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS JUDICIALES

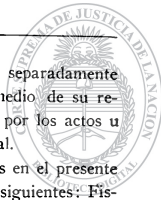
#### CAPÍTULO I

##### DE LA PREPARACION DEL ANTEJUICIO

Art. 505 — Todo habitante del país, mayor de edad, podrá promover el antejuicio necesario para determinar la responsabilidad de los funcionarios y empleados judiciales

---

**Art. 505** — Establecemos una verdadera acción popular con el fin de que se depure la administración de justicia y los ciudadanos puedan distinguir entre los funcionarios y empleados honestos y los que no lo son. Actualmente



También, podrá promoverlo, simultánea o separadamente del anterior, por si mismo o por intermedio de su representante legal, el particular perjudicado por los actos u omisiones del funcionario o empleado judicial.

Art. 506 — A los efectos determinados en el presente Título, llámense funcionarios judiciales los siguientes: Fiscales, Asesores o Defensores de Menores e Incapaces, Defensores de Pobres y Ausentes, Jueces, Vocales de las Cámaras y Ministros de la Corte de Casación, y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Llámense empleados judiciales los siguientes: Secretarios de Juzgado, Cámara, Corte de Casación o Corte Suprema; oficiales mayores, ujieres, oficiales de justicia, auxiliares, escribientes, notificadores y ordenanzas.

Art. 507 — La acción deberá deducirse por escrito, en la forma establecida en el artículo 69 para la querella, ante el Tribunal de Responsabilidades a que se refiere el Libro I, Sección I, Título II, Capítulo II, de la Ley Orgánica. Con el escrito se acompañará una copia simple del mismo y de los documentos que se adjunten por cada empleado o funcionario acusado.

---

el juicio colectivo nivela a buenos y malos funcionarios bajo el mismo concepto penoso de que todos son malos. Esto no puede ser. El buen juez no debe ser sospechado por la sola circunstancia de que su colega es malo. El buen Juez estará a cubierto de toda imputación, porque el pueblo lo "verá" actuar correctamente; pero su bandera de dignidad y de sabiduría no tiene por qué cubrir al indigno y al inepto. El mal juez se verá puesto muy pronto en la picota pública y será separado de su cargo si no opta por renunciar. Queremos que en la administración de justicia solo haya buenos jueces y que los malos desaparezcan motu-proprio o por resolución del Tribunal de Responsabilidades. Véase, además, lo que decimos en los números 3 a 8 de la Exposición de motivos.



## CAPITULO II

### DE LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR AL ANTEJUICIO

Art. 508 — Serán causas suficientes para promover el antejuicio, entre otras, las siguientes:

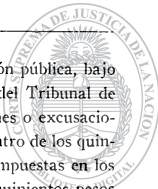
- 1º Faltas o delitos comunes cometidos por el funcionario o empleado en el ejercicio de su cargo;
- 2º. Faltas o delitos comunes cometidos por el funcionario o empleado en el ejercicio de su cargo.
- 3º Mal desempeño de la función o empleo;
- 4º. Mala conducta observada por el funcionario o empleado en el ejercicio de su cargo o fuera de él.

## CAPITULO III

### DE LA CONSTITUCION Y ACTOS DEL TRIBUNAL DE RESPONSABILIDADES

Art. 509 — Dentro de las veinticuatro horas de la presentación, el Presidente de turno del Tribunal ordenará la ratificación del accionante. Si este no fuera letrado y no lo patrocinara ningún letrado, le intimará a que designe abogado dentro de los tres días, bajo apercibimiento de no dar curso a su acción hasta que lo haga.

Art. 510 — Cumplida dicha exigencia, dispondrá en el acto lo necesario para que se constituya el Tribunal que debe conocer de la acusación, conforme a lo dispuesto en el Libro I, Sección I, Título II, Capítulo II de la Ley Orgánica.



Art. 511 — Efectuado el sorteo en sesión pública, bajo pena de nulidad; notificados los miembros del Tribunal de su designación y sustanciadas las recusaciones o excusaciones legales, todo lo cual deberá ejecutarse dentro de los quince días de haberse cumplido las exigencias impuestas en los artículos 507 y 509, bajo pena de multa de quinientos pesos al o a cada uno de los responsables de la demora, el Tribunal se constituirá en sesión permanente y correrá traslado de la acusación al o a los funcionarios o empleados contra quienes se dirija, para que la contesten dentro de los diez días de la notificación.

Art. 512 — Si se negare la imputación, al contestarse la acusación deberá ofrecerse toda la prueba de que se intente hacer uso, y si se ofreciera testigos deberá expresarse nombre y apellido, profesión y domicilio, de cada uno, no pudiendo estos exceder del número de cinco para cada uno de los hechos que se intente justificar. Si la prueba fuera instrumental y no pudieran acompañarse los documentos pertinentes, se indicará con toda precisión el lugar en que se encuentran para que el Tribunal ordene de oficio su remisión o la expedición de testimonios. Si se confesare el hecho o hechos imputados, ratificada la confesión ante el Presidente, se procederá a dictar sentencia de culpabilidad sin más trámite.

#### CAPITULO IV

##### DE LAS DILIGENCIAS PREVIAS A LA VISTA DE LA ACUSACION

Art. 513 — Si no hubiera confesión y se negare el o los hechos imputados, dentro de las veinticuatro horas de recibirse la contestación el Presidente del Tribunal ordenará

de oficio la realización de toda diligencia de prueba que no pueda hacerse en la audiencia. La designación de peritos siempre la hará por sorteo realizado en audiencia pública de los inscriptos en el Registro respectivo, y en su caso, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 297 y siguientes del presente Código.

Art. 514 — El Presidente del Tribunal fijará un plazo, que en ningún caso excederá de veinte días, para que se realicen las diligencias de prueba a que se refiere el artículo anterior y aplicará una multa de cien a quinientos pesos al empleado, funcionario o perito que se excediera de ese término o que pusiere cualquier clase de dificultad a su realización. Los mandatos y exhortos expedidos por el Presidente son obligatorios para todos los particulares, empleados o funcionarios de la República y deberán ser cumplidos sin dilación dentro del término antes mencionado y bajo la misma penalidad.

## CAPITULO V

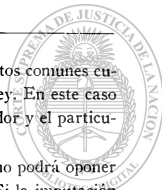
### DE LA VISTA DE LA ACUSACION Y DEL VEREDICTO

Art. 515 — Dentro de las veinticuatro horas de recibirse en el Tribunal las pruebas a que se refieren los artículos anteriores, el Presidente fijará una fecha, que no excederá de diez días, para que se lleve a cabo la audiencia pública, de acusación prueba, defensa y sentencia.

Art. 516 — Regirán en este acto, en cuanto fueren de aplicación y no se opongan a lo establecido en este Título, las disposiciones del Libro II, Título II del presente Código, con las siguientes modificaciones.

- 1º El Fiscal no es parte más que cuando el antejuicio se realiza para determinar la responsabilidad del fun-





cionario o empleado judicial por delitos comunes cuya acusación le corresponde por la ley. En este caso actuará conjuntamente con el acusador y el particular damnificado, si los hubiere.

- 2° El funcionario o empleado acusado no podrá oponer excepciones previas ni perentorias. Si la imputación se mantiene, el antejuicio seguirá su curso hasta el final, cualquiera sea la naturaleza del hecho cometido, siempre que corresponda al tiempo en que ha estado desempeñando sus funciones o empleo.
- 3° La audiencia en que se ventile un antejuicio será siempre pública, bajo pena de nulidad del acto y de mil pesos de multa a cada uno de los miembros del Tribunal de Responsabilidades que hubiera consentido o autorizado el secreto.
- 4° El funcionario o empleado acusado deberá estar presente en la audiencia y si se negare a concurrir o no hubiera concurrido voluntariamente a la hora fijada para comenzar los debates, será traído por la fuerza pública. Si por cualquier circunstancia no fuere hallado, la audiencia se realizará sin su presencia.
- 5° La audiencia comenzará con la lectura del escrito de acusación.
- 6° La confesión del acusado hecha en la audiencia constituye plena prueba del o de los hechos imputados. Sin perjuicio de ello, se tomará toda la prueba ofrecida, si no se desistiera de ella o si fuera indispensable para graduar la responsabilidad.
- 7° En la deliberación secreta para preparar el veredicto, el Tribunal solo tomará en cuenta las circunstancias a que se refieren los incisos 1°, 2°, 4°, 5°, 6° y 7° del

artículo 470. En cuanto al inciso 8°, el Tribunal declarará si el funcionario es culpable o no culpable de los hechos imputados.

## CAPITULO VI

### DE LA SENTENCIA

Art. 517 — En la sentencia, el Tribunal solo hará mención de las circunstancias a que se refieren los incisos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°. y 7°. del art. 476.

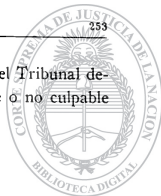
Art. 518 — La parte dispositiva de la sentencia declarará “culpable” o “no culpable” al o a los acusados y, en su caso, establecerá la sanción que corresponde aplicar de acuerdo a las siguientes reglas:

- 1° Si la declaración es de no culpabilidad, se aplicarán las costas al acusador o particular interesado que hubieran promovido o intervenido en el antejuicio, siempre que al contestar la acusación lo hubiera pedido la parte absuelta y el Tribunal lo considerase justo. También podrá declararse a pedido del interesado, que la acusación ha sido calumniosa cuando así surgiera del resultado del juicio.
- 2°. Si la declaración es de culpabilidad, se aplicará al o a los acusados, la sanción que corresponda, según lo dispuesto en la Ley Orgánica, y las costas del juicio, si hubieran sido pedidas por el acusador o particular damnificado.

Art. 519 — Contra la sentencia del Tribunal de Responsabilidades no hay recurso alguno.

---

**Art. 519** — Si admitiéramos algún recurso contra ella, habría que organizar otro tribunal para que lo resolviera o tendríamos que darle esa facultad a la Corte de Casación, y estaríamos en la misma situación de ahora.





## CAPITULO VII

## DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE CULPABILIDAD

Art. 520 — Cuando la pena impuesta al funcionario o empleado consistiera en apercibimiento, multa o suspensión, en el acto de quedar consentida la sentencia el Presidente del Tribunal hará la comunicación que corresponda a la Oficina de Habilitación y Control del Personal, a sus efectos.

Art. 521 — Cuando el acusado fuera un funcionario y la pena impuesta consistiera en suspensión del cargo a los efectos de los artículos 45, 51 y 52 de la Constitución nacional, el Presidente del Tribunal procederá del siguiente modo dentro de las veinticuatro horas de quedar consentida la sentencia:

- 1º Enviaré un testimonio de la sentencia al Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y reservará bajo llave en la Caja fuerte del despacho del Tribunal todas las actuaciones del proceso para ser entregadas directa y exclusivamente al Presidente de la Comisión de Justicia de dicha Cámara cuando se solicitaren oficialmente por la misma.
- 2º Enviaré la comunicación de estilo al Poder Ejecutivo de la Nación a los efectos de que designe reem-

---

Además, como el Tribunal de Responsabilidades no resuelve cuestiones de derecho, sino que procede como un verdadero jurado y declara culpable o no culpable al acusado, no hay peligro alguno en declarar irrecurrible su pronunciamiento. Sabemos que esto no será del agrado de los jueces y que se levantarán voces airadas de protesta; pero advertimos que esas voces han de partir de aquellos que "se sienten culpables" y por lo tanto "casi acusados"; y que, aun cuando así no fuera, nosotros no preparamos leyes para mantener las deficiencias notorias del actual sistema, ni para proteger a los malos funcionarios, ni para buscar su comodidad, sino para el bien del pueblo.

plazante del funcionario suspendido y copia de la sentencia a la Oficina de Habilitación y Control del Personal de los Tribunales para que ponga la nota que corresponda en el legajo individual.

Art. 522 — Cuando el acusado fuera un empleado y la pena impuesta consistiera en suspensión o destitución, el Presidente del Tribunal procederá del siguiente modo dentro de las veinticuatro horas de quedar consentida la sentencia:

- 1º Enviará una comunicación al Juzgado o Tribunal a que pertenezca el empleado para que tome nota de la resolución adoptada, designe reemplazante del suspendido a costa de este o prevea provisionalmente el cargo del destituido hasta que se llene por concurso.
- 2º Enviará una copia de la sentencia a la Oficina de Habilitación y Control del Personal de los Tribunales para que tome nota en el legajo individual y haga la imputación de sueldos que corresponda.
- 3º Al mismo tiempo intimará al Jefe de la Oficina de Habilitación y Control para que llame a concurso a fin de proveer el cargo del empleado destituido, en la forma establecida en la Ley Orgánica.

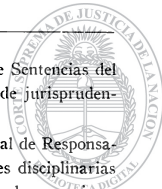
## CAPITULO VIII

### DISPOSICIONES COMUNES A ESTE TITULO

Art. 523 — La sentencia será entregada a las agencias noticiosas para la correspondiente publicación, sin perjuicio

---

**Art. 523** — Cuando un funcionario es juzgado y declarado culpable por un Tribunal imparcial de sus pares en conocimientos, es necesario que el fa-



de registrarse íntegramente en el registro de Sentencias del Tribunal y de publicarse en las colecciones de jurisprudencia.

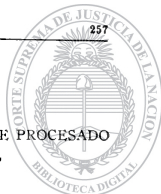
Art. 524 — El antejuicio ante el Tribunal de Responsabilidades es independiente de las correcciones disciplinarias impuestas a los funcionarios o empleados por los superiores jerárquicos o por la Oficina de Habilitación y Control, por actos realizados u omisiones en que hubieran incurrido en el desempeño de la función o empleo o fuera de ellos.

Art. 525 — El antejuicio que termina con veredicto de culpabilidad y que toma origen en delitos comunes cometidos por el funcionario o empleado, lleva implícita la obligación del Presidente del Tribunal de Responsabilidades de enviar copia autenticada de todas las actuaciones y antecedentes del mismo al Juez o Tribunal que corresponde o que interviene en el proceso respectivo, dentro de las veinticuatro horas de quedar consentida la sentencia. Si el inculcado fuera un funcionario, la causa seguirá adelante ante los Tribunales comunes después de la suspensión, pero no será llevada a vista pública ni se dictará sentencia hasta que se pronuncie el Senado.

Art. 526 — Si el funcionario o empleado acusado presentara su renuncia del cargo o empleo y esta le fuera aceptada antes de la audiencia de prueba, automáticamente caducará el procedimiento ante el Tribunal de Responsabilidades. Sin perjuicio de ello, este podrá resolver que aquel satisfaga las costas producidas por la acusación.

---

Illo sea conocido de todo el pueblo para que obre como ejemplo ante los demás funcionarios y ante aquel mismo, que recién empezará a confiar en el viejo adagio de que "la ley que es pareja no es rigurosa" y a ver que es efectiva la garantía constitucional de la igualdad ante la ley.



## TÍTULO III

DEL MODO DE PROCEDER CUANDO FUERE PROCESADO  
UN LEGISLADOR NACIONAL

## CAPÍTULO I

## DE LAS DILIGENCIAS PREVIAS

Art. 527 — Cuando por denuncia, querella o de oficio se incoare un proceso de carácter penal en el que apareciera como autor, cómplice o responsable del hecho imputado un Senador o Diputado al Congreso Nacional, se practicarán todas las diligencias tendientes a demostrar o a comprobar su participación o responsabilidad, pero sin proceder contra su persona.

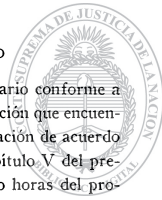
Art. 528 — El Juez o Tribunal competente tomará las medidas que considere necesarias par evitar la desfiguración de los hechos y la fuga u ocultamiento de las demás personas que conjuntamente con el legislador aparecieran como participantes o responsables del delito. También podrá solicitar del legislador le conteste por escrito las preguntas que le formule en oficio dirigido exprofeso, pero este no está obligado a satisfacerlo, sin que su silencio o negativa le cause perjuicio.

---

Art. 527 — Incorporamos este Título al proyecto con el fin de salvar una omisión injustificable dentro del procedimiento penal.

## CAPITULO II

### DEL PEDIDO DE DESAFUERO



Art. 529— Instruido y cerrado el sumario conforme a lo dispuesto en el Libro I, y existiendo resolución que encuentre mérito para someter al legislador a acusación de acuerdo a lo que establece el Libro II, Título I, Capítulo V del presente Código, dentro de las cuarenta y ocho horas del pronunciamiento, el Presidente de la Cámara del Crimen dirigirá al Presidente de la Cámara a que pertenezca el legislador comprometido, una comunicación reservada que contendrá:

- 1° Copia integral de la resolución por la que se encuentre mérito para someter a acusación al legislador y demás imputados si los hubiere.
- 2° Copia de los principales documentos o testimonios que acrediten o justifiquen la responsabilidad del legislador, si los hubiere.
- 3° El pedido de que se allanen los fueros del legislador para someterlo al juzgamiento que corresponda.

Art. 530 — Recibida la comunicación mencionada en el artículo anterior, el Presidente de la Cámara colegisladora la pasará en el acto a la Comisión de Justicia para que se expida dentro de los quince días, bajo pena de mil pesos de multa a cada uno de sus miembros. Si el Congreso estuviera funcionando, el dictamen de la Comisión tendrá preferencia sobre cualquier otro, y será tratado sobre tablas, aprobándose o desaprobándose conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución. Si el Congreso estuviere en receso, se esperará a que reanude sus sesiones para considerar el dictamen con igual preferencia y aun cuando las sesiones fueran de prórroga o extraordinarias.



### CAPITULO III

#### DE LOS EFECTOS DE LA DENEGACION O CONCESION DEL DESAFUERO

Art. 531 — No haciéndose lugar al desafuero, la causa terminará automáticamente para el legislador, no así para los demás imputados que carezcan de fueros.

Art. 532 — Haciéndose lugar al desafuero, la causa seguirá su curso hasta su terminación.

Art. 533 — Si el legislador fuera absuelto en el proceso penal, continuará ocupando su banca hasta la expiración del mandato, sin otro requisito que la notificación de la sentencia o veredicto absolutorios. Si fuera condenado, perderá su banca y cumplirá la pena en la forma y condiciones que le imponga el Tribunal.

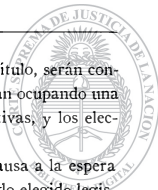
### CAPITULO IV

#### DISPOSICIONES COMUNES A ESTE TITULO

Art. 534 — Un legislador jamás será detenido por la comisión de un delito, excepto en el caso de ser sorprendido infraganti. La privación de su libertad solo corresponderá cuando se hubiese acordado el desafuero y así lo dispusiera el Juez o Tribunal competente.

Art. 535 — La paralización del proceso a la espera del desafuero, aprovecha a los demás imputados que carezcan de fueros, siempre que no se encuentren detenidos y que no soliciten su prosecución. Hallándose privados de libertad, la causa seguirá su curso con independencia del pronunciamiento sobre el pedido de desafuero.





Art. 536 — A los efectos del presente Título, serán considerados como legisladores los que estuvieran ocupando una banca en cualquiera de las Cámaras legislativas, y los electos, desde su proclamación.

Art. 537 — También se paralizará la causa a la espera del desafuero, cuando el imputado hubiere sido elegido legislador durante la sustanciación de aquella.

Art. 538 — En ningún caso será aceptado el diploma de un ciudadano elegido como legislador mientras estuviese privado de su libertad cumpliendo una condena por un delito común.

Art. 539 — Cualquiera sea la resolución adoptada por la Cámara de que forme parte el legislador, será comunicada en el día al Juez o Tribunal que corresponda.

## TÍTULO IV

### DEL PROCEDIMIENTO EN LAS ACCIONES POR DELITOS CONTRA EL HONOR

#### CAPÍTULO I

##### DE LA PREPARACION DE LA ACCION POR INJURIA O CALUMNIA

Art. 540 — La querella por injuria o calumnia deberá presentarse por escrito ante el Juez Correccional del lugar en que se haya producido el hecho y contendrá:

---

**Art. 536** — Salvamos la dificultad de saber en qué momento se entiende que una persona goza de las franquicias que la Constitución acuerda a los legisladores.

**Art. 540** — La preparación del juicio se la encomendamos al Juez Correccional, pero es la Cámara la que debe pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

- 1º El nombre, apellido y domicilio del querellante y de la persona o personas a quienes se impute la comisión del delito, o los datos necesarios para su individualización;
- 2º Los hechos ejecutados por dichas personas;
- 3º La naturaleza del o de los delitos que se les imputen;
- 4º La prueba de que intente valerse el querellante y que no se acompañe;
- 5º El nombre, apellido, profesión y domicilio de los testigos, cuando se hiciere uso de ese medio de prueba.

Art. 541 — Cuando la querella se funde en la existencia de publicaciones o documentos, deberá acompañarse un ejemplar de las primeras y el original o un testimonio de los segundos.

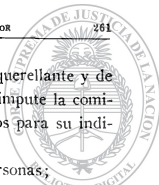
Art. 542 — La parte querellante deberá presentar con el escrito de acusación una copia simple del mismo y de cada uno de los documentos o agregados para cada una de las personas acusadas.

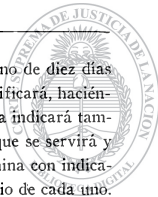
Art. 543 — Cuando la acción por calumnia o injuria se promueva después de la muerte del ofendido, el que la ejerce deberá presentar, con la querella, la prueba del vínculo de parentesco que existía entre él y el ofendido y que lo autorice para entablar la acción, de acuerdo a los preceptos del Código Penal.

Cuando concurrieren varios querellantes, se aplicará la norma contenida en el artículo 75 de este Código.

Art. 544 — El Juez no dará curso a la querella mientras no sean cumplidos los requisitos establecidos en los artículos anteriores.

Art. 545 — Cumplidas las condiciones mencionadas anteriormente, el Juez correrá traslado de la querella a la per-





sona o personas querelladas, fijando el término de diez días para la contestación. A cada acusado se le notificará, haciéndole entrega de una copia. La parte querellada indicará también, al contestar la acusación, la prueba de que se servirá y si ha de valerse de testigos presentará la nómina con indicación del nombre, apellido, profesión y domicilio de cada uno.

Art. 546 — Las partes no podrán presentar más de cinco testigos con respecto a cada uno de los hechos que intenten justificar. Deberán hacerse patrocinar o defender por abogados cuando ellas no lo fueren. En su caso será de aplicación lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de este Código.

Art. 547 — Las partes no podrán valerse de otras pruebas que las indicadas en los respectivos escritos de querrela y contestación, salvo que recién después de su presentación las hubieren conocido, en cuyo caso podrán ofrecerlas hasta el día de la vista del proceso, jurando no haberlas conocido antes.

## CAPITULO II

### DE LA RETRACTACION Y DE LAS EXPLICACIONES

Art. 548 — Si antes de contestar la acusación o en el momento de hacerlo, el querellado ofreciere retractarse públicamente, el Juez señalará una audiencia, a ese sólo efecto.

La audiencia se realizará en presencia del Juez y las partes concurrirán a la misma personalmente. Sólo se podrán hacer representar en el caso de que justifiquen la imposibilidad absoluta de concurrir.

Los que ejerciten la representación deberán presentar poder especial con facultad expresa de formular o aceptar la retractación.

Abierta la audiencia, el Juez concederá la palabra al querellado para que se retracte. Si el querellante acepta la retractación se dará por terminada la querella, con imposición de costas al querellado.

Si la retractación no fuera aceptada por el querellante, en razón de no considerarla suficiente, el Juez resolverá en el acto la incidencia. Cuando lo hiciere en el sentido de que la retractación es suficiente, dará por terminada la querella, con imposición de costas al querellado. Cuando decidiera en el sentido de que la retractación no es suficiente, la acción seguirá su curso.

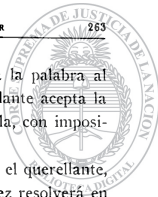
Art. 549 — Si a pesar de haberse ofrecido retractación pública el querellado no concurriere a la audiencia, la acción seguirá su curso.

En caso de inasistencia del querellante, se le tendrá por desistido de la querella, con costas.

Art. 550 — Si antes de contestar la querella o en el momento de hacerlo, el querellado diere explicaciones, el Juez dará traslado al querellante por el término de cinco días. El silencio del querellante será considerado como aceptación de las explicaciones.

En caso de aceptación expresa o tácita del querellante, se dará por terminada la querella, quedando al arbitrio del Juez, que apreciará las circunstancias del caso, la imposición o liberación de las costas.

Si las explicaciones no se aceptaren, la querella seguirá su curso.





### CAPITULO III

#### DE LAS PRUEBAS QUE NO PUEDEN PRODUCIRSE EN LA AUDIENCIA

Art. 551 — Producida la contestación o contestaciones, el Juez ordenará la recepción de las pruebas que no fueren susceptibles de producirse en audiencia pública.

Art. 552 — Dentro de las veinticuatro horas de haberse practicado las pruebas a que se refiere el artículo anterior o de haberse producido la o las contestaciones cuando todas las pruebas ofrecidas pudieran recibirse directamente en audiencia, el Juez elevará las actuaciones a la Cámara que corresponda.

### CAPITULO IV

#### DE LA VISTA DE LA CAUSA

Art. 553 — Dentro de las veinticuatro horas de recibir las actuaciones la Cámara fijará una fecha, que no excederá de veinte días, para que se lleve a cabo la audiencia pública de acusación, prueba, defensa y sentencia. Si el querellante lo pidiere, o si la Cámara entendiera que la publicidad del debate puede afectar la moral o las buenas costumbres, la audiencia deberá realizarse a puerta cerrada.

Art. 554 — Regirá para este acto, en cuanto fueran de aplicación, las disposiciones que contiene el Libro II, del presente Código.

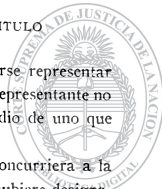
Art. 555 — El querellante podrá hacerse representar en las audiencias; pero las exposiciones, si el representante no fuera letrado, deberán hacerse por intermedio de uno que lo sea.

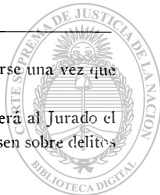
Art. 556 — Cuando el querellado no concurriera a la audiencia que prescribe el artículo 553 y no hubiere designado Defensor, se le nombrará de oficio, al de Pobres. Del mismo modo se procederá cuando no contestare la querella. No se celebrará la mencionada audiencia hasta tanto el Defensor no conteste la querella, para lo que se le acordará el término de diez días.

Art. 557 — En todos los casos de condena, la Cámara decidirá respecto del pago de la indemnización del daño moral y material que el delito pudiera haber causado, siempre que se hubiere pedido al promover la querella. A falta de prueba concluyente sobre el monto del daño material, se deferirá al juramento estimatorio. El monto de la indemnización por el daño moral quedará supeditado a la estimación del Tribunal, el cual lo fijará teniendo en cuenta la condición social y económica de las partes y el grado de repercusión que la injuria o calumnia haya alcanzado.

Art. 558 — En los casos de condena, se impondrán las costas al querellado. En los casos de absolución, la Cámara podrá, si lo considera procedente, liberar de las costas al querellante.

Art. 559 — En ningún caso se decretará la detención o prisión preventiva del querellado por delitos contra el honor.





La sentencia condenatoria solo podrá cumplirse una vez que haya pasado en autoridad de cosa juzgada.

Art. 560 — En ningún caso corresponderá al Jurado el conocimiento y decisión de las causas que versen sobre delitos contra el honor.

## TÍTULO V

### DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO A MENORES

#### CAPÍTULO I

##### DISPOSICIONES GENERALES

Art. 561 — En los procesos que se instruyan por delitos imputados a menores de diez y ocho años, regirán las normas generales del procedimiento, con las siguientes modificaciones:

- 1° Los menores de diez y ocho años no serán sometidos a detención o prisión preventiva, sino cuando el Juez o Cámara así lo tenga por conveniente, declarándolo en auto fundado.
- 2° Si el menor no fuera detenido, será entregado a sus padres, tutores o guardadores, siendo personas de reconocida honestidad y que no les sea imputable al-

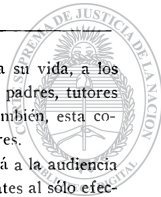
---

**Art. 560 —** Entendemos que el Jurado no debe ser distraído con asuntos de menor cuantía sino en aquellos que realmente conmueven o pueden conmover a la sociedad. Además, es necesario que el que injuria sea siempre condenado, y en este caso, nada mejor que dejar esta tarea a los jueces de derecho... El jurado puede encontrar en ciertos casos que hay mérito para declarar la culpabilidad y en otros no; pero su veredicto dependerá siempre de circunstancias variables, que toman origen en los sentimientos de cada jurado. Por eso dejamos esta tarea en manos de los letrados... Ellos son buenos para condenar...

guna responsabilidad, aunque sea indirecta, por la conducta del menor.

- 3° Cuando la entrega del imputado a sus padres, tutores o guardadores no fuera posible, se dispondrá su colocación en un establecimiento público para menores que reúna las condiciones establecidas en la Ley Orgánica.
- 4° Las resoluciones de la Cámara referentes a la colocación del menor no serán susceptibles de recurso alguno, salvo el de reposición. Las del Juez serán apelables para ante la Cámara.
- 5° Todas las actuaciones en los procesos por delitos imputados a menores de diez y ocho años, serán reservadas, salvo para las demás partes y sus abogados.
- 6° Cuando se declare no existir mérito para que un menor de diez y ocho años sea sometido a acusación o cuando se le absuelva, la Cámara podrá disponer su colocación en un establecimiento especial, por tiempo indeterminado y hasta que cumpla los veintidós años, si se hallare moral o materialmente abandonado o en peligro moral.
- 7° Cuando la Cámara resuelva definitivamente un proceso en que la víctima sea un menor de diez y ocho años, dispondrá, también, su colocación en un establecimiento especial, si se hallare en la situación prevista en la norma precedente.
- 8° Los Jueces de Instrucción que intervengan en proceso por delito imputado a menor de diez y ocho años, dispondrán que el Secretario interviniente o las autoridades policiales, procedan, sin demora, a levantar una información respecto a la situación del menor y





al medio familiar en que desarrolla su vida, a los antecedentes y a la conducta de los padres, tutores o guardadores. Podría reclamar, también, esta colaboración, del Patronato de Menores.

9° El menor de diez y ocho años asistirá a la audiencia en que hayan de tener lugar los debates al sólo efecto de que la Cámara tome, de él, conocimiento directo y de visu. Empero, cuando la Cámara considere indispensable la presencia del menor, podrá ordenarla.

10° Cuando en el proceso aparezcan indicios bastantes de abandono moral o material por parte de los padres o tutores, el Juez o Cámara que intervenga pondrá el hecho, según el caso, en conocimiento del Tribunal de la tutela o del Tribunal que corresponda al domicilio de los padres, a los efectos pertinentes.

## CAPITULO II

### DISPOSICIONES COMUNES A ESTE TITULO

Art. 562 — El Defensor de Menores es parte esencial en todo proceso en que se halle implicado uno o varios menores de diez y ocho años, y a su cargo estará la defensa de los mismos conforme a lo dispuesto en los artículos 45 y 49 del presente Código.

Art. 563 — En los procesos en que se hallen implicados menores de diez y ocho años, la Cámara respectiva será integrada con cinco miembros para la realización de los debates, dos de los cuales serán padres de familia insaculados del Registro de Padres de Familia organizado por el Patronato Nacional de Menores conforme a las prescripciones de la Ley Orgánica.

## TÍTULO VI DE LA EXTRADICION

### CAPÍTULO I

#### DE LA EXTRADICION INTERPROVINCIAL

Art. 564 — La extradición de condenados, procesados, imputados y testigos o peritos, es de obligación recíproca entre las Provincias, los Territorios y la Nación.

Art. 565 — Los pedidos de extradición tramitarán ante los Jueces de Instrucción, con audiencia del Fiscal y de las personas cuya extradición se reclame.

Art. 566 — El Juez de Instrucción dará curso al pedido si se acompañan la orden de prisión preventiva o la sentencia, según el caso, y los recaudos para establecer la identidad del requerido.

Art. 567 — Cuando fuere menester la producción de prueba, el Juez, atentas las circunstancias, fijará un término para ello que no será inferior a cinco días ni excederá de veinte.

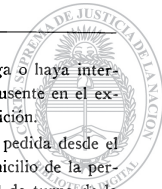
Art. 568 — Las resoluciones de los jueces acordando o denegando la extradición serán apelables para ante la Cámara respectiva.

### CAPÍTULO II

#### DE LA EXTRADICION INTERNACIONAL

Art. 569 — La extradición requerida a o de un país extranjero, se ajustará a las normas establecidas en los Tratados o, en su caso, en la Ley nacional de extradición número 1.612.





Art. 570 — Sólo el Juez que intervenga o haya intervenido en el proceso incoado al imputado ausente en el extranjero es competente para pedir la extradición.

Art. 571 — Cuando la extradición sea pedida desde el extranjero, será juez competente el del domicilio de la persona reclamada y si este no se conociere, el de turno de la Capital Federal en el momento de presentarse el pedido a las autoridades argentinas.

Art. 572 — Contra el auto que acuerde o deniegue la extradición podrá interponerse el recurso de apelación para ante la Cámara respectiva.

Art. 573 — El Fiscal es parte esencial en esta clase de actuaciones.

## TÍTULO VII

### DE LA EVASION

Art. 574 — En el caso de evasión de algún procesado o condenado, los directores del establecimiento en que se hallare detenido o estuviere cumpliendo su condena, o cualquier otro encargado de su custodia o traslación, deberá dar cuenta de la evasión sin demora al Juez o Tribunal que entendiera en la causa, si esta se hallare pendiente, o al Juez de Instrucción que corresponda, cuando la misma hubiere terminado.

En el primer caso, el Juez o Tribunal pasará inmediatamente, todos los antecedentes al Juez de Instrucción para la confirmación del hecho y proceder en forma legal contra los responsables de la fuga.

Art. 575 — Si el fugitivo fuese detenido, será trasladado a la prisión donde se encontraba cuando verificó su fú-

ga o a otra que ofreciere mayor seguridad, debiendo ser puesto al mismo tiempo a disposición del Juez competente.

Art. 576 — El Juez procederá con toda brevedad a su interrogatorio, a fin de verificar la identidad de la persona y descubrir los cómplices de su evasión.

Art. 577 — Si de la investigación resultare que han concurrido otras personas a la evasión del preso o que de cualquier manera han favorecido su fuga, se procederá en la forma ordinaria para la investigación de su culpabilidad y aplicación de la pena en su caso.

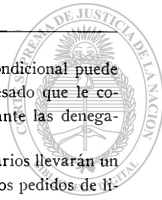
## TÍTULO VIII

### DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

Art. 578 — Corresponde a la Cámara que hubiere dictado la sentencia condenatoria pronunciarse respecto de las solicitudes de libertad condicional.

Art. 579 — Las solicitudes de libertad condicional serán remitidas a la Cámara por las autoridades directivas del establecimiento en que el peticionante se encontrare cumpliendo la condena, dentro de las veinticuatro horas de su presentación, bajo pena de cien pesos de multa. Dichas autoridades elevarán, conjuntamente, el informe acerca de la observancia, regular o irregular, de los reglamentos carcelarios, por parte del recurrente.

Art. 580 — La resolución de la Cámara acordando o denegando la libertad condicional es definitiva. La libertad condicional concedida, lleva implícita la obligación del liberado de someterse a la dirección y vigilancia del Patronato de Liberados respectivo, donde lo hubiera, o de la autoridad o persona que determinase el Tribunal, conforme al Reglamento de la Corte de Casación.



Art. 581 — La solicitud de libertad condicional puede renovarse cuantas veces considere el interesado que le corresponde gozar de sus beneficios, no obstante las denegaciones anteriores.

Art. 582 — Los establecimientos carcelarios llevarán un Registro en el que se anotará por su orden los pedidos de libertad condicional y en ese mismo orden serán elevados a la Cámara con el informe que corresponde.

## TÍTULO IX

### DEL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL INDULTO O LA CONMUTACION DE LA PENA

Art. 583 — Todo condenado en juicio criminal que se hallare cumpliendo la condena, tendrá derecho a solicitar del Poder Ejecutivo de la Nación el indulto o la conmutación de la pena.

Art. 584 — La solicitud deberá formularse por escrito, y si el interesado no supiere hacerlo, las autoridades del establecimiento carcelario estarán obligadas a hacerlo en su nombre, bajo pena de cien pesos de multa.

La solicitud expresará:

- 1° El nombre y apellido del condenado y la designación del establecimiento donde está cumpliendo la condena.
- 2° La pena impuesta y la fecha de ingreso al establecimiento.
- 3° Los motivos que tenga para considerarse acreedor al indulto o a la conmutación de la pena.

---

Art. 583 — Resolvemos un problema que ha dado lugar a más de un conflicto entre nosotros.

Art. 585 — La solicitud será enviada directamente por el interesado o por intermedio de las autoridades carcelarias al Ministro de Justicia e Instrucción Pública, el cual, por conducto de la Dirección de Justicia, solicitará, dentro de los ocho días de recibirse la petición, informes al establecimiento de reclusión acerca de la conducta del peticionante y demás circunstancias que puedan servir para formar juicio. El informe deberá evacuarse dentro de los tres días de recibirse el pedido del Ministerio, bajo pena de cien pesos de multa al Director del establecimiento. Con su vista, el Poder Ejecutivo resolverá lo que corresponda dentro de los ocho días.

Art. 586 — La resolución del Poder Ejecutivo será comunicada en el acto al peticionante y a las autoridades del establecimiento carcelario. Si acordara el indulto, aquél será puesto inmediatamente en libertad. Si acordara la conmutación se hará la anotación correspondiente en el Registro del establecimiento. Si denegara el indulto o la conmutación, se ordenará el archivo de las actuaciones luego de comunicar lo resuelto al interesado y a las autoridades del establecimiento carcelario.

Art. 587 — El indulto acordado sólo extingue la pena corporal, pero el indultado queda sujeto al cumplimiento de la sentencia respectiva que lo condenó a pagar la indemnización civil por los daños y perjuicios ocasionados con el delito juzgado.

Art. 588 — Todo pedido de indulto o de conmutación de pena y las actuaciones correspondientes serán libres del impuesto de sellos.



## TÍTULO X

## DEL PROCEDIMIENTO CORRECCIONAL Y SOBRE FALTAS

Art. 589 — En el acto o dentro de las seis horas de llegar a conocimiento del Juez Correccional o del Juez de Faltas, por denuncia, querella, prevención, acusación fiscal, aviso de la policía o cualquier otro medio, de haberse cometido un delito, falta o contravención de los que caen bajo su jurisdicción, señalará audiencia, con especificación de día y hora, para que concurran el Fiscal, el querellante si lo hubiere, el imputado y su defensor si lo tuviere, o solo, cuando no lo tuviere, los testigos indicados u ofrecidos, los peritos, los agentes del orden público que hayan intervenido en el hecho o en su comprobación o averiguación, haciéndose saber a todos los interesados que deberán concurrir con las demás pruebas que tuvieren.

Art. 590 — La audiencia se realizará en el término máximo de tres días, bajo pena de quinientos pesos de multa al Juez que la postergara sin que medie una circunstancia absolutamente atendible.

Art. 591 — El Fiscal no será parte ni citado a la audiencia cuando el delito, falta o contravención a juzgarse solo pudiera serlo a instancia privada. En los demás casos es parte esencial.

Art. 592 — Regirán en este procedimiento las reglas establecidas en los Libros I y II del presente Código, en cuanto fueren aplicables y no se hallaren modificadas por este Ti-

---

Art. 589 — Véase N° 54 y 55 de la Exposición.

tulo. En general, los debates comenzarán con la lectura de la acusación, si la hubiere por escrito, y, en su defecto, con la acusación misma hecha por el Fiscal o el querellante, o por el agente del orden público, inspector, etc., que hubiera intervenido en el hecho.

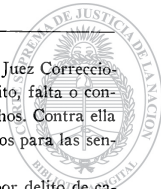
Art. 593 — Cuando comparezca el inculcado ante el Juez o confiese el hecho punible ante el mismo, o cuando se presenten juntos ante el Juez el acusador y el acusado, o todos aquellos y estos, y estén dispuestos los medios de prueba de la acusación y de la defensa, el Juez procederá a realizar los debates en el acto o inmediatamente después de terminar la audiencia que estuviere atendiendo en ese momento, y a dictar sentencia, bajo pena de quinientos pesos de multa.

En estos casos no habrá lugar a instruir un proceso en forma con arreglo a lo dispuesto en el Libro I del presente Código, sino que bastará con una petición escrita o verbal del interesado, agente del orden público, inspector, etc., solicitando la aplicación de la ley u ordenanza respectiva.

Art. 594 — La sentencia será dictada al final de la audiencia, bajo pena de quinientos pesos de multa al Juez remiso, con arreglo al principio de las libres convicciones y de acuerdo a las siguientes bases:

- 1º Cuando la causa fuere por un delito de carácter correccional, el máximo de cuya pena no exceda de un año de prisión o de mil pesos de multa, la sentencia se ajustará a lo dispuesto en el Libro II, Título II, Capítulo VII de este Código.
- 2º Cuando la causa fuere por una falta o contravención, la sentencia se pronunciará verbalmente, y se dejará constancia de la pena impuesta al final del acta labrada por el Secretario en la que relacione sucintamente la audiencia.





Art. 595 — La sentencia dictada por el Juez Correccional o por el Juez de Faltas en causa por delito, falta o contravención, es definitiva en cuanto a los hechos. Contra ella solo pueden deducirse los recursos autorizados para las sentencias pronunciadas por las Cámaras.

Art. 596 — Ninguna causa o proceso por delito de carácter correccional o por falta o contravención será sometida al Jurado.

Art. 597 — La detención preventiva por delitos de carácter correccional solo corresponderá en los casos previstos en el artículo 195 del presente Código. A los acusados viajeros se les permitirá que continúen su viaje, siempre que no sea de temer que de esta manera eludan el procedimiento y la ejecución de la pena, en su caso.

Art. 598 — En las causas por falta o contravención no se podrá detener preventivamente al imputado, a pesar de ser sorprendido infraganti, a menos que su captura estuviera recomendada por una falta anterior no purgada, en cuyo caso solo podrá recobrase la libertad prestando fianza.

Art. 599 — Los debates ante el Juez Correccional y el Juez de Faltas serán públicos, bajo pena de nulidad, salvo lo dispuesto en los artículos 418 a 423 del presente Código.

Si interviniera querellante o promotor de la acción civil, se excusará la publicidad cuando cualquiera de ellos lo solicitara expresamente.

Art. 600 — En ningún caso un proceso por delito de

---

**Art. 596** — Por la entidad de los delitos o faltas sometidos a la jurisdicción correccional, sería un verdadero contrasentido encomendar su juzgamiento al Jurado que debe entender siempre en causas graves para justificar el llamado de las doce personas honorables encargadas de expedirse sobre los hechos.

**Art. 597/8** — Véase el N° 56 de la Exposición.

**Art. 600** — Es un medio de evitar el eternizamiento de las causas.

carácter correccional podrá durar más de un mes, y uno por falta o contravención más de diez días ante el Juez respectivo, bajo pena de quinientos pesos de multa al mismo.

Art. 601 — Las causas por desorden, escándalo, ruidos molestos, riñas, ebriedad, juegos prohibidos, portación y uso de armas, vagancia, serán juzgadas ipso-facto o a más tardar dentro de los tres días de producido el hecho, bajo la pena indicada en el artículo anterior.

Art. 602 — La incomunicación del imputado y el secreto de las actuaciones judiciales no serán aplicadas en ningún caso en las causas por delitos de carácter correccional o por faltas o contravenciones.

---

**Art. 601** — Consideramos que esta clase de infracciones, deben ser juzgadas de inmediato para que surtan efecto las disposiciones represivas correspondientes. Multar a un reincidente por "ruidos molestos" después de ocho o diez días del hecho, casi no tiene objeto. La acción judicial debe hacerse sentir de inmediato. Muchos sucesos sangrientos toman origen en la imprudencia de músicos o radioescuchas que dan rienda suelta a sus instrumentos con olvido de las personas que quieren descansar o que no pueden soportar los ruidos. Esos sucesos se evitarían si el Juez interviniera con toda rapidez para hacer cesar la causa que los produce.



# LIBRO IV

## DE LA EJECUCION DE LAS SENTENCIAS





## TÍTULO I

### DE LA EJECUCION DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN EL PAIS

#### CAPITULO I

##### DEL TRIBUNAL COMPETENTE PARA EJECUTARLAS



Art. 603 — La ejecución de las sentencias dictadas en el país corresponde a los Jueces o Tribunales que hubieren dictado las que sean firmes.

Art. 604 — Si el Juez o Tribunal no pudiere practicar por sí, directamente, todas las diligencias necesarias para la ejecución, encomendará las que deban practicarse fuera del lugar de su sede o asiento, al Juez o Tribunal o a las autoridades policiales de la respectiva localidad.

Art. 605 — Corresponde al Juez o Tribunal al cual el presente Código impone el deber de ejecutar o hacer ejecutar la sentencia, adoptar sin dilación las medidas necesarias para que el condenado ingrese en el establecimiento penal destinado al efecto, a cuyo fin impartirá directamente las órdenes que correspondan a las autoridades administrativas o policiales, que deberán acatarlas y cumplirlas sin excusa alguna bajo pena de quinientos pesos de multa.

Art. 606 — La competencia del Juez o Tribunal para hacer cumplir la sentencia, excluye la de cualquiera otra autoridad hasta que el condenado ingrese en el establecimiento penal destinado al efecto.



## CAPITULO II

### DEL MODO DE EJECUTARLAS

Art. 607 — Las órdenes de detención serán impartidas directamente por el Juez o Tribunal a la Policía, así como las que tengan por objeto asegurar el cumplimiento de una pena privativa de la libertad fuera de los establecimientos carcelarios, en los casos autorizados por el Código Penal o el presente.

Art. 608 — Las penas privativas de la libertad serán comunicadas a las autoridades de los establecimientos donde deban cumplirse.

La comunicación será acompañada de un testimonio de la sentencia.

Se hará saber, en la misma comunicación, el día del vencimiento de la condena, que se fijará previo el cómputo de la prisión preventiva que hará el Secretario, observando las normas del Código Penal.

Art. 609 — En el caso de que las penas privativas de la libertad importen, además, privación de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho a disponer de ellos por actos entre vivos, el Juez o Tribunal ordenará las inscripciones o anotaciones y demás medidas que correspondan.

Art. 610 — En el caso de que la pena impuesta hubiera de cumplirse en un paraje de los territorios del Sud, de acuerdo con las disposiciones del Código Penal, la Cámara lo comunicará al Poder Ejecutivo de la Nación para que por intermedio de quien corresponda se impartan las órdenes para el traslado, custodia o alojamiento del condenado en el establecimiento donde debe ser recluido.

Art. 611 — En el caso de condena a la pena de multa, el Juez o Tribunal, luego de establecer la forma y condiciones del pago, de acuerdo al Código Penal, dispondrá que el Procurador Fiscal promueva la correspondiente ejecución. Esta se tramitará de conformidad a los preceptos del Código de Procedimiento Civil y Comercial para la ejecución de las sentencias.

Si el condenado no pagara la multa y la ejecución no diere resultado, el Juez o Tribunal dispondrá las medidas ordenadas por el Código Penal para tal emergencia.

Art. 612 — Si la pena fuere de inhabilitación absoluta, el Tribunal ordenará la publicación de la parte dispositiva de la sentencia en el Boletín Oficial y la hará saber a la autoridad que corresponda para la privación del derecho electoral. Se comunicará, también, a la institución respectiva la pérdida de la jubilación, pensión o goce de montepío, de que el condenado fuere beneficiario.

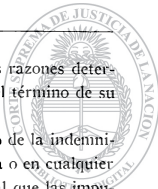
Si el condenado estuviere ejerciendo algún empleo o cargo público, aunque proceda de elección popular, se comunicará el cuerpo, autoridad o jefe respectivo.

Art. 613 — Cuando se impusiera la pena de inhabilitación especial, se comunicará al cuerpo, autoridad o jefe respectivo, la privación del empleo, cargo, profesión o derecho sobre que recayera la pena y la incapacidad que ésta crea al condenado para obtener otro del mismo género durante el tiempo de la condena.

La privación de los derechos políticos se hará saber a la Junta Electoral que corresponda.

Art. 614 — Cuando la sentencia someta al procesado absuelto a alguna medida de seguridad, ordenará su envío inmediato al establecimiento en que deba hacerse efectiva y





comunicará a las autoridades del mismo, las razones determinantes de la imposición de la medida y del término de su duración.

Art. 615 — Para hacer efectivo el pago de la indemnización de las costas impuestas en la sentencia o en cualquier incidente, se iniciará, ante el Juez o Tribunal que las impuso, la correspondiente ejecución, tramitándose esta de conformidad a las normas estatuidas para la ejecución de las sentencias en el Código de Procedimiento Civil y Comercial.

Art. 616 — La pena de sujeción a la vigilancia de la autoridad, se pondrá en conocimiento del Jefe de Policía, o de las autoridades del lugar en que residiere el penado, para que velen por el estricto cumplimiento de la sentencia durante el tiempo de la condena.

Art. 617 — Cuando una sentencia haya pasado en autoridad de cosa juzgada, se procederá a ejecutarla aunque el condenado esté sometido a otro proceso por otro delito. En este caso se le conducirá, si fuera necesario, desde el establecimiento penal en que se halle cumpliendo la condena al lugar donde se esté instruyendo el proceso pendiente.

## TÍTULO II

### DE LA EJECUCION DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN EL EXTRANJERO

Art. 618 — Cuando se tratare de ejecutar una sentencia dictada en el extranjero que imponga pena privativa de la libertad, cumplidas las formalidades establecidas en los Tratados o en las reglas aplicables de la ley de extradición número 1.612, se procederá a ejecutarla como si hubiera sido dictada por un Juez o Tribunal del país.

Art. 619 — Cuando se tratare de ejecutar una sentencia dictada en el extranjero para hacer efectiva la indemnización o reparación civil por el daño moral o material ocasionado con el delito, cumplidas igualmente las formalidades establecidas en los Tratados, o en su defecto, las que consagren los usos y costumbres diplomáticas y a condición de reciprocidad ofrecida en el petitorio del Tribunal o autoridad extranjera, se procederá a ejecutarla conforme a lo solicitado y a las reglas pertinentes del Código de Procedimiento Civil y Comercial.

Art. 620 — Será Juez competente para ordenar la ejecución de las sentencias dictadas en el extranjero que reúnan las condiciones mencionadas en los artículos precedentes, el de Instrucción en turno del lugar en que el reo tuvo su último domicilio.



LIBRO V

DE LOS RECURSOS





## TÍTULO I

### DEL RECURSO DE APELACION

Art. 621 — El recurso de apelación sólo se otorgará respecto de los autos interlocutorios por los que los Jueces de Instrucción, Correccionales o de Faltas decidan alguna excepción y de las resoluciones de los mismos Jueces o de otros Tribunales expresamente declaradas apelables o que causen gravámen irreparable.

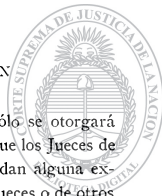
Art. 622 — El término para apelar será de tres días cuando no se establezca otro expresamente. Las apelaciones se concederán siempre en relación.

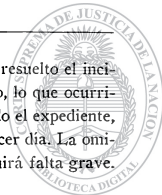
Art. 623 — El apelante, al interponer el recurso, podrá fundarlo y deberá expresar si se propone recusar y por qué causa, a algún miembro del Tribunal.

Art. 624 — Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la última notificación se remitirá a la Cámara un testimonio de las piezas del proceso referentes a la cuestión que motiva el recurso, al que se agregará el escrito en que el mismo fué interpuesto.

Si para la resolución del recurso fuere necesario el examen del proceso, éste será remitido a la Cámara tan pronto como sea posible y siempre que no causare perjuicio al normal desarrollo de la instrucción.

Si se tratare de la apelación de resoluciones dictadas en incidentes separados del proceso, se hará la remisión de los incidentes.





Art. 625 — Elevadas las actuaciones y resuelto el incidente de recusación que se hubiere planteado, lo que ocurrirá dentro de las veinticuatro horas de recibido el expediente, la Cámara resolverá el recurso dentro del tercer día. La omisión en el cumplimiento de esta regla constituirá falta grave.

## TÍTULO II

### DEL RECURSO DE NULIDAD

Art. 626 — El recurso de nulidad sólo tiene lugar contra resoluciones pronunciadas con violación de las formas establecidas en este Código bajo esa sanción o por omisión de formas del procedimiento estatuidas bajo la misma sanción.

Este recurso se concederá solo en relación.

Art. 627 — Únicamente podrá interponerse el recurso de nulidad contra las resoluciones que pueden ser objeto de apelación y en el término que para este recurso se establece. Ambos recursos se interpondrán conjuntamente.

Art. 628 — Rigen para este recurso todas las disposiciones establecidas para el de apelación.

Art. 629 — Si el procedimiento estuviere arreglado a derecho y la nulidad proviniese de la forma y contenido de la resolución, la Cámara declarará la nulidad y dictará la resolución que corresponda.

Si la nulidad proviniera de vicio en el procedimiento, se declarará nulo lo obrado, que se relacione con la actuación nula. Cuando el vicio no fuere de mayor entidad, lo subsanará la Cámara y dictará la resolución que corresponda.

En caso contrario devolverá los autos al Juez para que subsane la nulidad y dicte resolución procediendo con arreglo a derecho.

La Cámara podrá apercibir al Juez que incurra en esta clase de nulidades y si ello fuera reiterado, pondrá el hecho en conocimiento del Tribunal de Responsabilidades y de la Cámara de Diputados a los efectos del artículo 45 de la Constitución nacional.

### TÍTULO III

#### DEL RECURSO DE QUEJA

Art. 630 — Podrá interponerse el recurso de queja si el Juez deniega los de apelación o nulidad, debiendo acordarlos. A este efecto, la parte que se considerase agraviada podrá ocurrir en queja a la Cámara pidiendo que se declare mal denegado el recurso y se le conceda.

Art. 631 — El recurso de queja deberá interponerse dentro de las veinticuatro horas subsiguientes a la notificación de la denegación, si el recurrente tuviera su domicilio en el lugar del asiento de la Cámara, aumentándose en un día más por cada treinta kilómetros si lo tuviera en otro lugar.

Art. 632 — La Cámara, recibido el escrito en que se interponga el recurso, pedirá al Juez que informe acerca de los motivos de la denegación, dentro de las veinticuatro horas.

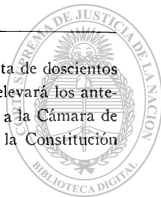
El informe expresará la fecha en que el recurso fué denegado.

El Juzgado no podrá enviar el proceso como mejor informe. La Cámara podrá pedirlo para mejor proveer.

La Cámara, dentro del tercer día de la recepción del informe, dictará resolución, desestimando la queja, o si ésta fuera fundada, proveyendo lo que corresponda.

Art. 633 — Cuando la Cámara notare que no ha existido motivo para que el Juez denegare los recursos, podrá





apercibirlo la primera vez, aplicarle una multa de doscientos pesos la segunda, y en caso de reincidencia elevará los antecedentes al Tribunal de Responsabilidades y a la Cámara de Diputados, a los efectos del artículo 45 de la Constitución nacional.

## TÍTULO IV

### DEL RECURSO DE ACLARACION

Art. 634 — Este recurso se otorgará al sólo efecto de pedir que se aclare algún concepto dudoso u oscuro que pueda contener el auto o sentencia que decida algún artículo o incidente o termine definitivamente una causa. Deberá interponerse dentro del término de veinticuatro horas y resolverse sin más trámite, dentro de dos días.

Podrá, también, hacerse uso del mismo derecho para pedir que se resuelva algún punto accesorio o secundario de la cuestión principal y que se hubiere omitido al resolver esta última.

Art. 635 — La interposición de este recurso suspenderá el término que hubiera empezado a correr para la deducción de otros que fueren procedentes.

Art. 636 — La decisión que recaiga, si contuviera alguna aclaración o ampliación, formará parte del auto o sentencia a que se refiere.

Art. 637 — Dentro del plazo de dos días, el Juez o Tribunal, de oficio, podrá aclarar o salvar cualquier error u omisión material, produciendo sus resoluciones el mismo efecto que si hubiesen sido provocadas por recursos de las partes.



## TITULO V

## DEL RECURSO DE REPOSICION

Art. 638 — El recurso de reposición procederá contra las providencias dictadas sin sustanciación, a fin de que el mismo Juez o Tribunal las revoque por contrario imperio.

Este recurso se interpondrá dentro de veinticuatro horas de quedar notificadas y se resolverá, sin más trámite, en el término de tres días.

Art. 639 — La resolución que recaiga hará ejecutoria, a menos que el recurso fuere acompañado del de apelación en subsidio, y, además, la providencia recurrida fuere apelable.

Art. 640 — Los decretos de mero trámite pueden ser revocados de oficio por el Juez o Tribunal.

## TITULO VI

## DEL RECURSO DE CASACION

## CAPITULO I

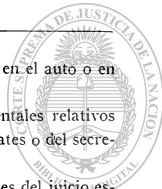
## DE LOS CASOS EN QUE PROCEDE EL RECURSO

Art. 641 — El recurso de casación procede contra los autos o sentencias definitivas dictadas por las Cámaras o Jueces en incidentes o en juicio oral y única instancia, cuando se alegue cualquiera de las siguientes causas:

1° Violación de la ley;

---

**Art. 641** — Véase N° 57 de la Exposición.



- 2° Aplicación falsa o errónea de la ley en el auto o en la sentencia;
- 3° Violación de los principios fundamentales relativos a la oralidad y publicidad de los debates o del secreto de estos, en su caso;
- 4° Omisión de alguna de las formalidades del juicio establecidas bajo pena de nulidad, y, especialmente, de las que se consignan en el artículo 257 de este Código
- 5° Falsa o errónea apreciación de las pruebas fundada en instrumentos o documentos públicos o privados debidamente reconocidos que demostrasen la equivocación del Juez o Tribunal.

Art. 642 — Se entiende por auto o sentencia definitiva, a los efectos de la procedencia del recurso de casación, cualquier resolución que termine la causa y haga imposible su prosecución.

## CAPITULO II

### DE LOS QUE PUEDEN INTERPONER EL RECURSO

Art. 643 — Podrán interponer el recurso de casación:

- 1° El Fiscal;
- 2° El o los imputados o sus Defensores;
- 3° El querellante;
- 4° El promotor de la acción civil, pero solo en cuanto pueda afectar la restitución, reparación e indemnización que haya reclamado;
- 5° Los herederos del o de los imputados o querellantes en caso de fallecimiento o incapacidad de éstos.



## CAPITULO III

## DEL MODO Y OPORTUNIDAD DE INTERPONER EL RECURSO

Art. 644 — El recurso de casación se interpondrá por escrito ante el Juez o Cámara que dictó el auto o sentencia definitiva de que se recurre.

Art. 645 — El recurso será fundado y el escrito en que se deduzca contendrá:

1° La cita clara de la ley, decreto, ordenanza o reglamento violado;

2° Las circunstancias que demuestren la aplicación falsa o errónea de la ley, decreto, ordenanza o reglamento en el auto o sentencia; o la violación de los principios fundamentales relativos a la oralidad y publicidad o secreto de los debates consagrados por este Código; o la omisión de cualquiera de las formalidades del juicio establecidas bajo pena de nulidad por este mismo Código.

Art. 646 — El término para la interposición de este recurso será de diez días contados desde la notificación del auto o sentencia. Sin embargo, si los que pueden deducirlo, no manifiestan en el acto de notificarse o dentro de los tres días de la notificación, su propósito de interponerlo, el auto o sentencia quedarán consentidos.

Art. 647 — El recurso de casación no podrá interponerse respecto de los puntos que hayan sido resueltos en favor del recurrente.

---

Art. 644 — Véase N° 58 de la Exposición.



## CAPITULO IV

### DE LA FORMA DE SUSTANCIAR EL RECURSO

Art. 648 — Interpuesto el recurso de casación, el Juez o Cámara examinará, sin más trámite, si lo ha sido del modo y en la oportunidad establecido precedentemente.

Art. 649 — En caso afirmativo, dentro de las veinticuatro horas de la interposición enviará a la Corte de Casación todo lo actuado, junto con los elementos integrantes del proceso. En caso negativo, denegará el recurso en resolución fundada que demuestre con toda claridad haberse infringido lo dispuesto en los artículos 644, 645 o 646.

Art. 650 — Si el recurso fuere denegado, el que lo interpuso podrá ir en queja a la Corte de Casación, dentro de los tres días de notificársele la denegación, cuando tuviere su domicilio en el lugar del asiento de la Corte, aumentándose en un día más por cada treinta kilómetros cuando lo tuviere en otro lugar.

Art. 651 — La queja será hecha por escrito y podrá depositarse personalmente en la Secretaría de la Corte o enviarse a la misma directamente por correo o por telégrafo, y expresará:

- 1° El nombre y domicilio real del recurrente que acciona por derecho propio. Si interviniera representante o defensor, consignará, además de su nombre, el domicilio legal constituido en el lugar donde ejerce su profesión;
- 2° Los hechos en que se funda, acompañándose copia simple del recurso de casación interpuesto y denegado.

Art. 652 — El Secretario de la Corte acusará recibo de la queja por medio de un memorandum certificado enviado por correo dentro de las veinticuatro horas de la llegada de aquella. En dicho memorandum se consignará el número de orden que corresponda a la queja.

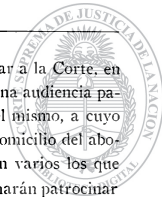
Art. 653 — La Corte examinará la queja de inmediato y dentro de las tres horas de recibida solicitará del Juez o Cámara:

- 1º Copia del auto o sentencia que dió motivo al recurso de casación denegado;
- 2º Copia del recurso interpuesto y denegado, con especificación de la fecha en que se dedujo;
- 3º Copia de la resolución denegando el recurso. Este informe puede solicitarse telegráficamente si lo pidiere el recurrente y depositare o girare al Presidente de la Corte el importe del telegrama.

Art. 654 — El Juez o Cámara deberán evacuar el informe dentro de las veinticuatro horas de recibir el requerimiento, bajo pena de doscientos pesos de multa. Si no les fuera indispensable retener las actuaciones, deberán elevarlas a la Corte como mejor informe.

Art. 655 — Recibido el informe, la Corte resolverá la queja dentro de los tres días y ordenará la notificación por correo cuando el recurrente tuviera su domicilio fuera del lugar del asiento del Tribunal.

Art. 656 — Si no hiciere lugar a la queja, la causa quedará concluída. Si hiciere lugar a ella y las actuaciones no se hubieran elevado al Tribunal, ordenará su remisión dentro de las veinticuatro horas, pudiendo impartirse la orden en la forma y condiciones previstas en el último párrafo del artículo 653.



Art. 657 — El recurrente podrá solicitar a la Corte, en el escrito en que deduzca el recurso, señale una audiencia para ampliar verbalmente los fundamentos del mismo, a cuyo efecto expresará en su pedido el nombre y domicilio del abogado que se encargará de hacerlo. Si fueran varios los que formularan igual solicitud, concurrirán o se harán patrocinar en la misma audiencia. Esta deberá realizarse con los que concurren, dentro de los diez días del último pedido.

Art. 658 — Regirán en este acto, en cuanto fueren aplicables, las disposiciones del Libro II, Título II de este Código. El Fiscal y cada abogado no podrá hacer uso de la palabra por más de cuarenta y cinco minutos cada uno, salvo que la Corte resuelva otra cosa.

Art. 659 — El día y hora señalado para la vista, se verificará la audiencia puntualmente. Si no concurriere el recurrente o su abogado, se le tendrá por desistido de la audiencia a su costa y la causa se resolverá sin realizarla, a menos que otra de las partes hubiera hecho igual pedido y se hallare presente, en cuyo caso seguirá su curso normal. Si la presencia del abogado designado por el recurrente se hiciera imposible por cualquier circunstancia y no hubiera nombrado reemplazante, el Tribunal designará en el acto mismo de conocer la imposibilidad a otro abogado de la matrícula local en la forma establecida en el artículo 42 de este Código. En este caso, se postergará la vista de la causa y por no más de diez días, siempre que el nuevo abogado lo pidiera para estudiar el proceso.

Art. 660 — La vista comenzará dando cuenta el Secretario del asunto de que se trate.

Informará primero el Abogado del recurrente; después el de la parte que se haya adherido al recurso, y, por último,

el de la parte recurrida que lo impugnare. Si el Fiscal fuere el recurrente, hablará primero y si apoyare el recurso, informará a continuación de quien lo hubiere interpuesto.

Art. 661 — El Fiscal y los Letrados podrán rectificar brevemente por el orden mismo en que hayan usado de la palabra.

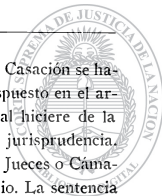
El Presidente, por propia iniciativa o a requerimiento de cualquier Magistrado, podrá solicitar del Fiscal y de los Letrados, un mayor esclarecimiento de la cuestión debatida, formulando concretamente la tesis que ofrezca duda al Tribunal.

No permitirá el Presidente discusión alguna sobre la existencia de los hechos consignados en la resolución recurrida, salvo cuando el recurso se hubiere interpuesto porque en la apreciación de las pruebas hubiese habido error de hecho que se fundase en instrumentos o documentos públicos o privados reconocidos que demostrasen la equivocación del Juzgador, y llamará al orden al que intente discutirlos, pudiendo llegar a retirarle el uso de la palabra.

Art. 662 — El recurso de casación deberá resolverse dentro de los diez días de la fecha en que las actuaciones llegaron a la Corte, en el caso del artículo 656, o de la fecha en que se resolvió favorablemente la queja, en el caso del artículo 654 in fine, o de la fecha en que se hizo cargo el nuevo abogado en el caso del artículo 659.

Art. 663 — Cuando sea recurrente uno de los procesados, la nueva sentencia aprovechará a los demás en lo que les fuere favorable, siempre que se encuentren en la misma situación que aquél y les fueren aplicables los motivos alegados por los que se declare casada la sentencia. Nunca les perjudicará en lo que les fuere adverso.





Art. 664 — La resolución de la Corte de Casación se hará en forma de sentencia de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 476. La interpretación que el Tribunal hiciere de la ley o doctrina legal, será definitiva y sentará jurisprudencia. Su aplicación será obligatoria para todos los Jueces o Cámaras mientras la Corte no modifique su criterio. La sentencia se redactará de acuerdo al voto de la mayoría de los miembros del Tribunal, precedida del acuerdo, que se transcribirá íntegramente. En la misma forma será registrada en el libro de sentencias de la Corte.

## CAPITULO V

### DE LOS EFECTOS DEL RECURSO

Art. 665 — Si la Corte estimare que la resolución recurrida ha violado la ley, decreto, ordenanza o reglamento invocados o los ha aplicado falsa o erróneamente, así lo declarará y dictará sentencia conforme a lo dispuesto en el art. 664.

Art. 666 — Si la Corte estimare que la resolución recurrida está comprendida en los incisos 3° y 4° del artículo 641, anulará todo lo actuado desde que comenzó el vicio y ordenará que la causa sea sustanciada nuevamente por otro Juez u otra Cámara.

Art. 667 — En ciudades donde no exista más que un Juez o una Cámara, el nuevo Tribunal se constituirá, según el caso, con uno o tres abogados de la matrícula local insaculados en audiencia pública y en presencia de las partes por el Juez o el Presidente titular de la Cámara, dentro de los tres días de recibirse las actuaciones devueltas por la Corte. El cargo así deferido será obligatorio para los abogados y sólo podrán ser recusados o excusarse por las mismas causas que

los jueces, dentro de las veinticuatro horas de efectuado el sorteo o de ser notificados de la designación.

Art. 668 — El Juzgado o Cámara integrada por abogados insaculados conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, deberá proceder a la vista del proceso dentro de los veinte días de la insaculación, rigiendo, en este caso las disposiciones que contiene el Libro II, Título II de este Código.

Art. 669 — Si el recurso de casación fuera rechazado, las costas serán a cargo del o de los recurrentes, solidariamente. Si prosperase por cualquiera de las causas establecidas en los incisos 3° y 4° del artículo 641, serán a cargo del Juez o de los miembros de la Cámara que hubieran dictado la resolución casada, solidariamente. Si fuera rechazado por alguno de sus fundamentos y prosperase por otros, no habrá costas para los recurrentes.

Art. 670 — El desistimiento del recurso podrá hacerse en cualquier estado del procedimiento, previa ratificación del interesado, o presentando su Procurador poder especial para ello. Si las partes estuvieran citadas para la decisión del recurso, el particular que desista pagará las costas procesales que se hubiesen ocasionado por su culpa.

## TÍTULO VII

### DEL RECURSO FEDERAL.

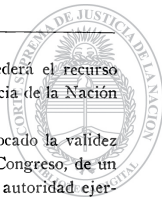
#### CAPÍTULO I

##### DE LOS CASOS EN QUE PROCEDE EL RECURSO

Art. 671 — Contra toda sentencia, resolución o auto definitivos dictados en causa penal por un Juez o Tribunal u

---

Art. 671 — Véase N° 60, 61 y 62 de la Exposición.



otra autoridad nacional o provincial, procederá el recurso federal para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos siguientes:

1°. Cuando en la causa se hubiere invocado la validez de un tratado internacional, u otra ley del Congreso, de un decreto, ordenanza o reglamento, o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación, y la decisión hubiera sido contra su validez;

2°. Cuando en la causa se hubiere impugnado la validez de un tratado internacional u otra ley del Congreso, un decreto, ordenanza o reglamento o alguna de sus disposiciones, o el ejercicio de una autoridad que obrare en nombre de la Nación, bajo la pretensión de contrariar el espíritu o la letra de la Constitución nacional y la decisión hubiese sido a favor de su validez;

3°. Cuando en la causa se hubiere impugnado la validez de una Constitución, ley, decreto, ordenanza o reglamento provinciales, o alguna de sus respectivas disposiciones, o una autoridad de provincia, bajo la pretensión de contrariar el espíritu o la letra de la Constitución nacional, o de un tratado o ley del Congreso sancionados en su consecuencia, y la decisión hubiera sido a favor de su validez.

## CAPITULO II

### DE LOS QUE PUEDEN INTERPONER EL RECURSO

Art. 672 — Podrán interponer el recurso federal las mismas personas que pueden interponer el de casación.



## CAPITULO III

## DEL MODO Y OPORTUNIDAD DE INTERPONER EL RECURSO

Art. 673 — El recurso federal se deducirá por escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dentro de los tres días de la fecha en que el que lo interponga hubiere sido notificado de la sentencia, auto o resolución de que se recurre, si estuviere domiciliado en la misma ciudad donde tenga su asiento la Corte Suprema, aumentándose en un día más por cada treinta kilómetros, cuando estuviere domiciliado en otro lugar.

Art. 674 — El escrito en que se deduzca podrá ser presentado personalmente por el interesado en la Secretaría de la Corte Suprema o enviado por correo y expresará:

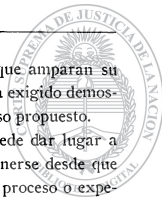
1°. Nombre y domicilio real del recurrente que acciona por derecho propio. Si interviniera representante o defensor, consignará, además de su nombre, el domicilio legal constituido en el lugar en que ejerce su profesión:

2°. La carátula de la causa o proceso o expediente en que se haya dictado la sentencia, auto o resolución de que se recurre;

3°. Los hechos que han dado lugar a la causa, proceso o expediente;

4°. La cláusula de la Constitución nacional, o del tratado internacional u otra ley del Congreso que hubiera sido infringida, violada o anulada por la sentencia, auto, resolución, medida o diligencia, de que se recurre.

Art. 675 — Para que la Corte Suprema pueda conocer del recurso federal bastará que el recurrente mencione la o las cláusulas de la Constitución nacional o de los tratados in



ternacionales y demás leyes del Congreso que amparan su derecho y se dicen contrariadas, sin que le sea exigido demostrar su relación directa e inmediata con el caso propuesto.

Art. 676 — La cuestión federal que puede dar lugar a la interposición de este recurso podrá proponerse desde que el interesado toma intervención en la causa, proceso o expediente y en cualquier estado de estos, o también y por primera vez, en el escrito en que se deduzca el recurso. Cuando la cuestión federal fuere propuesta durante el curso de la causa, proceso o expediente, será obligatorio pronunciarse sobre la misma, bajo pena de nulidad, para todos los tribunales que sigan interviniendo en ellos.

## CAPITULO IV

### DE LA FORMA DE SUSTANCIAR EL RECURSO

Art. 677 — Dentro de las veinticuatro horas de ser depositado el recurso o de llegar por correo a la Secretaría de la Corte Suprema, el Secretario acusará recibo al interesado o interesados, por medio de un memorandum certificado en que se consignará el número de orden que corresponde el recurso.

Art. 678 — Acto seguido y dentro del mismo plazo, el Presidente de la Corte Suprema examinará el recurso y solicitará del Juez, Tribunal, Repartición o Autoridad que corresponda:

1º Copia de la sentencia, auto, resolución, medida o diligencia que haya dado lugar al recurso;

2º. Copia testimoniada de la cédula, asiento o nota de notificación del recurrente.

Este informe podrá solicitarse telegráficamente si lo pidiere el recurrente y depositare o girase al Presidente el importe del telegrama.

Art. 679.— El Juez, Tribunal, Repartición o Autoridad requeridos deberán evacuar el informe dentro de las veinticuatro horas de recibir el pedido de la Corte Suprema, bajo pena de doscientos pesos de multa. Si no les fuera indispensable retener las actuaciones, deberán elevarlas a la Corte Suprema como mejor informe.

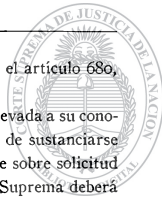
Art. 680.— El recurrente podrá solicitar a la Corte Suprema, en el escrito en que deduzca el recurso, señale una audiencia para ampliar los fundamentos del mismo, a cuyo efecto expresará en su pedido el nombre y domicilio del abogado que se encargará de hacerlo. Si fueran varios los que formularan igual solicitud concurrirán a la misma audiencia o se harán patrocinar en ella. La audiencia se realizará con los que concurran dentro de los diez días de recibirse el informe o las actuaciones a que se refiere el artículo anterior.

Art. 681.— Serán de aplicación, en lo pertinente, las disposiciones que contienen los artículos 658 a 664 y 670 de este Código, siempre que no modifiquen o alteren lo dispuesto en el presente Título.

## CAPITULO V

### DE LOS EFECTOS DEL RECURSO

Art. 682.— Se encuentre o no comprendido en alguna de las disposiciones del artículo 671 el caso llevado a conocimiento de la Corte Suprema, esta dictará la sentencia que corresponda dentro de los veinte días de haber recibido el informe o las actuaciones a que se refiere el artículo 679 o de



haberse realizado la audiencia que prescribe el artículo 680, en su caso.

Art. 683 — Cuando la cuestión federal llevada a su conocimiento hubiera sido propuesta con motivo de sustanciarse un recurso de habeas-corpus, o un expediente sobre solicitud para ejercer el derecho de reunión, la Corte Suprema deberá dictar su fallo dentro de las cuarentiocho horas de recibir el informe o las actuaciones o de realizarse la audiencia especificados en el artículo anterior.

Art. 684 — Si el recurso federal fuera rechazado, las costas serán a cargo del o de los recurrentes, solidariamente. Si prosperase en alguno de los casos a que se refiere el artículo anterior, las costas se aplicarán solidariamente, al autor material y al responsable de la detención indebida o al firmante de la resolución revocada. En los demás casos se aplicarán al vencido.

## TÍTULO VIII

### DEL RECURSO DE REVISION

#### CAPÍTULO I

##### DE LOS CASOS EN QUE PROCEDE EL RECURSO

Art. 685 — Procede el recurso de revisión contra las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, en los siguientes casos:

1°. Cuando conste de un modo indudable que el delito o falta fué cometido por una sola persona y habiendo sido juzgado por dos o más Tribunales o Jueces aparecen como autores, en las respectivas sentencias ejecutoriadas, diversas personas:

2º. Cuando se haya condenado a alguno como partícipe o encubridor de homicidio de otro cuya existencia se acredite después de la sentencia ;

3º. Cuando se haya condenado a alguno por sentencia fundada, exclusivamente, en un documento que después se ha declarado falso por sentencia ejecutoriada en causa criminal ; o cuando el condenado hallare o recobrare documentos decisivos ignorados, extraviados o detenidos por fuerza mayor o por obra de un tercero ;

4º Cuando una ley u ordenanza posterior deje de inculpar el hecho que motivó la condena, o cuando fije para él una pena menor, o modifique, en forma favorable para el condenado, el modo de computar la prisión preventiva ;

5º. — Cuando después de la condena, se descubrieren nuevas pruebas que demuestren, evidentemente, que el delito o falta no se cometió o que el condenado no fué partícipe en ellos.

## CAPITULO II

### DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN PROMOVER LA REVISION

Art. 686 — El recurso de revisión podrá promoverse por el condenado o por su cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos y por el Fiscal.

La muerte del condenado no impedirá que se deduzca para rehabilitar su memoria o procurar la condena del verdadero culpable.





### CAPITULO III

#### DEL TRIBUNAL COMPETENTE PARA RESOLVER EL RECURSO

Art. 687 — Corresponde intervenir en los recursos de revisión:

1°. En los casos de los inciso 1°. y 5°. del artículo 685, a cualquier Cámara, o en su caso, a cualquier Juez Correccional o de Faltas que no haya dictado la sentencia en las causas de que se trate;

2°. En los demás casos del citado artículo, a la misma Cámara o Juez Correccional o de Faltas que dictó la sentencia.

Art. 688 — En los casos en que proceda la revisión de la sentencia, por haberse dictado, después de ella, una ley u ordenanza más benigna, la Cámara o el Juez Correccional, o de Faltas en su caso, de oficio podrán modificar la sentencia, adecuándola a las disposiciones de la nueva ley.

### CAPITULO IV

#### DE LA FORMA DE SUSTANCIAR EL RECURSO

Art. 689 — Interpuesto el recurso, el Presidente de la Cámara o el Juez Correccional o de Faltas decretará una audiencia pública dentro de los tres días, para oír al recurrente y al Fiscal.

Desde la fecha en que se decretare la audiencia hasta aquella en que se realice, deberá mediar un lapso de diez días durante el cual se ofrecerá las pruebas.

Si las pruebas no fueren susceptibles de producirse en

la audiencia, esta no se realizará hasta que aquéllas se hayan practicado.

La audiencia se llevará a cabo con observancia de las formalidades establecidas para el Juicio oral, en cuanto fueren aplicables.

Terminadas las exposiciones que se hagan, la Cámara pasará a deliberar fuera de la presencia del público y de las partes y dictará resolución escrita en el acto. El Juez Correccional y el de Faltas harán lo propio.

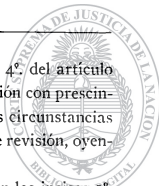
Art. 690 — Cuando el recurso de revisión hubiera sido interpuesto por el Fiscal, la Cámara o el Juez Correccional o el de Faltas dictarán sentencia después de recibir las pruebas que éste ofrezca. La recepción de las pruebas tendrá lugar en audiencia pública, salvo en los casos exceptuados por este Código.

## CAPITULO V

### DE LOS EFECTOS DEL RECURSO

Art. 691 — En los casos de los incisos 1°. y 5°. del artículo 685, la Cámara o Juez Correccional o de Faltas dispondrá que se instruya de nuevo la causa por un Juez que no sea el que intervino anteriormente, para ser juzgada, luego, por otra Cámara o Juez que el que dictó la sentencia.

Art. 692 — En los casos de los incisos 2°. y 3°. del artículo 685 la Cámara anulará la sentencia y ordenará la inmediata libertad del acusado. En el caso del inciso 4°. del mismo artículo, el Juez o Cámara modificará la sentencia, ordenando la inmediata libertad del condenado, la reducción de la pena de conformidad a la nueva ley o el cómputo de la detención o prisión preventiva de acuerdo a la ley más favorable.



Art. 693 — En el mismo caso del inciso 4º. del artículo 685, el Juez o Cámara podrá dictar su resolución con prescindencia de las formalidades establecidas, si las circunstancias hicieren evidente la procedencia del recurso de revisión, oyendo, únicamente, al Fiscal.

Art. 694 — En los casos comprendidos en los incisos 1º, 2º, 3º y 5º del artículo 685, resuelto que sea favorablemente el recurso, el Fisco abonará al condenado en esas condiciones una indemnización que fijará el mismo Juez o Tribunal que lo sustancie y que se graduará de cinco a veinte pesos, según la categoría de aquél, por cada día que hubiere estado privado de su libertad.

Art. 695 — Si al sustanciarse el recurso de revisión quedara de manifiesto que la condena fué impuesta porque los funcionarios que intervinieron en la instrucción del proceso o en el juicio oral no realizaron o no permitieron que se realizaran las diligencias de prueba ofrecidas por las partes o aquellas que la sana lógica, el sentido común o la prudencia aconsejaban para sustanciar debidamente la causa o para demostrar la inculpabilidad del condenado, abonarán a este en forma solidaria, la indemnización a que se refiere el artículo anterior, en cuyo caso será fijada por el Director de la Oficina de Habilitación y Control y descontada por el mismo de los sueldos respectivos en la forma que establece la ley 9511.

# LIBRO VI

## DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS





# TÍTULO I

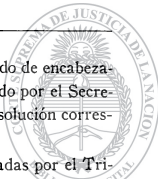
## REGLAS ESPECIALES

Art. 696 — Ningún empleado o funcionario público podrá tener participación en las multas aplicadas a los que infrinjan las leyes generales o especiales, los reglamentos o las ordenanzas existentes o a dictarse en el futuro, salvo lo dispuesto respecto de los contrabandos.

Art. 697 — Toda infracción cometida por las partes, sus procuradores o abogados, peritos, testigos, intérpretes, traductores, etc., o por los funcionarios o empleados judiciales en cuanto al modo, forma y oportunidad de realizar o cumplir alguna diligencia o de dictar alguna providencia, auto o sentencia, que no tengan una pena especial impuesta por el presente Código o el Código Penal, será reprimida con multa de doscientos pesos.

698 — Las penas pecuniarias aplicadas a las partes, testigos, peritos, traductores, intérpretes, procuradores y abogados, por faltas cometidas en las condiciones previstas en el presente Código y durante la sustanciación de los procesos, serán hechas efectivas por los procuradores fiscales, a cuyo objeto el secretario del Juez o Tribunal que las hayan aplicado lo comunicará al procurador fiscal de turno dentro de las cuarenta y ocho horas de quedar firmes. Este procederá conforme a las normas establecidas para la ejecución de las sentencias en el Código de Procedimiento Civil y Comercial, en incidente separado de la causa principal ante el mismo





Juez o Tribunal que aplicó la sanción, sirviendo de encabezamiento de este incidente el certificado expedido por el Secretario respectivo en el que se transcribirá la resolución correspondiente.

Art. 699 — Las penas pecuniarias aplicadas por el Tribunal de Responsabilidades o en que incurran los empleados y funcionarios judiciales, por aplicación de los preceptos de este Código, serán hechas efectivas por la Oficina de Habilitación y Control del Personal de los Tribunales, descontando de sus sueldos la suma que corresponda conforme a lo dispuesto en la ley 9.511, a cuyo efecto procederá por decisión propia o por denuncia, a comprobar el hecho o infracción. Habiendo denuncia, corresponderá al denunciante la cuarta parte de la multa, la que le será abonada al mismo tiempo que se abone al empleado o funcionario el excedente de su sueldo.

Art. 700 — La infracción a lo dispuesto en el artículo anterior por parte de cualquier empleado o funcionario de la Oficina de Habilitación y Control, será reprimida con destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de lo que establece el Código Penal para castigar el hecho.

Art. 701 — Todo empleado o funcionario de la policía o de cualquier repartición administrativa a quien sus superiores o las funciones inherentes a su cargo le asignaren la tarea de producir informes relacionados con la conducta, moralidad, actos determinados, actividades permanentes, profesión, medios de vida, etc., de una o varias personas o instituciones, estará obligado a consignar al pie de su informe, su nombre y apellido completos, número de la matrícula individual de la libreta de enrolamiento o de la cédula de identidad, empleo o función que desempeña, su domicilio real y la razón en virtud de la cual produce el informe, agregando,

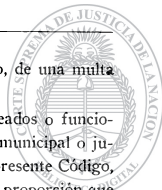
en su caso, el nombre, apellido, domicilio real, y demás circunstancias personales que conociere del superior de quien hubiera recibido la orden o mandato para producirlo, todo bajo pena de quinientos pesos de multa a la primera infracción y destitución del cargo o empleo en caso de reincidencia.

Art. 702 — Toda multa impuesta a las partes, procuradores, abogados, peritos, intérpretes, traductores, testigos, etc., y funcionarios o empleados judiciales, como consecuencia de la aplicación del presente Código, ingresará a una cuenta especial que llevará la Oficina de Habilitación y Control del Personal en el Banco de la Nación Argentina, y será destinada a la provisión, refacción o mejoramiento de los materiales o edificios de la administración de justicia. El Banco mencionado publicará mensualmente las sumas ingresadas en esa forma. La Oficina de Habilitación y Control del personal de los Tribunales girará sobre ella, con cargo de rendir cuenta a la Tesorería de la Nación.

Art. 703 — Derógase la ley Número 2.372, aprobatoria del Código de Procedimiento Penal en vigor, y todas las disposiciones de las leyes generales o especiales, de los reglamentos y de las ordenanzas municipales o de policía que se opongan a lo establecido en el presente Código.

Art. 704 — Todo Juez o Tribunal que esté interviniendo en un proceso penal, tiene la obligación de aplicar las sanciones establecidas en el presente Código a los empleados o funcionarios de la administración de justicia y de la policía que no cumplieran con sus deberes en la forma y plazo que el mismo determina. La omisión de dicha obligación constituirá falta grave y hará pasible al Juez o a cada uno





de los miembros del Tribunal, según el caso, de una multa de doscientos pesos.

Art. 705 — Toda multa aplicada a empleados o funcionarios públicos de la policía administrativa, municipal o judicial en cumplimiento de lo dispuesto en el presente Código, será descontada del sueldo respectivo y en la proporción que establece la ley 9.511, a pedido del Juez o Tribunal que la aplicó o de la Oficina de Habilitación y Control del Personal de los Tribunales, depositándose por el Tesorero o Habilitado de la repartición que corresponda, a contar del primer mes de recibir la notificación y bajo su responsabilidad personal, en la cuenta a que se refiere el artículo 702.

Art. 706 — Las sanciones administrativas impuestas por infracción a las leyes especiales como las números 3.761, 3.764, 4.363, 11.252, 11.284, 11.570, 11.683 y 12.151, etc., no tienen carácter penal y en ningún caso serán consideradas como mal antecedente a los efectos del artículo 26 del Código Penal, aun cuando ellas hubieran sido confirmadas por el Poder judicial.

Art. 707 — Ningún diario, periódico, estación de radiotelefonía o telegrafía u otro medio o elemento de publicidad, podrá publicar el nombre o las iniciales del nombre de las personas sometidas a proceso penal, sin que medie por lo menos auto de prisión preventiva de Tribunal competente o sentencia condenatoria de la Cámara o del Juez Correccional o de Faltas, bajo pena de mil pesos de multa a beneficio de la persona cuyo nombre se publicare infringiendo lo dispuesto en el presente artículo. Dicha persona tendrá acción ejecutiva directa contra el infractor con la sola presentación de su demanda acompañada de un ejemplar del diario, periódico o revista, o una copia certificada por la Di-

rección de Correos de la versión radiotelefónica, despacho telegráfico, etc. La prohibición a que se refiere este artículo no comprende la relación de los hechos en que hubiere intervenido la persona inculpada.

Art. 708 — El presente Código empezará a regir desde el 1° de Enero de 1937.

## TÍTULO III

### DISPOSICIONES TRANSITORIAS

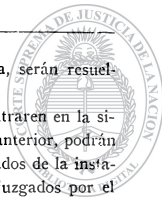
Art. 709 — Los procesos pendientes a la época en que este Código empiece a regir, se terminarán de la siguiente manera:

- 1° Los que se hallen en estado de sumario, terminado que sea este, serán elevados a la nueva Cámara que corresponda para que se pronuncie sobre su mérito, y, en lo demás, se ajustarán a lo dispuesto en el presente Código.
- 2° Los que se hallen en el estado de plenario, pero sin haberse producido prueba, se terminarán en juicio oral, conforme a lo dispuesto en el Libro II, del presente Código.
- 3° Los que se hallen en estado de plenario, con parte o toda la prueba producida, serán terminados por el Juez o Tribunal que estuviere conociendo de ellos.
- 4° Los que se hallen en las actuales Cámaras en grado de apelación de auto interlocutorio, serán resueltos, en cuanto a dicho auto, por la nueva Cámara que corresponda.
- 5° Los que se hallen en las actuales Cámaras en grado

de apelación de sentencia definitiva, serán resueltos por la Corte de Casación.

Art. 710 — Los acusados que se encontraren en la situación prevista en el inciso 3° del artículo anterior, podrán optar, dentro de los diez días de ser notificados de la instalación de los nuevos tribunales, entre ser juzgados por el Juez o Tribunal que hubiera intervenido hasta entonces en el proceso o por el nuevo Juez o Tribunal.

Art. 711 — Los principios consagrados en los artículos 3, 6, 7, 48, 49, 80, 81, 90, 96, 97, 98, 157, 338 a 366, 481 a 504 y 578 a 582 del presente Código se aplicarán desde la promulgación de la ley que lo apruebe.



# INDICE

---

